globalización de la pobreza

y nuevo orden mundial

Michel Chossudovsky

XXI

traducción de
ANA MARÍA PALOS
y
BERTHA RUIZ DE LA CONCHA
(caps. 17, 21)

revisión de
BEATRIZ STELLINO

GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA Y NUEVO ORDEN MUNDIAL

por
MICHEL CHOSSUDOVSKY









siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.
CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310, MÉXICO, D.F.

siglo xxi editores argentina, s.a.
LAVALLE 1634, 11 A, C1048AAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

portada de marina garone

primera edición en español, 2002

en coedición con el centro de investigaciones interdisciplinarias
en ciencias y humanidades, unam
isbn 968-23-2351-7

primera edición en inglés, 1997
segunda edición en inglés, 2002

third world network, penang, malasia
título original: *the globalisation of poverty. impacts of IMF and world bank reforms*

En EL MUNDO DEL SIGLO XXI se publican algunas obras significativas de pensadores contemporáneos que, desde distintos espacios sociales, políticos y académicos, estudian los problemas locales, nacionales, regionales y globales que constituyen la compleja agenda de nuestro tiempo.

Las primeras veinte obras que reúne esta colección son una muestra de la variedad de puntos de vista con que se observan y analizan la condición global del mundo y los intensos cambios experimentados en los últimos decenios en la sociedad, la economía, la política y la cultura.

Esta página dejada en blanco al propósito.

ÍNDICE

IV. AMÉRICA LATINA

V. LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA Y LOS BALCANES

VI. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Apenas unas pocas semanas después del sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile, que derrocó al gobierno electo del presidente Salvador Allende, la junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet ordenó un alza al precio del pan de 11 a 40 escudos, abrumador aumento de 264% de la noche a la mañana. Este "tratamiento de choque económico" había sido planeado por un grupo de economistas llamado "los Chicago Boys".

En esa época yo enseñaba en el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, nido de economistas preparados en Chicago y discípulos de Milton Friedman. El 11 de septiembre, horas después del bombardeo del palacio presidencial de La Moneda, los nuevos dirigentes militares impusieron un toque de queda de 72 horas. Cuando la universidad se reabrió unos días más tarde, los Chicago Boys estaban exultantes. Apenas una semana después varios de mis colegas del Instituto de Economía fueron designados para ocupar cargos claves en el gobierno militar.

A la vez que los precios se dispararon, los salarios fueron congelados para asegurar "la estabilidad económica y detener las presiones inflacionarias". De la noche a la mañana el país entero se vio arrojado a la extrema pobreza; en menos de un año el precio del pan había aumentado treinta y seis veces; el 85% de la población chilena había sido empujada a cruzar la línea de la pobreza.

Estos acontecimientos hicieron honda mella en mi trabajo como economista. Con la manipulación de los precios, los salarios y las tasas de interés, el nivel de vida de un pueblo entero había sido destruido, la economía nacional de una nación entera había sido desestabilizada. Empecé a comprender que las reformas macroeconómicas no eran "neutrales", como afirmaban los economistas neoliberales, ni estaban separadas del más amplio proceso de la transformación social y política. En mis escritos iniciales sobre la junta militar chilena opinaba que el llamado "libre mercado" era un bien organizado instrumento de "represión económica".

Dos años más tarde regresé a América Latina en calidad de profesor visitante a la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.

Mi estadía coincidió con el golpe militar de 1976. Miles de personas fueron arrestadas y los "desaparecidos", asesinados. La toma de posesión de los militares en Argentina era un calco del golpe militar chileno dirigido por la CIA. Y detrás de las matanzas y la violación de los derechos humanos estaba también la prescripción de las reformas de "libre mercado", esta vez con la supervisión de los acreedores neoyorquinos.

Todavía no se decretaban oficialmente las letales prescripciones económicas del programa de ajuste estructural. La experiencia de Chile y Argentina con los Chicago Boys era un ensayo general de lo que habría de venir. Con el tiempo, las medidas económicas del sistema de libre comercio fueron golpeando a un país tras otro. Desde la violenta embestida de la crisis de la deuda de los años ochenta, la misma "medicina económica" del Fondo Monetario Internacional (FMI) le fue recetada rutinariamente a más de ciento cincuenta países. A partir de los trabajos que había realizado sobre Chile, Argentina y Perú empecé a investigar el impacto global de estas reformas. Nutriéndose implacablemente de la pobreza y del descoyuntamiento de la economía, un Nuevo Orden Mundial se iba conformando.

Mientras tanto, la mayoría de los regímenes militares latinoamericanos habían sido remplazados por "democracias" parlamentarias, a las que se les había encomendado la oscura tarea de poner a la economía de su país en el bloque de subastas de los programas de privatización patrocinados por el Banco Mundial.

En 1990 volví a la Universidad Católica de Perú, donde había sido profesor después de abandonar Chile a raíz del golpe militar de 1973. Cuando llegué a Lima, la campaña electoral estaba en su apogeo. La economía del país estaba en crisis. El gobierno populista saliente del presidente Alan García había sido incluido en la "lista negra" del FMI. Alberto Fujimori se convirtió en el nuevo presidente el 28 de julio de ese año. A los pocos días se asestó "la terapia económica de choque", esta vez con violencia. Perú había sido castigado por no adaptarse a los dictados del FMI: el precio del combustible aumentó 31 veces y el del pan, más de 12 en un día. El FMI, en consulta privada con el Departamento del Tesoro norteamericano, había estado operando tras bambalinas. Estas reformas, llevadas a cabo en nombre de la "democracia", fueron mucho más devastadoras que las aplicadas en Chile y Argentina bajo el puño de hierro de la dictadura militar.

Durante los años ochenta y noventa viajé a lo largo y ancho de África. De hecho, la investigación de campo para la primera edición de este libro la inicié en Ruanda, país que, pese a su elevado nivel de pobreza, había alcanzado la autosuficiencia en la producción alimentaria. Desde principios de los noventa en Ruanda la funcionalidad de la economía nacional había sido destruida; su sistema agrícola, alguna vez vibrante, se había desestabilizado. El FMI había exigido la "apertura" del mercado nacional al dumping de los excedentes de granos en Europa y Estados Unidos. La finalidad: "alentar a los agricultores ruandeses a ser más competitivos" (véase el capítulo 7).

De 1992 a 1995 realicé trabajo de campo en la India, Bangladesh y Vietnam y regresé a América Latina a terminar mi estudio sobre Brasil. En todos los países que visité, incluidos Kenia, Nigeria, Egipto, Marruecos y Filipinas, observé el mismo patrón de manipulación económica e intervención política de las instituciones de Washington. En la India, como resultado directo de las reformas del FMI, millones de personas quedaron en la indigencia. En Vietnam, una de las economías productoras de arroz más prósperas, brotaron hambrunas locales como consecuencia directa de la desaparición del control de los precios y la desregulación del mercado de granos.

Coincidiendo con el final de la guerra fría, en el apogeo de la crisis económica, recorrí varias ciudades y zonas rurales de Rusia. Las reformas patrocinadas por el FMI habían entrado en una nueva fase, extendiendo su influencia fatal a los países del antiguo bloque soviético. A partir de 1992, extensas zonas de la antigua Unión Soviética, desde los estados del Báltico hasta Siberia oriental, fueron lanzadas a una profunda pobreza.

A principios de 1996 terminé la primera edición de este libro, en la que incluí un estudio detallado sobre la desintegración económica de Yugoslavia (capítulo 17). Se había puesto en marcha un "programa de quiebras" maquinado por los economistas del Banco Mundial: en 1989-1990 se hicieron desaparecer cerca de 1 100 empresas industriales y se despidió a más de 614 mil obreros de la industria. Y eso era sólo el inicio de una fractura económica mucho más profunda de la federación yugoslava...

Desde entonces, el mundo ha cambiado drásticamente. La "globalización de la pobreza" se ha extendido a las principales regiones del mundo, incluidas Europa occidental y Norteamérica. Un Nuevo

Orden Mundial se ha instalado derogando la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos. Bajo las nuevas reglas de la Organización Mundial del Comercio (World Trade Organization), establecida en 1995, se han concedido "derechos permanentes" a los grandes bancos internacionales y a los conglomerados multinacionales. La deuda pública de las naciones se ha ido acrecentando, las instituciones estatales se han desplomado y la acumulación de la riqueza privada ha avanzado implacablemente.

Los nuevos capítulos agregados a esta segunda edición versan sobre las cuestiones claves del siglo XXI: el *boom* de las fusiones y la concentración del poder corporativo, el desplome de la economía de los países en el plano nacional y local, la disolución de los mercados financieros, el estallido de hambrunas y guerras civiles y el desmantelamiento del estado benefactor en la mayoría de los países occidentales.

La introducción es nueva y en la primera parte agregué un capítulo titulado "Falsedades globales". También examino el impacto del "libre mercado" sobre los derechos de las mujeres. En la segunda parte, sobre el África subsahariana, después del trabajo de campo que realicé en 1996 y 1997, aumenté y actualicé el capítulo sobre Ruanda. Hay dos capítulos nuevos, uno sobre la hambruna de 1999-2000 en Etiopía y otro sobre la era post-*apartheid* en Sudáfrica.

La sexta parte, titulada "El nuevo orden mundial", es nueva e incluye cinco capítulos. El capítulo 18 está dedicado al programa de ajuste estructural que se aplica en los países occidentales bajo la supervisión de los grandes bancos privados. La actual crisis económica y financiera se revisa en los capítulos 19 y 20. Los capítulos 21 y 22 examinan, respectivamente, la caída de Corea del Sur y de Brasil tras el quebrantamiento financiero de 1997-1998, así como la complicidad del FMI al apoyar los intereses de los especuladores del mercado cambiario y accionario.

Tengo una deuda de agradecimiento con muchas personas en muchos países que ampliaron mi visión sobre las reformas económicas y me ayudaron a realizar investigaciones locales. En el curso del trabajo de campo tuve la oportunidad de conocer a miembros de las comunidades de campesinos, obreros industriales, maestros, trabajadores de la salud, empleados civiles, miembros de institutos de investigación, catedráticos universitarios, miembros de organizaciones no gubernamentales, con todos los cuales establecí lazos de amistad y de solidaridad. Este libro está dedicado a su lucha.

Hago un especial reconocimiento al Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (Social Sciences and Humanities' Research Council) y al Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa, por su apoyo. Las opiniones expresadas en este libro son del autor.

Esta página dejada en blanco al propósito.

INTRODUCCIÓN

Desde que terminó la guerra fría, la humanidad está pasando por una crisis económica y social de una gravedad sin precedentes, que está llevando a grandes sectores de la población mundial a un rápido empobrecimiento. Una tras otra las economías nacionales se desploman y el desempleo abunda. Hambruna y miseria prevalecen en el África subsahariana, en el sur de Asia y en algunas partes de Latinoamérica. Esta "globalización de la pobreza", que en gran medida ha revertido los logros de la descolonización, se inició en el tercer mundo al mismo tiempo que la crisis de la deuda de principios de los ochenta y la imposición de las letales reformas económicas del Fondo Monetario Internacional.

El Nuevo Orden Mundial se nutre de la pobreza y de la destrucción del medio ambiente. Genera el *apartheid* social, alienta el racismo y las luchas étnicas, socava los derechos de las mujeres y con frecuencia lanza a los países a confrontaciones destructivas entre nacionalidades. A partir de 1990 ha extendido su dominio a las principales regiones del mundo: Norteamérica, Europa occidental, los países del antiguo bloque soviético y los países recién industrializados del sureste de Asia y del Lejano Oriente.

Esta crisis de extensión mundial es más devastadora que la gran depresión de los años treinta del siglo pasado. Tiene implicaciones geopolíticas de largo alcance: el quebrantamiento económico ha ido de la mano del surgimiento de guerras regionales, la fractura de sociedades nacionales y, en algunos casos, la destrucción de países enteros. Con mucho, es la crisis económica más grave de la historia moderna.

RECESIÓN TRAS LA GUERRA FRÍA

En la antigua Unión Soviética, y como resultado de la "medicina económica" administrada por el FMI a partir de 1992, el deterioro económico ha rebasado la caída de la producción ocurrida en el apogeo de la segunda guerra mundial, tras la ocupación alemana de Bielo-

rrusia y partes de Ucrania, en 1941, y el bombardeo intenso de la infraestructura industrial soviética. De una situación de pleno empleo y relativa estabilidad de los precios durante los setenta y los ochenta, la inflación se ha disparado, las ganancias reales y el empleo se han desplomado y los programas de salud se han esfumado. En cambio, el cólera y la tuberculosis se han extendido a velocidad alarmante a lo largo de una amplia zona de la ex Unión Soviética.[1]

Este panorama se repite en Europa oriental y los Balcanes, donde las economías nacionales han caído una tras otra. En los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia) y en las repúblicas caucásicas de Armenia y Azerbaiyán el producto industrial bajó en un 65%. En Bulgaria, en 1997, las jubilaciones se redujeron a dos dólares al mes.[2] El Banco Mundial admitió que el 90% de los búlgaros viven por debajo de la línea de pobreza definida por él mismo: cuatro dólares al día.[3] Como no pueden pagar electricidad, agua ni transportes, numerosos grupos de Europa oriental y los Balcanes han quedado brutalmente marginados de la edad moderna.

EL DECESO DE LOS "TIGRES ASIÁTICOS"

En el este de Asia, la crisis financiera de 1997, marcada por las embestidas de especuladores en contra de las divisas nacionales, contribuyó en gran medida al deceso de los llamados "Tigres asiáticos" (Indonesia, Tailandia y Corea del Sur). Los convenios de rescate impuestos inmediatamente después del quebrantamiento financiero llevaron, prácticamente de la noche a la mañana, a una abrupta caída en los estándares de vida. En Corea del Sur, luego de la "mediación" del FMI, a la que se llegó después de consultas de alto nivel con los grandes bancos internacionales, "se cerraron diariamente, en promedio, más de doscientas compañías, cuatro mil trabajadores por día perdieron su empleo y fueron lanzados a la calle"[4] (véase el capítulo 21). Mientras tanto, en Indonesia, en medio de violentas manifesta-

[1] Associated Press, 14 de agosto de 1993.

[2] "The wind in the Balkans", *The Economist*, Londres, 8 de febrero de 1997, p. 12.

[3] Jonathan C. Randal, "Reform coalition wins Bulgarian Parliament", *The Washington Post*, 20 de abril de 1997, p. A21.

[4] Federación Coreana de Sindicatos, "Unbridled freedom to sack workers is no solution at all", comunicado, Seúl, 13 de enero de 1998.

ciones callejeras, los salarios en los talleres de mano de obra barata de las zonas de producción para exportación cayeron de 40 a 20 dólares al mes; y el FMI insistió en la desindexación de los salarios como medio para mitigar las presiones inflacionarias.

En China, debido a la privatización y a la quiebra forzada de miles de empresas estatales, hay 35 millones de trabajadores que son candidatos a quedarse sin empleo.[5] A finales de los noventa, se calculaba que había un exceso de cerca de 130 millones de trabajadores en las zonas rurales de ese país.[6] Irónicamente, el Banco Mundial predijo que con la adopción de las reformas del "mercado libre" la pobreza en China descendería a 2.7% en el año 2000.[7]

POBREZA Y QUEBRANTAMIENTO ECONÓMICO EN OCCIDENTE

Ya en tiempos de Reagan y la Thatcher rigurosas medidas de austeridad conllevaron la gradual desintegración del estado benefactor. Las medidas de "estabilización económica" (adoptadas en principio "para paliar los males de la inflación") contribuyeron a la depresión de las ganancias de los trabajadores y al debilitamiento del papel del estado. Desde los años noventa, la terapia económica aplicada en los países desarrollados contiene muchos de los ingredientes esenciales de los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial en el tercer mundo y Europa oriental.

En contraste con los países en vías de desarrollo, sin embargo, las reformas políticas se imponen en Europa y Norteamérica sin intermediación del FMI. En los países occidentales, la acumulación de una enorme deuda pública ha dado a las élites financieras tanto el apoyo político como el poder para mandar a los gobiernos directrices económicas y sociales. Gracias al imperio del neoliberalismo, se recorta el gasto público y se desbaratan los programas de bienestar social. Las políticas gubernamentales promueven la desregulación del mercado de mano de obra: desindexación de ganancias, empleos de medio tiempo, jubilación anticipada y la imposición de los llamados cortes salariales "voluntarios".

[5] Eric Ekholm, "On the road to capitalism, China hits a nasty curve: Joblessness", *The New York Times*, 20 de enero de 1998.

[6] *Ibid.*

[7] Véase Banco Mundial, *1990 world development report*, Washington, 1990.

A su vez, la práctica del desgaste, que traslada la carga social del desempleo a los grupos más jóvenes, ha contribuido a dejar a toda una generación fuera del mercado laboral.[8] Las normas para tratar al personal en Estados Unidos son: "'revienten a los sindicatos', inciten a los trabajadores más viejos a pelear contra los más jóvenes, 'llamen a los esquiroles', recorten los salarios y eliminen los seguros médicos pagados por la compañía".[9]

Desde los ochenta, en Estados Unidos se ha dejado fuera de los empleos sindicalizados bien pagados a una enorme porción de la fuerza laboral llevándola a ocupar empleos de salario mínimo. *"Tercermundización" de las ciudades occidentales*: la pobreza en los guetos y los barrios bajos norteamericanos es, en muchos aspectos comparable a la del tercer mundo. Mientras que la tasa "registrada" de desempleo se redujo en este país durante el decenio de los noventa, el número de personas que ocupan empleos de medio tiempo, mal pagados, se ha disparado. Con la continua disminución de los empleos de salario mínimo, grandes sectores de la población trabajadora quedan expulsados definitivamente del mercado laboral: "el aspecto verdaderamente brutal de la recesión afecta básicamente a las comunidades y a los nuevos inmigrantes de Los Ángeles, donde la tasa de desempleo se ha triplicado y donde no existe una red de protección social. La caída es libre; la vida de las personas, literalmente se desmorona cuando pierden su empleo de salario mínimo".[10]

La reestructuración económica ha creado, a su vez, profundas divisiones entre clases sociales y grupos étnicos. El ambiente en las grandes ciudades está marcado por el "*apartheid* social": el paisaje urbano se ha compartimentalizado siguiendo líneas sociales y étnicas. Y el estado se ha vuelto cada vez más violento en el manejo del disentimiento social y en la represión de los movimientos sociales.

Con la ola de fusiones corporativas, reducciones y cierre de plantas, todas las categorías de la fuerza laboral se han visto afectadas.

[8] En Estados Unidos, la mayoría de los empleos creados en los ochenta eran por contrato de medio tiempo o temporales. Véase Serge Halimi, "Mais qui donc finance la création de millions d'emplois aux États-Unis", *Le Monde Diplomatique*, marzo de 1989.

[9] Véase Earl Silber y Steven Ashby, "UAW and the 'cat' defeat", *Against the Current*, julio-agosto de 1992.

[10] Mike Davis, "Realities of the rebellion", *Against the Current*, julio-agosto de 1991, p. 17.

La recesión golpea a los hogares de clase media y a los estadios más altos de la fuerza laboral. Al limitar los presupuestos para investigación, científicos, ingenieros y profesionistas son despedidos y a los empleados públicos y funcionarios medios se les ordena que se jubilen.

En el ínterin, los logros alcanzados en los primeros años de la posguerra se han ido revirtiendo con la derogación de los planes de seguro de desempleo y la privatización de los fondos de pensión. Se cierran hospitales y escuelas y con ello se crean las condiciones para la privatización de los servicios sociales.

UNA ECONOMÍA DELICTIVA FLORECIENTE

Las reformas del "libre mercado" propician el aumento de actividades ilícitas así como la consiguiente "internacionalización" de la economía delictiva. En Latinoamérica y Europa oriental, el crimen organizado ha invertido en la adquisición de bienes estatales gracias a los programas de privatización patrocinados por el FMI y el Banco Mundial. Según la ONU, el total mundial de ingresos de las organizaciones criminales transnacionales es del orden de un trillón de dólares, cantidad equivalente al PIB total de los países de bajos ingresos (con una población de tres mil millones de personas).[11] Este cálculo incluye el tráfico de drogas, la ventas de armas, el contrabando de materiales nucleares, etc., así como las ganancias derivadas de la economía de servicios controlada por la mafia (prostitución, apuestas, casas de cambio, etc.). Pero lo que estas cifras no reflejan del todo es la magnitud de las inversiones de las organizaciones criminales en negocios "legítimos", ni el amplio dominio que tienen de los recursos productivos en muchas áreas de la economía legal.

Los grupos de delincuentes normalmente colaboran con las empresas de negocios legales invirtiendo en una variedad de actividades "legítimas", que no sólo cubren el lavado de dinero sino que también constituyen una manera conveniente de acumular riquezas fuera del campo de la economía delictiva. Según afirma un obser-

[11] Véanse las actas de la Conferencia sobre Prevención del Crimen de Naciones Unidas, Cairo, mayo de 1995. También Jean Hervé Deiller, "Gains annuels de 1 000 milliards pour l'Internationale du crime", *La Presse*, Montreal, 30 de abril de 1996.

vador, "los grupos del crimen organizado manejan por fuera a la mayoría de las 500 compañías de la revista *Fortune*; sus organizaciones se parecen más a la General Motors que a la mafia siciliana tradicional".[12] Según testimonio de Jim Moody, director del FBI, dado a un subcomité del congreso de Estados Unidos, las organizaciones criminales en Rusia están "cooperando con grupos criminales extranjeros, incluyendo aquellos asentados en Italia y en Colombia [...] La transición al capitalismo [en la ex Unión Soviética] abrió nuevas oportunidades que las organizaciones criminales explotaron rápidamente".[13]

LOS BANQUEROS DE WALL STREET TRAS BAMBALINAS

Se ha desarrollado un "consenso político". De un lado al otro del globo los gobiernos han abrazado inequívocamente la agenda de políticas neoliberales. Las mismas prescripciones económicas se aplican en todo el mundo. Bajo la jurisdicción del FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), las reformas crean un "ambiente propicio" para los grandes bancos internacionales y las corporaciones multinacionales. Sin embargo, éste no es un sistema de mercado "libre": aunque apoyado por un discurso neoliberal, el llamado programa de ajuste estructural promovido por las instituciones de Bretton Woods constituye un nuevo marco intervencionista.

Con todo, el FMI, el Banco Mundial y la OMC no son más que burocracias. Son *instituciones* que operan bajo una sombrilla intergubernamental y en nombre de intereses económicos y financieros muy poderosos. Los banqueros de Wall Street y las cabezas de los conglomerados de negocios más grandes del mundo están indudablemente detrás de estas instituciones globales. Interactúan regularmente con los funcionarios del FMI, el Banco Mundial y la OMC en sesiones cerradas, así como en numerosas reuniones internacionales. Además, los participantes en estas reuniones y consultas son representantes de poderosos cabilderos, como la Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce [ICC]), el Diálogo Comercial Transatlántico (Trans-Atlantic Business Dialogue

[12] Daniel Brandt, "Organized crime threatens the New World Order", *Namebase Newsline* 8, Ohio, enero-marzo de 1995.

[13] Telegrama noticioso de Reuters, 25 de enero de 1995.

[TABD], que reúne en sus asambleas anuales a los líderes de las empresas multinacionales más grandes de Occidente con políticos y con funcionarios de la OMC), el Consejo para Negocios Internacionales de Estados Unidos, el Foro Económico Mundial de Davos, el Instituto de Finanzas Internacionales con sede en Washington, que representa a las instituciones bancarias y de finanzas más importantes, etc. Otras organizaciones "semisecretas", que desempeñan un papel fundamental en la conformación de las instituciones del Nuevo Orden Mundial, son la Comisión Trilateral (Trilateral Commission), los Bilderbergers y el Consejo de Relaciones Exteriores (Council of Foreign Relations [CFR]).

LA ECONOMÍA DE MANO DE OBRA BARATA

La globalización de la pobreza tiene lugar durante un periodo de rápidos avances tecnológicos y científicos. Aunque éstos han contribuido a que se incremente en grandes proporciones la *capacidad potencial* del sistema económico de producir los necesarios bienes y sevicios, el grado de productividad no se ha traducido en una correspondiente reducción del nivel de pobreza global. En el amanecer del nuevo milenio, esta disminución global del nivel de vida no es el resultado de una escasez de recursos productivos.

Por el contrario, los recortes, la reestructuración corporativa y la reubicación de la producción en países del tercer mundo, donde la mano de obra es más barata, han tenido como consecuencia aumentos en el nivel de desempleo e ingresos significativamente más bajos para los trabajadores urbanos y para los campesinos. *Este nuevo orden económico internacional se alimenta de la pobreza y de la mano de obra barata*: los altos índices de desempleo en los países desarrollados tanto como en los países en vías de desarrollo han contribuido a la depresión de los salarios reales. El desempleo se ha internacionalizado, al emigrar el capital de país en país en la perpetua búsqueda de mano de obra cada vez más barata. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo global afecta a mil millones de personas, esto es, casi una tercera parte de la fuerza de trabajo total mundial.[14] Los merca-

[14] Organización Internacional del Trabajo, *Second world employment report*, Ginebra, 1996.

dos de mano de obra nacionales ya no están segregados: a los trabajadores de los diferentes países se los coloca en abierta competencia entre sí. Con la desregulación de los mercados se derogan los derechos de los trabajadores.

El desempleo en el mundo opera como una *palanca* que regula los costos de la mano de obra en escala mundial: la abundante oferta de mano de obra barata a el tercer mundo y el antiguo bloque del Este contribuye a la depresión de los salarios en los países desarrollados. Prácticamente todas las categorías de la fuerza de trabajo (incluidos los trabajadores profesionistas y científicos altamente calificados) se ven afectadas, a la vez que la competencia por los empleos acicatea las divisiones sociales de clase, etnia, género y edad.

Microeficiencia, macroeficiencia

La corporación global reduce al mínimo los costos de mano de obra a escala mundial. Los salarios reales en el tercer mundo y europa oriental son hasta setenta veces más bajos que en Estados Unidos, Europa occidental o Japón: las posibilidades de producir son inmensas, dada la enorme cantidad de trabajadores baratos y empobrecidos que hay en el mundo.

Mientras el pensamiento neoliberal destaca por la “eficiente distribución” de los “escasos recursos”, la cruda realidad social cuestiona las consecuencias de esta manera de hacerlo. Se cierran plantas industriales, se empuja a la quiebra a empresas pequeñas y medianas, se despide a trabajadores profesionales y a empleados públicos; y el capital humano y físico permanece inactivo en nombre de la “eficiencia”. La inexorable tendencia al uso “eficiente” de los recursos de la sociedad en el nivel microeconómico lleva exactamente a la situación opuesta en el nivel macroeconómico. Los recursos no se utilizan eficientemente cuando una gran porción de la capacidad industrial permanece en la inactividad y existen millones de personas que no tienen empleo. El capitalismo moderno parece ser completamente incapaz de movilizar estos recursos humanos y materiales no explotados.

ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS, DISTORSIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Esta reestructuración económica global promueve el estancamiento de la oferta de bienes y servicios de primera necesidad a la vez que canaliza los recursos hacia inversiones lucrativas en la economía de bienes suntuarios. Más aún, con el agotamiento de la formación de capitales en actividades productivas, se buscan utilidades en transacciones crecientemente especulativas y fraudulentas, que tienden a trastornar los mercados financieros principales.

Una minoría social privilegiada ha acumulado enormes riquezas a costa de la gran mayoría de la población. El número de multimillonarios, sólo en Estados Unidos, aumentó de 13, en 1982, a 149 en 1966 y a más de 300 en el 2000. El "Club de los Multimillonarios Globales" (que cuenta con alrededor de 450 miembros) posee en conjunto una riqueza que sobrepasa el PIB sumado del grupo de países de bajos ingresos, donde vive el 59% de la población mundial (véase el cuadro 1.1).[15] La fortuna privada de la familia Walton (formada por Alice Walton, la heredera, los hermanos Robson, John y Jim, y la madre, Helen), del noroeste de Arkansas, propietaria de la cadena de supermercados Wal-Mart (con un valor de 85 mil millones de dólares), asciende a más de dos veces el PIB de Bangladesh (33.4 mil millones de dólares), que tiene una población de 127 millones y un ingreso per cápita de 260 dólares al año.[16]

Cabe agregar que el proceso de acumulación de riqueza tiene lugar, cada vez más, por fuera de la economía real y está divorciado de las actividades productivas y comerciales *bona fide*: "Los golpes de suerte en el mercado accionario de Wall Street [léase intercambio especulativo] produjeron el surgimiento de la mayoría de los multimillonarios del año pasado [1996]."[17] A su vez, los miles de millones de dólares acumulados gracias a las transacciones especulativas son canalizados hacia cuentas confidenciales en los más de 50 paraísos bancarios de ultramar. Merrill Lynch, banco de inversión norteamericano, calcula conservadoramente que la riqueza privada que manejan las cuentas bancarias personales en los paraísos fisca-

[15] "International billionaires, the world's richest people", *Forbes Magazine*, Nueva York, anual. La lista aparece en http://www.forbes.com/tool/toolbox/billnew/.

[16] Véase *ibid*.

[17] Charles Laurence, "Wall Street warriors force their way into the Billionaires Club", *Daily Telegraph*, Londres, 30 de septiembre de 1997.

les de ultramar asciende a 3.3 billones de dólares.[18] El FMI calcula los activos de corporaciones y personas en 5.5 billones de dólares, suma equivalente al 25% del total de los ingresos globales.[19] El botín mal habido de las élites del tercer mundo, guardado en cuentas bancarias, era de alrededor de 600 mil millones en los noventa, y la tercera parte se encontraba en Suiza.[20]

SOBREPRODUCCIÓN: OFERTA INCREMENTADA, DEMANDA REDUCIDA

La expansión del rendimiento en el sistema capitalista global se alcanza "minimizando el empleo" y comprimiendo los salarios de los trabajadores. Este proceso se revierte en el nivel de demanda del consumidor de bienes y servicios de primera necesidad: capacidad ilimitada de producir, capacidad limitada de consumir. En una economía de mano de obra barata, el proceso mismo de expandir el rendimiento (con recortes, despidos y salarios bajos) contribuye a comprimir la capacidad de consumo de la sociedad.

La tendencia es entonces hacia la sobreproducción en una escala sin precedentes. En otras palabras, dentro de este sistema, la expansión del gran capital sólo puede darse desembarazándose de la capacidad productiva ociosa, esto es, con la quiebra y la liquidación de las "empresas sobrantes", que se clausuran para favorecer la producción mecanizada de punta: ramas enteras de la industria permanecen paralizadas, regiones económicas enteras se ven afectadas, y sólo se utiliza una parte del potencial agrícola del mundo.

Esta sobreoferta global de mercancías es una consecuencia directa de la caída del poder de compra y del alza de los niveles de pobreza, resultado también de *minimizar* y homologar los costos de mano de obra y empleo bajo los embates de las reformas del FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

La sobreoferta contribuye a su vez a deprimir todavía más las ganancias de los productores directos debido a la interrupción de la producción excesiva. Contrariamente a la "Ley de Say", enarbolada

[18] "Increased demand transforms markets", *Financial Times*, Londres, 21 de junio de 1995, p. II.

[19] *Financial Times*, 7 de junio de 1996, p. III.

[20] Peter Bosshard, "Cracking the Swiss banks", *The Multinational Monitor*, noviembre de 1992.

por la corriente neoliberal, *la oferta no crea su propia demanda*. Desde principios de los ochenta la sobreproducción de mercancías que hace que caigan los precios (reales) de las mercancías ha provocado desastres, sobre todo entre los productores primarios del tercer mundo, pero también en el área de la manufactura.

INTEGRACIÓN GLOBAL, DESINTEGRACIÓN NACIONAL

En los países en vías de desarrollo, ramas enteras de la industria que producían para el mercado interno han sido empujadas a la quiebra por orden del Banco Mundial y el FMI. El sector urbano informal, que históricamente ha desempeñado un papel importante como fuente de creación de empleos, ha sido socavado como consecuencia de las devaluaciones de la moneda, la liberalización de las importaciones y el *dumping*. En el África subsahariana, por ejemplo, el sector informal de la industria del vestido ha sido destruido y sustituido por el mercado de prendas usadas (importadas de Occidente a 80 dólares la tonelada).[21]

En contraste con el estancamiento económico (incluyendo tasas de crecimiento negativo en Europa oriental, la antigua Unión Soviética y el África subsahariana), las corporaciones más grandes del mundo han experimentado un crecimiento y una expansión sin precedentes de su participación en el mercado global. Sin embargo, este proceso ha tenido lugar sobre todo por el desplazamiento de los sistemas productivos anteriores, esto es, a expensas de los productores locales, regionales y nacionales. Para aquéllas, expansión y "rentabilidad" dependen de una contracción generalizada del poder de compra y el empobrecimiento de grandes sectores de la población mundial. Por su parte, las reformas del "libre mercado" han contribuido implacablemente a abrir nuevas fronteras económicas, al mismo tiempo que se asegura la "rentabilidad" a través de la imposición de salarios ínfimos y la desregulación del mercado de mano de obra. En este proceso *la pobreza es un insumo del lado de la oferta*. Toda la gama de reformas del FMI, el Banco Mundial y la OMC impuestas de un lado al otro del globo tienen un papel decisivo en la regulación de los costos de mano de obra con vistas al provecho del gran capital.

[21] Con base en entrevistas del autor realizadas en Túnez y Kenia, en diciembre de 1992.

La sobrevivencia del más fuerte: las empresas que poseen las tecnologías más avanzadas o aquellas que mantienen los salarios más bajos sobreviven en una economía mundial marcada por la sobreproducción. Mientras que el espíritu del liberalismo anglosajón está empeñado en "fomentar la competencia", en la práctica la política macroeconómica del Grupo de los 7 (G-7) ha apoyado una ola de fusiones y adquisiciones corporativas así como la quiebra de empresas pequeñas y medianas.

DESTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL

En el plano local, las empresas pequeñas y medianas son empujadas a la bancarrota u obligadas a producir para algún distribuidor global. Por su parte, las compañías multinacionales grandes han adquirido el control de los mercados internos por medio del sistema de franquicias corporativas. Este proceso permite a las grandes empresas (las que otorgan las franquicias) tener bajo su control los recursos humanos, la mano de obra barata y la organización empresarial. Así, una gran tajada de las ganancias de las pequeñas empresas locales o minoristas se la queda la corporación global, mientras que el grueso del desembolso para la inversión es asumido por el productor independiente (el que adquiere la franquicia).

Se observa un proceso paralelo en Europa occidental. En los términos del tratado de Maastricht, el proceso de reestructuración política en la Unión Europea presta cada vez más atención a los intereses financieros dominantes en perjuicio de la unidad de las sociedades europeas. En este sistema, el poder del estado deliberadamente ha dado vara alta al progreso de los monopolios privados: el gran capital destruye al pequeño capital en todas sus formas. Con la tendencia a la formación de bloques económicos tanto en Europa como en Norteamérica, se desarraiga al empresario local, se transforma la vida de la ciudad y desaparece la propiedad individual en pequeña escala. El "libre comercio" y la integración económica proveen de mayor movilidad a la empresa global, al mismo tiempo que se suprime (gracias a barreras institucionales y no arancelarias) el movimiento del pequeño capital local.[22] La "integración

[22] Mientras que las grandes empresas multinacionales se desplazan libremente dentro de la zona que cubre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, restric-

económica" (bajo el dominio de la empresa global) da una apariencia de unidad política, siendo que en realidad promueve facciones y luchas sociales entre sociedades y dentro de ellas.

GUERRA Y GLOBALIZACIÓN

La imposición de reformas macroeconómicas y comerciales supervisadas por el FMI, el Banco Mundial y la OMC tiene la finalidad de recolonizar "pacíficamente" a las naciones a través de la deliberada manipulación de las fuerzas del mercado. Aunque no despliega abiertamente el uso de la fuerza, la obligatoriedad despiadada de las reformas económicas constituye una forma de guerra. De manera general, y en particular después del 11 de septiembre de 2001, es necesario entender los peligros de la guerra. La globalización y la guerra van de la mano.

¿Qué ocurre a los países que se rehúsan a admitir a los bancos occidentales y a las corporaciones multinacionales, como lo exige la OMC? El aparato militar y de inteligencia occidental y sus diversas burocracias, por regla general, tienen vínculos con el establishment financiero. El FMI, el Banco Mundial y la OMC, que vigilan las reformas económicas localmente, colaboran también con la OTAN en sus esfuerzos "para mantener la paz", para no hablar del financiamiento de la reconstrucción "posconflicto" bajo los auspicios de las instituciones de Bretton Woods.

Al comienzo del tercer milenio, guerra y "mercado libre" van de la mano. La guerra no necesita de la OMC ni de un convenio multilateral de inversión (*multilateral agreement on investment* [MAI] parapetado por el derecho internacional: *la guerra es el "MAI" de último recurso*. Destruye físicamente lo que antes no fue desmantelado por la desregulación, la privatización y la imposición de las reformas de libre comercio. La colonización sin reserva a través de la guerra y la instalación de protectorados occidentales es tanto como aplicar "tratamiento nacional" a los bancos occidentales y a las corporaciones multinacionales (tal como estipula la OMC) en todos los sectores de la actividad. La "diplomacia de los misiles" es una copia de la "diplomacia de cañonero" utilizada para obligar al libre comercio en

ciones no arancelarias impiden que el capital local en pequeña escala de una provincia canadiense extienda sus actividades a otra provincia canadiense.

el siglo XIX. La Misión Cushing enviada a China en 1844 (al iniciarse la guerra del opio) había advertido al gobierno imperial chino "que el rehusarse a ceder a las demandas de Estados Unidos podría considerarse una invitación a la guerra".[23]

DESARME DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL

La ideología del comercio "libre" respalda una nueva y brutal forma de intervencionismo que se basa en la deliberada manipulación de las fuerzas de mercado. Al derogar los derechos de los ciudadanos, el comercio libre, en los términos de la OMC, garantiza "derechos permanentes" a los principales bancos del mundo y a las corporaciones globales. El proceso de obligar a acuerdos internacionales con la OMC, en el plano nacional e internacional, invariablemente pasa por encima del proceso democrático. En otras palabras, los artículos de la OMC amenazan la democracia y los derechos democráticos a nivel nacional, a la vez que entregan amplios poderes al establishment financiero (véase el capítulo 1). Detrás del discurso sobre la llamada "gobernabilidad" y el "mercado libre", el neoliberalismo otorga una dudosa legitimidad a los que ocupan la sede del poder político.

El Nuevo Orden Mundial se basa en el "falso consenso" de Washington y Wall Street, que dictaminan que el "sistema de libre mercado" es la única opción posible en el camino predestinado a la "prosperidad global". Todos los partidos politicos comparten hoy este consenso, incluyendo ecologistas, socialdemócratas y ex comunistas.

Los lazos insidiosos de políticos y funcionarios internacionales con los poderosos intereses financieros deben ponerse al descubierto. Para poder efectuar cambios significativos, las instituciones del estado y las organizaciones intergubernamentales deben desprenderse de las garras del establishment financiero. Por otra parte, debemos democratizar el sistema económico y sus estructuras administrativas y de propiedad, desafiar con determinación la descarada concentración de la propiedad y de la riqueza privada, desmantelar los mercados financieros, congelar el comercio especulativo, detener el lavado de dinero, desmantelar los paraísos bancarios y fiscales, redistribuir el ingreso y la riqueza, reinstaurar los derechos de los productores directos y reconstruir el estado benefactor.

Sin embargo, entiéndase bien, el aparato militar y de seguridad respalda y apoya los intereses económicos y financieros dominantes; esto es, el robustecimiento y el ejercicio de la fuerza militar promueve el "libre comercio". El Pentágono es un arma de Wall Street; la OTAN coordina sus operaciones militares con las medidas intervencionistas del Banco Mundial y el FMI, y viceversa. Además, los cuerpos de seguridad y de defensa de la alianza militar occidental, junto con los diversos gobiernos civiles y las burocracias intergubernamentales (el FMI, el Banco Mundial, la OMC), tienen un común entendimiento, un consenso ideológico y la determinación de establecer el Nuevo Orden Mundial. Dicho de otro modo, la campaña internacional en contra de la "globalización" debe integrarse a una coalición más amplia de fuerzas sociales con el objetivo de desmantelar el complejo militar-industrial, la OTAN y el establishment de defensa, junto con sus aparatos de inteligencia, de seguridad y de policía.

Los medios de comunicación y la prensa occidental fabrican noticias y, descaradamente, distorsionan el curso de los acontecimientos. Esta "falsa conciencia" que penetra nuestras sociedades impide el debate crítico y disfraza la verdad. En última instancia, esta falsa conciencia impide el entendimiento colectivo del funcionamiento de un sistema económico que destruye la vida humana. La única promesa del "libre mercado" es un mundo de campesinos sin tierra, fábricas en quiebra, trabajadores sin empleo y programas sociales desprovistos de sentido por la "amarga medicina económica" que administran la OMC y el FMI, única prescripción de su repertorio. Debemos recuperar la verdad, debilitar a los medios de comunicación y a la prensa controlada, devolver la soberanía a nuestras naciones y a los pueblos de nuestras naciones, desarmar y abolir el capitalismo global.

La lucha debe tener una amplia base y ser democrática, debe abarcar a todos los sectores de la sociedad, en todos los niveles, en todos los países, y reunir en una gran arremetida a trabajadores, campesinos, productores independientes, negocios pequeños, profesionistas, artistas, funcionarios civiles, miembros del clero, estudiantes e intelectuales. La gente debe estar unida en todos los sectores; los grupos dedicados a una sola actividad deben trabajar mano a mano en el entendimiento común y colectivo de la forma en que el presente sistema económico destruye y empobrece. La globalización de esta lucha es fundamental y requiere un grado de solidari-

dad e internacionalidad sin precedentes en la historia del mundo. La unidad de propósito y la coordinación entre los diversos grupos y los diversos movimientos sociales de todos los rincones del mundo serán decisivas. Se requiere un gran impulso que reúna a todos los movimientos sociales de las principales regiones del mundo en un propósito y un compromiso comunes de eliminar la pobreza y alcanzar una paz mundial duradera.

I

POBREZA GLOBAL Y REFORMAS MACROECONÓMICAS

Esta página dejada en blanco al propósito.

1

LA GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA

Desde principios de los ochenta, la "estabilización macroeconómica" y el programa de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial a los países en vías de desarrollo (como condición para la renegociación de su deuda externa) han llevado al empobrecimiento de cientos de millones de personas. Contrariamente al espíritu del convenio de Bretton Woods, basado en la "reconstrucción económica" y la estabilidad de las principales tasas de cambio, el programa de ajuste estructural ha contribuido mayormente a desestabilizar las divisas y a arruinar la economía de los países en vías de desarrollo.

El poder de compra interno se ha desplomado, han surgido hambrunas, se han cerrado clínicas de salud y escuelas, a cientos de millones de niños se les ha negado el derecho a la educación primaria. En varias regiones del mundo en desarrollo las reformas han conllevado el resurgimiento de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la malaria y el cólera. Mientras que el mandato del Banco Mundial es "combatir la pobreza" y proteger el medio ambiente, su apoyo a los proyectos hidroeléctricos y agroindustriales en gran escala ha acelerado de paso el proceso de deforestación y la destrucción del medio ambiente natural, conduciendo al desplazamiento forzoso y al desahucio de muchos millones de seres humanos.

GEOPOLÍTICA GLOBAL

Tras la guerra fría, la reestructuración macroeconómica ha respaldado los intereses geopolíticos globales, entre otros la política exterior de Estados Unidos. Los ajustes estructurales han sido usados para socavar las economías del antiguo bloque soviético y desmantelar su sistema de empresas estatales. Desde finales de los ochenta, el "remedio económico" del FMI-Banco Mundial se ha impuesto en Euro-

pa oriental, Yugoslavia y la ex Unión Soviética, con consecuencias económicas y sociales devastadoras (véanse los capítulos 16 y 17).

Aunque con un mecanismo de observancia forzosa diferente, desde los noventa el programa de ajuste estructural se ha aplicado también en los países desarrollados. Mientras que las terapias macroeconómicas (bajo la jurisdicción de los gobiernos nacionales) tienden a ser menos brutales que las impuestas en el Sur y en el Este, los soportes teóricos e ideológicos son, a grandes rasgos, similares. Sirven a los mismos intereses financieros globales. El monetarismo se aplica a escala mundial y el proceso de reestructuración económica global golpea también el corazón mismo de los países ricos. Las consecuencias son desempleo, bajos salarios y marginación de grandes sectores de la población. Los gastos sociales se recortan y muchos de los logros del estado benefactor se anulan. Las políticas estatales han alentado la destrucción de empresas pequeñas y medianas. Los bajos niveles de consumo de alimentos y la desnutrición están afectando también a los pobres urbanos en los países ricos. De acuerdo con un estudio reciente, treinta millones de personas en Estados Unidos están clasificadas como "hambrientas".[1]

Los efectos del ajuste estructural así como la derogación de los derechos sociales de las mujeres y las consecuencias perjudiciales de las reformas económicas en el medio ambiente han sido ampliamente documentados. Aunque las instituciones de Bretton Woods han reconocido "el impacto social de los ajustes", no se vislumbra ningún cambio en la dirección de sus políticas. De hecho, desde principios de los noventa, coincidiendo con el derrumbe del bloque oriental, las prescripciones políticas del FMI-Banco Mundial (impuestas ahora en nombre del "alivio a la pobreza") son cada vez más duras e inflexibles.

POLARIZACIÓN SOCIAL Y CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA

En el Sur, el Este y el Norte, una minoría social privilegiada ha acumulado vastas riquezas a expensas de la gran mayoría de la población. Este nuevo orden financiero internacional se nutre de la po-

[1] Según el Centro sobre el Hambre, la Pobreza y las Políticas de Nutrición, de Tufts University.

breza humana y de la destrucción del medio ambiente natural. Genera el apartheid social, alienta el racismo y las pugnas étnicas, socava los derechos de las mujeres y a menudo precipita a los países a confrontaciones destructivas entre nacionalidades. Además, estas reformas –cuando se aplican simultáneamente en más de 150 países– conducen a una "globalización de la pobreza", un proceso que socava la subsistencia humana y destruye a la sociedad civil en el Sur, el Este y el Norte.

LA "MEDICINA ECONÓMICA" DEL FMI

Bajo la jurisdicción del FMI, el mismo "menú" de austeridad presupuestaria, devaluación, liberalización del comercio y privatización se aplica simultáneamente en más de 150 países endeudados. Las naciones deudoras renuncian a su soberanía económica y al control de las políticas fiscales y monetarias, el banco central y el ministerio de finanzas son reorganizados (a menudo con la complicidad de las burocracias locales), las instituciones estatales son desmanteladas y se instala una "tutela económica". Las instituciones financieras internacionales (IFI) establecen un "gobierno paralelo" que pasa por encima de la sociedad civil. Los países que no se sujetan a los "objetivos de desempeño" del FMI son incluidos en la lista negra.

Aunque se adoptó en nombre de la "democracia" y del llamado "buen gobierno", el programa de ajuste estructural (PAE) requiere el fortalecimiento de los aparatos de seguridad interna y de inteligencia militar: la represión política –con la complicidad de las élites del tercer mundo– apoya un proceso paralelo de "represión económica".

El "buen gobierno" y la realización de elecciones multipartidarias son condiciones añadidas, impuestas por donantes y acreedores; sin embargo, la naturaleza misma de las reformas económicas impide una genuina democratización, esto es, su implementación invariablemente requiere el respaldo del ejército y del estado autoritario (en contra del "espíritu del liberalismo anglosajón"). El ajuste estructural promueve instituciones fantasma y una democracia parlamentaria ficticia, que a su vez sostiene el proceso de reestructuración económica.

En todo el tercer mundo, la situación es de exasperación social y

desesperanza de una población empobrecida por la interacción de las fuerzas del mercado. Los motines anti-PAE y los alzamientos populares se reprimen con brutalidad. Caracas, 1989: el presidente Carlos Andrés Pérez, después de denunciar artificiosamente al FMI por practicar "un totalitarismo económico que no mata con balas sino con hambre", declaró el estado de emergencia y mandó unidades de infantería regular y de marina a los "barrios de ranchos" situados en las colinas que dominan la capital. La chispa de los motines en contra del FMI en Caracas se encendió a consecuencia de un aumento del 200% en el precio del pan. Hombres, mujeres y niños fueron reprimidos a balazos indiscriminadamente: "El depósito de cadáveres de Caracas informó que llegaron 200 cuerpos de personas muertas en los tres primeros días... y avisaba que los féretros estaban agotándose."[2] Según datos no oficiales, murieron más de mil personas. Túnez, enero de 1984: motines por el pan instigados principalmente por jóvenes desempleados que protestaban contra el alza de los precios de los alimentos. Nigeria, 1989: motines estudiantiles anti-PAE provocaron la clausura de seis de las universidades del país por el Consejo Directivo de las Fuerzas Armadas. Marruecos, 1990: huelga general y levantamiento popular contra las reformas del gobierno patrocinadas por el FMI. México, 1994: insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la región de Chiapas, al sur del país. Federación Rusa: movimientos de protesta y toma del parlamento ruso en 1993. Ecuador, enero de 2000: movimiento de protesta de masas en contra de la adopción del dólar como moneda nacional, esto condujo a la renuncia del presidente. Cochabamba, Bolivia, abril de 2000: miles de campesinos protestan por la privatización de los recursos acuíferos de la nación y la imposición de cuotas de uso. Y así sucesivamente. La lista es larga.

GENOCIDIO ECONÓMICO

El ajuste estructural tiende a una forma de "genocidio económico" que se desarrolla mediante la consciente y deliberada manipulación de las fuerzas del mercado. Cuando se compara con el genocidio de los periodos anteriores de la historia colonial (esto es,

[2] *Financial Times*, 3 de marzo de 1989.

trabajo forzado y esclavitud), su impacto social es devastador. El programa de ajuste estructural (PAE) afecta directamente la sobrevivencia de más de cuatro mil millones de personas. Su aplicación en gran número de países deudores individuales favorece la "internacionalización" de las políticas macroeconómicas bajo el control directo del FMI y del Banco Mundial, que actúan en nombre de poderosos intereses financieros y políticos (por ejemplo, el Club de Londres, el Club de París y el G-7). Esta nueva forma de dominación económica y política –una forma de "colonialismo de mercado"– subordina a pueblos y gobiernos mediante la interacción aparentemente "neutral" de las fuerzas del mercado. Los acreedores internacionales y las corporaciones multinacionales han encargado a la burocracia internacional con sede en Washington la ejecución de un proyecto económico global que afecta la vida de más del 80% de la población mundial. En ninguna época de la historia el mercado "libre" –que opera en el mundo mediante los instrumentos de la macroeconomía– ha desempeñado un papel tan importante en la construcción del destino de las naciones "soberanas".

DESTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La reestructuración de la economía mundial bajo la dirección de las instituciones financieras con sede en Washington niega a los países en vías de desarrollo la posibilidad de edificar una economía nacional: la internacionalización de las políticas macroeconómicas transforma a los países en territorios económicos abiertos y a las economías nacionales en "reservas" de mano de obra barata y recursos naturales. La aplicación de la "medicina económica" del FMI tiende a deprimir aún más los precios mundiales de los bienes de consumo, porque fuerza a los países individuales a impulsar simultáneamente su economía nacional hacia un mercado mundial en proceso de contracción.

En el corazón del sistema económico global se encuentra una estructura desigual de comercio, producción y crédito, que define el papel y la posición de los países en vías de desarrollo en esta economía. ¿Cuál es la naturaleza de este sistema económico para el desarrollo mundial, en qué estructura de pobreza y desigualdad del in-

greso se basa? Al comienzo de este siglo, la población mundial es de más de seis mil millones, de los cuales cinco mil millones viven en países pobres. Mientras que los países ricos (con casi el 15% de la población mundial) controlan cerca del 80% del ingreso mundial total, aproximadamente el 60% de la población mundial (que representa el grupo de los "países de bajos ingresos", incluyendo la India y China), con una población de más de 3.5 mil millones de personas, recibe el 6.3% del ingreso mundial total, menos que el PIB de Francia y sus territorios ultramarinos. Con una población de más de 600 millones de personas, el PIB de toda la región subsahariana del África es de aproximadamente la mitad que el del estado de Texas.[3] Los países de ingresos bajos y medios (entre ellos los antiguos países "socialistas" y la antigua Unión Soviética), que representan cerca del 85% de la población mundial, reciben, juntos, aproximadamente el 20% del ingreso mundial total (véase el cuadro 1.1).

En muchos países endeudados del tercer mundo, el salario real en el sector moderno ha disminuido en más del 60% desde comienzos de los noventa. La situación del sector informal y los desempleados es todavía más crítica. En Nigeria, durante el gobierno militar del general Ibrahim Babangida, por ejemplo, el salario mínimo descendió más del 85% en el curso de los ochenta. En Vietnam, los salarios estaban por debajo de los diez dólares al mes; mientras que el precio nacional del arroz se niveló al precio mundial como resultado del programa del FMI adoptado por el gobierno de Hanoi, un maestro de escuela secundaria de Hanoi, por ejemplo, con título universitario, en 1991 recibía un salario mensual de menos de 15.2 dólares (véase el capítulo 12).[4] En Perú, a raíz del "Fujishock" patrocinado por el FMI-Banco Mundial y puesto en marcha por el presidente Alberto Fujimori en agosto de 1990, los precios de los carburantes aumentaron 31 veces de un día para otro, mientras que el

[3] Vale la pena señalar que la participación de los países en vías de desarrollo en el ingreso mundial total ha descendido notablemente desde el violento embate de la crisis de la deuda. Mientras que el grupo de los países de bajos ingresos aumentó su participación en la población mundial en más del 2% en el trienio 1988-1991, su participación en el ingreso mundial descendió de 5.4 a 4.9%. De forma similar, la participación del África subsahariana en el ingreso mundial descendió en el mismo periodo de 0.9 a 0.7%. En 1993, el Banco Mundial redefinió las bases para medir y comparar el ingreso per cápita. Las cifras contenidas en el cuadro 1.1 han sido corregidas debido a las diferencias en la paridad del poder de compra.

[4] Entrevistas realizadas por el autor en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh en enero de 1991.

CUADRO 1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y DEL INGRESO (1998)

Países	*Población (millones)*	*Proporción de la población mundial (%)*	*Ingreso per cápita (dólares)*	*Ingreso total (miles de millones de dólares)*	*Proporción del ingreso mundial (%)*
De bajos ingresos	3515	59.6	520	828	6.3
De ingresos medios	1496	25.4	2950	4413	15.3
Total países pobres	*5011*	*85.0*	*1250*	*6264*	*21.7*
África subsahariana	628	10.6	480	301	1.0
Sur de Asia	305	22.1	430	561	1.9
China	1239	21.0	750	929	3.2
Ex URSS y Europa oriental	395	6.7	965	776	2.7
Total tercer mundo[1]	*4616*	*78.3*	*1180*	*5447*	*18.9*
Total países ricos	*885*	*15.0*	*25510*	*22576*	*78.3*
Total mundial	5897	100.0	4890	28836	100.0

FUENTE: Estimaciones sobre datos del Banco Mundial en *World development report, 1999/2000*, Washington, D.C., pp. 230-231.

[1] Turquía y México están incluidas.

NOTA: El total de países pobres es la suma de los países de bajos ingresos más los países de ingresos medios. El total de los países del tercer mundo es el total de los países pobres menos la ex URSS y Europa oriental.

precio del pan aumentó 12 veces; el salario mínimo real decreció en más del 90% (en relación con su nivel de mediados de los setenta) (véase el capítulo 14).

LA DOLARIZACIÓN DE LOS PRECIOS

Si bien hay notables variaciones en el costo de la vida entre los países desarrollados y los subdesarrollados, la devaluación, combinada con la liberalización del comercio y la desregulación de los mercados nacionales de bienes de consumo (dentro del programa de ajuste estructural) tiende a la "dolarización" de los precios internos. Cada vez más, los precios de los alimentos básicos se emparejan a los niveles del mercado mundial.

Este nuevo orden económico mundial, aunque basado en la internacionalización de los precios de las mercancías y en un mercado mundial plenamente integrado, funciona cada vez más en términos de una radical separación entre dos diferentes mercados laborales. En otras palabras, este sistema se caracteriza por una dualidad en la estructura de los salarios y los costos de mano de obra entre países ricos y pobres. Mientras que los precios se unifican y se elevan a los niveles mundiales, los salarios (y los costos de mano de obra) en el tercer mundo y Europa oriental son unas 70 veces más bajos que en los países de la OCDE.

Las desigualdades en el ingreso entre naciones se superponen a desigualdades en el ingreso extremadamente amplias entre los grupos sociales dentro de cada nación. En muchos países del tercer mundo, al menos un 60% del ingreso nacional se concentra en el 20% superior de la población. En muchos países de ingreso medio y bajo, el 70% de los hogares rurales tiene un ingreso per cápita que está entre el 10 y 20% del promedio nacional. Estas grandes disparidades en el ingreso entre y dentro de los países son consecuencia de la estructura del comercio de bienes de consumo y de la división desigual del trabajo a escala internacional, que impone al tercer mundo, y recientemente a los países del antiguo bloque soviético también, una posición subordinada en el sistema económico global. Las disparidades han aumentado en el curso de los noventa como resultado de la remodelación de las economías nacionales postulada en el programa de ajustes estructurales.

LA "TERCERMUNDIZACIÓN" DEL ANTIGUO BLOQUE ORIENTAL

El fin de la guerra fría ha tenido un profundo impacto en la distribución global del ingreso. Hasta principios de los noventa, Europa oriental y la Unión Soviética eran consideradas como parte del "Norte" desarrollado, es decir, con niveles de consumo material, educación, salud, desarrollo científico, etc., ampliamente comparables a los prevalecientes en los países de la OCDE. Si bien, en general, el promedio de ingresos era más bajo, los estudiosos occidentales reconocían sin embargo los logros de los países del bloque oriental, particularmente en las áreas de salud y educación.

Empobrecidos como resultado de las reformas patrocinadas por

el FMI, los países del antiguo bloque socialista ahora son clasificados por el Banco Mundial como “economías en vías de desarrollo”, a la par de los países de ingresos “bajos” y “medios” del tercer mundo. Las repúblicas de Kazajstán y Turkmenistán, en Asia central, aparecen al lado de Siria, Jordania y Túnez en la categoría de “ingreso medio-bajo”, mientras que la Federación Rusa está al lado de Brasil con un ingreso per cápita del orden de los tres mil dólares. Estos cambios de categoría reflejan los resultados de la guerra fría y el proceso subyacente de “tercermundización” de Europa oriental y de la ex Unión Soviética.

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES GLOBALES

La inauguración de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 1995, marca una nueva fase en la evolución del sistema económico global de posguerra. Ha surgido una nueva división triangular de la autoridad entre el FMI, el Banco Mundial y la OMC. El FMI había exigido una “supervisión” más efectiva de las políticas económicas de los países en vías de desarrollo, así como una mayor coordinación entre las tres instituciones internacionales, lo que significa violar aún más la soberanía de los gobiernos.

En el nuevo orden comercial (que surgió de las conclusiones de la Ronda de Uruguay en Marrakech en 1994), las relaciones entre las instituciones sitas en Washington y los gobiernos nacionales han sido redefinidas. La imposición de las políticas prescritas por el FMI-Banco Mundial ya no depende solamente de los convenios de préstamo *ad hoc* a nivel nacional (que no son documentos legalmente obligatorios). En lo sucesivo, muchas de las cláusulas del programa de ajuste estructural (por ejemplo, la liberalización del comercio, la privatización y el régimen de inversión externa) estarán insertadas permanentemente en los artículos de convenio de la OMC. Estos artículos sientan las bases para “vigilar” a los países (y para imponer “condicionantes”) de acuerdo con el derecho internacional.

La desregulación del comercio, que obedece a las normas de la OMC, junto con las nuevas cláusulas relativas a los derechos de propiedad intelectual permiten a las corporaciones multinacionales (CNM) penetrar en los mercados locales y extender su control sobre

prácticamente todas las áreas de la manufactura, la agricultura y los servicios de un país.

DERECHOS PERMANENTES PARA LOS BANCOS Y LAS CNM

Dentro de este nuevo ambiente económico, los acuerdos internacionales negociados por burócratas bajo los auspicios intergubernamentales han llegado a ocupar un lugar especial en la remodelación de las economías nacionales. Los artículos de convenio de la OMC proveen lo que algunos observadores llaman una "carta de derechos para las CNM", que deroga la capacidad de las sociedades nacionales de regular su propia economía, pone en peligro los programas sociales, las políticas de creación de empleos, las acciones afirmativas y las iniciativas comunitarias. Estos artículos amenazan con despojar de todo poder a las sociedades nacionales a la vez que otorgan poderes desmedidos a las corporaciones globales.

La OMC fue creada tras la firma de un "acuerdo técnico" negociado a puerta cerrada. Ni siquiera los que encabezaban las diferentes delegaciones de los países que asistieron a Marrakech en 1994 fueron informados sobre los estatutos de la organización, redactados por tecnócratas en sesiones privadas aparte. El marco de la OMC garantiza un "enfoque único de acción" de los resultados de la Ronda de Uruguay; de esta manera, "ser miembro de la OMC implica que se aceptan los resultados de la Ronda sin excepción".[5]

Después de la reunión en Marrakech, el convenio, de 550 páginas (más numerosos apéndices), fue aprobado a toda prisa, o bien nunca fue formalmente ratificado por los parlamentos nacionales. Los artículos de convenio de la OMC resultantes de este "acuerdo técnico" –como los procedimientos de ajustes de disputas– se insertaron "casualmente" en el derecho internacional. En otras palabras, el acuerdo de Marrakech de 1994, que instala a la OMC como institución multilateral, pasa por encima del proceso democrático de cada uno de los países miembros. Descaradamente, deroga las leyes y las constituciones nacionales a la vez que otorga amplios poderes a los grandes bancos internacionales y a las CNM. Estos poderes, de he-

[5] Para detalles véase el texto de "The Final Act Establishing the World Trade Organization", en la página web de la OMC: http://www.wto.org.

cho, están incluidos en los artículos de convenio de la Organización Mundial del Comercio.

En otras palabras, se trata de un proceso a todas luces "ilegal": una institución "totalitaria" intergubernamental fue casualmente instalada en Ginebra, comisionada por el derecho internacional con el mandato de vigilar las políticas económicas y sociales de las naciones en el plano local, derogando sus derechos soberanos. De manera similar, la OMC prácticamente neutraliza, de un plumazo, la autoridad y las actividades de varias agencias de las Naciones Unidas, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD]) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los artículos de la OMC no sólo están en contradicción con leyes nacionales e internacionales preexistentes sino también con los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aceptar a la OMC como una organización legítima equivale a una "moratoria indefinida", o a rechazar la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Además de violar abiertamente el derecho internacional, las normas de la OMC legitiman prácticas comerciales que rayan en el delito, como la "piratería intelectual" que practican las CNM y la derogación de los derechos de los campesinos, para no hablar de la manipulación genética que practican los gigantes de la biotecnología o el patentar formas de vida como plantas, animales, microorganismos, material genético y formas de vida humana en los términos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (*trade related intellectual property rights* [TRIP]) (véase el capítulo 9).

En la esfera de los servicios financieros, los artículos de la OMC legitiman las manipulaciones especulativas y financieras a gran escala cuyo objetivo son los países en vías de desarrollo y que a menudo acaban con sus políticas monetarias.

Con las reglas de la OMC, los bancos y las empresas multinacionales pueden legalmente manipular las fuerzas del mercado en su propio beneficio, lo que significa la recolonización de las economías nacionales. En otras palabras, los artículos de la OMC facultan a los grandes bancos internacionales y a las CNM para desestabilizar a las instituciones, llevar a la quiebra a los productores locales y, a la larga, adquirir el control de países enteros.

2

FALSEDADES GLOBALES

Los gobiernos del G-7 y las instituciones globales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC, casualmente, niegan el aumento del grado de pobreza en el mundo. Ocultan las realidades sociales, manipulan las estadísticas oficiales, distorsionan los conceptos económicos. Por otra parte, en los medios, se bombardea a la opinión pública con esplendentes imágenes de crecimiento global y prosperidad. Se dice que la economía mundial florece gracias al ímpetu de las reformas del "libre mercado": "Los días felices están de vuelta [...] la oportunidad de un crecimiento económico sostenido y cada vez más global está esperando que la tomemos."[1] Sin debate ni discusión, se esgrimen como la llave del éxito económico "sólidas políticas macroeconómicas" (esto es, toda la gama de medidas de austeridad, desregulación, reducción presupuestaria y privatización).

El discurso económico dominante ha reforzado asimismo su influencia en las instituciones académicas y de investigación en todo el mundo. Se desalienta firmemente el análisis crítico: la realidad social y económica ha de verse exclusivamente a través de un conjunto único de relaciones económicas ficticias, y esto con el fin de ocultar el funcionamiento del sistema económico global. Los economistas neoliberales producen teorías sin hechos ("teoría pura") y hechos sin teoría ("economía aplicada"). El dogma económico dominante no admite el desacuerdo ni la discusión de su principal paradigma teórico: la primera función de las universidades es producir una generación de economistas leales, dignos de confianza e incapaces de descubrir los fundamentos sociales de la economía de mercado global. En la misma vena, a los intelectuales del tercer mundo se los recluta cada vez más para que apoyen el paradigma neoliberal. La internacionalización de la "ciencia" económica respalda sin reservas el proceso de reestructuración económica global.

[1] "Let good times roll", *Financial Times*, 1 de enero de 1995, p. 6 (comentario editorial sobre las predicciones de la OCDE al 31 de diciembre de 1994).

Este dogma neoliberal “oficial” crea a su vez su propio “contraparadigma” que da forma a un discurso altamente moral y ético, centrado en el “desarrollo sustentable” y el “alivio de la pobreza” pero que con frecuencia distorsiona y engalana las cuestiones políticas relativas a la pobreza, la protección del medio ambiente y los derechos sociales de las mujeres. Esta “contraideología” en raras ocasiones desafía las prescripciones de la política neoliberal. Se desarrolla junto con el dogma neoliberal oficial y en armonía más que en oposición con él.

En esta contraideología (generosamente subvencionada por el establishment dedicado a la investigación) los estudiosos del desarrollo (y no digamos las múltiples organizaciones no gubernamentales) encuentran un nicho confortable. Su papel es generar (dentro de este contradiscurso) algo semejante a un debate crítico sin tocar los fundamentos sociales del sistema de mercado global. El Banco Mundial tiene aquí un papel clave al promover la investigación sobre el “alivio de la pobreza” y las supuestas “dimensiones sociales de los ajustes”. Este enfoque ético y sus subcategorías (mitigar la pobreza, cuestiones relativas al género, la igualdad, etc.) presta un “rostro humano” a las instituciones de Bretton Woods y presenta un compromiso ficticio con el cambio social. Sin embargo, en la medida en que este análisis está divorciado, desde el punto de vista funcional, de la comprensión de las principales reformas macroeconómicas, no suele representar una amenaza para la agenda económica neoliberal.

MANIPULACIÓN DE LAS CIFRAS RELATIVAS A LA POBREZA GLOBAL

La legitimidad de las reformas del “libre mercado” descansa en la ilusión de que, a largo plazo, la globalización conducirá a la prosperidad. Esta ilusión se sostiene mediante la descarada manipulación de los datos económicos y sociales, entre otros las cifras relativas a la pobreza global. El Banco Mundial “estima” que el 18% del tercer mundo es “extremadamente pobre” y el 33 “pobre”. En el estudio del Banco Mundial sobre la pobreza global, autoridad en la materia, la “línea superior de la pobreza” ha sido arbitrariamente fijada en un ingreso per cápita de un dólar al día, o sea un ingreso per cápita anual de 370 dólares.[2] Los grupos de población en países con un

[2] Véase Banco Mundial, *World development report, 1990. Poverty*, Washington, D.C., 1990.

ingreso per cápita mayor a un dólar son clasificados arbitrariamente como "no pobres". Dicho de otro modo, a través de la burda manipulación de las estadísticas de ingresos las cifras del Banco Mundial cumplen el propósito, útil, de representar a los pobres de los países en vías de desarrollo como un grupo minoritario.

El Banco Mundial arbitrariamente define como "umbral de pobreza" un dólar al día, y describe como "no pobres" a los grupos de población con un ingreso per cápita por encima de un dólar al día. Por ejemplo, "estima" que en Latinoamérica y el Caribe es "pobre" solamente el 19% de la población; grave tergiversación, cuando sabemos que en Estados Unidos (cuyo ingreso per cápita anual es de más de 25 mil dólares) uno de cada siete habitantes está (según la Oficina del Censo) por debajo de la línea de pobreza (véase el cuadro 2.1).[3]

Esta evaluación subjetiva y tendenciosa se realiza independientemente de las condiciones reales de un país.[4] Con la liberalización de los mercados de bienes de consumo, los precios domésticos de los alimentos básicos en los países en vías de desarrollo se han emparejado con los del mercado mundial. El estándar de un dólar al día no tiene base racional: los grupos de población de los países en vías de desarrollo cuyo ingreso per cápita es de dos, tres o cinco dólares al día siguen hundidos en la miseria (esto es, no tienen la capacidad para cubrir sus gastos básicos en alimentos, vestido, vivienda, salud ni educación).

DEFINICIÓN DE LA POBREZA EN "UN DÓLAR AL DÍA"

Una vez establecido el umbral de un dólar al día, el cálculo del grado de pobreza nacional o global se convierte en un mero ejercicio aritmético. Los indicadores de pobreza se calculan de manera mecánica partiendo de la premisa inicial del dólar al día. Los datos son tabulados luego en brillantes cuadros con predicciones de niveles descendentes de pobreza global para el siglo XXI.

[3] La Oficina del Censo de Estados Unidos calcula el nivel de pobreza en Estados Unidos para 1986 en 18.2%, en el periodo más o menos correspondiente al que cubre el informe sobre la pobreza de 1990 del Banco Mundial (véase Bruce E. Kaufman, *The economics of labor and labor markets*, 2a. ed., Orlando, 1989, p. 649).

[4] Véase Banco Mundial, *op. cit.*

CUADRO 2.1. POBREZA EN PAÍSES SELECCIONADOS DEL G-7, SEGÚN ESTÁNDARES NACIONALES

País/Año	*Nivel de pobreza (% de población por debajo del umbral de pobreza)*
Estados Unidos (1996)[1]	13.7
Canadá (1995)[2]	17.8
Gran Bretaña (1993)[3]	20.0
Italia (1993)[3]	17.0
Alemania (1993)[3]	13.0
Francia (1993)[3]	17.0

FUENTE: 1: Oficina del Censo de Estados Unidos; 2: Centro para Estadísticas Internacionales, del Consejo Canadiense sobre Desarrollo Social; 3: Servicio Europeo de Información.

Estas predicciones relativas a la pobreza se basan en una supuesta tasa de crecimiento del ingreso per cápita, crecimiento que implica, *pari passu*, un correspondiente descenso de los niveles de pobreza. Por ejemplo, según cálculos del Banco Mundial, la incidencia de pobreza en China descendería del 20% en 1985 al 2.9 en el año 2000.[5] Y en el caso de la India (80% de la población, según datos oficiales, tiene un ingreso per cápita de menos de un dólar al día), una "simulación" del Banco Mundial (que contradice su propia metodología de "un dólar al día") indica un descenso del nivel de pobreza de 55% en 1985 a 25 en el año 2000.[6]

La estructura entera de "un dólar al día" carece completamente de un examen de situaciones reales. No es necesario analizar el gasto de las familias en alimentos, vivienda o servicios sociales; no es necesario observar las condiciones concretas de las aldeas empobrecidas ni de los barrios bajos de las ciudades. En el marco del Banco Mundial la "estimación" de los indicadores de pobreza se ha convertido en un ejercicio numérico que cumple con el cometido de ocultar la globalización de la pobreza.

[5] Véase Banco Mundial, *World development report, 1997*, cuadro 9.2, cap. 9.
[6] *Idem*.

LAS CIFRAS DE NACIONES UNIDAS RELATIVAS A LA POBREZA

Las Naciones Unidas hacen eco de las falsedades del Banco Mundial. El Grupo de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma, sin aportar pruebas, que "el progreso alcanzado en la reducción de la pobreza durante el siglo XX es excepcional y sin precedentes. Los indicadores claves del desarrollo humano [a fines del siglo XX] han avanzado firmemente".[7] El PNUD ha establecido un "índice de pobreza humana" (IPH) basado en "las dimensiones más elementales de la miseria: una vida más corta, carencia de educación básica y falta de acceso a los recursos públicos o privados".[8] Siguiendo estos criterios, el Grupo de Desarrollo Humano del PNUD elabora "estimaciones" sobre la pobreza humana totalmente incongruentes con la realidad de los diferentes países. El IPH para Colombia, México y Tailandia, por ejemplo, es de alrededor del 10 u 11% (véase el cuadro 2.2). La realidad social de un país es fabricada: las mediciones del PNUD señalan logros en la reducción de la pobreza en el África subsahariana, en el Medio Oriente y en la India que son totalmente incongruentes con los datos y cifras nacionales.

En realidad, las estimaciones relativas a la pobreza humana que proporciona el PNUD reflejan patrones más distorsionados y equívocos que las del Banco Mundial. Por ejemplo, solamente el 10.9% de la población de México entra en la categoría de "pobres" del PNUD. Sin embargo, esta cifra no concuerda con la situación que se ha venido observando en México desde hace veinte años: desempleo masivo, decadencia de los servicios sociales, empobrecimiento de los pequeños campesinos y una drástica reducción de las ganancias reales, desencadenada por sucesivas devaluaciones de la moneda.

ESTÁNDARES AMBIGUOS EN LA MEDICIÓN "CIENTÍFICA" DE LA POBREZA

En la medición de la pobreza prevalecen estos estándares ambiguos. El criterio del Banco Mundial de "un dólar al día" se aplica sólo a los "países en vías de desarrollo". Pero ni el Banco Mundial ni el

[7] PNUD, *Human development report, 1997*, Nueva York, 1998, p. 2.
[8] *Ibid.*, p. 5.

CUADRO 2.2. ÍNDICE DE POBREZA HUMANA DEL PNUD. PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO SELECCIONADOS

País	*Nivel de pobreza (% de población por debajo del umbral de pobreza)*
Trinidad y Tobago	4.1
México	10.9
Tailandia	11.7
Colombia	10.7
Filipinas	17.7
Jordania	10.9
Nicaragua	27.2
Jamaica	12.1
Irak	30.7
Ruanda	37.9
Papúa Nueva Guinea	32.0
Nigeria	41.6
Zimbabue	17.3

FUENTE: PNUD, *Human Development Report, 1997*, cuadro 1.1, p. 21.

PNUD reconocen la existencia de pobreza en Europa occidental ni en Norteamérica. Lo que es más, el estándar "un dólar al día" contradice las metodologías establecidas que utilizan los gobiernos occidentales para definir y medir la pobreza en sus propias naciones.

En Occidente, los métodos para medir la pobreza se han basado en los niveles mínimos del dispendio familiar que se requiere para cubrir los desembolsos esenciales en alimentos, vestido, vivienda, salud y educación. En Estados Unidos, por ejemplo, la Administración de la Seguridad Social estableció, en los sesenta, un "umbral de pobreza" que consistía en "el costo de una dieta mínima adecuada, multiplicado por tres para incluir gastos adicionales". Esta medición se estableció con amplio consenso político por parte del gobierno de Estados Unidos.[9] Este "umbral de pobreza" para una familia de cuatro personas (dos adultos y dos niños) en 1996 era de 16 036 dólares. Esta cifra se traduce en un ingreso per cápita de 11 dólares al día (compárese con el criterio de un dólar al día del Ban-

[9] Véase Oficina del Censo de Estados Unidos, *Poverty in the United States: 1996*, Current Population Reports, serie P60-198, Washington, 1997.

co Mundial que se aplica a los países en vías de desarrollo). En Estados Unidos, el 13.7% de la población total y el 19.6 de la población de las ciudades principales en las zonas metropolitanas estaban por debajo del límite de pobreza.[10]

Ni el PNUD ni el Banco Mundial realizan comparaciones de niveles de pobreza entre los países "desarrollados" y los países "en vías de desarrollo". Semejantes comparaciones serían, sin lugar a dudas, embarazosas desde el punto de vista científico, ya que los niveles de pobreza para los países del tercer mundo presentados por estas dos organizaciones son en algunos casos *más bajos* que los niveles de pobreza oficiales en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En Canadá, país que ocupa el primer rango entre todas las naciones, según el Grupo de Desarrollo Humano, del PNUD, el 17.4% de la población está por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 10.9 en México y el 4.1 en Trinidad y Tobago, según el IPH del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.[11]

A la inversa, si se aplicara la metodología de la Oficina del Censo de Estados Unidos (basada en el costo de la dieta mínima) a los países en vías de desarrollo, la arrolladora mayoría de la población entraría en la categoría de "pobres". El Banco Mundial argumentaría, sin duda, que los "estándares occidentales" y las definiciones de pobreza no se aplican a los países en vías de desarrollo. Pero pruebas recientes confirman que los precios al menudeo de los bienes de consumo esenciales en los países en vías de desarrollo no son considerablemente más bajos que en Estados Unidos o Europa occidental. En realidad, con la desregulación y el "libre comercio" el costo de la vida en muchas ciudades del tercer mundo es ahora más elevado que en Estados Unidos.

Más aún, encuestas de presupuesto familiar realizadas en varios países latinoamericanos indican que cuando menos el 60% de la población de la región no alcanza a cubrir los requisitos mínimos de calorías y proteínas. Es el caso, por ejemplo, del 83% de la población de Perú, como consecuencia de las reformas del FMI (véase el capítulo 14). La situación del África subsahariana y del sudeste de Asia es más grave aún, pues ahí la mayoría de la población padece subalimentación crónica.

[10] *Ibid.*, p. 7.

[11] Según la definición oficial de estadísticas canadienses, Ottawa, 1995. Para los rangos de los países según la clasificación del Grupo de Desarrollo Humano del PNUD, véase *Human development report, 1997*, cuadro 6, p. 161.

Las evaluaciones de la pobreza que hacen el Banco Mundial y las Naciones Unidas son, en gran medida, ejercicios de escritorio realizados en Washington y Nueva York con insuficiente información sobre la realidad local. Por ejemplo, el Informe sobre la Pobreza del PNUD señala un descenso de la mortalidad infantil de un tercio o la mitad en el África subsahariana, donde en realidad la pobreza ha aumentado y los programas de salud pública se han derrumbado. Lo que el informe no menciona, empero, es que, a consecuencia de la clausura de las clínicas de salud y de los despidos masivos de profesionistas de la salud (con frecuencia sustituidos por voluntarios semianalfabetos) encargados de compilar los datos de mortalidad, el *cómputo* de la mortalidad es lo que se ha reducido; es decir, ya no hay un sistema confiable que recopile los datos sobre mortalidad y morbilidad.

OCULTAMIENTO DE LA REALIDAD LOCAL

Éstas son las realidades deliberadamente escondidas por los estudios sobre la pobreza del Banco Mundial y del PNUD. Sus indicadores descaradamente tergiversan la realidad social de los diferentes países, así como la gravedad de la pobreza en el mundo. Y esto con el fin de hacer aparecer a los pobres como un grupo minoritario que no representa más que un 20% de la población mundial.

Las cifras sobre la reducción del nivel de pobreza y las predicciones de futuras tendencias se presentan con el fin de justificar las políticas de "libre mercado" y respaldar el "consenso de Washington" sobre las reformas macroeconómicas. Se hace aparecer al sistema de "libre mercado" como el medio más efectivo para mitigar la pobreza, mientras se niegan los impactos de las reformas macroeconómicas. Ambas instituciones señalan los beneficios de la revolución tecnológica y la contribución de la inversión externa y la liberalización comercial, pero no señalan la manera en que estas tendencias globales incrementan los niveles de pobreza.

3

LA "MEDICINA ECONÓMICA" DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

LA DEUDA GLOBAL

¿Cómo cayeron las naciones soberanas bajo la tutela de las instituciones financieras internacionales? Debido a que los países estaban endeudados, las instituciones de Bretton Woods pudieron obligarlos, mediante las llamadas "condicionalidades" agregadas a los convenios de préstamos, para reorientar "correctamente" sus políticas macroeconómicas en concordancia con los intereses de los acreedores oficiales y comerciales.

La carga de la deuda de los países en vías de desarrollo ha venido aumentando constantemente desde principios de los ochenta, a pesar de las diversas reprogramaciones, reestructuraciones y planes de conversión de deuda presentados por los acreedores. De hecho, estos procedimientos, combinados con los préstamos condicionados a las políticas del FMI-Banco Mundial (en los términos del programa de ajuste estructural), condujeron al aumento de la deuda pendiente de los países en desarrollo, al tiempo que aseguraron el pronto rembolso de los pagos de intereses.

En 1970, el total de la deuda a largo plazo, pendiente, de los países en vías de desarrollo (según fuentes oficiales y privadas) era, aproximadamente, de 62 mil millones de dólares. En el curso de los años setenta, aumentó siete veces, para alcanzar los 481 mil millones en 1980. La deuda total de los países en vías de desarrollo estaba en cerca de 2 billones de dólares (1998), un aumento de 32 veces en relación con 1970 (véase el cuadro 3.1).

UN PLAN MARSHALL PARA PAÍSES RICOS

Mientras que desde principios de los ochenta, los precios de las mercancías se derrumbaban ocasionando una disminución del va-

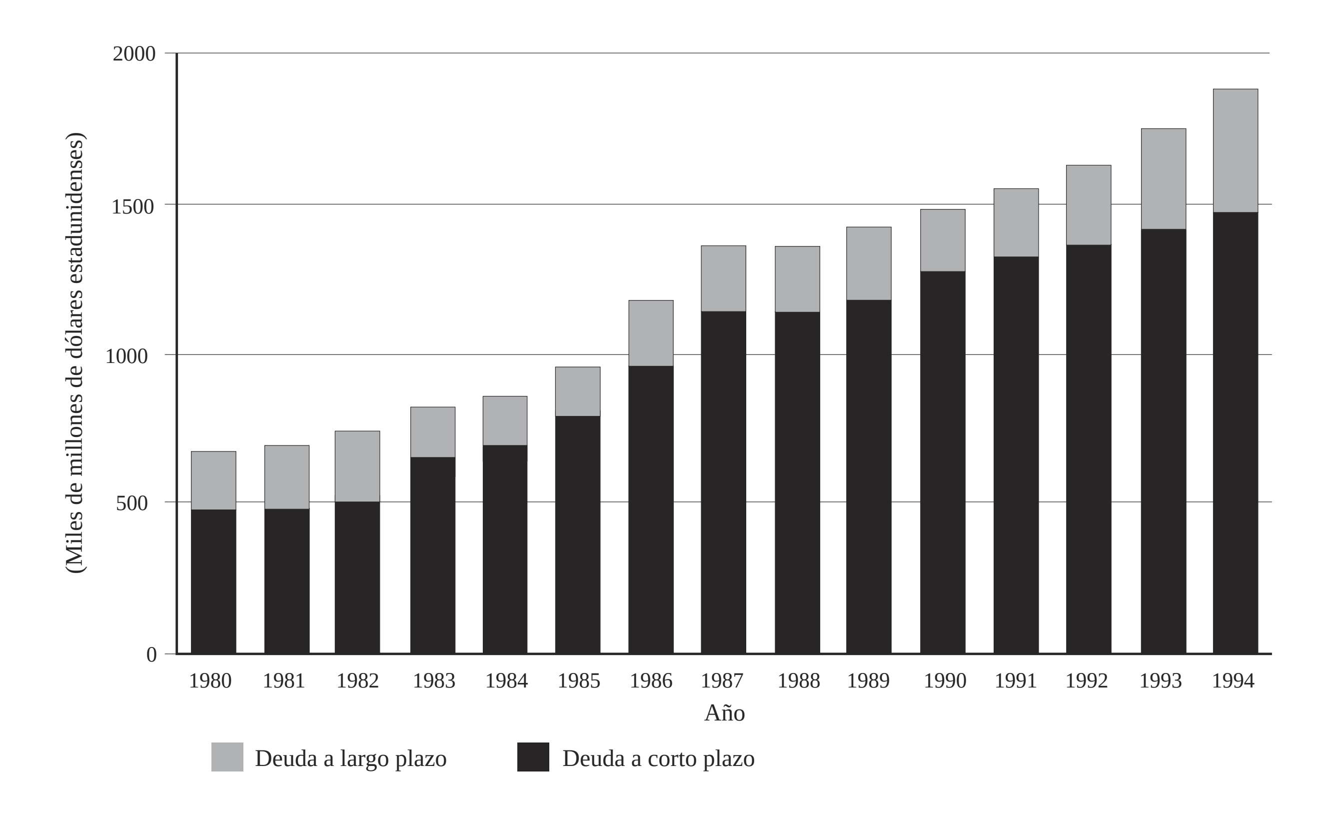
CUADRO 3.1. DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
(*en miles de millones de dólares*)

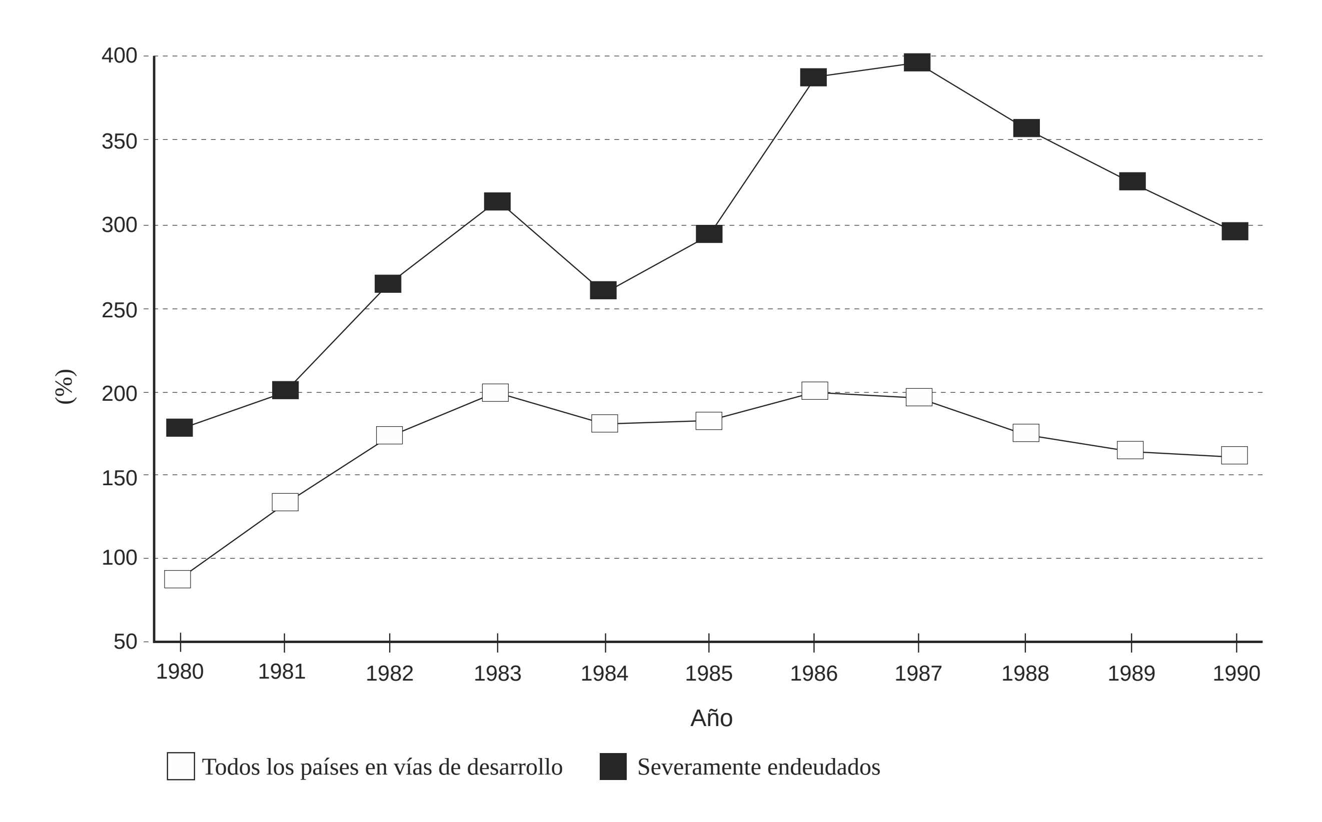
	Total deuda externa	*Deuda a largo plazo*	*Deuda a corto plazo*	*Uso del crédito del FMI*
1980	658	481	164	12
1981	672	498	159	14
1982	745	557	168	20
1983	807	633	140	33
1984	843	675	132	36
1985	990	809	141	40
1986	1218	996	179	43
1987	1369	1128	198	43
1988	1334	1092	207	35
1989	1403	1134	237	32
1990	1510	1206	269	35
1991	1594	1265	291	38
1992	1667	1305	324	38
1993	1776	1391	345	40
1994	1921	1523	355	44
1995	2066	1626	378	61
1996	2095	1650	385	60
1997	2317	1783	463	71
1998*	2465	1958	412	96

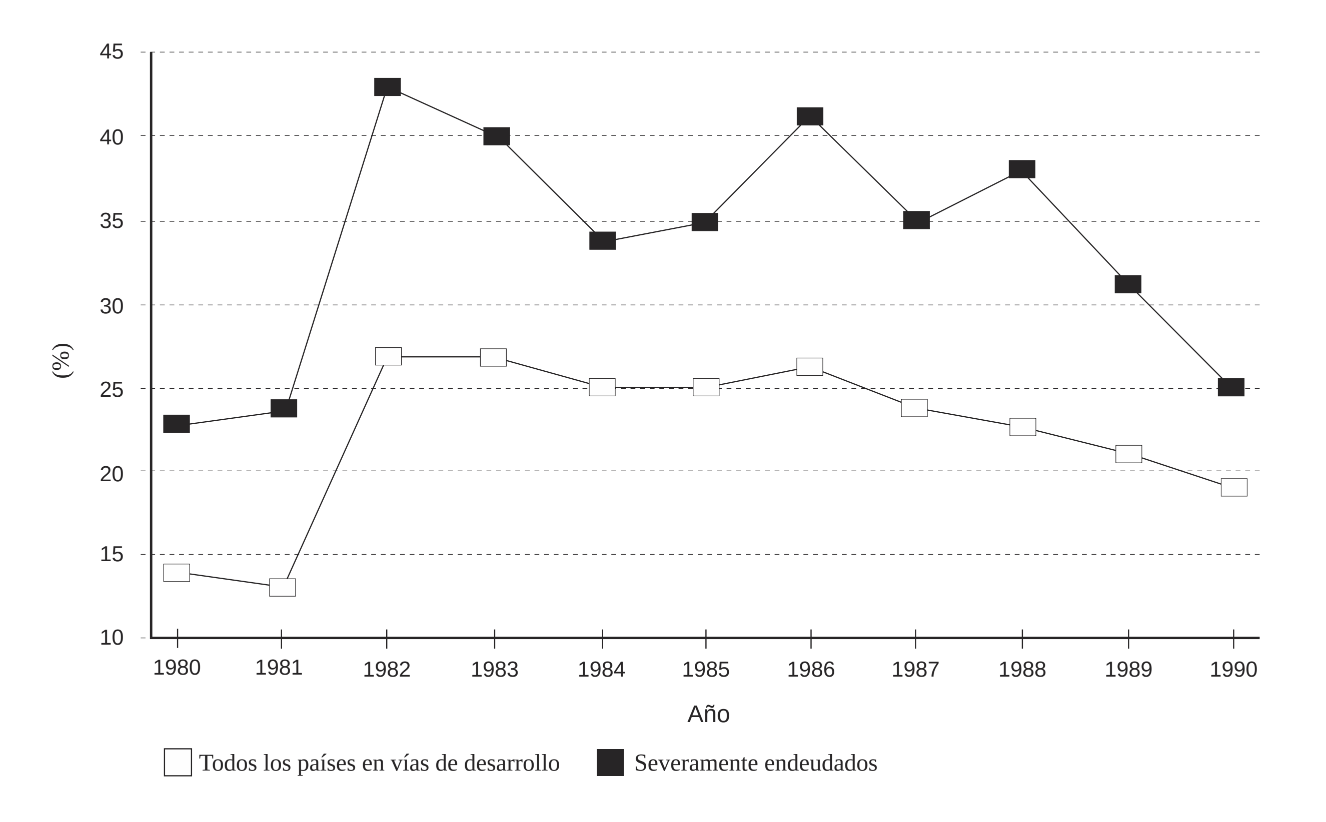
FUENTE: Banco Mundial, *World Debt Tables*, varios números, Washington, D.C.
* Preliminar.
NOTA: Los datos anteriores a 1985 se basan en los informes de todos los países al Banco Mundial y no son comparables directamente con los datos posteriores a 1985.

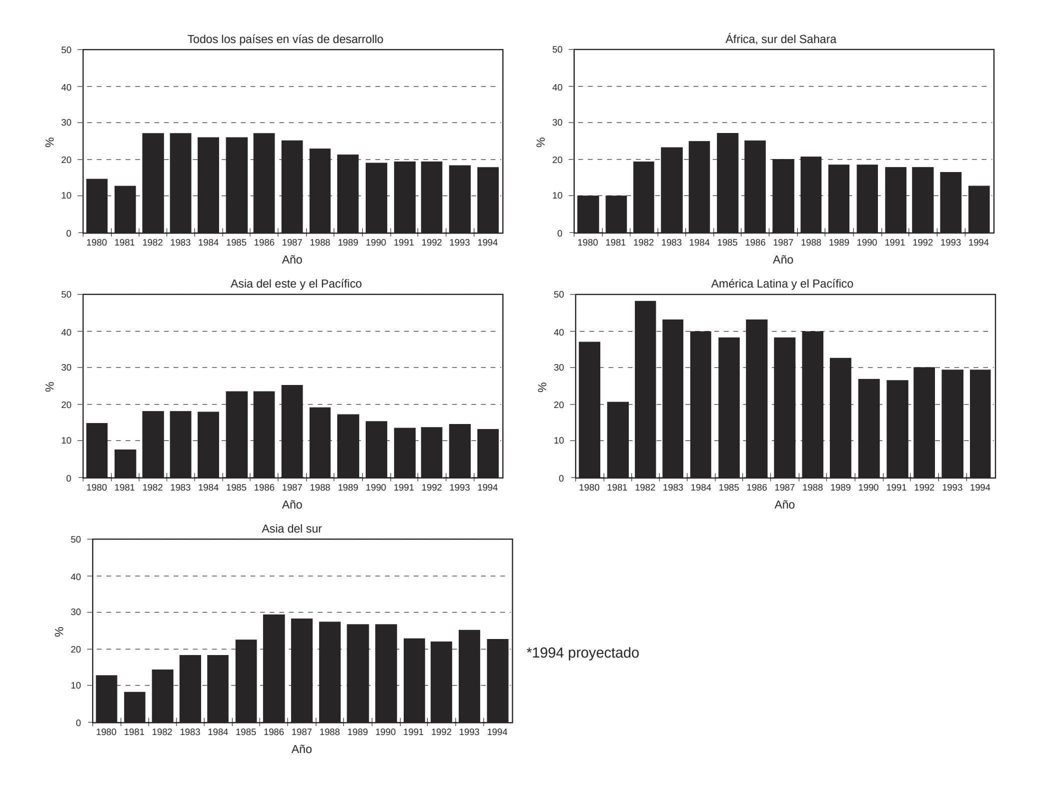
lor de las exportaciones, una participación cada vez mayor de las ganancias por exportaciones se destinaba al servicio de la deuda (véanse las gráficas 3.1 a 3.4).

Para mediados de los ochenta, los países en vías de desarrollo se habían convertido en exportadores netos de capital a favor de los países ricos. En otras palabras, el flujo del servicio de la deuda real superaba los nuevos ingresos de capital (en forma de préstamos, in-


2000
1500
1000
500
0
(Miles de millones de dólares estadunidenses)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Año
Deuda a largo plazo
Deuda a corto plazo


400
350
300
250
200
150
100
50
(%)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Año
Todos los países en vías de desarrollo
Severamente endeudados


45
40
35
30
25
20
15
10
(%)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Año
Todos los países en vías de desarrollo
Severamente endeudados


Todos los países en vías de desarrollo
África, sur del Sahara
Asia del este y el Pacífico
América Latina y el Pacífico
Asia del sur
%
Año
0
10
20
30
40
50
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
*1994 proyectado

versión extranjera y ayuda externa).[1] Hasta mediados de los ochenta, las IFI habían refinanciado la deuda principalmente en beneficio de la banca comercial y de los acreedores oficiales. Sin embargo, muchos de los préstamos concedidos por las instituciones multilaterales al comienzo de la crisis de la deuda llegaron a su vencimiento, y las IFI sitas en Washington demandaron su reembolso. Según los artículos de los convenios de las instituciones de Bretton Woods, estos préstamos no pueden ser renegociados.

PRÉSTAMOS CONDICIONADOS A POLÍTICAS

Existe una relación estrecha, casi "simbiótica", entre las políticas de manejo de la deuda y las reformas macroeconómicas. El manejo de la deuda se reduce a garantizar que cada una de las naciones deudoras individuales continúe cumpliendo formalmente con sus obligaciones financieras. Mediante la "ingeniería financiera" y el delicado arte de reprogramar la deuda, el pago del principal se posterga mientras que se hacen respetar los pagos de intereses; la deuda se negocia a cambio de leyes y se "presta" dinero "nuevo" a naciones que están al borde de la bancarrota para permitirles pagar los intereses atrasados de sus deudas "viejas", de manera que puedan evitar temporalmente el incumplimiento, y así una y otra vez. Durante este proceso, la lealtad formal de los deudores individuales es de suprema importancia. Los acreedores aceptan renegociar sólo si las naciones deudoras se someten a las "condicionalidades políticas" anexadas a los convenios de préstamo.

El objetivo es imponer la legitimidad de la relación del servicio de la deuda, al tiempo que se mantiene a las naciones deudoras en una camisa de fuerza que les impide embarcarse en una política económica nacional independiente. Para ello se diseñó una nueva generación de "préstamos condicionados a políticas". Se proporcionó dinero "para ayudar a los países a reajustarse". Estos convenios de préstamo del Banco Mundial incluían severas "condicionalidades": el dinero sólo se otorgaba si el gobierno accedía a las reformas de ajuste estructural, respetando al mismo tiempo fechas límite muy precisas para su implementación.

[1] Véase Banco Mundial, *World Debt Tables*, varios números.

Por su parte, la adopción de las prescripciones políticas del FMI según el programa de ajuste estructural no sólo era una condición para obtener nuevos préstamos de instituciones multilaterales, sino que también daba "luz verde" a los clubes de Londres y París, y a los inversionistas extranjeros, instituciones bancarias comerciales y donantes bilaterales. Los países que rehusaron aceptar las medidas correctivas del Fondo enfrentaron serias dificultades para renegociar su deuda o para obtener nuevos préstamos para el desarrollo y la asistencia internacional. El FMI tenía también los medios para desequilibrar gravemente una economía nacional bloqueando el crédito a corto plazo en apoyo del comercio de bienes de consumo.

Las llamadas "condicionalidades" iban ligadas "al pronto desembolso de préstamos condicionados a políticas". En otras palabras, estos préstamos de las IFI requerían de la adopción de un programa de estabilización macroeconómica y de reformas económicas estructurales, esto es, los convenios de préstamo no estaban relacionados de ninguna manera con un programa de inversión, como en los proyectos de préstamos convencionales. Los préstamos tenían por objetivo apoyar cambios políticos; estos últimos eran estrechamente supervisados por las instituciones de Bretton Woods, y su evaluación se basaba en el "desempeño de las políticas". En otras palabras, una vez firmado el convenio de préstamo, los desembolsos podían interrumpirse si el gobierno no se sujetaba a lo convenido, y se corría el riesgo de que el país fuera puesto en la lista negra por el llamado "grupo coordinador de ayuda" de donantes bilaterales y multilaterales.[2]

La naturaleza de estos convenios de préstamo no favorecía a la economía real, puesto que nada de ese dinero se canalizaba a la inversión. Sin embargo, sí se conseguía otro importante objetivo: los préstamos de ajuste distraían recursos de la economía nacional y alentaban a los países a seguir importando bienes de consumo en grandes cantidades, incluyendo alimentos básicos, de los países ricos. En otras palabras, el dinero otorgado en apoyo de los "ajustes" en la agricultura, por ejemplo, no estaba destinado a la inversión en proyectos agrícolas. Los préstamos podían ser gastados libremente en importación de mercancías, incluyendo productos duraderos y

[2] El desembolso de los préstamos se hace normalmente en varias entregas. La entrega de cada porción está condicionada a la instrumentación de reformas económicas precisas.

CUADRO 3.2. PROPORCIÓN DEUDA EXTERNA TOTAL/EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (*porcentaje*)

	Total países en vías de desarrollo	*Muy endeudados*	
		De bajos ingresos	*De ingresos medios*
1980	132.3	96.9	194.2
1981	140.0		
1982	174.9	209.0	274.5
1983	200.0	272.2	297.5
1984	180.0	261.2	284.3
1985	212.1	290.1	315.9
1986	201.7	515.0	353.0
1987	193.6	522.1	362.9
1988	176.9	489.0	315.5
1989	169.9	514.4	293.5
1990	161.6	457.1	294.5
1991	175.3	498.6	331.5
1992	166.7	494.8	310.9
1993	168.6	530.0	307.2
1994	162.8	529.4	290.9
1995	151.4	458.1	290.1
1996	137.4	358.6	297.1
1997	129.0	321.8	290.8
1998	146.2		

FUENTE: Banco Mundial, *World Debt Tables*, varios números, Washington, D.C.

artículos suntuarios.[3] El resultado de este proceso era el estancamiento de la economía nacional, la generalización de la crisis de la balanza de pagos y el aumento de la carga de la deuda.

[3] Estos créditos constituyen la llamada "ayuda para la balanza de pagos".

ENGROSAMIENTO DE LA DEUDA

Los nuevos “préstamos de desembolso rápido” (teóricamente destinados para la compra de productos de importación) representaban “dinero ficticio” porque las sumas otorgadas a las naciones deudoras eran invariablemente menores que las sumas reembolsadas en la forma de servicio de la deuda. Supongamos, por ejemplo, que un país en vías de desarrollo tiene una deuda total acumulada de diez mil millones de dólares y debe mil millones de dólares (anuales) en obligaciones del servicio de deuda a los clubes de Londres y París. Sin embargo, con unas deprimidas ganancias por exportaciones, el país no es capaz de cumplir estas obligaciones. Y a no ser que lleguen nuevos préstamos “para pagar las deudas viejas”, los atrasos se irán acumulando y el país será puesto en la lista negra internacional.

En nuestro ejemplo, un préstamo de desembolso rápido de 500 millones de dólares es otorgado como apoyo a la balanza de pagos pero destinado para la compra de bienes de importación. El préstamo actúa como *un catalizador*: admite que las ganancias en divisas por la exportación de productos sean utilizadas para el pago de intereses, facilitando así que el gobierno cumpla con los plazos de los acreedores comerciales y oficiales. Se recaudan mil millones de dólares del servicio de deuda mediante un nuevo préstamo de 500 millones de dólares.

El desembolso neto de recursos es de 500 millones de dólares. El préstamo es “ficticio” porque el dinero que fue adelantado (es decir, por el FMI o el Banco Mundial) es reapropiado inmediatamente por los acreedores oficiales o comerciales. Además, este proceso ha tenido como resultado un aumento de 500 millones de dólares en el monto total de la deuda porque el nuevo préstamo fue utilizado para pagar la porción de intereses del servicio de la deuda y no el principal.

“EL PROGRAMA SOMBRA” DEL FMI

Invariablemente, se necesitarán reformas sustanciales antes de poder realizar cualquier negociación de préstamo real. El gobierno tiene que proporcionar al FMI evidencia de que “está seriamente

comprometido con las reformas económicas". A menudo este proceso adopta la forma de la llamada "carta de intención", presentada al FMI, donde se especifican las principales orientaciones del gobierno en sus políticas macroeconómicas y en el manejo de la deuda. Este procedimiento también se llevó a cabo en el contexto del llamado "programa sombra" del FMI, en el que éste proporcionaba lineamientos políticos y asesoría técnica al gobierno sin un apoyo de préstamo formal. El "programa sombra" se aplica a países cuyas reformas económicas (según el FMI) "no están alineadas" (por ejemplo, Brasil con Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, 1990-1994). El "programa sombra" fue implementado también en países del antiguo bloque soviético y en Vietnam, en la forma de asistencia técnica del FMI-Banco Mundial antes de su ingreso formal en las instituciones de Bretton Woods o a la firma de convenios de préstamos.

El "desempeño satisfactorio" en los términos del "programa sombra" es un prerrequisito (es decir, una condición previa) para las negociaciones de préstamos formales. Una vez concedido el préstamo, el desempeño político es estrechamente supervisado trimestralmente por las instituciones de Washington. Los desembolsos otorgados en varias "partidas" pueden ser interrumpidos si las reformas no están siendo aplicadas, en cuyo caso el país regresa a la "lista negra" con el riesgo de represalias en el área de comercio y flujos de capital. Los desembolsos pueden ser interrumpidos también si el país se atrasa en sus obligaciones normales del servicio de deuda. No obstante, el país puede seguir recibiendo asistencia técnica del FMI-Banco Mundial, esto es, se establece un nuevo "programa sombra" (como en el caso de Kenia en 1991), lo que conduce a una nueva ronda de negociaciones políticas.

EL DOCUMENTO SOBRE PARÁMETROS DE POLÍTICA ECONÓMICA

En muchos países endeudados, el gobierno está obligado, por sus convenios con las instituciones de Washington, a señalar sus prioridades en un llamado "documento sobre parámetros de política económica" [DPPE]), que a menudo va acompañado por una "carta de intención" que se presenta al FMI junto con un "memorándum sobre políticas económicas y financieras" (véase el recuadro).

Señor Michel Camdessus
Director Administrativo
Fondo Monetario Internacional
Washington, D.C. 20431, EUA

Estimado señor Camdessus:

1. Los objetivos del programa de Guinea para el ajuste económico y financiero para el periodo de tres años 1999-2001 están plasmados en un documento sobre parámetros de política económica, puesto al día y preparado en estrecha colaboración con el personal del Fondo y del Banco Mundial, que estamos entregando a usted por separado.

2. El *memorándum sobre políticas económicas y financieras* adjunto, basado en el documento sobre parámetros de política económica mencionado, presenta los objetivos y las medidas que el gobierno de Guinea tiene la intención de proseguir durante el periodo 1999-2000. Para apoyar estos objetivos y medidas, el gobierno solicita por este medio la tercera entrega anual en los términos del "servicio reforzado de ajuste estructural" (SRAE), por la cantidad equivalente a 23.6 millones de SDR (el 30 por ciento del giro). En este contexto, Guinea solicita también una extensión del periodo original acordado en la SAF al 12 de enero de 2001.

3. El gobierno de Guinea entregará al Fondo la información que esta institución solicite en lo relativo a los progresos que se vayan logrando en la aplicación de las políticas económicas y financieras y en el cumplimiento de los objetivos del programa.

4. El gobierno de Guinea está convencido de que las políticas y medidas plasmadas en el memorándum adjunto son las adecuadas para alcanzar los objetivos de su programa; también tomará otras medidas apropiadas para la consecución de este propósito. Durante el periodo de la tercera entrega anual en los términos de la ESAF, el gobierno consultará con el Director Administrativo la adopción de las medidas que fueran necesarias, por iniciativa del gobierno o siempre que el Director Administrativo solicite semejante consulta. Además, transcurrido el periodo de la tercera entrega anual en los términos de la ESAF, y mientras Guinea tenga obligaciones financieras no pagadas con el Fondo, derivadas de los préstamos motivo del convenio, el gobierno consultará con el Fondo periódicamente, a iniciativa del gobierno o siempre que el Director Administrativo solicite una consulta sobre la política económica y financiera de Guinea.

5. El gobierno de Guinea realizará, junto con el Fondo, la primera revisión de su programa, en los términos de la tercera entrega, no más allá del 30 de junio de 2000; y la segunda, no más allá del 31 de diciembre de 2000.

Atentamente,

Ibrahima Kassory Fofana
Ministro de Economía y Finanzas

Chérif Bah
Gobernador del Banco Central de Guinea

Aunque oficialmente es un documento gubernamental determinado por las autoridades nacionales, el DPPE se redacta bajo la estrecha supervisión del FMI y el Banco Mundial, siguiendo un formato estándar prefijado. En este contexto, hay una clara división de tareas entre las dos organizaciones hermanas. El FMI se ocupa de negociaciones de políticas claves con respecto a la tasa de cambio y al déficit presupuestario, mientras que el Banco Mundial interviene mucho más en el proceso real de reformas por intermedio de su oficina representativa a nivel local y sus numerosas comisiones técnicas.

El Banco Mundial supervisa anualmente el desempeño económico de un país en el contexto de las "Consultas del artículo IV" (examen regular de la economía de un país miembro). Este examen –además de la supervisión trimestral, más rigurosa, del desempeño respecto de los objetivos pactados– proporciona la base de las llamadas "actividades de supervisión del FMI" de las políticas económicas de los países miembros.

El Banco Mundial está presente en muchos de los ministerios: las reformas en salud, educación, industria, agricultura, transportes, medio ambiente, etc., están bajo su jurisdicción. Además, desde finales de los ochenta, supervisa la privatización de las empresas estatales, la estructura de la inversión pública y la composición del gasto público mediante el llamado examen del gasto público (*public expenditure review* - PER).

LOS SERVICIOS PARA PRÉSTAMOS DE LAS IFI

Las instituciones de Bretton Woods, para apoyar los préstamos condicionados a políticas, han utilizado varios "servicios"

- Del Fondo Monetario Internacional: disposición de reservas, el "servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias" (SFCC), el "servicio ampliado del FMI" (SAF) y el "servicio reforzado de ajuste estructural" (SRAE), el "servicio para la transformación sistémica" (STS) y el servicio para préstamos de emergencia para países en situación de posguerra.
- Del Banco Mundial: préstamos para ajuste estructural (SAL) y préstamos para ajuste sectorial (SICAL).

Las disposiciones para la transformación sistémica aplicadas en los países del antiguo bloque oriental operan, en términos genera-

les, con las mismas condicionalidades que los préstamos de ajuste estructural.

FASE UNO: "ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA"

Para las IFI, el ajuste estructural consta de dos fases diferentes: la estabilización macroeconómica a "corto plazo" (lo que implica devaluación, liberalización de los precios y austeridad presupuestaria), seguida de la puesta en marcha de varias reformas estructurales más fundamentales (calificadas de "necesarias"). Más a menudo, sin embargo, estas reformas "estructurales" se llevan a cabo simultáneamente al proceso de "estabilización económica". El ejercicio de estabilización del FMI-Banco Mundial va dirigido tanto al déficit presupuestario como a la balanza de pagos. Según el Banco Mundial, esto requiere:

> Corregir la política macroeconómica [...] Mantener bajos los déficit presupuestarios ayuda a controlar la inflación y a evitar problemas en la balanza de pagos. Mantener una tasa de cambio realista retribuye una mayor competitividad internacional y se respaldan las divisas convertibles.[4]

DETERIORO DE LA MONEDA DE UN PAÍS

La tasa de cambio es con mucho el instrumento más importante de la reforma macroeconómica: la devaluación de la moneda (incluyendo la unificación de la tasa de cambio y la eliminación de los controles de cambio) afecta fundamentalmente las relaciones de oferta y demanda dentro de la economía nacional. El FMI desempeña un papel clave en las decisiones de devaluar. La tasa de cambio regula el precio real pagado a los productores directos así como el valor real de los salarios.

Invariablemente, el FMI argumenta que la tasa de cambio está "sobrevaluada". La devaluación de la moneda se exige a menudo (como condición previa) antes de la negociación de un préstamo

[4] Banco Mundial, *Adjustment in Africa*, Washington, Oxford University Press, 1994, p. 9.

de ajuste estructural: la desestabilización de la moneda nacional es un objetivo clave de la "agenda oculta" del FMI-Banco Mundial. Una "maxidevaluación" –que tiene como resultado alzas de precios inmediatas y abruptas– conduce a una dramática compresión de las ganancias reales, reduciendo al mismo tiempo el valor de los costos de mano de obra expresados en dólares. La devaluación reduce igualmente el valor en dólares de los gastos del gobierno, facilitando así la canalización de ingresos del estado hacia el servicio de la deuda externa.

El FMI impone la unificación de la tasa de cambio en el contexto de las cláusulas del artículo VIII de los Artículos de Convenio con el FMI. A los países que aceptan el artículo VIII no se les permite adoptar tasas de cambio múltiples ni el control del mercado de divisas sin la aprobación del FMI. Más de cien países miembros del FMI han aceptado las cláusulas del artículo VIII.

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA DEVALUACIÓN

El impacto social de una devaluación patrocinada por el FMI es brutal e inmediato: los precios internos de los alimentos, gasolina y servicios públicos aumentan de un día para otro. Aunque la devaluación invariablemente dispara la inflación y la "dolarización" de los precios, el FMI obliga al gobierno (como parte del paquete económico) a adoptar un llamado "programa antiinflacionario", que tiene poco que ver con las causas reales de la inflación (esto es, la devaluación). Este programa se establece con base en una contracción de la demanda, lo que obliga al despido de empleados públicos, a recortes drásticos en los programas del sector social y la desindexación de los salarios. En el África subsahariana, por ejemplo, la devaluación del franco de África central y occidental (CFA) impuesta por el FMI y el Tesoro francés en 1994 redujo (de un plumazo) el valor real de los salarios y el gasto gubernamental (expresado en divisas) en 50% y canalizó masivamente los ingresos del estado hacia el servicio de la deuda.

En algunos casos, la devaluación de la moneda ha sentado las bases para una reactivación a corto plazo de la agricultura comercial orientada hacia el mercado de exportaciones. Más a menudo, sin embargo, los beneficios subyacentes van a parar a las grandes plan-

taciones comerciales y los exportadores agroindustriales (en la forma de salarios reales más bajos para los trabajadores agrícolas). Las "ganancias a corto plazo" de la devaluación desaparecen invariablemente cuando los países competidores del tercer mundo son forzados a la devaluación (en acuerdos similares con el Fondo Monetario Internacional).

LA "DOLARIZACIÓN" DE LOS PRECIOS INTERNOS

La devaluación conduce a un "realineamiento de los precios internos" a los niveles prevalecientes en el mercado mundial. Este proceso de "dolarización" de los precios internos provoca alzas abruptas de precios en la mayoría de los bienes de consumo, tales como productos alimenticios, artículos de consumo duraderos, gasolina, combustibles, así como en la mayor parte de los insumos y materias primas utilizados en la producción (insumos agrícolas, equipo, etc.). De este modo, los precios internos se ajustarán a los niveles del mercado mundial, independientemente de la dirección de la política monetaria.

La devaluación constituye el factor principal que dispara la espiral inflacionaria. El FMI niega el impacto inflacionario de la devaluación de la moneda: impone duras restricciones a la oferta de dinero después de una devaluación, una vez que las alzas de precios ya han tenido lugar, con vistas a "combatir las presiones inflacionarias". Esta congelación de la oferta (nominal) de dinero obliga al gobierno a recortar el gasto real, a reducir los salarios reales y a despedir empleados públicos.

LA DESINDEXACIÓN DE LOS SALARIOS

No hace falta decir que en la sociedad crecen las presiones para aumentar los salarios nominales para compensar la drástica reducción de las ganancias reales, pero los convenios con el FMI formalmente prohíben la indexación de las ganancias reales (y del gasto social).

El FMI exige "la liberalización del mercado de trabajo", la eliminación de las cláusulas de ajuste al costo de la vida en contratos co-

lectivos y la eliminación de los salarios mínimos en la legislación. El argumento a favor de la desindexación se basa en el "impacto inflacionario de las demandas salariales".

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA DEVALUACIÓN

El impacto de la devaluación debe ser analizado en relación con las variables siguientes:

–el nivel de los precios internos (P),

–los salarios nominales (S), los salarios reales (S/P),

–el gasto nominal del gobierno (G), el gasto real del gobierno (G/P),

–la oferta monetaria nominal (M), la oferta real de dinero (M/P).

La dolarización de los precios internos lleva a una contracción en:

–salarios reales (S/P) y el valor real del gasto gubernamental (G/P).

La oferta monetaria nominal (M) puede aumentar pero el valor real de la oferta de dinero (M/P) declina dramáticamente. En otras palabras, la devaluación implica un proceso de contracción monetaria (M/P) y una compresión masiva del valor real del gasto gubernamental (G/P) y los salarios (S/P). Los precios reales pagados a los productores directos declinan también como consecuencia de la devaluación.

LA TOMA DEL CONTROL DEL BANCO CENTRAL

El FMI proporciona recursos para la reestructuración del banco central y lo supervisa estrechamente. Exige la "independencia del banco central respecto del poder político", "como remedio contra las tendencias inflacionarias de los gobiernos".[5] En la práctica esto significa que es el FMI, y no el gobierno, el que controla la oferta de dinero. En otras palabras, los convenios firmados entre el gobierno y el FMI impiden al banco central otorgar fondos para financiar el gas-

[5] Carlo Cottarelli, *Limiting central bank credit to the government*, Washington, FMI, 1993, p. 3.

CUADRO 3.3. PORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ASIGNADA AL SERVICIO DE LA DEUDA (*porcentaje*)

	Total países en vías de desarrollo	*Muy endeudados*	
		De bajos ingresos	*De ingresos medios*
1980	14.0	9.6	37.1
1981	13.0		
1982	27.3	19.1	46.8
1983	27.3	22.8	40.5
1984	25.0	28.7	38.0
1985	30.4	34.1	42.3
1986	25.9	31.2	39.1
1987	23.9	25.7	31.2
1988	22.9	29.1	36.1
1989	20.3	24.9	32.4
1990	18.3	23.0	26.5
1991	18.6	23.0	29.3
1992	17.1	22.2	30.9
1993	17.6	17.4	31.4
1994	16.6	20.0	27.9
1995	17.0	19.9	31.3
1996	17.2	15.3	36.0
1997	17.0	13.2	42.2
1998	17.6		

FUENTE: Banco Mundial, *World Debt Tables*, varios números, Washington, D.C.

NOTA: La porción de las exportaciones asignada para cubrir la deuda es la proporción de los pagos para el servicio de la deuda (intereses y principal)/exportaciones de bienes y servicios.

to público del gobierno, o créditos mediante la creación de dinero –esto es, en nombre de los acreedores, el FMI está virtualmente en posición de paralizar el financiamiento de un desarrollo económico real. Incapacitado para recurrir a políticas monetarias nacionales para movilizar sus recursos internos, el país se vuelve cada vez más dependiente del crédito externo, lo que tiene la consecuencia añadida de aumentar el nivel de endeudamiento externo.

Otra condición importante planteada por el FMI es que "la independencia del banco central vale también con respecto al parlamento".[6] Es decir, una vez que los altos ejecutivos del banco central han sido designados, no rinden cuentas ni al gobierno ni al parlamento. Cada vez más, su lealtad es con las IFI. En muchos países en vías de desarrollo, los altos ejecutivos del banco central son antiguos altos funcionarios o directores de las IFI. Además, los funcionarios del banco central reciben a menudo "suplementos salariales" en divisas, financiados por fuentes multilaterales y bilaterales.

DESESTABILIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE UN PAÍS

El despido de empleados públicos y los drásticos recortes en los programas del sector social son imposiciones de las instituciones de Bretton Woods. Estas medidas de austeridad afectan a todas las categorías del gasto público. Al inicio de la crisis de la deuda, las IFI se limitaron a intervenir estableciendo un objetivo general para el déficit presupuestario con el propósito de canalizar los ingresos del estado hacia el servicio de la deuda. Desde finales de los ochenta, el Banco Mundial ha supervisado estrechamente la estructura del gasto público a través del llamado examen del gasto público (*public expenditure review* [PER]). En este contexto, la composición del gasto en cada uno de los ministerios está bajo la supervisión de las instituciones de Bretton Woods. El Banco Mundial recomienda una transferencia "eficiente de los costos" de las categorías del gasto regular a "gastos objetivos". Según el Banco Mundial, el PER debe "promover la reducción de la pobreza a un costo operativo y de forma eficaz".

Con respecto a los sectores sociales, las IFI insisten en el principio de la recuperación de los precios y el gradual retiro del estado de los servicios básicos de salud y educación. El concepto de objetivo entre los sectores sociales tiene que ver con la identificación de los llamados "grupos vulnerables". Las medidas de austeridad en los sectores sociales –que exigen abandonar los programas regulares a favor de los programas objetivos– han sido en gran medida las causantes del desmantelamiento de escuelas, centros de salud y hospi-

[6] *Ibid.*, p. 26.

tales, dando al mismo tiempo una apariencia de legitimidad a las instituciones de Washington.

EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO: UNA META MÓVIL

En los convenios de préstamos se establecen objetivos iniciales para el déficit presupuestario. Sin embargo, desde principios de los noventa el FMI ha aplicado el concepto de "meta móvil" para el déficit presupuestario: se establece primero un objetivo de 5% del PIB, y el gobierno cumple con el objetivo del FMI; en subsiguientes negociaciones o dentro del mismo convenio, el FMI reduce el objetivo a 3.5%, alegando que los patrones del gasto gubernamental son "inflacionarios"; una vez que se ha alcanzado el objetivo del 3.5%, el FMI insistirá en reducir el déficit presupuestario a 1.5% del PIB, y así sucesivamente. En última instancia este ejercicio exacerba la crisis fiscal del estado, conduciendo al desplome de sus programas al tiempo que libera los ingresos estatales (a corto plazo) para el pago de intereses de la deuda externa.

DESPLOME DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS

Las metas presupuestarias impuestas por las instituciones de Bretton Woods, combinadas con los efectos de la devaluación, desencadenan el desplome de la inversión pública. Se establecen nuevas reglas relativas a los gastos periódicos tanto como a los de desarrollo: se fijan "topes" precisos para todas las categorías del gasto; al estado ya no se le permite movilizar sus propios recursos para la construcción de infraestructura pública, carreteras u hospitales, esto es, los acreedores no sólo son los que "quiebran" la mayoría de las inversiones en proyectos públicos, sino que también deciden, en el contexto del programa de inversión pública (PIP) establecido bajo los auspicios técnicos del Banco Mundial, qué tipo de infraestructura pública debería o no ser financiada por la "comunidad de acreedores". El concepto de blanco de inversión se pone delante y el capital de desarrollo para la economía básica y la infraestructura social se recorta dramáticamente.

Según los términos del PIP dictados por el Banco Mundial, todos

los préstamos para proyectos requieren un sistema de solicitud y presentación de propuestas a nivel internacional ("licitación competitiva") que concesiona la ejecución entera de los proyectos de obras públicas a empresas de construcción e ingeniería internacionales. Por su parte, estas últimas se quedan con la mejor parte, gracias a la exacción de grandes sumas de dinero en gran variedad de cuotas por consultoría y administración. Las compañías constructoras locales (tanto públicas como privadas) tienden a ser excluidas del proceso de presentación de propuestas, aunque gran parte del trabajo de construcción real quedará a cargo de ellas (utilizando mano de obra local con salarios muy bajos) a través de subcontrataciones separadas con las transnacionales. En otras palabras, el dinero de los préstamos que se destina a proyectos de infraestructura se "recicla" en gran medida a favor de los contratistas multinacionales.

Aunque el financiamiento para proyectos se otorga en forma de "créditos blandos" a tasas de interés concesionadas, con periodos de amortización ampliados, los costos reales (y la tasa de interés imputada que subyace estos costos) son exageradamente altos para el país. En otras palabras, el PIP, bajo la supervisión del Banco Mundial, está diseñado para que aumente la deuda externa al tiempo que contribuye a la desmovilización de los recursos nacionales.

LIBERALIZACIÓN DE PRECIOS

El FMI-Banco Mundial reclama que es necesario eliminar las supuestas distorsiones de precios. "Corregir los precios" consiste en la eliminación de todos los subsidios y controles de precios. El impacto sobre los niveles de las ganancias reales (en ambos sectores, formal e informal) es inmediato.

La desregulación de los precios nacionales de los granos y la liberalización de las importaciones de alimentos básicos son una característica esencial de este programa. El programa de liberalización se aplica también a los precios de los insumos y de las materias primas. Combinadas con la devaluación, las medidas subyacentes tienden a alzas sustanciales en los precios internos de fertilizantes, insumos agrícolas, equipo, etc., que tienen un impacto inmediato en la estructura de costos en muchas áreas de la actividad económica.

LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DEL PETRÓLEO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El precio de los productos del petróleo es regulado por el estado bajo la supervisión del Banco Mundial. Las alzas de precios, tanto en combustibles como en servicios públicos (a menudo, de varios cientos por ciento), invariablemente contribuyen a desestabilizar la producción nacional, esto es, el elevado precio interno de la gasolina (sustancialmente por encima de los niveles del mercado mundial) repercute en la estructura de los costos de la industria y la agricultura nacionales. Los costos de producción, con frecuencia, son elevados artificialmente por encima del precio de venta de la mercancía precipitando así a un gran número de productores pequeños y medianos a la bancarrota.

Además, las periódicas alzas de precios de los productos del petróleo impuestas por el Banco Mundial (adoptadas simultáneamente a la liberalización de los artículos de importación) opera como un "arancel sobre el comercio interno" que cumple con el propósito de eliminar de su propio mercado a los productores nacionales. El alto precio de la gasolina contribuye al desequilibrio de los fletes internos. Los precios excesivamente elevados del petróleo y el diesel (esto es, en relación con salarios muy bajos), combinados con los numerosos peajes y portazgos para puentes, carreteras, vías acuáticas internas, etc., afectan la estructura entera del costo de los artículos producidos en el país, sobre todo en beneficio de los artículos importados. En el África subsahariana, el alto costo del transporte impuesto por las IFI es uno de los factores claves que impiden a los agricultores vender sus productos en el mercado urbano en competencia directa con los productos agrícolas, que gozan de muchos subsidios, importados de Europa y Norteamérica.

Aunque las modalidades difieren, los aranceles sobre el combustible y los servicios públicos tienen consecuencias similares a las de un arancel sobre el comercio interno impuesto en la India por la Compañía Británica de la India Oriental, a finales del siglo XVIII.

CUADRO 3.4. PORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ASIGNADA AL SERVICIO DE LA DEUDA POR REGIÓN GEOGRÁFICA (*porcentaje*)

	Este de Asia y Pacífico	*Europa y Asia central*	*América Latina y Caribe*	*Oriente Medio y África del Norte*	*Sur de Asia*	*África sub-sahariana*
1980	13.6	18.1	36.9	20.3	11.6	11.0
1981	7.1	12.8	21.6	20.5	10.2	9.9
1982	18.0	20.4	47.6	21.3	14.5	19.3
1983	18.6	20.2	42.1	23.0	17.7	22.4
1984	18.3	22.4	38.9	22.3	18.2	25.5
1985	25.1	25.5	42.7	23.8	22.6	30.8
1986	26.0	26.6	46.9	30.9	28.7	32.3
1987	25.0	19.4	37.4	15.9	27.5	23.4
1988	19.1	18.7	39.6	17.5	26.2	27.2
1989	16.8	17.1	32.1	16.9	26.8	17.9
1990	15.3	16.8	26.3	14.7	27.6	17.8
1991	13.4	20.5	26.2	16.8	25.0	16.4
1992	13.1	12.8	28.9	16.2	24.7	15.7
1993	14.7	12.4	30.0	15.5	23.7	14.9
1994	12.0	14.6	27.5	15.4	25.6	14.0
1995	12.8	13.8	26.1	14.9	24.6	14.5
1996	13.0	11.4	32.3	11.4	22.0	14.2
1997	11.3	11.5	35.5	13.2	20.3	12.8
1998	12.0	13.3	33.8	13.5	17.9	14.9

FUENTE: Banco Mundial, *World Debt Tables*, varios números, Washington, D.C.
NOTA: La porción de las exportaciones asignada para cubrir la deuda es la proporción de los pagos para el servicio de la deuda (intereses y principal)/exportaciones de bienes y servicios.

FASE DOS: "REFORMAS ESTRUCTURALES"

La aplicación de la "estabilización" macroeconómica (condición para otorgar un crédito puente por el FMI y la renegociación de la deuda externa con los clubes de Londres y París) va seguida de la implementación de las reformas estructurales denominadas "necesarias". Existe una división de tareas entre el FMI y el Banco Mundial. Estas reformas económicas "necesarias" son "apoyadas" por los SAL y los SECAL del Banco Mundial. El paquete de reformas estructurales que se analiza abajo consiste en medidas relativas a la liberalización del comercio, la desregulación del sector bancario, la privatización de las empresas estatales, la reforma fiscal, la privatización de las tierras agrícolas, el "alivio de la pobreza" y el "buen gobierno".

LIBERALIZACIÓN COMERCIAL

Las instituciones de Bretton Woods alegan que la estructura arancelaria constituye una supuesta “inclinación en contra de la exportación” que desalienta el desarrollo de la economía de exportación, esto es, favorece el desarrollo del mercado nacional a expensas del sector exportador, conduciendo a una mala distribución de los recursos. Sin embargo, nada sugiere que la eliminación de aranceles haya facilitado “el desvío de los recursos” a favor de la exportación.

El programa de liberalización del comercio consiste invariablemente en la eliminación de cuotas de importación y la reducción y unificación de los aranceles. La consiguiente reducción en los ingresos aduanales tiene también un impacto significativo en las finanzas públicas del estado. Estas medidas no sólo repercuten en el déficit presupuestario, exacerbando así los desequilibrios fiscales; impiden también a las autoridades racionar selectivamente el uso de las escasas divisas extranjeras (mediante aranceles y cuotas).

Aunque la eliminación de cuotas y la reducción de barreras arancelarias protectoras pretenden “hacer más competitiva la industria nacional”, la liberalización del comercio conduce invariablemente al desmantelamiento de la manufactura nacional (orientada al mercado interno). Las medidas también estimulan la afluencia de artículos suntuarios; así, la carga impositiva de los grupos de más altos ingresos se reduce como resultado de la disminución de los aranceles de importación a los automóviles y bienes de consumo duraderos. Los bienes de consumo importados no sólo remplazan la producción nacional. Este frenesí consumista apoyado en dinero prestado (mediante los diversos créditos de desembolso rápido), en última instancia, contribuye a engrosar la deuda externa...

DESPOJO Y PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES

El ajuste estructural constituye un medio para apoderarse de los activos reales de los países endeudados mediante el programa de privatización y la recaudación de las obligaciones del servicio de la deuda. La privatización de las empresas del estado siempre va ligada a la renegociación de la deuda externa del país. Las paraestatales más rentables son adquiridas por el capital externo o por empre-

sas mixtas, a menudo a cambio de deuda. El producto de estas ventas, depositado en el tesoro, se canaliza hacia los clubes de Londres y París. El capital internacional obtiene el control o la propiedad de las empresas estatales más rentables a muy bajo costo. Además, dado el gran número de países endeudados que venden sus empresas públicas al mismo tiempo, el precio de la propiedad estatal se derrumba.

En algunos países, la propiedad estatal de "sectores estratégicos" (petróleo, gas, telecomunicaciones) y servicios públicos está establecida en la constitución. La privatización de estos sectores puede requerir, como en el caso de Brasil, la previa enmienda de la constitución (véase el capítulo 13).

REFORMA FISCAL

Por mandato del Banco Mundial se implementan cambios fundamentales en la estructura fiscal. Estos cambios tienden a socavar la producción nacional tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta. La introducción de un impuesto sobre el valor agregado y las modificaciones a la estructura de impuestos directos implican invariablemente una carga impositiva mayor para los grupos de ingresos medianos y bajos. En la estructura del Banco Mundial, se incluye el registro con fines fiscales, de los pequeños productores agrícolas y las unidades del sector urbano informal. Mientras que los productores del país están sujetos a impuestos gubernamentales, los proyectos compartidos y el capital extranjero disfrutan invariablemente de generosas exenciones fiscales como medio para "atraer la inversión externa".

TENENCIA DE LA TIERRA Y PRIVATIZACIÓN DE LAS TIERRAS CULTIVABLES

Las reformas se realizan en el contexto de los SECAL del Banco Mundial. La legislación pertinente sobre la propiedad de la tierra, frecuentemente, se desarrolla a menudo con apoyo técnico proporcionado por el departamento legal del Banco Mundial. Las reformas consisten en otorgar títulos de propiedad a los agricultores, estimu-

lando al mismo tiempo la concentración de tierras agrícolas en un número menor de manos. Los derechos consuetudinarios sobre la tierra también se ven afectados. La tendencia es hacia la confiscación o hipoteca de la tierra perteneciente a los pequeños agricultores, el crecimiento del sector agroindustrial y la formación de una clase de trabajadores agrícolas estacionales y sin tierra.

Además, bajo el disfraz de modernidad, a menudo las medidas contribuyen a la restauración de los derechos de la clase terrateniente "de viejo cuño". Irónicamente, esta última es la defensora de la "liberalización" económica.

La privatización de la tierra tiene también como fin servir al pago de la deuda externa, ya que el producto de las ventas de tierras públicas aconsejadas por el Banco Mundial se emplea para generar ingresos que se canalizan, por el tesoro nacional, a los acreedores internacionales.

DESREGULACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO

El banco central pierde el control de la política monetaria: las tasas de interés son determinadas en el "mercado libre" por los bancos comerciales. El crédito privilegiado a la agricultura y la industria es progresivamente eliminado. Las medidas subyacentes usualmente ocasionan alzas significativas en las tasas de interés tanto reales como nominales. El movimiento de las tasas de interés interactúa con el de los precios nacionales. Las tasas de interés nominales son empujadas a niveles anormalmente altos como resultado de las devaluaciones periódicas y la consiguiente "dolarización" de los precios. La desregulación del sistema bancario conduce también a la entrada de "capital golondrino" atraído por tasas de interés artificialmente altas. Los bancos comerciales ya no están en condiciones de proporcionar créditos a la economía real con tasas razonables. Esta política –combinada con la progresiva desaparición de los bancos de desarrollo estatales– conduce al desmantelamiento del crédito, tanto para la agricultura como para la industria nacional. Mientras que se mantiene el crédito a corto plazo a los comerciantes en el ramo de la exportación, el sector bancario nacional ya no se orienta a proveer crédito a los productores locales.

Las instituciones financieras internacionales exigirán también la

privatización de los bancos de desarrollo del estado y la desregulación del sistema bancario comercial. Vale la pena señalar que en concordancia con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a los bancos comerciales extranjeros se les permite la entrada libre en el sector bancario nacional.

Este movimiento tiende al despojo de las instituciones bancarias del estado (en los términos del programa de privatización) así como al desplazamiento de los bancos privados nacionales. La reestructuración del sector bancario se implementa en el contexto de un programa de evaluación del sector financiero (PESF). Esto incluye el desposeimiento y venta de todos los bancos del estado, bajo la supervisión de las IFI junto con las instituciones bancarias claves de las que se han apoderado intereses financieros extranjeros.

El proceso de despojo se relaciona directamente con la recaudación de las obligaciones del servicio de la deuda. La reestructuración de la deuda comercial bajo el Plan Brady (en los años ochenta y noventa), por ejemplo, en muchos casos estuvo condicionada a la previa privatización de las instituciones bancarias estatales en los términos de las cláusulas del FSAP, y el producto de estas ventas se canalizó al servicio de la deuda comercial.

LIBERALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL

El FMI insiste en la "transparencia" y "libre movimiento" de las divisas extranjeras dentro y fuera del país (a través de transferencias electrónicas). Este proceso permite que las compañías extranjeras repatrien libremente sus ganancias en divisas.

RECICLAJE DEL DINERO SUCIO HACIA EL SERVICIO DE LA DEUDA

Otro objetivo importante se cumple como quiera que sea: la liberalización de los movimientos del capital estimula la "repatriación del capital fugado", o sea, el regreso del "dinero negro" y "sucio" que fue depositado por las élites del tercer mundo desde los años sesenta en cuentas bancarias foráneas. El "dinero sucio" constituye el producto del comercio ilegal o de actividades delictivas, mientras que

el "dinero negro" es dinero que ha eludido la recaudación fiscal.

La crisis de la economía legal por el embate de las reformas macroeconómicas se relaciona directamente con el rápido crecimiento del comercio ilícito. Además, la conveniencia y rapidez con que pueden realizarse las transacciones con dinero sucio (mediante transferencias electrónicas) tienden a facilitar el desarrollo del comercio ilícito a expensas de la economía legal.

La liberalización de los movimientos de capital sirve a los intereses de los acreedores. Constituye un medio para canalizar el dinero "sucio" y "negro", depositado en el extranjero, hacia el pago de la deuda externa, al tiempo que proporciona a las clases sociales privilegiadas un mecanismo conveniente para lavar grandes sumas de dinero obtenidas ilegalmente.

Este proceso funciona de la siguiente forma: la divisa se transfiere desde una cuenta en un banco foráneo al mercado interbancario de un país en vías de desarrollo ("sin preguntas"). Esa divisa extranjera se convierte entonces en moneda local y se utiliza para comprar valores del estado o tierras públicas puestas a subasta por el gobierno en el contexto del programa de privatización patrocinado por el Banco Mundial. Por su parte, el producto en divisas de estas ventas se canaliza hacia el tesoro nacional, en donde se destina al servicio de la deuda.

LA "LUCHA CONTRA LA POBREZA" Y LA "RED DE PROTECCIÓN SOCIAL"

Desde finales de los ochenta, el "combate a la pobreza" se ha convertido en una "condicionalidad" de los acuerdos para préstamos del Banco Mundial. El "combate a la pobreza" apoya el objetivo de rembolsar el servicio de la deuda externa: la "reducción sustentable de la pobreza", bajo el dominio de las instituciones de Bretton Woods, se promueve recortando los presupuestos del sector social y canalizando el gasto sobre una base selectiva y simbólica "en favor de los pobres". El "fondo de emergencia social" (*social emergency fund* [SEF]), establecido siguiendo el modelo Bolivia-Ghana) pretende proporcionar "un mecanismo flexible" para "manejar la pobreza" al mismo tiempo que desmantela las finanzas públicas del estado. En este marco, los pobres son definidos como "grupo beneficiario".

El fondo de emergencia social requiere un enfoque de "ingeniería social", un marco político para "manejar la pobreza" y atenuar los conflictos sociales a un costo mínimo para los acreedores. Los llamados "programas focalizados", destinados a "ayudar a los pobres", combinados con la "recuperación de costos" y la "privatización" de los servicios de salud y educativos supuestamente constituyen una forma "más eficiente" de despachar programas sociales. El estado se retira y muchos programas de la jurisdicción de los ministerios sectoriales serán manejados en adelante por las organizaciones de la sociedad civil a la sombra del SEF. La sociedad civil también financia, fungiendo como "red de protección" social, las indemnizaciones por despidos o los proyectos de empleo mínimo de los trabajadores del sector público despedidos como resultado del programa de ajustes.

El SEF sanciona oficialmente la retirada del estado de los sectores sociales y el "manejo de la pobreza" (en escala microsocial) por organizaciones separadas y paralelas. Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), fundadas por "programas de ayuda" internacionales han ido adoptando gradualmente muchas de las funciones de los gobiernos a nivel local. La producción en pequeña escala y los proyectos artesanales, la subcontratación de empresas procesadoras para la exportación, programas de entrenamiento y empleo basados en la comunidad, etc., operan a la sombra de la "red de protección" social. A las comunidades locales se les garantiza una exigua supervivencia, al mismo tiempo que se contiene el riesgo de agitación social.

"BUEN GOBIERNO": PROMOCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PARLAMENTARIAS FICTICIAS

"Democratización" se ha convertido en el lema del libre mercado. La llamada "gobernabilidad" y la celebración de elecciones multipartidarias se añaden como condicionalidades de los acuerdos crediticios. La naturaleza de las reformas económicas, sin embargo, impide una genuina democratización.

LAS CONSECUENCIAS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL

La solución de la crisis de la deuda se convierte en causa de endeudamiento aún mayor. El paquete de estabilización económica del FMI pretende, en teoría, asistir a los países para que reestructuren su economía con vistas a generar un excedente en su balanza comercial de manera que se pague la deuda y se inicie un proceso de recuperación económica. Lo que sucede es exactamente lo opuesto. El proceso mismo de "apretarse el cinturón", impuesto por los acreedores, socava la recuperación económica y la capacidad de los países para saldar su deuda.

En otras palabras, las medidas subyacentes contribuyen a aumentar la deuda externa:

1] Los nuevos créditos condicionados a políticas, otorgados para pagar la antigua deuda, contribuyen a aumentar el monto de la misma.

2] La liberalización del comercio tiende a exacerbar la crisis de la balanza de pagos. La producción interna es sustituida por importaciones (en una amplia gama de productos) y se otorgan nuevos créditos de desembolso rápido para permitir que los países sigan importando mercancías del mercado mundial.

3] Con la conclusión de la Ronda de Uruguay y la formación de la Organización Mundial del Comercio, una porción mucho mayor de la factura de las importaciones está constituida por "servicios", como el pago de derechos de propiedad intelectual. En otras palabras, la factura de las importaciones aumentará sin la afluencia correspondiente de artículos ("producidos").

4] El programa de ajuste estructural ha implicado abandonar los préstamos para proyectos, con el consiguiente congelamiento de la formación de capital en todas las áreas que no sirven directamente a los intereses de la economía de exportación.

El paquete de estabilización económica destruye la posibilidad de un un proyecto de desarrollo nacional. Las reformas del FMI-Banco Mundial desmantelan brutalmente los sectores sociales de los países en vías de desarrollo, desbaratando los esfuerzos y las luchas del periodo poscolonial y revirtiendo "de un plumazo" el fruto de los progresos pasados. A lo largo de todos los países en vías de desarrollo aparece un patrón consistente y coherente: el paquete de reformas del FMI-Banco Mundial lleva al desplome económico y social. Las medidas de austeridad conducen a la desintegración del estado: la econo-

mía nacional es remodelada, la producción para el mercado nacional es destruida mediante la reducción de las ganancias reales y la producción doméstica es canalizada hacia el mercado mundial. Estas medidas van mucho más allá de la desaparición de las industrias de sustitución de importaciones. Destruyen la trama entera de la economía de un país.

EL FMI RECONOCE TÁCITAMENTE EL FRACASO DE SUS POLÍTICAS

Irónicamente, el FMI y el Banco Mundial reconocen tácitamente el fracaso de sus políticas. Éstas son las palabras de uno de sus altos funcionarios:

> Aunque se realizaron diversos estudios sobre el tema durante el decenio pasado, no podemos decir con seguridad si los programas han "funcionado" o no [...] Con base en los estudios existentes, ciertamente, no podemos decir si la adopción de los programas apoyados por el Fondo llevaron a una mejoría en el comportamiento de la inflación y del crecimiento. De hecho, a menudo se encuentra que los programas están asociados con un aumento de la inflación y una caída en la tasa de crecimiento.[7]

Aunque instan al desarrollo de "métodos de evaluación mejorados" para los programas apoyados por financiamientos, los tests empíricos propuestos por el departamento de investigación del FMI no pueden refutar las evidencias.

EL ARGUMENTO CONTRAFACTUAL

Las instituciones de Bretton Woods justifican esas medidas con el argumento de la eficiencia microeconómica. Según las IFI, los "costos sociales" deben ser balanceados contra los "beneficios económicos" de la estabilización macroeconómica. El lema del FMI-Banco Mundial pareciera ser "no hay mal que por bien no venga".

Aunque reconocen las "dimensiones sociales del ajuste", las ins-

[7] Mohsin Khan, "The macroeconomic effects of fund supported adjustment programs", *IMF Staff Papers*, 37: 2, 1990, pp. 196 y 222.

tituciones de Bretton Woods insisten también en el llamado "argumento contrafactual": "la situación es mala, pero hubiera sido mucho peor de no haberse adoptado las medidas de ajuste estructural". De acuerdo con el Banco Mundial:

> El decepcionante desempeño económico de África, en conjunto, representa la incapacidad de ajustarse [más que] un fracaso del ajuste [...] Más Ajuste, No Menos, Ayudará a los Pobres y al Medio Ambiente [...] El ajuste es el primer paso necesario en el camino de la reducción sustentable de la pobreza.[8]

Si bien el paquete de políticas económicas pretende en principio promover la eficiencia y una distribución más racional de los recursos productivos basados en los mecanismos del mercado, este objetivo se logra mediante una masiva retirada de recursos humanos y materiales. La contraparte de la "eficiencia microeconómica" es la austeridad programada en el plano macroeconómico. Por consiguiente, es difícil justificar estas medidas con el argumento de la eficiencia y de la distribución de recursos.

EL IMPACTO SOCIAL DE LAS REFORMAS MACROECONÓMICAS

Las implicaciones sociales de estas reformas (entre otras, su impacto en la salud, la educación, los derechos sociales de la mujer y el medio ambiente) han sido ampliamente documentadas.[9] Debido a la falta de recursos se clausuran escuelas y los maestros quedan despedidos; en el sector salud, hay una recesión generalizada en la atención curativa y preventiva como resultado de la falta de equipo y materiales médicos, condiciones laborales deficientes y baja paga del personal médico. La falta de recursos se "compensa" en parte por el cobro de cuotas de registro y de uso, es decir, el "plan de recuperación del costo de los medicamentos" adoptado en la Propues-

[8] Banco Mundial, *Adjustment in Africa*, p. 17.

[9] Varios estudios, incluyendo un importante documento de UNICEF intitulado "Structural adjustment with a human face", han examinado el impacto de las políticas macroeconómicas en algunos indicadores sociales, como la morbilidad y la frecuencia de enfermedades infecciosas, la mortandad infantil, los niveles de nutrición infantil y los niveles de educación.

ta Bamako (*Bamako Proposal*) y las contribuciones a las asociaciones de padres y maestros (*parent teachers associations* [PTA] que recaudan las comunidades locales para cubrir los gastos que anteriormente cubría el ministerio de educación.

Este proceso, sin embargo, implica la privatización parcial de los servicios sociales esenciales del gobierno y la exclusión *de facto* de grandes sectores de la población (particularmente en las zonas rurales) que no pueden pagar las diversas cuotas vinculadas a los servicios de salud y educación.[10]

Hay que subrayar que el programa de ajuste estructural no sólo resulta en un mayor nivel de pobreza urbana y rural, implica también una capacidad reducida de las personas (incluyendo los hogares de clase media) para pagar por los servicios de salud y educación asociados con el plan de recuperación de costos.

Congelar el número de graduados de los colegios de formación de maestros y aumentar el número de alumnos por maestro son condiciones explícitas de los créditos de ajuste del sector social del Banco Mundial. El presupuesto de educación se recorta, el número de horas-contacto que pasan los niños en la escuela se reduce y se instala un sistema de doble turno: ahora un maestro trabaja por dos, los restantes maestros son despedidos y los ahorros resultantes son canalizados por la Tesorería hacia los acreedores externos.

Estas iniciativas "de costo eficiente", sin embargo, siguen considerándose incompletas: en el África subsahariana, la comunidad de donadores ha propuesto recientemente una nueva fórmula imaginativa ("de costo eficiente") que consiste en eliminar totalmente el mísero salario de los maestros (en algunos países de apenas 15-20 dólares al mes) al tiempo que se otorgan pequeños préstamos para permitir que los maestros desempleados establezcan sus propias "escuelas privadas" informales, en los patios rurales y en los barrios suburbanos. Según este plan, el ministerio de educación seguirá siendo responsable de supervisar "la calidad" de la enseñanza.

[10] Vale la pena señalar que, dentro de un plan de recuperación de costos propuesto por las IFI a los países endeudados, los ministerios de salud reducirán sus desembolsos y transferirán el costo de administrar los centros de salud a comunidades rurales y urbanas empobrecidas. En los términos del plan de recuperación de costos, tendría que haber una "descentralización de la toma de decisiones" y "participación y control de la comunidad": lo que esto significa es que las comunidades rurales y urbanas empobrecidas –al tiempo que se vuelven formalmente "autosuficientes"– cargarán con el peso de subsidiar al ministerio de salud.

LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR SALUD

Un enfoque similar predomina en el área de la salud: se dice que los subsidios del estado para la salud crean "distorsiones del mercado" indeseables que "benefician a los ricos". Según el Banco Mundial, un gasto de ocho dólares al año por persona es más que suficiente para obtener servicios médicos aceptables.[11] Además, las cuotas de usuarios de la atención médica primaria, en comunidades rurales empobrecidas, deben exigirse en aras de una "mayor equidad" y "eficiencia". Estas comunidades deberían participar también en el manejo de las unidades de primeros auxilios sustituyendo a las enfermeras calificadas y a los auxiliares médicos (pagados hasta ahora por el ministerio de salud) por voluntarios sin entrenamiento y semianalfabetos.

Los resultados: con excepción de un pequeño número de "muestras" financiadas externamente, los establecimientos de salud en el África subsahariana se han convertido, en realidad, en fuentes de enfermedades e infecciones. La escasez de recursos destinados a materiales sanitarios, como jeringas desechables, así como las alzas de precios (recomendadas por el Banco Mundial) en electricidad, agua y combustibles (requeridos para esterilizar las agujas, por ejemplo) aumentan la incidencia de infecciones (y la transmisión de SIDA). En el África subsahariana, por ejemplo, el no poder pagar los medicamentos hace que el grado de afluencia y utilización de los centros de salud del gobierno se reduzca tanto, que la infraestructura y el personal de salud ya no se utilizan; de esta manera, ni siquiera se recuperan los costos de funcionamiento de los centros de salud que siguen el modelo de costo eficiente.[12]

Si bien el plan de recuperación de costos puede asegurar la limitada viabilidad operativa de un número selecto de centros de salud, la tendencia es hacia: *a*] una mayor polarización social en el sistema de atención a la salud, *b*] una reducción en la cobertura de salud y un aumento en el ya amplio porcentaje de la población que no tiene acceso a la salud. Dicho de otro modo, la política macroeconómica conduce a una mayor desagregación de los recursos humanos y materiales en los sectores sociales.

[11] Véase Banco Mundial, *World development report, 1993: Investing in health*, Washington, D.C., 1993, p. 106.

[12] Sobre el tema de la recuperación de costos véase UNICEF, "Revitalising primary health care/Maternal and child health, the Bamako Initiative", informe del Director Ejecutivo, febrero de 1989, p. 16.

EL RESURGIMIENTO DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

En el África subsahariana ha habido un resurgimiento de cierto número de enfermedades contagiosas que ya se creían controladas, como el cólera, la fiebre amarilla y la malaria. De forma similar, en Latinoamérica la frecuencia de la malaria y el dengue se ha incrementado dramáticamente desde mediados de los ochenta, en términos de incidencia de parásitos. Las actividades de control y prevención (directamente asociadas con la reducción del gasto público en los términos del programa de ajuste estructural) han bajado drásticamente. El brote de la peste bubónica y neumónica en la India, en 1994, ha sido reconocido como "consecuencia directa del empeoramiento de la infraestructura urbana de sanidad y salud pública que acompañó a la reducción de los presupuestos nacional y municipal exigidos por el programa de ajuste estructural patrocinado por el FMI-Banco Mundial".[13]

Las consecuencias sociales del ajuste estructural son plenamente reconocidas por las IFI. La metodología del FMI-Banco Mundial considera, sin embargo, que los "sectores sociales" y "las dimensiones sociales del ajuste" son cosas "separadas", esto es, de acuerdo con el dogma económico dominante, estos "efectos colaterales indeseables" no forman parte de las funciones de un modelo económico. Pertenecen a un "sector" separado: el sector social.

[13] Véase Madrid Declaration of Alternative Forum, *The other voices of the planet*, Madrid, octubre de 1994.

4

EL BANCO MUNDIAL Y LOS DERECHOS DE LA MUJER

El Banco Mundial se ha convertido en el defensor de los derechos de la mujer urgiendo a los gobiernos a "invertir más en las mujeres para reducir las desigualdades de género y promover el desarrollo económico".[1] Por medio de su programa Mujeres en el Desarrollo (Women in Development [WID]), adoptado por el mundo en desarrollo, el Banco Mundial dicta las reglas fundamentales de la política de géneros. Se recomienda acercarse a las cuestiones de género con una "orientación de mercado", Se adjudica un valor monetario a la equidad de géneros. Los programas para la mujer deben ajustarse en relación con el "precio de oportunidad" y "en virtud" de los derechos de la mujer.

Mientras reconoce la posibilidad de "quiebra" (y, consecuentemente, la necesidad de intervención del estado para proteger los derechos de la mujer), el Banco Mundial afirma que los "mercados libres" apoyan ampliamente la "habilitación de la mujer" y la puesta en marcha de la equidad de géneros.

> Es decisivo que los gobiernos tomen la delantera cuando los mercados no alcanzan a captar todos los beneficios que implica para la sociedad invertir en las mujeres [...] Invertir en las mujeres es vital en la consecución de la eficiencia económica y el crecimiento. El Banco debe promover la equidad de géneros como un asunto de justicia social y acrecentar la participación de las mujeres en el desarrollo económico.[2]

Se dice que las medidas que "profundizan los mercados" y "estimulan estructuras de mercado más competitivas" contribuyen a una mayor equidad entre los géneros. El Banco Mundial afirma que el

[1] Banco Mundial, *Toward gender equality: The role of public policy* y *Advanced gender equality: From concept to action,* Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, Beijing, 1995.

[2] Banco Mundial, *The gender issue as key development,* Washington, Documento hco, 95/01, 1995, p. 1

programa de ajuste estructural mejora el estatus económico de la mujer en el mercado de mano de obra, a la vez que reconoce que también hay "riesgos" para aquéllas, asociados a los recortes en el gasto social y a las reducciones de los programas gubernamentales.

PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial actúa como custodio; determina los conceptos, las categorías metodológicas y la base de datos que se utilizan para analizar las cuestiones relativas al género. El Banco Mundial controla el marco institucional (en los diferentes países), incluyendo la Oficina de la Mujer y el Ministerio de Asuntos de la Mujer. Como el Banco Mundial es la principal fuente de recursos, las organizaciones nacionales de mujeres, asociadas a las sedes del poder político, con frecuencia respaldan la perspectiva del Banco en cuanto al género. El principal objetivo de este último no es acrecentar los derechos de la mujer sino imponer una perspectiva de libre mercado y desmovilizar los movimientos de las mujeres.

Al abrigo de las IFI, "la habilitación de las mujeres" es algo que ha de alcanzarse con las recetas macroeconómicas usuales: devaluación, recortes de presupuesto, la aplicación de cuotas de prorrateo a la salud y la educación, la desaparición paulatina del crédito estatal, la liberalización del comercio, la desregulación de los mercados de granos, la eliminación de la legislación sobre salarios mínimos, etc. Dicho de otro modo, el apoyo de los donadores a los programas de la mujer –a través de los proyectos WID subvencionados– está supeditado a la previa derogación de los derechos de la mujer a través del "cumplimiento satisfactorio" de las condicionalidades del FMI-Banco Mundial.

Por ejemplo, la aplicación de los planes de crédito nominales destinados a las mujeres campesinas, dentro de los programas de microcréditos del Banco Mundial, invariablemente exigen el previo despojo de los bancos, drásticas alzas de las tasas de interés y la desaparición paulatina de las cooperativas de crédito rurales. Lo mismo se aplica a los "programas de combate a la pobreza", que están supeditados a la adopción previa de medidas macroeconómicas que generan pobreza masiva. Los "programas de combate a la pobreza", implementados bajo la "red de seguridad social" están dirigidos ha-

cia los llamados "grupos vulnerables": "mujeres desposeídas, mujeres indígenas, mujeres cabeza de familia, refugiadas, migrantes y mujeres con discapacidad". Las causas estructurales de la pobreza y el papel de las reformas macroeconómicas se rechazan.

DEROGACIÓN DEL DERECHO DE LA MUJER A LA EDUCACIÓN

Otra área de intervención del Banco Mundial ha sido la aplicación de becas nominales o subsidios a las niñas (*Letting Girls Learn*) "permitiendo que las niñas aprendan") para cubrir las colegiaturas de la primaria y la secundaria, así como libros y materiales escolares.[3] Pero el apoyo del Banco está supeditado a que antes haya despido de maestros y se adopten los empleos de dos turnos y la enseñanza de varios grados en un solo grupo (véase el capítulo 3).

Los convenios de préstamos para el sector educativo del Banco Mundial exigen específicamente que el ministerio de educación reduzca su presupuesto, despida maestros e incremente la proporción estudiante/maestro. La aplicación de "rentas" de libros y colegiaturas, recomendadas por el Banco, trajo consigo un drástico descenso de las inscripciones tanto de varones como de mujeres. Lo que el Banco pretende es poner en marcha "programas objetivos", a un costo operativo, para niñas, al mismo tiempo que prescribe que el estado deje de financiar la educación primaria y secundaria.

RECUPERACIÓN DE COSTOS EN SALUD

La recuperación de costos y la aplicación de cuotas de prorrateo a la salud, bajo la supervisión del Banco Mundial, contribuyen a la derogación del derecho a la salud reproductiva de las mujeres. En este sentido, en muchas partes del mundo, el programa de ajuste estructural ha llevado a la desaparición progresiva de los programas de salud madre-hijo. Hay pruebas del resurgimiento de la mortalidad entre madres e hijos.

En el África subsahariana hay una tendencia a la "desprofesiona-

[3] Banco Mundial, *Letting Girls Learn*, World Bank Discussion Paper Series, Washington, 1995.

lización" de los servicios de salud, lo que llevará, a la larga, a la desaparición de los servicios primarios de salud. Los voluntarios de las aldeas y los curanderos tradicionales han tomado el lugar de las enfermeras comunitarias. El ahorro de la Tesorería en este rubro, se aplica al servicio de la deuda externa. Según el Banco Mundial, el "cuidado informal de la salud" no sólo es de "costo operativo", sino que es más "democrático" porque "habilita" a las mujeres de las comunidades en el manejo de los centros de salud de las aldeas.

LA AGENDA SECRETA

El esquema del Banco Mundial pinta una sociedad de "libre" mercado compuesta por individuos de ambos sexos. Se presenta a las mujeres como si pertenecieran a una categoría social separada de los hombres (como si hombres y mujeres pertenecieran a una clase social diferente). En otras palabras, la confrontación entre hombres y mujeres (esto es, como individuos) se considera la fuente principal de conflicto social. En la estructura de géneros del Banco Mundial, el estatus social de las mujeres gira alrededor de las relaciones entre hombres y mujeres dentro del hogar. Cómo afecta la globalización a las mujeres no es el punto en cuestión. Según el Banco Mundial, la concentración de riqueza y las estructuras del poder económico corporativo no tienen relación alguna con los derechos de las mujeres.

La modernidad y "la habilitación de la mujer" a través del "libre mercado" son los medios para alcanzar la equidad de género. El sistema de comercio y finanzas globales no se cuestiona nunca; el papel de las instituciones globales (entre ellas la OMC y las instituciones de Bretton Woods) no son motivo de debate profundo. Sin embargo, este sistema económico (basado en la "mano de obra barata" y en la acumulación privada de riquezas) constituye, en última instancia, una de las principales barreras para la consecución de la equidad de géneros. La perspectiva neoliberal de la cuestión de género (patrocinada por los "donadores") está, en gran medida, a favor de la creación de divisiones en el seno de las sociedades nacionales, de la desmovilización de los movimientos de las mujeres y del quebrantamiento de la solidaridad entre hombres y mujeres en su lucha contra el Nuevo Orden Mundial.

5

LA ECONOMÍA GLOBAL DE MANO DE OBRA BARATA

INTRODUCCIÓN

La globalización de la pobreza va acompañada de la remodelación de la economía nacional de los países en vías de desarrollo y de la redefinición de su papel en el nuevo orden económico mundial. El nivel nacional de las reformas macroeconómicas (analizado en el capítulo anterior), aplicadas simultáneamente en gran número de países individuales, juega un papel clave en la regulación de los salarios y costos de mano de obra en el plano mundial. La pobreza global es un "insumo" del lado de la oferta. El sistema económico global se alimenta de la mano de obra barata.

La economía mundial está marcada por la reubicación de una porción sustancial de la planta industrial de los países avanzados en localidades con mano de obra barata en países en vías de desarrollo. En los sesenta y los setenta se inició en el Sudeste Asiático el desarrollo de la economía de exportación de mano de obra barata principalmente para "manufacturas de trabajo intensivo". Limitada inicialmente a unos pocos enclaves exportadores (por ejemplo, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur), el desarrollo de la producción foránea con mano de obra barata ganó impulso en los setenta y los ochenta.

Desde fines de los setenta se ha ido desarrollando una "nueva generación" de zonas de libre comercio y maquila con los polos principales de crecimiento en el Sudeste Asiático y el Lejano Oriente, China, Brasil, México y Europa oriental. Esta globalización de la producción industrial afecta a una amplia gama de artículos manufacturados. La industria del tercer mundo abarca la mayor parte de las áreas de la manufactura (automóviles, barcos, aviones, armas, etcétera).[1]

[1] La reubicación internacional de las manufacturas se inició en los años sesenta con los cuatro dragones asiáticos: Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur. En el inicio, se limitó a las zonas más "blandas" de procesamiento y ensamble para exportación (tales como la industria del vestido y el ensamble electrónico).

Si bien el tercer mundo sigue desempeñando un papel como principal productor primario, la economía mundial contemporánea ya no está estructurada siguiendo las divisiones tradicionales entre "industria" y "producción primaria" (por ejemplo, el debate alrededor de los términos de intercambio entre productores primarios y productores industriales). Una porción cada vez mayor de las manufacturas mundiales se realiza en el Sudeste Asiático, China, Latinoamérica y Europa oriental.

Este desarrollo mundial de industrias de mano de obra barata (en áreas manufactureras cada vez más sofisticadas y pesadas) se basa en la contracción de la demanda interna en las economías individuales del tercer mundo y en la consolidación de una mano de obra industrial barata, estable y disciplinada dentro de un medio político "seguro". Este proceso se apoya en la destrucción de la manufactura nacional para el mercado interno (esto es, las industrias de sustitución de importaciones) en los países individuales del tercer mundo y la consolidación de una economía de exportación de mano de obra barata. Con la conclusión de la Ronda de Uruguay en Marrakech y el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio en 1995, las fronteras de estas "zonas de libre comercio" de mano de obra barata se han extendido para abarcar todo el territorio nacional de los países en vías de desarrollo.

LAS REFORMAS MACROECONÓMICAS RESPALDAN LA REUBICACIÓN DE LA INDUSTRIA

La reestructuración de las economías nacionales individuales bajo los auspicios de las instituciones de Bretton Woods contribuye al debilitamiento del estado. La industria para el mercado interno es socavada y las empresas nacionales son empujadas a la bancarrota. La contracción del consumo interno resultante del programa de ajuste estructural (PAE) implica una reducción correspondiente en los costos de mano de obra; en esto consiste la "agenda secreta" del PAE: la reducción de los salarios en el tercer mundo y en Europa oriental apoya la reubicación de la actividad económica desde los países ricos hacia los pobres.

La globalización de la pobreza respalda el desarrollo de una economía de exportación de mano de obra barata, en el plano mun-

dial; las posibilidades de producir son inmensas, dada la masa de trabajadores baratos y empobrecidos en todo el mundo. En contraste, los países pobres no comercian entre sí: la gente pobre no constituye un mercado para los artículos que ellos mismos producen.

La demanda de los consumidores está limitada a aproximadamente el 15% de la población mundial, confinada principalmente a los países ricos de la OCDE (véase el cuadro 1.1). En este sistema, y contrariamente al famoso dicho del economista francés Jean Baptiste Say (ley de Say), la oferta no crea su propia demanda. Por el contrario, la pobreza significa "bajos costos de producción": la pobreza es "un insumo" en la economía de mano de obra barata ("del lado de la oferta"). Por lo tanto, en este sistema, no hay creación de poder adquisitivo por parte de esta mano de obra barata.

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES

"Exporta o muere" es el lema; la sustitución de importaciones y la producción para el mercado interno son conceptos obsoletos. "Los países deben especializarse según sus ventajas comparativas", que consisten en la abundancia y bajo precio de su mano de obra; el secreto del "éxito económico" es la promoción de las exportaciones. Bajo la estrecha vigilancia del Banco Mundial y del FMI, las mismas exportaciones "no tradicionales" se promueven simultáneamente en gran número de países en vías de desarrollo. Estos últimos, a los que ahora se han unido los productores de mano de obra barata de Europa oriental, son forzados a una competencia despiadada. Todos quieren exportar a los mismos mercados europeos y norteamericano: la sobreproducción obliga a los productores del tercer mundo a recortar sus precios; los precios de fábrica de los productos industriales se desploman en los mercados mundiales de forma muy semejante a los de los artículos primarios. La competencia entre y dentro de los países en vías de desarrollo contribuye a deprimir los salarios y los precios. La promoción de las exportaciones (cuando se aplica simultáneamente en gran número de países individuales) conduce a la sobreproducción y la contracción de los ingresos por exportaciones. Irónicamente, la promoción de las exportaciones induce, en última instancia, precios más bajos para las mercancías y menos ingresos por exportaciones con qué pagar la deuda externa.

La amarga ironía es que las economías exportadoras más exitosas son también las naciones con mayores deudas.

Además, las medidas de estabilización económica impuestas en el Sur y el Este repercuten en las economías de los países ricos: la pobreza en el tercer mundo contribuye a una contracción global de la demanda de importaciones, lo que a su vez afecta el crecimiento económico y el empleo en los países de la OCDE.

El ajuste estructural transforma a las economías nacionales en espacios económicos abiertos y a los países, en territorios. Estos últimos son "reservas" de mano de obra barata y recursos naturales. Pero como este proceso se basa en la globalización de la pobreza y en la reducción mundial de la demanda de los consumidores, la promoción de las exportaciones en los países desarrollados sólo puede tener éxito en un número limitado de localidades con mano de obra barata. En otras palabras, el desarrollo simultáneo de actividades exportadoras nuevas en gran número de lugares tiende a una mayor competencia entre países en vías de desarrollo tanto en la producción primaria como en la manufactura. En la medida en que la demanda mundial no se expande, la creación de nuevas capacidades productivas en algunos países irá a la par de la contracción (y la retirada) económica de las localidades competidoras del tercer mundo.

AJUSTE GLOBAL

¿Qué sucede cuando las reformas macroeconómicas se aplican simultáneamente en gran número de países? En una economía mundial interdependiente, la "suma" de los ajustes estructurales en el nivel nacional provoca un "ajuste global" en las estructuras del comercio mundial y del crecimiento económico.

El impacto del "ajuste global" sobre los términos de intercambio está bastante bien comprendido: la aplicación simultánea de políticas de promoción de exportaciones en los países individuales del tercer mundo provoca un exceso de oferta en ciertos mercados de bienes de consumo, aunado a un desplome aún mayor en los precios mundiales de las mercancías. En muchos países sometidos al ajuste estructural, el volumen de exportaciones ha aumentado sustancialmente, pero el valor de los ingresos por exportaciones se ha

deteriorado. En otras palabras, este "ajuste estructural global" (sustentado en la internacionalización de las políticas macroeconómicas) deprime aún más los precios de las mercancías y promueve una transferencia de riqueza de los países pobres a los países ricos.

"DESCOMPOSICIÓN" DE LAS ECONOMÍAS NACIONALES

Los programas de ajuste estructural (PAE) desempeñan un papel clave en la "descomposición" de la economía nacional de un país endeudado y en la "recomposición" de una "nueva relación" con la economía global. En otras palabras, las reformas económicas implican la "descomposición/recomposición" de las estructuras de la producción y de consumo nacionales. La contracción de los salarios reales reduce los costos de mano de obra y provoca una disminución del consumo de la gran mayoría de la población. Por otra parte, la "recomposición" del consumo se caracteriza por el crecimiento del "consumo de altos ingresos" mediante la liberalización del comercio y del influjo dinámico de bienes de consumo duraderos y artículos de lujo para una pequeña parte de la sociedad. Esta "descomposición/recomposición" de la economía nacional y su inserción en la economía global de mano de obra barata se basa en la disminución de la demanda interna (y de los niveles de subsistencia social); la pobreza, los bajos salarios y un abundante suministro de mano de obra barata son "insumos" del lado de la oferta. La pobreza y la reducción de los costos de producción constituyen la base instrumental (del lado de la oferta) para reactivar la producción orientada hacia el mercado externo.

La aplicación simultánea de los programas de ajuste estructural (PAE) en los países deudores acelera la reubicación de la industria manufacturera de mano de obra barata hacia los países del tercer mundo y de Europa oriental, desde los centros de producción existentes en los países desarrollados. Pero la nueva capacidad productiva (orientada a la exportación) que resulta, se desarrolla dentro de un panorama general de crecimiento y demanda mundial deprimidos. Este verdadero "compromiso" con la creación de nuevas capacidades productivas (para exportación) en uno o más países individuales del tercer mundo, va a la par de un proceso de "retirada de los recursos productivos" y una decadencia del sistema económico mundial.

La descomposición no asegura una recomposición “exitosa”. En otras palabras, la desaparición paulatina de la industria doméstica para el mercado interno no garantiza el desarrollo de una nueva relación “viable” y estable con el mercado mundial; esto es, la reducción de los costos de mano de obra (en apoyo de la oferta) en sí misma no garantiza el crecimiento del sector exportador y la inserción de la economía nacional del tercer mundo en el mercado internacional (ni, por cierto, garantiza el desarrollo de las exportaciones industriales). Factores económicos, geopolíticos e históricos complejos determinarán la localización geográfica de estos nuevos polos de producción de mano de obra barata orientada hacia el mercado mundial.

La “recomposición” tiende a tener lugar en regiones funcionales específicas de la economía global. La formación de nuevos polos dinámicos de la economía de mano de obra en México, Europa oriental y el Sudeste Asiático está en marcado contraste con la situación prevaleciente en la mayor parte del África subsahariana y otras partes de Latinoamérica y el Medio Oriente.

DESEMPLEO MUNDIAL

Muchas regiones del mundo, aunque no estén insertadas “activamente” en la economía global de mano de obra barata, contienen no obstante importantes “reservas de mano de obra barata” que desempeñan un papel esencial en la regulación de los costos de la mano de obra a nivel mundial. Si se produce descontento laboral, como presiones por los salarios, en algún lugar del tercer mundo, el capital transnacional puede mudar su centro de producción o subcontratar en otras zonas de mano de obra barata. Dicho de otro modo, la existencia de “países de reserva”, con abundante oferta de mano de obra, tiende a desalentar el movimiento de salarios y costos de mano de obra en las economías exportadoras (de mano de obra barata) más activas (el Sudeste Asiático, México, China, Europa oriental).

En otras palabras, la determinación de los niveles nacionales de los salarios en los distintos países en vías de desarrollo no sólo depende de la estructura del mercado de mano de obra nacional sino también del nivel de salarios prevaleciente en zonas de mano de

obra barata competidoras. Por consiguiente, el nivel de los costos de mano de obra está condicionado por la existencia de una "fuente de reserva global de mano de obra barata" constituida por los "ejércitos de reserva" de mano de obra en diferentes países. Este "excedente de población mundial" condiciona la migración internacional del capital productivo en una misma rama de la industria de un país a otro: el capital internacional (el comprador directo o indirecto de mano de obra) se traslada de un mercado de mano de obra nacional a otro. Desde el punto de vista del capital, las "reservas nacionales de mano de obra" se integran en una fuente única de reserva internacional en donde los trabajadores de diferentes países se enfrentan unos a otros en competencia abierta.

El desempleo mundial se convierte en "una palanca" de la acumulación global de capital que "regula" el costo de la mano de obra en cada una de las economías nacionales. La pobreza masiva regula el costo internacional de la mano de obra. Los salarios están condicionados también al nivel de cada economía nacional, por la relación ciudad-campo. Es decir, la pobreza rural y la existencia de una gran masa de trabajadores agrícolas desempleados y sin tierra tiende a promover salarios bajos en la economía manufacturera urbana.

EL DESPLOME DE LOS SALARIOS

En muchas economías exportadoras de mano de obra barata, la proporción salarios/PIB ha declinado drásticamente. En América Latina, por ejemplo, los programas de ajuste provocaron una marcada contracción de los salarios como parte del PIB y como porcentaje del valor agregado en la manufactura. Mientras los salarios en los países desarrollados constituyen aproximadamente el 40% del valor agregado en la manufactura, el porcentaje correspondiente en Latinoamérica y el Sudeste Asiático es del orden del 15 por ciento.

CLAUSURAS DE PLANTAS Y DESPLAZAMIENTO INDUSTRIAL EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

El desarrollo de plantas exportadoras de mano de obra barata en el tercer mundo va acompañado de clausuras de plantas en las ciudades industriales de los países avanzados. La primera oleada de clausuras de fábricas afectó principalmente las ramas de la producción manufacturera de trabajo intensivo. Desde los ochenta, sin embargo, todos los sectores de la economía occidental (y todas las categorías de la fuerza laboral) se han visto afectados: la reestructuración corporativa de las industrias aeroespacial e ingenieril, el traslado de la producción de automóviles a Europa oriental y el tercer mundo, los cierres de la industria del acero, etcétera.

El desarrollo de las manufacturas en las "maquilas" y zonas procesadoras para exportación, situadas en el sur inmediato del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, durante los ochenta, estuvo acampañado de despidos en la industria y de desempleo en centros industriales en Estados Unidos y Canadá. Dentro del régimen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este proceso de reubicación se ha extendido a toda la economía mexicana. De forma similar, las transnacionales japonesas han reubicado una parte significativa de su industria manufacturera en centros de producción en Tailandia o las Filipinas, donde los trabajadores industriales pueden ser contratados por tres o cuatro dólares al día.[2] El capitalismo alemán se está expandiendo más allá del Oder-Neisse hasta su *Lebensraum* de antes de la guerra. En plantas de ensamble en Polonia, Hungría y las repúblicas Checa y Eslovaca, el costo de mano de obra (del orden de 120 dólares al mes) es sustancialmente menor que en la Unión Europea. En contraste, los trabajadores en las plantas de automóviles alemanas tienen salarios del orden de 28 dólares la hora.

En este contexto, los antiguos países "socialistas" están integrados a la economía global de mano de obra barata. A pesar de las fábricas paradas y de los altos niveles de desempleo en la antigua República Democrática Alemana, fue más provechoso para el capitalismo alemán extender su base manufacturera hacia Europa oriental.

Por cada empleo que se pierde en los países desarrollados y que se transfiere al tercer mundo, hay una contracción correspondiente

[2] El salario mínimo industrial en Bangkok, de cuatro dólares por día (1991), no es obligatorio en las fábricas modernas.

del consumo en los países desarrollados. Mientras que los cierres de plantas y despidos se presentan, en la prensa, usualmente como casos aislados de "reestructuración corporativa" no relacionados, su impacto combinado en las ganancias reales y en el empleo es devastador. Los mercados de consumidores se desploman porque gran número de empresas (en diversos países) reducen simultáneamente su fuerza laboral. A su vez, esta quiebra del consumo repercute en la producción, contribuyendo a una cadena aún mayor de cierres de fábricas y bancarrotas, y así sucesivamente.

LA REDUCCIÓN MUNDIAL DEL GASTO DE LOS CONSUMIDORES

En el Norte, la contracción de los niveles de consumo se exacerba aún más con la desregulación del mercado laboral: desindexación de los salarios, empleo a tiempo parcial, retiro adelantado e imposición de los llamados recortes salariales "voluntarios". Por su parte, la práctica del "roce generacional" (que traslada la carga social del desempleo a los grupos de edades más jóvenes) excluye a toda una generación del mercado laboral.

En otras palabras, la desaparición paulatina de la industria manufacturera en los países desarrollados contribuye a una contracción del consumo, lo que a su vez socava los esfuerzos de los países en desarrollo por vender bienes manufacturados a un mercado occidental (que se está encogiendo).

Es un círculo vicioso: la reubicación de la industria hacia el Sur y el Este conduce a la dislocación económica y el desempleo en los países desarrollados, lo que a su vez tiende a empujar a la economía mundial a la recesión global. Este sistema se caracteriza por una ilimitada capacidad para producir; sin embargo, el acto mismo de expandir la producción –mediante la reubicación de la producción desde las economías de "altos salarios" hacia las de "salarios bajos"– contribuye a una contracción del poder adquisitivo (por ejemplo, por quienes han sido despedidos), lo que conduce a la economía mundial, en última instancia, al camino del estancamiento global.

REUBICACIÓN DENTRO DE BLOQUES COMERCIALES

Cada vez más, los desplazamientos de la actividad económica están teniendo lugar dentro de la plataforma continental de cada uno de los bloques económicos. Tanto Europa occidental como América del Norte están desarrollando respectivamente "zonas de mano de obra barata" en sus fronteras geográficas inmediatas. En el contexto europeo, la "línea Oder-Neisse" es para Polonia lo que el río Bravo es para México. La antigua "cortina de hierro" desempeña el mismo papel que el río Bravo: separa la economía de altos salarios de Europa occidental de la economía de bajos salarios del antiguo bloque soviético.

El TLC, sin embargo, es distinto del Tratado de Maastricht, que permite el "libre movimiento" de la mano de obra "dentro" de los países de la Unión Europea. Dentro del TLC, el río Bravo separa dos mercados laborales diferentes: las unidades de producción se clausuran en Estados Unidos y Canadá y se trasladadan a México, donde los salarios son por lo menos diez veces más bajos. "La inmovilidad de la mano de obra", más que el "libre comercio" es la característica central del TLC.

En los términos de este tratado, las corporaciones estadunidenses pueden reducir sus costos de mano de obra en más del 80%, reubicándose o subcontratando en México. Este mecanismo no se limita a las manufacturas o a actividades que utilizan mano de obra no calificada: nada impide el traslado de industrias de alta tecnología estadunidenses a México, en donde ingenieros y científicos pueden contratarse por unos cuantos cientos de dólares al mes. El desplazamiento afecta potencialmente a gran parte de la economía de Estados Unidos y Canadá, incluyendo el sector servicios.

Desde su comienzo, el TLC se fundamentó en una contracción tanto del empleo como de los salarios reales. La reubicación industrial hacia México destruye empleos y deprime los salarios reales en Estados Unidos y Canadá. El TLC exacerba esta recesión económica: los trabajadores despedidos en Estados Unidos y Canadá no son reubicados en otras actividades y ningún camino de crecimiento económico nuevo se crea como resultado del desplazamiento de la industria. La contracción del gasto del consumidor que resulta de los despidos y cierres de fábricas conduce a una contracción general de las ventas y de los empleos así como a nuevos despidos industriales.

Además, si bien el TLC permite a las corporaciones estadunidenses y canadienses penetrar en el mercado mexicano, este proceso se emprende principalmente, desplazando a las empresas mexicanas existentes. La tendencia es hacia una mayor concentración industrial, la eliminación de empresas medianas y pequeñas, así como la expropiación de una parte de la economía de servicios mexicana mediante el sistema de franquicias corporativas. Estados Unidos "exporta su recesión" a México. Con excepción de un pequeño mercado de consumo privilegiado, la pobreza y los salarios bajos en México no favorecen la expansión de la demanda de los consumidores. En Canadá, el acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos en 1989 ha llevado a la progresiva desaparición de la economía de plantas filiales. Las subsidiarias canadienses han sido cerradas y remplazadas por una oficina de ventas regional.

La formación del TLC ha contribuido a exacerbar la recesión económica: la tendencia es hacia la reducción de los salarios y del empleo en los tres países. El potencial para producir es mayor, pero el acto mismo de expandir la producción (a través de la reubicación de la producción de Estados Unidos y Canadá en México) contribuye a reducir los niveles de consumo.

EL DINÁMICO DESARROLLO DEL CONSUMO SUNTUARIO

La abultada concentración del ingreso y la riqueza en manos de una minoría social (tanto en los países avanzados como en pequeñas zonas ricas del tercer mundo y Europa oriental) ha ocasionado un crecimiento veloz de la economía de artículos de lujo: viajes y placer, el automóvil, la revolución electrónica y de las comunicaciones, etc. Las culturas del *drive-in* (servicio en el auto) y del *duty-free* (libre de impuestos), erigidas en torno a los ejes del transporte automotriz y aéreo, son los puntos focales de la moderna economía de "altos ingresos" de consumo y ocio, hacia los que se canalizan sumas enormes de recursos financieros.

Mientras que la gama de bienes de consumo disponibles para satisfacer los estilos de vida de altos ingresos se ha extendido casi sin límites, se ha dado (desde la crisis de la deuda de principios de los ochenta) una contracción correspondiente en los niveles de consumo de la gran mayoría de la población mundial. En contraste con

la gran diversidad de productos disponibles para una minoría social, el consumo básico (para cerca del 85% de la población mundial) está reducido a un pequeño número de productos alimenticios y artículos esenciales.

Este crecimiento dinámico del consumo suntuario, sin embargo, proporciona un "respiro" temporal a una economía global acosada por la recesión.[3] El rápido crecimiento del consumo suntuario, no obstante, contrasta cada vez más con el estancamiento de los sectores que producen bienes y servicios necesarios. En el tercer mundo y Europa oriental, el estancamiento de la producción alimentaria, vivienda y servicios sociales esenciales contrasta con el desarrollo de pequeñas zonas de privilegio social y consumo suntuario. Las élites de los países endeudados, como los antiguos *apparatchiks* y los nuevos magnates de los negocios de Europa oriental y la antigua Unión Soviética, son tanto los protagonistas como los beneficiarios de este proceso. Las disparidades sociales y de ingresos en Hungría y Polonia son comparables ahora a las prevalecientes en América Latina. (Por ejemplo, un Porsche-Carrera puede comprarse en Budapest por la modesta suma de 9 720 000 *forints*, más de lo que un trabajador húngaro típico llega a ganar en toda su vida, esto es, los ingresos de 70 años con el salario industrial promedio por año.)[4]

La estructura de salarios bajos en el tercer mundo, aunada a los efectos de la reestructuración económica y la recesión en los países avanzados, no favorece el desarrollo del consumo masivo ni una mejoría general del poder de compra. Así, se empuja cada vez más al sistema productivo global hacia el suministro de mercados limitados, esto es, los mercados de consumidores de altos ingresos en el Norte y las pequeñas zonas de consumo suntuario en el Sur y el Este.

En este contexto, los salarios bajos y los bajos costos de producción conducen a un bajo poder de compra y escasa demanda. Esta relación contradictoria es un rasgo esencial de la economía global de mano de obra barata: quienes producen no son quienes consumen.

[3] Frente al bajo gasto civil, el gasto militar representa también un papel importante en la reactivación de la demanda.

[4] "In zwei Jahren über den Berg", *Der Spiegel*, 19, 1991, p. 194.

LA ECONOMÍA RENTISTA

Con la desaparición paulatina de las manufacturas, en los países ricos se ha desarrollado una "economía rentista" –que, en realidad, no produce nada– centrada en el sector servicios y que absorbe las utilidades de las manufacturas del tercer mundo. Esta economía de alta tecnología, basada en la propiedad del *know-how* industrial, diseños de productos, investigación y desarrollo, etc., subordina a los sectores de la "producción material". La "producción no material" subordina a la "producción material"; el sector servicios se apropia del valor agregado de las manufacturas. Además, junto al pago de regalías y licencias por el uso de tecnología occidental y japonesa, las ganancias de los productores del tercer mundo son apropiadas invariablemente por distribuidores, mayoristas y minoristas en los países desarrollados. La producción industrial sigue estando subordinada al gran capital. El desarrollo de la llamada "industria" en el tercer mundo es la consecuencia de un proceso de reestructuración global de la producción. Los polos de crecimiento en los países avanzados están en los "sectores no materiales" (alta tecnología, incluyendo diseño de productos e innovación, economía de servicios, bienes raíces, infraestructura comercial y financiera, comunicaciones, transportes) más que en la producción material de manufacturas *per se*.

Es necesario comprender esta aparente "desindustrialización" de los países industrializados: el significado del término "industria" ha cambiado radicalmente. Los polos de desarrollo de alta tecnología están experimentando un rápido desarrollo a expensas de las antiguas industrias tradicionales que evolucionaron históricamente en los países avanzados desde el inicio de la revolución industrial.

LA GLOBALIZACIÓN DE LAS MANUFACTURAS

Lo que tenemos delante es una economía mundial en la que gran número de economías nacionales producen bienes manufacturados para exportar al mercado de los países de la OCDE. Con algunas excepciones importantes (a saber, Corea, Brasil, México), estos países, sin embargo, no pueden ser considerados como "recientemente industrializados": el proceso de "industrialización" es principalmente

consecuencia de la reubicación de la producción en zonas de mano de obra barata en el tercer mundo. Este proceso está condicionado por la reorganización de la economía global.

En otras palabras, la descentralización y reubicación de la producción material al tercer mundo fueron motivadas principalmente por las enormes diferencias en los salarios entre países ricos y pobres. Estos últimos se han convertido en productores de "bienes industriales básicos". En este contexto, la sobreproducción de bienes industriales tiene lugar a nivel mundial, deprimiendo los precios de los bienes manufacturados de la misma manera que lo hace el proceso de sobreoferta que caracteriza a los mercados de bienes primarios. Desde este punto de vista, la entrada de China en la división internacional del trabajo a finales de los setenta ha exacerbado las estructuras de la sobreoferta.

EL CRECIMIENTO ORIENTADO A LA IMPORTACIÓN EN LOS PAÍSES RICOS

La economía rentista se apropia de las ganancias de los productores directos. La producción material tiene lugar foráneamente en una economía tercermundista de mano de obra barata, pero los mayores aumentos en el PIB se registran en el país importador. El crecimiento del PIB en los países ricos está, en este sentido, "orientado a la importación": las importaciones de mano de obra barata (en artículos primarios y manufacturas) generan un aumento correspondiente del ingreso en la economía de servicios de los países ricos.

La aplicación del programa de ajuste estructural (PAE) promovido por el FMI en gran número de países individuales contribuye también a la consolidación de esta economía de tipo rentista: cada país está obligado a producir (en competencia con otros países en vías de desarrollo) la misma gama de mercancías básicas primarias e industriales para el mercado mundial. Mientras que la competencia caracteriza a la producción material de mercancías en los países en vías de desarrollo, los canales de comercio internacional, así como los mercados comerciales mayoristas y minoristas en los países avanzados, están controlados por los monopolios corporativos. Esta dualidad entre la competencia y el monopolio es un rasgo fundamental del sistema de intercambio global. La competencia feroz en-

tre los "productores directos", situados a menudo en países diferentes bajo una estructura de sobreoferta global, contrasta con una estructura de control monopolista del comercio internacional, patentes industriales, comercio de mayoreo y de menudeo, etc., por un pequeño número de corporaciones globales.

LA APROPIACIÓN DEL EXCEDENTE POR LOS NO PRODUCTORES

Debido a que los bienes producidos en los países en vías de desarrollo se importan a precios internacionales muy bajos, el "valor" registrado de las importaciones de la OCDE, provenientes de los países en vías de desarrollo, es relativamente pequeño (esto es, en comparación con el comercio total así como en relación con el valor de la producción nacional). Pero tan pronto como estas mercancías entran en los canales de mayoristas y minoristas de los países ricos, su precio se multiplica varias veces. El precio al por menor de los artículos producidos en el tercer mundo a menudo es diez veces más elevado que el precio al que el artículo fue importado. Así se crea artificialmente un "valor agregado" correspondiente dentro de la economía de servicios de los países ricos sin que tenga lugar ninguna producción material. Este "valor" es añadido al PIB del país rico. Por ejemplo, el precio al por menor del café es de siete a diez veces más elevado que el precio internacional (FOB), y aproximadamente 20 veces el precio pagado al cafetalero del tercer mundo (véase el cuadro 5.1).

En otras palabras, los comerciantes, intermediarios, mayoristas y minoristas se apropian el grueso de las ganancias de los productores primarios. Un proceso similar de apropiación existe con respecto a la mayor parte de las mercancías producidas en localidades foráneas de mano de obra barata. Por ejemplo, el 60% del zapato que se vende en Estados Unidos se produce en China. El ingreso por la venta de zapatos en Estados Unidos no revierte en los sueldos de los trabajadores chinos, que reciben una paga extremadamente baja (véase el recuadro), sino en el capital corporativo norteamericano que coadyuva a la expansión del PIB de Estados Unidos.

CUADRO 5.1. CAFÉ: JERARQUÍA DE PRECIOS (*en dólares*)

	Precio	*Proporción acumulativa del valor agregado (%)*
Directo del productor	0.25-0.50	4.00
precio internacional FOB	1.00	10.00
Final al por menor	10.00	100.00

FUENTE: Ejemplo basado en precios *fob* aproximados (principios de los ochenta) y precios al por menor en el mercado norteamericano (principios de los noventa). Los precios directos del productor varían considerablemente de un país a otro.

UN EJEMPLO: LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

En el comercio internacional de las prendas de vestir, por ejemplo, un diseñador de moda internacional compra una camisa diseñada en París por tres o cuatro dólares en Bangladesh, Vietnam o Tailandia.[5] El producto será luego revendido en el mercado europeo a un precio de cinco a diez veces superior: el PIB del país occidental importador aumenta sin que haya tenido lugar ninguna producción material.

Datos recopilados en la planta en Bangladesh nos permiten identificar a grandes rasgos la estructura de costos y la distribución de ganancias en la industria exportadora del vestido: el precio de fábrica de una docena de camisas es de 36 a 40 dólares (FOB).[6] Tanto el equipo como las materias primas son importados. Las camisas se venden al por menor, aproximadamente, a 22 dólares la unidad o a 266 dólares por docena en Estados Unidos (véase el cuadro 5.2). La mano de obra femenina e infantil en las fábricas de ropa en Bangladesh se paga aproximadamente a 20 dólares por mes, al menos 50 veces por debajo de los salarios pagados a trabajadores del vestido en Estados Unidos. Menos del 2% del valor total de la mercancía corresponde a los productores directos (los trabajadores del vestido) en forma de salarios. Otro 1% corresponde, como utilidad industrial, al productor "competidor" independiente del tercer mundo.

El incremento bruto entre el precio de fábrica y el precio al deta-

[5] El impuesto al proceso de exportación en Ciudad Ho Chi Minh era de 80 centavos de dólar por camisa (enero de 1991).

[6] Entrevistas del autor realizadas en la industria del vestido de Bangladesh, 1992.

SALARIOS EN FÁBRICAS CHINAS QUE PRODUCEN PARA MINORISTAS NORTEAMERICANOS

"Las mujeres que laboran en la producción de zapatos Timberland en la Fábrica Pou Yuen V, en la ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong, trabajan 14 horas al día. La fábrica emplea jovencitas de 16 y 17 años a 22 centavos la hora (16 dólares por una semana de 70 horas). En un taller que producía bolsas de mano marca Kathie Lee [Gifford] para Wal-Mart, el salario más alto era de siete dólares a la semana, u ocho centavos la hora. La paga para el 14% más calificado de los obreros en Qin Shi era 18 dólares al mes."[1]

En otro taller productor de estéreos para automóviles, a las jovencitas "que pasan nueve horas al día, seis días de la semana, inclinadas ante el microscopio soldando las partes delicadas del estéreo" se les pagaba 31 centavos la hora (*ibid.*).

"Las compañías [que operan en China] contratan únicamente mujeres solteras de 17 a 25 años; después, cuando ya no pueden más, son remplazadas por otra camada de mujeres jóvenes", observaron los investigadores... "Nadie dura mucho tiempo laborando en estas condiciones, así que se van o las lanzan cuando cumplen 26 años. En cualquier caso, son remplazadas por otro grupo de jóvenes, y el trabajo sigue..." Y si alguna se embaraza, la "regla no escrita" es que "será despedida" (*ibid.*).

[1] Jon E. Dougherty, "Brutal Chinese working conditions benefit Wal-Mart", WorldNetDaily.com, septiembre de 2000).

lle (US$266 – 38 = 228) se divide esencialmente en tres componentes:

1] ganancia comercial a los distribuidores internacionales, mayoristas y minoristas, incluyendo a los propietarios de los centros comerciales, etc. (esto es, la mayor porción del valor agregado);

2] el costo real de circulación (transporte, almacenamiento, etcétera);

3] los derechos aduanales que se cobran sobre las mercancías al momento de entrar en los mercados de países desarrollados y los impuestos al valor agregado (IVA) que se cobran en el punto de venta al menudeo de la mercancía.

Si bien el precio al menudeo es siete veces el precio de fábrica, la ganancia no se revierte necesariamente en los pequeños minoristas de los países desarrollados. Gran parte del excedente generado en los niveles del comercio mayorista y minorista es apropiado, en forma de renta y pagos de beneficios, por los poderosos intereses comerciales, de bienes raíces y bancarios.

CUADRO 5.2. ESTRUCTURA DE COSTOS. EXPORTADOR DE ROPA DEL TERCER MUNDO (*en dólares*)

Materiales y accesorios (importados)	27
Depreciación de equipo	3
Salarios	5
Ganancia industrial neta	3
Precio de fábrica (una docena de camisas)	38
Incremento bruto	228
Precio al por menor (por docena) en los países avanzados	266
Precio al por menor, incluyendo impuesto a la venta (10%)	292.60

FUENTE: Basado en la estructura de costos y precios de venta de una fábrica de ropa en Bangladesh, 1992.

Vale la pena señalar que el flujo de importaciones desde el tercer mundo constituye también un medio de generar ingresos fiscales para el estado en los países ricos, en forma de ventas o impuestos al valor agregado. En Europa occidental, el IVA está muy por encima del 10% del precio de menudeo. El proceso de recaudación del impuesto depende, por consiguiente, de la estructura del intercambio desigual de mercancías: en el ejemplo de la industria del vestido, la tesorería de los países ricos se apropia casi tanto como el país productor, y aproximadamente cuatro veces la suma que corresponde a los trabajadores del vestido en el país productor (véase el cuadro 5.3).

SALARIOS Y COSTOS LABORALES EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

En la economía global, los servicios de mano de obra son comprados por el capital en varios mercados laborales separados y diferentes, es decir, una parte de los desembolsos de mano de obra asociados al transporte, almacenamiento, comercio mayorista y minorista se efectúan en el mercado de mano de obra de "altos salarios" de los países ricos. Por ejemplo, los vendedores al detalle en los países desarrollados reciben un salario diario que es al menos 40 veces ma-

CUADRO 5.3. MANUFACTURAS DEL TERCER MUNDO.
DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS

Distribución de las ganancias: una docena de camisas producidas en una fábrica de mano de obra barata del tercer mundo	*Cantidad en dólares*	*Porcentaje del precio de venta*
1. Ganancias acumuladas en un país del tercer mundo	8.00	2.7
1.1. Salarios	5.00	1.7
1.2. Ganancia industrial neta	3.00	1.0
2. Ganancias acumuladas en un país desarrollado	284.60	97.3
2.1. Materiales, accesorios y equipo importados de los países ricos	30.00	10.2
2.2. Transportes y comisiones	4.00	1.4
2.3. Tarifas aduanales en precios *fob*	4.00	1.4
2.4. Salarios al personal de las ventas al por mayor y al por menor	10.00	3.4
2.5. Ganancia comercial bruta, renta y otros ingresos de los distribuidores	210.00	71.8
2.6. Impuestos a las ventas (10% del precio al por menor), acumulados en la tesorería de un país desarrollado	26.60	9.1
3. Precio al por menor total (incluyendo impuestos a las ventas)	292.60	100.0

NOTA: Para los fines de este ejemplo, los márgenes por transporte y comisiones, tarifas aduanales e impuestos a las ventas se establecieron en un nivel realista (en concordancia con la información disponible). Sin embargo, no se dispone de información sobre los costos de la mano de obra al por mayor ni al por menor. En este ejemplo se asumió que los costos de la venta al por menor de una docena de camisas son aproximadamente equivalentes al 25% del precio *fob* (diez dólares).

yor que el del trabajador fabril en Bangladesh. Una porción comparativamente mucho mayor de los costos totales de mano de obra (en dólares) de producir y distribuir la mercancía beneficiará, por consiguiente, a los trabajadores del sector servicios en los países de altos salarios.

Sin embargo, no hay relación de "intercambio desigual" entre los obreros fabriles en Bangladesh y el personal minorista en Estados Unidos: la evidencia disponible confirma que los empleados de servicios en los países ricos son muy mal pagados. Además, sus salarios

(que constituyen un valor agregado *bona fide* –esto es, un “costo real”) constituyen un porcentaje relativamente pequeño de las ventas totales.

En nuestro ejemplo, los costos de mano de obra asociados a la producción de una docena de camisas en Bangladesh es de cinco dólares, que corresponden a 25 o 30 horas de trabajo (a 15 a 20 centavos la hora). Asumiendo que un trabajador minorista en Estados Unidos gana cinco dólares por hora y vende media docena de camisas por hora, los costos de mano de obra de producir una docena de camisas (cinco dólares) es la mitad del costo de vender al por menor (diez dólares). Este último, sin embargo, sigue representando un porcentaje relativamente pequeño del precio total (292.60 dólares incluyendo el impuesto sobre la venta): es decir, el grueso del excedente se lo apropian en forma de utilidad por mercadeo y renta los no productores en los países ricos (véase el cuadro 5.2).

Mientras que las empresas del tercer mundo operan en condiciones que se aproximan a la “competencia perfecta”, los compradores de sus productos son compañías comerciales y firmas multinacionales. La utilidad industrial neta que corresponde al empresario “competitivo” del tercer mundo (tres dólares) es del orden del uno por ciento del valor total de la mercancía. Como las fábricas del tercer mundo operan en una economía global marcada por la sobreoferta, los precios de fábrica tienden a declinar, empujando los márgenes de utilidad industrial hasta un escueto mínimo. Este proceso facilita la recaudación y apropiación de excedentes por poderosos comerciantes y distribuidores internacionales.

SECTORES MÓVILES Y SECTORES INMÓVILES

La reubicación de la producción material hacia zonas de mano de obra barata no se limita a unas cuantas áreas de la manufactura ligera. Abarca todas las áreas de la producción material que son internacionalmente “móviles”. Los “sectores móviles” se definen como sectores de actividad que pueden ser trasladados de un punto geográfico a otro, ya sea mediante inversiones foráneas en un país de mano de obra barata o bien, subcontratando la producción con un productor independiente del tercer mundo. En contraste, los “sectores inmóviles” de los países avanzados incluyen actividades

que por su propia naturaleza no pueden ser reubicadas internacionalmente: construcción, obras públicas, agricultura y la mayor parte de la economía de servicios.

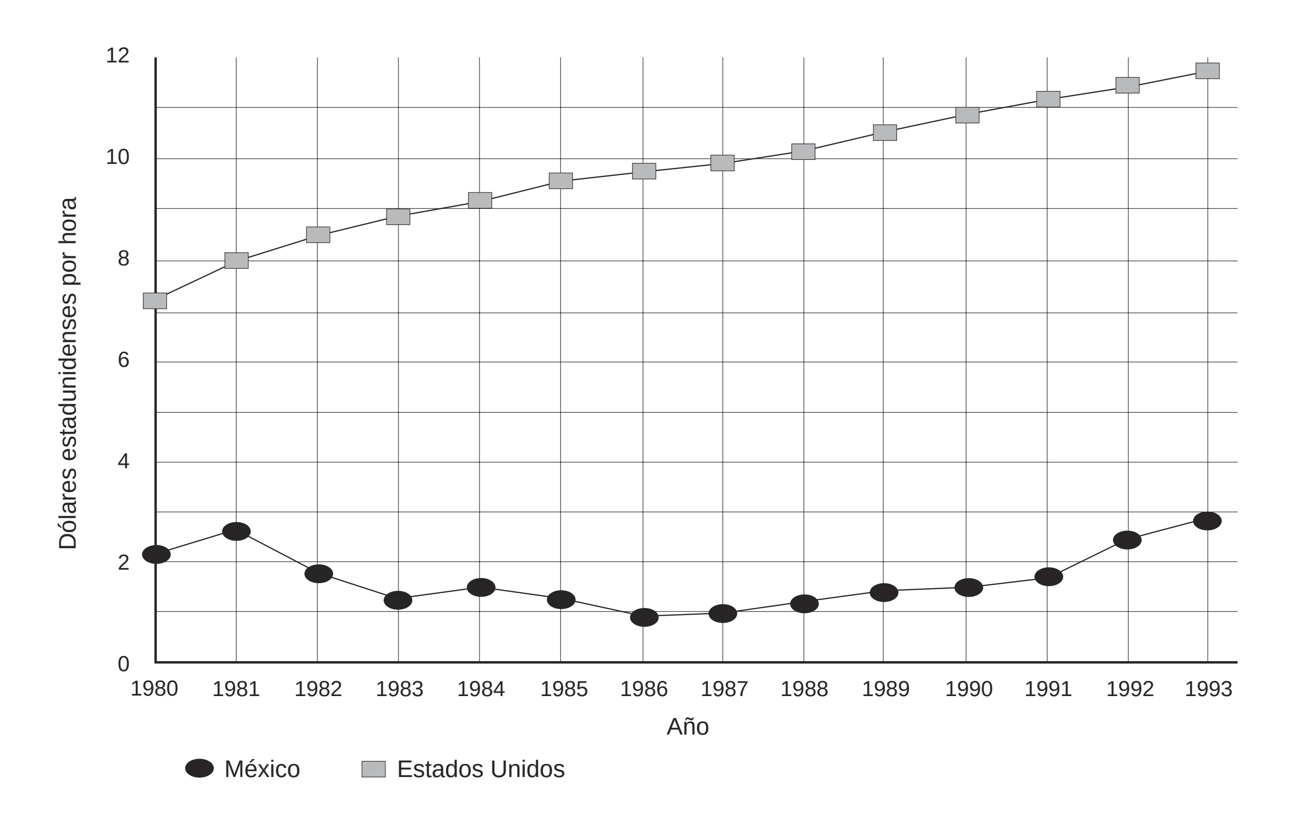
LA INMOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA

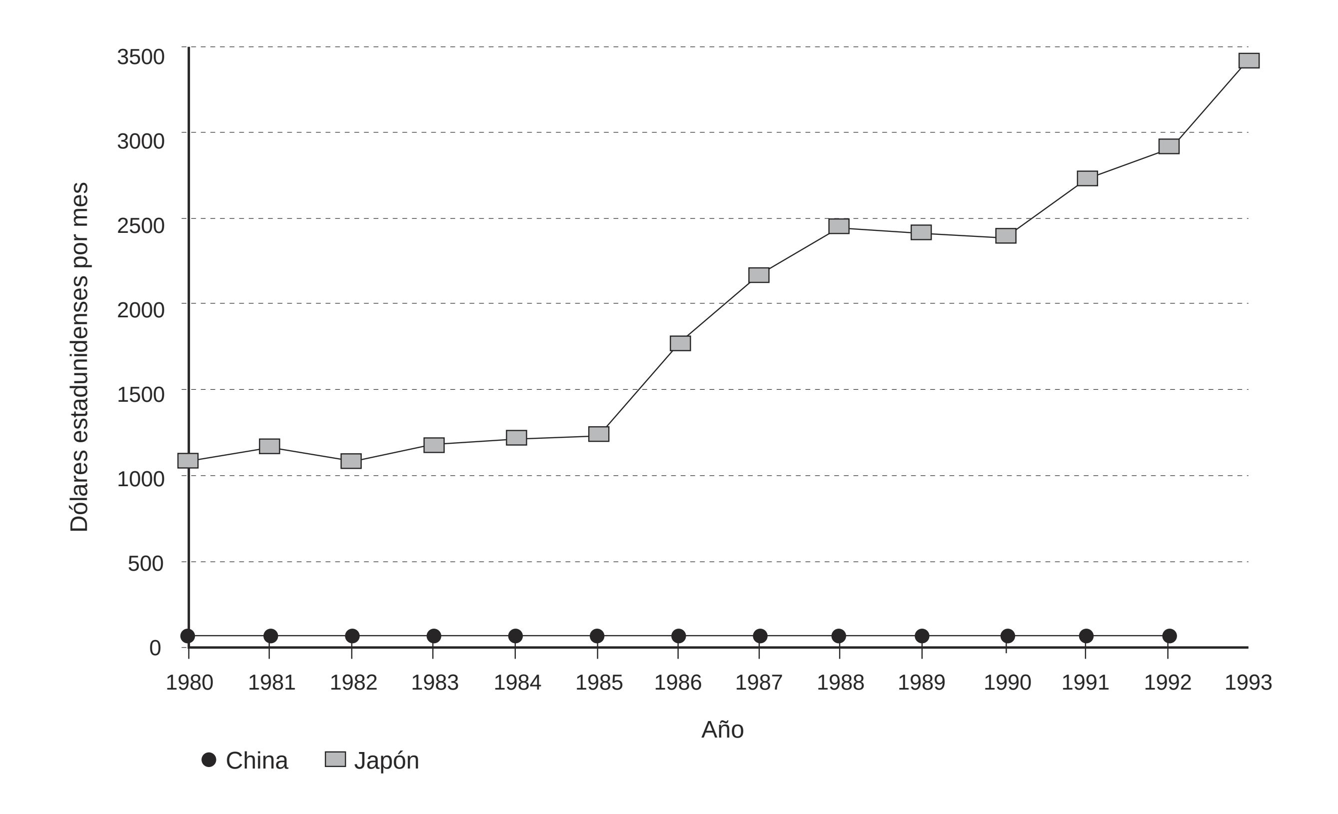
El "capital móvil" se traslada a "reservas de mano de obra inmóvil". Mientras que el capital se mueve "libremente" de un mercado laboral a otro, a la mano de obra se le impide cruzar fronteras internacionales. Los mercados de mano de obra nacionales son compartimentos cerrados con fronteras estrechamente vigiladas. El sis tema se basa en conservar las reservas nacionales de mano de obra dentro de sus respectivas fronteras.

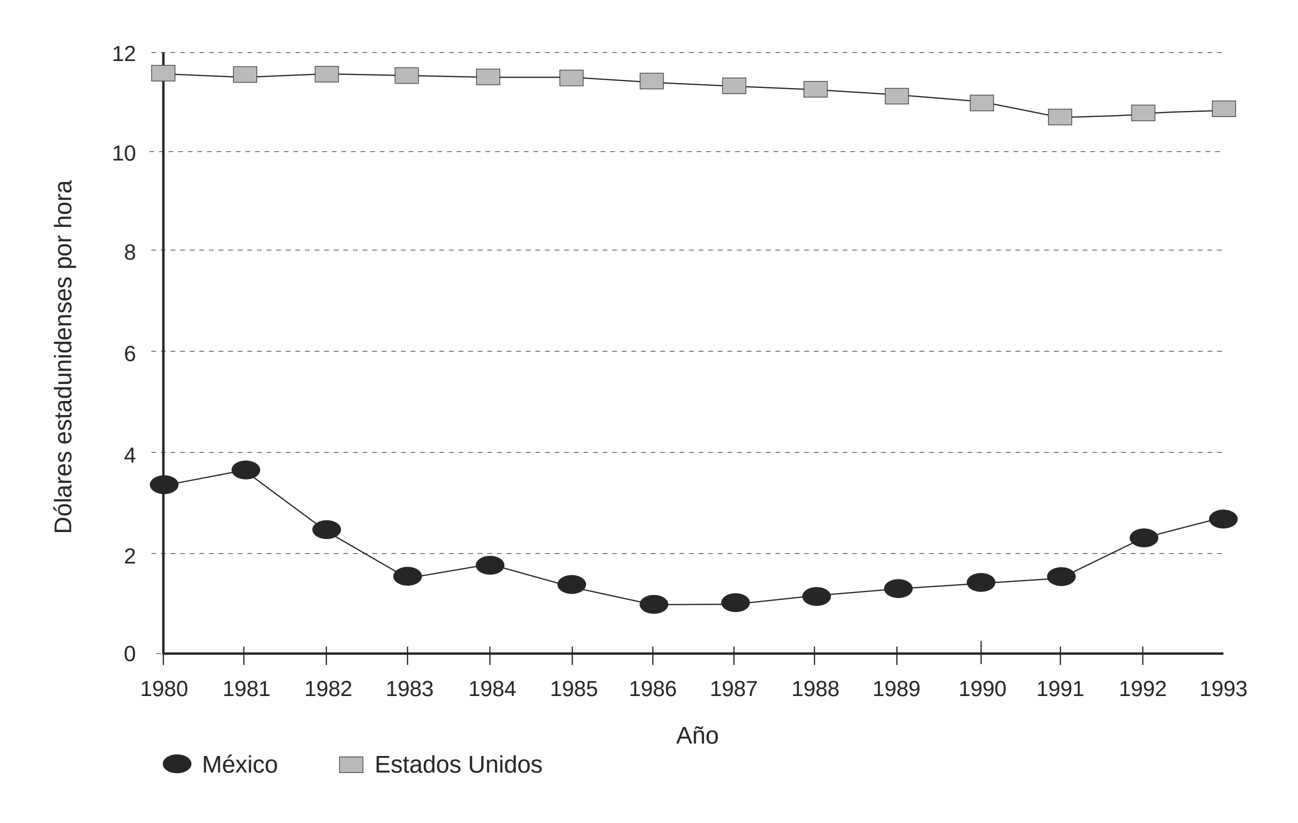
En el TLC, por ejemplo, el movimiento de mexicanos a través de la frontera entre México y Estados Unidos estará estrechamente restringido con objeto de conservar la mano de obra mexicana "dentro de los límites de la economía de mano de obra barata". Sin embargo, en actividades económicas tales como la construcción, las obras públicas y la agricultura, que por su propia naturaleza no son internacionalmente "móviles", el acuerdo permite el traslado selectivo de una mano de obra contratada temporalmente. Las exportaciones de fuerza laboral (hacia estas actividades "inmóviles") procedentes tanto de México como del Caribe, cumplen la finalidad de deprimir los salarios pagados a los trabajadores americanos y canadienses así como la de socavar el papel de los sindicatos.

LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN NO MATERIAL

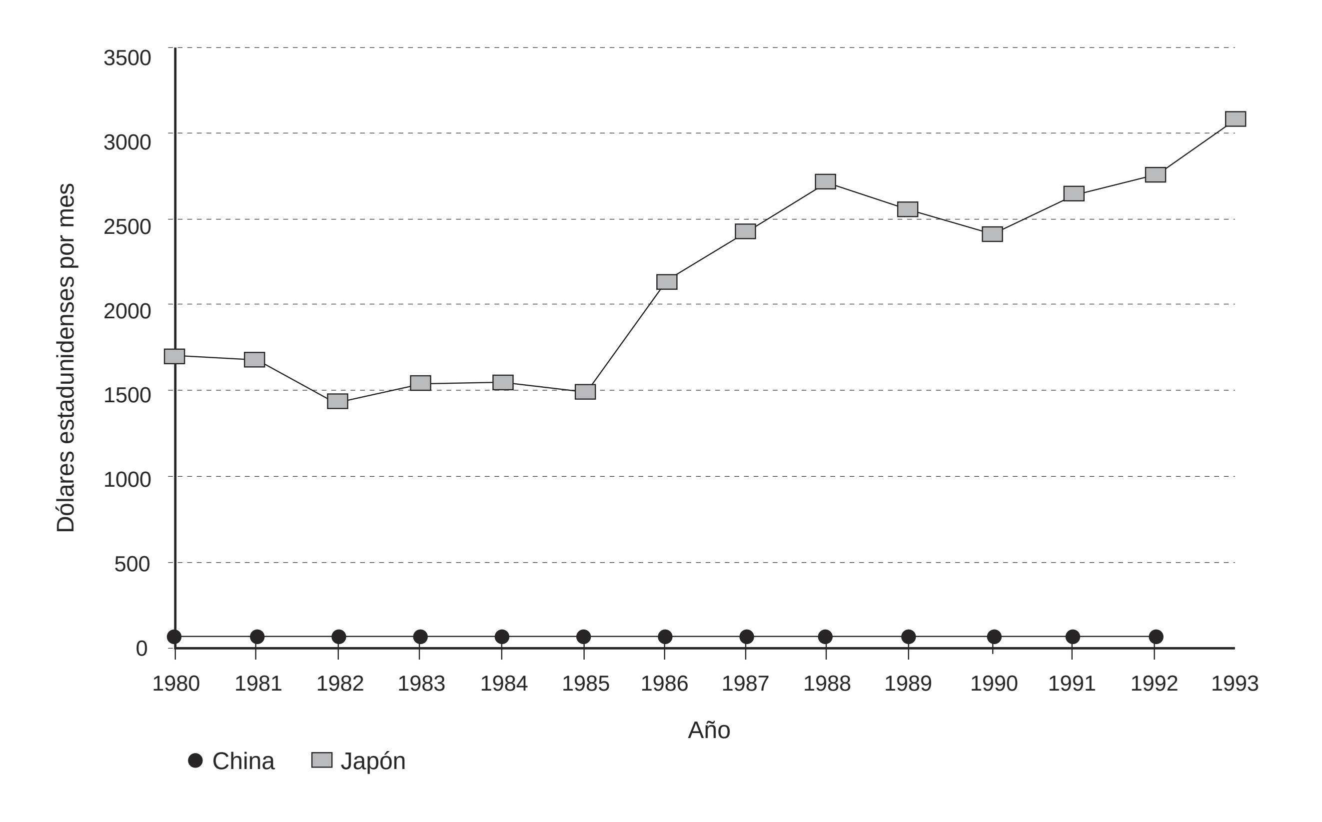
Con la reubicación de su base industrial en los países en vías de desarrollo la estructura de la industria de los países avanzados se modifica fundamentalmente. Y con la desaparición progresiva de la producción material, las nuevas industrias en sistemas de información, telecomunicaciones, etc., se convierten en los nuevos polos de desarrollo. Los antiguos centros industriales de ladrillos rojos han quedado obsoletos: las fábricas están clausuradas. La producción material de la manufactura (que constituye un sector


12
10
8
6
4
2
0
Dólares estadunidenses por hora
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Año
México
Estados Unidos


3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Dólares estadunidenses por mes
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Año
China
Japón



12
10
8
6
4
2
0
Dólares estadunidenses por hora
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Año
México
Estados Unidos


3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Dólares estadunidenses por mes
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Año
China
Japón

"móvil") ha sido reubicada en las economías de bajos salarios. Un considerable sector de la fuerza laboral en los países desarrollados está asociado ahora con la economía de servicios y "los sectores no materiales" de la actividad económica. En contraste, el porcentaje de mano de obra en la producción de artículos materiales ha bajado dramáticamente.

La dualidad entre la producción "material" y la "no material" y entre sectores "móviles" e "inmóviles", respectivamente, es central para la comprensión de los cambios en la estructura de la economía global. Este crecimiento dinámico de los nuevos sectores de alta tecnología no es incompatible con la existencia de una recesión global. El capital corporativo internacional posee y controla los diseños, la tecnología y el *know-how*. La "producción no material" y el control de los derechos de propiedad intelectual subordinan a la "producción material". El excedente de la producción material industrial se lo apropian los sectores no materiales.

EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

A fines del siglo XX se han presenciado progresos de largo alcance en telecomunicaciones, computación e ingeniería de producción. Lo anterior constituye un impulso vital para el proceso de reubicación industrial: los centros de toma de decisiones corporativas están en contacto instantáneo con puntos manufactureros y plantas de ensamble alrededor del mundo. Las innovaciones de alta tecnología de los ochenta y noventa representan, en el capitalismo global, un poderoso instrumento de control y supervisión empresarial operando a nivel mundial. La empresa global minimiza los costos de mano de obra a nivel mundial gracias a su habilidad para vincularse a (o subcontratar) puntos de producción con mano de obra barata alrededor del mundo: se despide a los trabajadores en un país (de altos salarios), se transfiere la producción a otro país (de bajos salarios), un pequeño número de trabajadores se afana durante largas horas y recibe un salario sustancialmente menor.

Además, la revolución tecnológica, al tiempo que abre nuevas áreas de trabajo profesional en los países avanzados, reduce significativamente los requerimientos globales de mano de obra en la industria. Se abren nuevas líneas ensambladoras robotizadas y, al mis-

mo tiempo, se despide a los trabajadores de las ya existentes. Por lo tanto, el cambio tecnológico, combinado con el desplazamiento y la reestructuración de la empresa, tiende a favorecer una nueva oleada de fusiones y adquisiciones corporativas en industrias claves.

LA REUBICACIÓN DE LA ECONOMÍA DE SERVICIOS

Con la revolución en las telecomunicaciones globales y la tecnología de la información, algunas actividades relacionadas con los servicios en los países capitalistas avanzados se transfieren a zonas de mano de obra barata en el tercer mundo y Europa oriental. En otras palabras, una parte de la economía de servicios ha dejado de ser una "actividad inmóvil". Los establecimientos comerciales y financieros pueden reducir su personal en una variedad de actividades de oficina: los sistemas de contabilidad de empresas grandes, por ejemplo, ahora pueden ser desincorporados y administrados, con ahorros importantes, mediante conexiones de computadoras y correo electrónico en los países en vías de desarrollo, donde se puede contratar a contadores calificados y especialistas en computación por menos de cien dólares al mes. De forma similar, el procesamiento de datos y palabras pueden ser rápidamente subcontratados (por ejemplo, por correo electrónico) por personal de oficina a dos o tres dólares diarios en Filipinas, y así sucesivamente. Con más del 70% de la fuerza laboral de los países capitalistas avanzados en el sector servicios, el impacto potencial de este proceso de reubicación en los salarios y el empleo (para no mencionar las repercusiones sociales) es de largo alcance.

Esta página dejada en blanco al propósito.

II

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Esta página dejada en blanco al propósito.

6

SOMALIA: LAS CAUSAS REALES DEL HAMBRE

Bajo los auspicios de la ONU, Estados Unidos inició en 1993 la "Operación restauremos la esperanza". El objetivo era salir al rescate de la población empobrecida. Se dieron como causas "oficiales" del hambre la sequía, la desertificación y la guerra civil. Nunca se mencionaron las fatales reformas económicas impuestas por los acreedores externos de Somalia durante los años anteriores a la crisis.

LA INTERVENCIÓN DEL FMI A PRINCIPIOS DE LOS OCHENTA

Somalia era una economía pastoral basada en el "intercambio" entre los pastores nómadas y los pequeños agricultores.[1] Los pastores trashumantes representaban el 50% de la población. En los setenta, los programas de reasentamiento condujeron al desarrollo de un sector de pastoreo comercial de tamaño considerable. Los rebaños contribuían con un 80% a los ingresos por exportaciones hasta 1983.[2] A pesar de las sequías recurrentes, Somalia siguió siendo virtualmente autosuficiente en alimentos hasta los años setenta.[3]

La intervención del FMI y del Banco Mundial a principios de los ochenta contribuyó a exacerbar la crisis de la agricultura somalí. Las reformas económicas socavaron la frágil relación de intercambio entre la "economía nómada" y la "economía sedentaria", esto es,

[1] El decenio de los setenta fue testigo del empobrecimiento de los pastores nómadas, mientras la privatización de los pozos y tierras de pastoreo apoyaba el enriquecimiento de los intereses ganaderos comerciales. Como en otros países en vías de desarrollo, las cosechas de alto rendimiento para exportación ocuparon las mejores tierras, debilitando así la agricultura alimentaria y al pequeño campesinado.

[2] Desde mediados de los setenta, hubo también un incremento en las remisiones de dinero de los trabajadores somalíes en los estados del Golfo, estimuladas por el auge petrolero.

[3] Casi no hubo ayuda alimentaria a principios de los años setenta.

entre pastores y pequeños agricultores que realizaban transacciones en dinero así como el tradicional trueque. Se impuso al gobierno un programa de austeridad muy estricto, principalmente con el objeto de liberar los fondos requeridos para pagar el servicio de la deuda de Somalia con el Club de París. De hecho, una gran porción de la deuda externa estaba en manos de las instituciones financieras con sede en Washington.[4] Según el informe de una misión de la OIT: "de los principales depositarios del servicio de la deuda de Somalia, solamente el Fondo se rehúsa a renegociar [...] De hecho está ayudando a financiar un programa de ajuste, uno de cuyos principales objetivos es el de pagar al mismo FMI."[5]

HACIA LA DESTRUCCIÓN DE LA AGRICULTURA ALIMENTARIA

El programa de ajuste estructural reforzó la dependencia de Somalia de los granos importados. Desde mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta, la ayuda alimentaria aumentó quince veces, a una tasa de 31% anual.[6] Combinada con el aumento en las importaciones comerciales, esta entrada de excedentes de trigo y arroz baratos, que se vendieron en el mercado nacional, provocó el desplazamiento de los productores locales así como un cambio de ciento ochenta grados en los patrones de consumo, en detrimento de las cosechas tradicionales (maíz y sorgo). A la devaluación del chelín somalí, impuesta por el FMI en junio de 1981, siguieron otras devaluaciones periódicas, causando alzas en los precios de los combustibles, fertilizantes e insumos agrícolas. El impacto en los productores agrícolas fue inmediato, particularmente en la agricultura de temporal pero también en las áreas de cultivo de riego. El poder de compra urbano se redujo dramáticamente, los programas de extensión del gobierno fueron recortados, la infraestructura se derrumbó, la desregulación del mercado de granos y la afluencia de la "ayuda alimen-

[4] El Banco Mundial y el FMI tenían el 20% de la deuda somalí durante el periodo 1983-1985 (véase Organización Internacional del Trabajo, *Generating employment and incomes in Somalia*, Jobs and Skills Programme for Africa, Addis Abeba, 1989, p. 5).

[5] *Ibid.*, p. 16.

[6] Para mediados de los ochenta se excedía en un 35% del consumo de alimentos (véase Hossein Farzin, "Food aid: Positive and negative effects in Somalia?", *The Journal of Developing Areas,* enero de 1991, p. 265).

taria" condujeron al empobrecimiento del campesinado.[7]

También, durante este periodo, gran parte de las mejores tierras agrícolas fueron expropiadas por burócratas, oficiales del ejército y comerciantes vinculados al gobierno.[8] En vez de promover la producción de alimentos para el mercado nacional, los donadores estimulaban el cultivo, en las tierras mejor irrigadas, de los frutos, vegetales, oleaginosas y algodón que llamaban "de alto valor agregado" para la exportación.

LA CAÍDA DE LA ECONOMÍA GANADERA

Ya desde principios de los ochenta, los precios de los medicamentos importados para el ganado aumentaron como resultado de la depreciación de la moneda. El Banco Mundial alentaba la exacción de cuotas por el uso de servicios veterinarios a los pastores nómadas, incluyendo la vacunación de los animales. Esto promovió un mercado privado para medicamentos veterinarios. Las funciones que desempeñaba el Ministerio de Ganadería fueron desapareciendo para que los servicios de laboratorio veterinario que prestaba fuesen plenamente financiados sobre una base de recuperación de costos. Según el Banco Mundial:

> los servicios veterinarios son esenciales para el desarrollo de la ganadería en todas las áreas, y pueden ser proporcionados principalmente por el sector privado [...] Puesto que son pocos los veterinarios privados que elegirían practicar en las remotas áreas de pastoreo, la atención para la mejoría del ganado dependerá también de "paraveterinarios" pagados con el producto de la venta de los medicamentos.[9]

[7] Según la OIT, la Corporación para el Desarrollo Agrícola estatal (Agricultural Development Corporation [ADC] ha representado históricamente un papel importante al respaldar en la puerta de la granja los altos precios para los agricultores: "la ADC alentaba también a producir maíz y sorgo en grandes cantidades, no en pequeñas cantidades" (OIT, *op. cit.*, p. 9). Los datos del Banco Mundial, por otra parte, sugieren un aumento en la producción de maíz y sorgo tras la desregulación de los precios de los granos en 1983.

[8] Véase African Rights, *Somalia, operation restore hope: A preliminary assessment*, Londres, mayo de 1993, p. 18.

[9] Banco Mundial, *Sub-Saharan Africa, From crisis to sustainable growth*, Washington, D.C., 1989, p. 98.

La privatización de la salud veterinaria estuvo acompañada de la ausencia de alimentos de emergencia para el ganado durante los periodos de sequía, la comercialización del agua y el descuido tanto en el uso del agua como en la conservación de las tierras de pastoreo. Los resultados eran predecibles: los rebaños se vieron diezmados al igual que los pastores, que representaban el 50% de la población del país. El "propósito oculto" de este programa era eliminar a los pastores nómadas dedicados a la economía de trueque tradicional. Según el Banco Mundial, los "ajustes" en el tamaño de los rebaños son beneficiosos, de todos modos porque los pastores nómadas en el África subsahariana son considerados, miopemente, como causantes de la degradación ambiental.[10]

Indirectamente, el desmantelamiento de los servicios veterinarios también sirvió a los intereses de los países ricos: en 1984, las exportaciones de ganado de Somalia a Arabia Saudita y los países del Golfo se desplomaron cuando las importaciones de carne de res de Arabia Saudita fueron recanalizadas a abastecedores de Australia y la Comunidad Europea. La prohibición impuesta al ganado somalí por Arabia Saudita no fue levantada, sin embargo, una vez que la epidemia de peste bovina hubo sido eliminada.

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO

La reestructuración de los gastos del gobierno, bajo la supervisión de las instituciones de Bretton Woods, desempeñó también un papel crucial en la destrucción de la agricultura alimentaria. La infraestructura agrícola se desplomó y los gastos recurrentes en agricultura se redujeron en cerca del 85% en relación con mediados de los setenta.[11] El FMI prohibió al gobierno somalí movilizar sus recursos nacionales. Se establecieron duras metas para el déficit presupuestario. Además, los donadores daban una creciente "ayuda", no en forma de importaciones de capital y equipos, sino en forma de "ayuda alimentaria". Esta última era a su vez vendida por el gobierno en el mercado local y el producto de estas ventas (esto es, los llamados "fondos complementarios") se empleaba en cubrir los costos

[10] *Ibid.*, pp. 98-101. El excesivo pastoreo es dañino para el medio ambiente, pero el problema no puede resolverse recortando el sustento de los pastores.

[11] De 1975 a 1989.

nacionales de los proyectos de desarrollo. Desde principios de los ochenta "la venta de la ayuda alimentaria" se convirtió en la fuente principal de ingresos para el estado, permitiendo así a los donadores tomar el control de todo el proceso presupuestario.[12]

Las reformas económicas estuvieron marcadas por la desintegración de los programas de salud y educación.[13] Para 1989, los gastos en salud habían descendido en un 78% en relación con su nivel de 1975. Según las cifras del Banco Mundial, el nivel de gastos recurrentes en educación en 1989 fue de cerca de 4 dólares por año para cada alumno de escuela primaria, comparado con alrededor de 82 dólares en 1982. De 1981 a 1989, las inscripciones escolares se redujeron en un 41% (a pesar del notable aumento de la población en edad escolar), los libros de texto y los materiales de enseñanza desaparecieron de las aulas, los edificios escolares se deterioraron y casi una cuarta parte de las escuelas primarias tuvieron que cerrar. Los salarios de los maestros descendieron a niveles abismalmente bajos.

El programa del FMI-Banco Mundial condujo a la economía somalí a un círculo vicioso: la aniquilación de los rebaños empujó a los pastores nómadas a la hambruna, y esto a su vez repercutió en los productores de granos que vendían o trocaban su grano por ganado. La trama social entera de la economía pastoral se desbarató. La caída de los ingresos en divisas por las cada vez menores exportaciones de ganado y las remesas (de los trabajadores somalíes en los países del Golfo) repercutieron en la balanza de pagos y en las finanzas públicas del estado, conduciendo a la quiebra de los programas económicos y sociales del gobierno.

Los pequeños agricultores fueron desplazados como resultado del *dumping* del grano estadunidense subsidiado en el mercado nacional, combinado con el alza en el precio de los insumos agrícolas. El empobrecimiento de la población urbana condujo también a una contracción del consumo de alimentos. A su vez, al congelarse el apoyo estatal a las áreas de irrigación se redujo la producción en las granjas estatales. Estas últimas tuvieron que ser abandonadas o privatizadas bajo la supervisión del Banco Mundial.

[12] Los fondos complementarios de los programas de asistencia en mercancías diversas eran la única fuente de financiamiento para los proyectos de desarrollo. Los gastos más recurrentes dependían también de los donadores.

[13] La asignación de los gastos de defensa permaneció elevada en términos porcentuales pero decreció en términos reales.

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, los salarios reales del sector público, en 1989, habían disminuido 90% en relación con los de mediados de los setenta. Los salarios promedio en el sector público habían caído a tres dólares al mes, llevando a la inevitable desintegración de la administración civil.[14] Un programa para rehabilitar los salarios de los empleados públicos fue propuesto por el Banco Mundial (en el contexto de una reforma del servicio civil de carrera), pero este objetivo debía ponerse en marcha con la misma partida presupuestaria despidiendo a cerca del 40% de los empleados del sector público y eliminando los aumentos salariales.[15] Dentro de este plan, la administración pública se habría reducido a sólo 25 mil empleados para 1995 (en un país de seis millones de personas). Varios acreedores manifestaron notable interés en financiar los costos asociados con la reducción de la administración pública.[16]

Frente al desastre inminente, la comunidad de acreedores internacionales no hizo el menor intento de rehabilitar la infraestructura económica y social del país, ni de recuperar el nivel del poder de compra o reconstruir la administración pública: las medidas macroeconómicas de ajuste, propuestas por los acreedores en el año previo al colapso del gobierno del general Siad Barre, en enero de 1991 (en el clímax de la guerra civil), exigían recortes aún más radicales del gasto público, la reestructuración del banco central, la liberalización del crédito (lo que virtualmente aniquiló al sector privado) y la liquidación y despojo de la mayoría de las empresas estatales.

En 1989, las obligaciones del servicio de la deuda representaban el 194.6% de los ingresos de exportación. El crédito del FMI se canceló debido a que los intereses atrasados de Somalia no habían sido cubiertos. El Banco Mundial había aprobado un préstamo de 70 millones de dólares para ajuste estructural en junio de 1989, el cual fue congelado pocos meses después debido al deficiente desempeño macroeconómico del país.[17] Los atrasos con los acreedores tu-

[14] Los salarios del sector público constituían sólo el 0.5% del PIB en 1989.

[15] Reducción de empleados públicos durante un periodo de cinco años (1991-1995).

[16] Una reducción del 40% en el empleo del sector público durante un periodo de cinco años (1991-1995).

[17] Se realizó la primera entrega de este crédito IDA (ASAP II); la segunda se congeló en 1990. El crédito fue cancelado en enero de 1991, tras la caída del gobierno de Siad Barre.

vieron que ser saldados antes de la concesión de nuevos préstamos y de la renegociación de la deuda. Somalia quedó atrapada en la camisa de fuerza del servicio de la deuda y el ajuste estructural.

EL HAMBRE EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA: LAS LECCIONES DE SOMALIA

La experiencia de Somalia muestra cómo un país puede ser devastado por la simultánea aplicación de "ayuda" alimentaria y de políticas macroeconómicas. Hay muchas Somalias en el mundo en vías de desarrollo; el paquete de reformas económicas impuesto en Somalia es similar al aplicado en más de cien países en vías de desarrollo.

Pero aún hay otra dimensión importante: Somalia es un país de pastores, y en casi toda África los ganados trashumantes y comerciales están siendo destruidos por el programa del FMI-Banco Mundial en forma muy similar a lo ocurrido en Somalia. En este contexto, los alimentos subsidiados, importados (*duty free*) de la Unión Europea, han provocado la ruina de la economía pastoral africana. Las importaciones de carne de res europea al África occidental aumentaron siete veces desde 1984: "la carne de baja calidad de la UE se vende a la mitad del precio de la carne producida localmente. Los agricultores sahelianos están descubriendo que nadie está dispuesto a comprar sus rebaños."[18]

La experiencia de Somalia a finales del siglo XX muestra que el hambre no es consecuencia de "una escasez de alimentos". Por el contrario, las hambrunas se desataron como resultado de una sobreoferta global de granos. Desde los ochenta, los mercados de granos han sido desregulados bajo la supervisión del Banco Mundial, y los excedentes de granos de Estados Unidos se han utilizado sistemáticamente (como en el caso de Somalia) para destruir al campesinado y desestabilizar la agricultura nacional. En estas circunstancias, esta última se vuelve mucho más vulnerable a los caprichos de la sequía y la degradación ambiental.

A todo lo largo del continente, el "ajuste sectorial" de la agricultura, bajo la custodia de las instituciones de Bretton Woods, ha tenido en la mira, inequívocamente, la destrucción de la seguridad ali-

[18] Leslie Crawford, "West Africans hurt by EC beef policy", *Financial Times,* 21 de mayo de 1993.

mentaria. La dependencia con respecto al mercado mundial ha sido reforzada, la "ayuda alimentaria" al África subsahariana aumentó en más de siete veces desde 1974 y las importaciones comerciales de grano se han más que duplicado. Las importaciones de granos para el África subsahariana aumentaron de 3.72 millones de toneladas en 1974 a 8.47 millones de toneladas en 1993. La ayuda alimentaria aumentó de 910 mil toneladas en 1974 a 6.64 millones de toneladas en 1993.[19]

Sin embargo, la "ayuda alimentaria" dejó de destinarse a los países asolados por la sequía en el cinturón saheliano: fue canalizada a los países que hasta hace poco eran también más o menos autosuficientes en alimentos. Zimbabue (alguna vez considerado la "canasta de pan" de África meridional) fue severamente afectado por la hambruna y la sequía que arrasaron el sur del continente en 1992. El país experimentó una caída del 90% en su cosecha de maíz, localizada principalmente en las tierras menos productivas.[20] Pero irónicamente, en lo más duro de la sequía, el tabaco para exportación (apoyado por irrigación moderna, créditos, investigación, etc.) registró una cosecha abundante.[21] Mientras que "el hambre obliga a la población a comer termitas", gran parte de las ganancias de la exportación de la cosecha de tabaco de Zimbabue se utilizaron para el servicio de la deuda externa.

Dentro del programa de ajuste estructural los agricultores han ido abandonando cada vez más las cosechas de alimentos tradicionales; en Malawi, alguna vez un neto exportador de alimentos, la producción de maíz descendió en un 40% en 1992, mientras que la producción de tabaco se duplicó entre 1986 y 1993; 150 mil hectáreas de las mejores tierras fueron destinadas a esto último.[22] Durante los ochenta, se impusieron estrictas medidas de austeridad a los gobiernos africanos y se recortaron drásticamente los gastos para el desarrollo rural, provocando el colapso de la infraestructura agríco-

[19] Las cifras para 1970 son del Banco Mundial, *World development report, 1992*. Las cifras de 1993 son de la Organización para los Alimentos y la Agricultura, *Food supply situation and crop prospects in Sub-Saharan Africa*, Special Report, núm. 1, Roma, abril de 1993, p. 10.

[20] Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, *Afrique australe, la sécheresse du siècle*, Ginebra, julio de 1992.

[21] *Ibid.*, p. 5.

[22] Véase "Tobacco, the golden leaf", *Southern African Economist*, mayo de 1993, pp. 49-51.

la. Dentro del programa del Banco Mundial, el agua se convertiría en una mercancía que se vendería sobre una base de recuperación de costos a los agricultores empobrecidos. Debido a la falta de fondos, el estado se vio obligado a retirarse del manejo y conservación de los recursos acuíferos. Los manantiales y los pozos se secaron debido a la falta de mantenimiento, o fueron privatizados por los comerciantes y agricultores ricos locales. En las regiones semiáridas, esta comercialización del agua y la irrigación conduce al desmantelamiento de la seguridad alimentaria y a la hambruna.[23]

OBSERVACIONES FINALES

Si bien las variables climáticas "externas" contribuyen al desencadenamiento de una hambruna y a multiplicar el impacto social de la sequía, las hambrunas en la era de la globalización han sido provocadas por acciones de índole política y social. No son consecuencia de la escasez de alimentos sino de una estructura de sobreoferta global que debilita la seguridad alimentaria y destruye la agricultura alimentaria nacional. Estrechamente regulada y controlada por la agroindustria internacional, esta sobreoferta lleva en última instancia al estancamiento tanto de la producción como del consumo de alimentos básicos y al empobrecimiento de los agricultores en todo el mundo. Además, en la era de la globalización, el programa de ajuste estructural del FMI-Banco Mundial tiene una relación directa con la formación de hambrunas, porque debilita sistemáticamente todas las actividades económicas, tanto urbanas como rurales, que no sirven directamente a los intereses del sistema de mercado global.

[23] Véase Banco Mundial, *World development report, 1992*, cap. 5.

7

GENOCIDIO ECONÓMICO EN RUANDA

1] EL FMI Y EL BANCO MUNDIAL ESTABLECEN EL ESCENARIO

La crisis de Ruanda, que condujo a las masacres étnicas de 1994, ha sido presentada por los medios de comunicación occidentales como una profusa narración del sufrimiento humano, mientras que las causas sociales y económicas subyacentes han sido cuidadosamente ignoradas por los reporteros. Como en otros "países en transición", la lucha étnica y el estallido de la guerra civil se describen, cada vez más, como algo casi "inevitable" e "innato en esas sociedades", que constituyen "una penosa etapa en su evolución del estado de partido único hacia la democracia y el libre mercado". La brutalidad de las masacres sacudió a la comunidad mundial, pero lo que los medios internacionales no mencionaron fue que la guerra civil estuvo precedida por el estallido de una crisis económica profundamente enraizada. La reestructuración del sistema agrícola, con la supervisión del FMI y el Banco Mundial, fue lo que precipitó a la población hacia la pobreza abyecta y el desamparo.

Este deterioro del entorno económico que siguió inmediatamente a la caída del mercado cafetalero internacional y a la imposición de aplastantes reformas macroeconómicas por las instituciones de Bretton Woods, exacerbó tensiones étnicas a punto de estallar y aceleró el proceso del derrumbamiento político. En 1987, el sistema de cuotas establecido en el Convenio Internacional del Café (International Coffee Agreement [ICA] empezó a hundirse, los precios mundiales se desplomaron y los Fonds d'Égalisation (el fondo estatal de estabilización del café) que compraba café a los agricultores ruandeses a un precio fijo, comenzaron a acumular una deuda importante. Cuando en junio de 1989 el ICA llegó a un punto muerto como resultado de las presiones políticas de Washington en beneficio de los grandes comerciantes de café de Estados Unidos la economía de Ruanda recibió un golpe letal. Después de una reunión de productores histórica celebrada en Florida, los precios del café disminuye-

ron en cuestión de meses, en más del 50%.[1] Para Ruanda y muchos otros países africanos, la caída de los precios fue catastrófica. El precio del café al pie de granja había caído a menos del cinco por ciento del precio al menudeo de Estados Unidos. Los países ricos se hicieron de una fortuna inmensa, a costa de los productores directos, gracias al comercio del café a precios internacionales deprimidos (véase el capítulo 5).

El legado del colonialismo

¿Cuál es la responsabilidad de Occidente en esta tragedia? En primer lugar, es importante resaltar que una buena parte del conflicto entre los hutus y los tutsis proviene del sistema colonial, muchas de cuyas características prevalecen todavía hoy. Desde finales del siglo XIX, la primera ocupación colonial alemana utilizó al *mwami* (rey) de la *nyiginya* (monarquía) instalada en Nyanza para establecer sus puestos militares. Sin embargo, las reformas administrativas iniciadas en 1926 por los belgas fueron principalmente las que dieron forma decisiva a las relaciones socioétnicas. Los belgas utilizaban los conflictos dinásticos explícitamente para reforzar su control territorial. La administración colonial se valía de los jefes tradicionales de cada colina para requisar mano de obra forzada. Apaleamientos rutinarios y castigos corporales eran administrados por los jefes tradicionales en nombre de los amos coloniales. Los jefes autóctonos estaban bajo la supervisión directa de un administrador belga responsable de una porción de territorio en particular. Se impuso un clima de temor y desconfianza, la solidaridad comunal se quebrantó y las relaciones clientelares tradicionales se transformaron para servir a los intereses del colonizador. El objetivo era alimentar las rivalidades interétnicas para obtener el control político así como para impedir el desarrollo de la solidaridad entre los dos grupos étnicos que, inevitablemente, se habrían vuelto contra el régimen colonial. La aristocracia dinástica tutsi fue responsabilizada también

[1] El sistema de cuotas de exportación de la Organización Internacional del Café (OIC) fue eliminado después de las conversaciones de Florida en julio de 1989. El precio FOB en Mombasa declinó de 1.31 dólares por libra, en mayo de 1989, a 0.60 en diciembre (*Marchés Tropicaux*, 18 de mayo de 1990, p. 1369; 29 de junio de 1990, p. 1860).

de la recaudación de impuestos y de la administración de justicia. La economía comunal se fue debilitando y el campesinado se vio forzado a abandonar la agricultura alimentaria para dedicarse a cultivos comerciales para exportar. Las tierras comunales quedaron transformadas en lotes individuales destinados exclusivamente a cultivos comerciales (las llamadas *cultures obligatoires*).[2]

Los historiadores coloniales se encargaron de la tarea de "transcribir" así como de distorsionar la historia oral de Ruanda-Urundi. El recuento histórico fue falseado: la monarquía *mwami* fue identificada únicamente con la aristocracia dinástica tutsi; a los hutus se los representó como una casta dominada.[3] Se emitieron tarjetas de identidad en las que se indicaba el "origen étnico", definido arbitrariamente según el número de cabezas de ganado; los tutsis eran "dueños de ganado" y los hutus, "agricultores".

A partir de las divisiones socioétnicas impuestas, los colonizadores belgas desarrollaron una nueva clase social, los llamados *nègres évolués*, reclutados de entre la aristocracia tutsi, y se instauró un sistema escolar para educar a los hijos de los jefes que proporcionara el personal africano requerido por los belgas. Por su parte, las diversas misiones apostólicas y vicariatos bajo el dominio colonial belga recibieron un mandato casi político. Por ejemplo, el clero, se utilizaba con frecuencia para obligar a los campesinos a integrarse en la economía de cultivos comerciales. Estas divisiones socioétnicas –que se desarrollaron desde los años veinte– han dejado una profunda marca en la sociedad ruandesa contemporánea.

Desde su independencia en 1962, las relaciones con las antiguas potencias coloniales y con los donadores se fueron volviendo infinitamente más complejas. Heredado del periodo colonial belga, sin embargo, el mismo objetivo de empujar a un grupo étnico contra el otro ("divide y vencerás") prevaleció ampliamente en las diversas intervenciones "militares", de "derechos humanos" y "macroeconómicas" iniciadas desde el estallido de la guerra civil en 1990. La crisis de Ruanda se vio encapsulada en un continuo orden del día de las mesas redondas de donadores (celebradas en París), acuerdos de cese al fuego y conversaciones de paz. Estas diversas iniciativas estu-

[2] Véase Jean Rumiya, *Le Rwanda sous le régime du mandat belge (1916-1931)*, París, L'Harmattan, 1992, pp. 220-226; André Guichaoua, *Destins paysans et politiques agraires en Afrique centrale,* París, L'Harmattan, 1989.

[3] Véase Ferdinand Nahimana, *Le Rwanda, émergence d'un état*, París, L'Harmattan, 1993.

vieron supervisadas y coordinadas de cerca por la comunidad de donadores en un circuito enmarañado de "condicionantes" (y contracondicionantes). El otorgamiento de créditos multilaterales y bilaterales, desde el estallido de la guerra civil, estaba condicionado a la puesta en marcha de un proceso de supuesta "democratización", bajo la vigilancia estrecha de la comunidad de donadores. A su vez, la ayuda occidental en apoyo de la democracia multipartidaria se condicionó (en una relación casi simbiótica) a que el gobierno llegara a un acuerdo con el FMI, y así sucesivamente. Estos intentos eran tanto más engañosos cuanto que, desde la caída del mercado cafetero en 1989, el poder político real en Ruanda estaba prácticamente en manos de los donadores. Un comunicado del Departamento de Estado norteamericano de principios de 1993, ilustra vívidamente esta situación: la continuación de la ayuda bilateral estadunidense estaba condicionada al buen comportamiento en cuanto a las reformas políticas así como a los progresos en la búsqueda de la democracia.

La "democratización", basada en un modelo abstracto de solidaridad interétnica, contemplada por el acuerdo de paz de Arusha que se firmó en agosto de 1993, era una imposibilidad desde el inicio y los donadores lo sabían. El terrible empobrecimiento de la población, resultante tanto de la guerra como de las reformas del FMI, excluía un proceso genuino de democratización. El objetivo era cumplir con las condiciones de "buen gobierno" (término nuevo en el glosario de los donadores) y supervisar la instalación de un gobierno de coalición multipartidario fingido bajo la tutela de los acreedores externos de Ruanda. De hecho, el multipartidismo, tam limitado como los donadores lo conciben, contribuyó a azuzar a las diversas facciones políticas del régimen. No es sorprendente que tan pronto como las negociaciones de paz entraron en un punto muerto, el Banco Mundial anunciara que interrumpiría los desembolsos acordados en el convenio.[4]

La economía desde la independencia

La evolución del sistema económico poscolonial desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la crisis de Ruanda. Si bien desde la

[4] *New African,* junio de 1994, p. 16.

independencia se observaron progresos en la diversificación de la economía nacional, la economía de exportación de estilo colonial basada en el café (*les cultures obligatoires*), establecida durante la administración belga, se mantuvo en gran medida, proporcionando a Ruanda más del 80% de sus ingresos en divisas. Una clase rentista con intereses en el comercio del café y con vínculos estrechos con la sede del poder político se había desarrollado. Los índices de pobreza seguían siendo elevados, pero, durante los setenta y la primera parte de los ochenta siguió habiendo progreso económico y social: el crecimiento real del PIB era del orden del 4.9% anual (1965-1989), la asistencia escolar aumentó visiblemente y la inflación registrada estaba entre las más bajas del África subsahariana: menos del 4% anual.[5]

Aunque la economía rural de Ruanda seguía siendo frágil, marcada por agudas presiones demográficas (3.2% de crecimiento anual de la población), fragmentación de las tierras y erosión del suelo, la autosuficiencia alimentaria en el nivel local se había conseguido en cierta medida, junto con el desarrollo de la economía de exportación. El café era cultivado por aproximadamente el 70% de las familias rurales, pero constituía solamente una fracción del ingreso monetario total. Una variedad de actividades comerciales más se habían ido desarrollando, como la venta de alimentos básicos tradicionales y cerveza de banana en los mercados regionales y urbanos.[6] Hasta finales de los ochenta, las importaciones de cereales, incluyendo la ayuda alimentaria, fueron mínimas comparadas con los patrones observados en otros países de la región. La situación alimentaria empezó a deteriorarse a principios de los ochenta, con una notoria disminución en la disponibilidad de alimentos per cápita. En patente contradicción con las reformas comerciales usualmente adoptadas bajo los auspicios del Banco Mundial, hasta ese momento se había proporcionado protección a los productores nacionales mediante restricciones a la importación de productos alimentarios.[7] Éstas fueron

[5] Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Desarrollados, *Country presentation by the Government of Rwanda*, Ginebra, 1990, p. 5. Véase también Ministerio de Finanzas y de Economía de la República Ruandesa, *L'économie rwandaise, 25 ans d'éfforts (1962-87)*, Kigali, 1987.

[6] Véase el estudio de A. Guichaoua, *Les paysans et l'investissement-travail au Burundi et au Rwanda*, Ginebra, OIT, 1987.

[7] Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Desarrollados, *op. cit.*, p. 2.

levantadas con la adopción del programa de ajuste estructural de los noventa.

La fragilidad del estado

Tras la independencia, las bases económicas del estado ruandés seguían siendo extremadamente frágiles. Gran parte de los ingresos estatales dependían del café, con el riesgo de que una caída en los precios de las mercancías precipitara una crisis en las finanzas públicas del estado. La economía rural era la fuente principal de recursos del estado. A medida que evolucionaba la crisis de la deuda, una gran parte de las ganancias del café y el té se destinaron al servicio de la deuda, sometiendo a los pequeños agricultores a una presión aún mayor.

Las ganancias por exportaciones se redujeron 50% entre 1987 y 1991. La desaparición de las instituciones estatales se desencadenó a partir de entonces. Cuando los precios del café se desplomaron, estallaron hambrunas por todo el territorio ruandés. Según datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB per cápita bajó de 0.4% en 1981-1986 a -5.5% en el periodo que siguió al hundimiento del mercado del café (1987-1991).

La intervención del FMI y del Banco Mundial

Una misión del Banco Mundial viajó a Ruanda en noviembre de 1988 para revisar su programa de gasto público. Una serie de recomendaciones se establecieron con el objetivo de hacer regresar a Ruanda al camino del crecimiento económico sustentable. La misión del Banco Mundial presentó al gobierno las opciones disponibles, consistentes en dos "escenarios". El escenario I, titulado "Sin cambio estratégico", contemplaba la opción de permanecer en el "viejo" sistema de planificación estatal, mientras que el escenario II, llamado "Con cambio estratégico", era el de la reforma macroeconómica y la "transición al libre mercado". Después de cuidadosas "simulaciones" económicas de los posibles resultados, el Banco Mundial concluyó, con cierto optimismo, que si Ruanda adoptaba el escenario II los niveles de consumo aumentarían marcadamente durante 1989-1993, trayendo consigo una recuperación de la inver-

sión y una mejoría en la balanza comercial. Las "simulaciones" apuntaban también a una mayor capacidad exportadora y a niveles sustancialmente menores de endeudamiento externo.[8] Estos resultados dependían de la rápida puesta en marcha de la receta acostumbrada de liberalización comercial y devaluación de la moneda, junto con la eliminación de todos los subsidios a la agricultura, la desaparición progresiva de los Fonds d'Égalisation, la privatización de las empresas del estado y el despido de empleados públicos.

Se adoptó el escenario II: "Con cambio estratégico". El gobierno no tenía elección.[9] Una devaluación del 50% del franco ruandés se llevó a cabo en noviembre de 1990, apenas seis semanas después de la incursión, procedente de Uganda, del ejército rebelde del Frente Patriótico Ruandés.

Se pretendía que la devaluación impulsara las exportaciones de café. Ésta se presentó a la opinión pública como un medio para rehabilitar una economía asolada por la guerra. No es sorprendente que se obtuvieran los resultados exactamente opuestos, de exacerbar la crisis de la guerra civil. Desde una situación de relativa estabilidad de precios, la caída en picada del franco ruandés contribuyó a disparar la inflación y a derrumbar los ingresos reales. Pocos días después de la devaluación, se anunciaron aumentos considerables en los precios de los combustibles y artículos de consumo básico. El índice de precios al consumidor aumentó de 1.0% en 1989 a 19.2% en 1991. La situación de la balanza de pagos se deterioró gravemente y la deuda externa, pendiente de pago, que ya se había duplicado desde 1985, aumentó en un 34% entre 1989 y 1992. El aparato administrativo del estado estaba en total desorden, las empresas estatales fueron empujadas a la quiebra y los servicios públicos, desmantelados.[10] La salud y la educación se desintegraron bajo el peso de las medidas de austeridad impuestas por el FMI: a pesar del establecimiento de una "red de seguridad social" (destinada por los donadores a programas en los sectores sociales), la incidencia de una severa desnutrición infantil aumentó dramáticamente; el núme-

[8] Un crecimiento del 5% en las exportaciones debía tener lugar con el escenario II en comparación con el 2.5% con el escenario I.

[9] La condonación de la deuda, que asciende a 46 millones de dólares, fue concedida en 1989.

[10] Banco Mundial, *World debt tables, 1993-94,* Washington, D.C., p. 383. La deuda pendiente de pago había aumentado en más del 400% desde 1980 (de 150.3 millones de dólares en 1980 a 804.3 millones en 1992).

ro de casos de malaria registrados aumentó 21% en el año siguiente a la adopción del programa del FMI, principalmente como resultado de la falta de medicamentos para combatir la enfermedad en los centros de salud pública; y la imposición de cuotas escolares en el nivel de escuela primaria ocasionó una disminución masiva de la asistencia escolar.[11]

La crisis económica alcanzó su clímax en 1992, cuando los agricultores ruandeses, en su desesperación, arrancaron unos 300 mil arbustos de café.[12] A pesar del vertiginoso aumento de los precios nacionales, el gobierno había congelado los precios del café a pie de granja en el nivel de 1989 (125 francos ruandeses por kilo), según los términos del convenio con las instituciones de Bretton Woods. En el convenio de préstamo con el Banco Mundial se establecía que al gobierno no se le permitía transferir recursos estatales a los Fonds d'Égalisation. Hay que mencionar también que una utilidad significativa era acaparada por los comerciantes de café locales y los intermediarios, lo que servía para presionar aún más al campesinado.

En junio de 1992, el FMI ordenó una segunda devaluación, lo que condujo, en lo más álgido de la guerra civil, a otra escalada de los precios de los combustibles y de los artículos de consumo básico. La producción de café cayó otro 25% en un solo año.[13] Debido a la plantación excesiva de cafetos, quedaba cada vez menos tierra disponible para producir alimentos, pero al campesinado ya no le era fácil regresar a los cultivos alimentarios. El escaso ingreso en efectivo derivado del café había desaparecido y no quedaba nada más de qué echar mano. No sólo los ingresos en efectivo del café eran insuficientes para comprar comida, sino que los precios de los insumos agrícolas se habían disparado. La crisis de la economía del café repercutió en la producción de alimentos básicos tradicionales, provocando una caída importante en la producción de mandioca, frijoles y sorgo. El sistema de ahorros y cooperativas de crédito que proporcionaban préstamos a los pequeños agricultores también se había desintegrado. Además, con la liberalización del comercio y la desregulación de los mercados de granos recomendadas por las ins-

[11] Véase Myriam Gervais, "Étude de la pratique des ajustements au Niger et au Rwanda", *Labour, Capital and Society* 26:1, 1993, p. 36.

[12] Esta cifra es un cálculo conservador (Economist Intelligence Unit, *Country profile, Rwanda/Burundi 1993/1994,* Londres, 1994, p. 10.

[13] En 1993, una tercera devaluación del orden del 30% fue recomendada por el Banco Mundial como medio para eliminar las deudas del Fonds d'Égalisation.

tituciones de Bretton Woods, las importaciones de alimentos baratos (fuertemente subsidiados) y la ayuda alimentaria de los países ricos, que estaban entrando a Ruanda, tenían el efecto de desestabilizar los mercados locales.

Bajo el sistema de "libre mercado" impuesto a Ruanda, ya no eran viables ni los cultivos comerciales ni los cultivos alimentarios. El sistema agrícola entero había sido empujado a la crisis. El aparato administrativo del estado estaba en total desorden, debido no sólo a la guerra civil sino también a las medidas de austeridad y a los decrecientes salarios de los empleados públicos, situación que contribuyó inevitablemente a exacerbar el clima de inseguridad generalizada que se había desencadenado en 1992.

La gravedad de la situación de la agricultura ha sido ampliamente documentada por la FAO, que ha advertido de la existencia de extensas hambrunas en las provincias meridionales.[14] Un informe presentado a principios de 1994 señalaba también el total desplome de la producción cafetalera como resultado tanto de la guerra como del sistema de comercialización del estado, que estaba siendo eliminado con el apoyo del Banco Mundial. Rwandex, la empresa mixta responsable del procesamiento y exportación del café, se había vuelto casi totalmente inoperante.

Para el 17 de septiembre de 1990, la decisión de devaluar (con "el sello de aprobación del FMI") ya se había tomado en las reuniones de alto nivel celebradas en Washington entre el FMI y una misión encabezada por el ministro de finanzas de Ruanda, el señor Ntigurirwa, antes del incremento repentino de las hostilidades. Ya se había dado "luz verde": para principios de octubre, en el preciso momento en que estallaban los enfrentamientos, millones de dólares de la llamada "ayuda para la balanza de pagos" (procedente de fuentes multilaterales y bilaterales) empezaron a derramarse en los cofres del banco central. Estos fondos administrados por el banco central habían sido destinados (por los donadores) para la importación de mercancías, pero es probable que una considerable porción de estos "préstamos de desembolso rápido" hayan sido distraídos por el régimen (y sus diversas facciones políticas) para la adquisición de

[14] El Comité Internacional de la Cruz Roja calculó en 1993 que más de un millón de personas estaban afectadas por el hambre (*Marchés Tropicaux*, 2 de abril de 1993, p. 898). Un comunicado de la FAO, emitido en marzo de 1994, señalaba una reducción del 33% en la producción alimentaria en 1993 (véase *Marchés Tropicaux*, 25 de marzo de 1994, p. 594).

equipos militares (de Sudáfrica, Egipto y Europa oriental).[15] Se realizaron compras de rifles Kalashnikov, artillería pesada y morteros, además del paquete bilateral de ayuda militar proporcionado por Francia, que incluía, entre otras cosas, misiles Milan y Apila (y un jet Mystère Falcon para uso personal del presidente Habyarimana).[16] Además, desde octubre de 1990 las fuerzas armadas habían aumentado, virtualmente de la noche a la mañana, de cinco mil a 40 mil hombres, requiriendo inevitablemente (en las condiciones de austeridad presupuestaria) una notable afluencia de dinero externo. Los nuevos reclutas alistados provenían principalmente de las filas de desempleados urbanos, cuyo número había aumentado dramáticamente desde la caída del mercado del café en 1989. Miles de jóvenes delincuentes y ociosos, de una población a la deriva, fueron reclutados también para las milicias civiles responsables de las matanzas. Y una parte de las compras de armas permitió a las fuerzas armadas organizar y equipar a los cuerpos de la milicia.

Con todo, desde el inicio de las hostilidades (que coincidieron cronológicamente con la devaluación y el primer "chorro de dinero fresco", en octubre de 1990), se aprobó el desembolso de un paquete total de unos 260 millones de dólares (con considerables contribuciones bilaterales de Francia, Alemania, Bélgica, la Comunidad Europea y Estados Unidos). Aunque los nuevos préstamos contribuyeron a liberar dinero para el pago del servicio de la deuda así como para equipar a las fuerzas armadas, las evidencias sugieren que gran parte de esta asistencia de los donadores ni fue usada productivamente ni fue canalizada para proporcionar alivio a las zonas afectadas por la hambruna.

También cabe señalar que el Banco Mundial (a través de su afiliada para préstamos blandos, la Asociación Internacional para el Desarrollo, AID), ordenó en 1992 la privatización de la empresa estatal ruandesa Electrogaz. Los beneficios de la privatización se canalizarían hacia el servicio de la deuda. En un convenio de préstamo cofinanciado con el Banco Europeo de Desarrollo y la Caisse

[15] No ha habido ningún comunicado oficial ni informe de prensa confirmando o negando la canalización de la ayuda para la balanza de pagos hacia los gastos militares. Según Human Rights Watch, con sede en Washington, Egipto acordó con Kigali aportar seis millones de dólares en equipos militares. El trato con Sudáfrica fue de 5.9 millones de dólares (véase *Marchés Tropicaux*, 28 de enero de 1994, p. 173).

[16] Véase *New African*, junio de 1994, p. 15. Véase también la entrevista con Colette Braeckman sobre la ayuda militar francesa en *Archipel* 9, julio de 1994, p. 1.

Française de Développement, las autoridades ruandesas debían recibir a cambio (después de cumplir los "condicionantes") la modesta suma de 39 millones de dólares que podrían ser gastados libremente en importaciones de mercancías.[17] La privatización, llevada a cabo cuando la guerra civil era más intensa, incluyó también despidos de personal y un alza inmediata en el precio de la electricidad que contribuyó aún más a paralizar los servicios públicos urbanos. Una privatización similar de Rwandatel, la compañía estatal de telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se realizó en septiembre de 1993.[18]

El Banco Mundial revisó cuidadosamente el programa de inversiones públicas de Ruanda. Habiendo examinado las *fiches de projet*, el Banco Mundial recomendó recortar más de la mitad de los proyectos de inversión pública del país. En la agricultura, el Banco Mundial también había exigido una considerable reducción de la inversión estatal, incluyendo el abandono del programa de reclamación de las tierras pantanosas, iniciado por el gobierno en respuesta a la grave escasez de tierras laborables (y que el Banco Mundial consideraba "no redituable"). En los sectores sociales, el Banco Mundial propuso el llamado "programa prioritario" (bajo la "red de seguridad social") destinado a maximizar la eficiencia y "reducir la carga financiera del gobierno" mediante la recaudación de cuotas, despidos de maestros y trabajadores de la salud y la privatización parcial de la salud y la educación.

Indudablemente, el Banco Mundial alegaría que las cosas hubieran sido mucho peores de no haberse adoptado el escenario II. Éste es el llamado "argumento contrafactual" (véase el capítulo 3). No obstante, semejante razonamiento suena particularmente absurdo en el caso de Ruanda. No se mostró ninguna sensibilidad ni preocupación respecto a cuáles serían las repercusiones políticas y sociales de la terapia económica de choque aplicada a un país al borde de la guerra civil. El equipo del Banco Mundial excluyó deliberadamente de sus "simulaciones" las "variables no económicas"...

[17] Véase *Marchés Tropicaux*, 26 de febrero de 1992, p. 569.
[18] Véase *ibid.*, 8 de octubre de 1993, p. 2492.

2] INSTALACIÓN DE UN PROTECTORADO EN ÁFRICA CENTRAL[19]

Desde los inicios de la guerra civil ruandesa en 1990, la agenda secreta de Washington ha sido establecer una esfera de influencia norteamericana en una región históricamente dominada por Francia y Bélgica. El objetivo de Estados Unidos era desplazar a Francia apoyando al Frente Patriótico Ruandés (FRP) y armando y equipando a su brazo militar, el Ejército Patriótico Ruandés (EPR).

Desde mediados de los ochenta el gobierno de Kampala, presidido por Yoweri Musaveni, se había convertido en el ejemplo de "democracia" africana favorito de Washington. Uganda se había convertido también en la plataforma de lanzamiento de movimientos guerrilleros, patrocinados por Estados Unidos, hacia Sudán, Ruanda y el Congo. El general mayor Paul Kagame había sido jefe de inteligencia militar en las Fuerzas Armadas de Uganda y recibió entrenamiento en el Colegio para Comandantes y Personal del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army Command and Staff College [CGSC]) en Leavenworth, Kansas, cuya especialidad es la guerra y la estrategia militar. Kagame regresó, procedente de Leavenworth, a dirigir el EPR poco después de la invasión de 1990.

Antes del estallido de la guerra civil ruandesa, el EPR formaba parte de las Fuerzas Armadas de Uganda; y poco antes de la invasión de Ruanda intercambiaron membretes: de la noche a la mañana un gran número de soldados ugandeses pasaron a las filas del EPR. A lo largo de la guerra, el EPR recibió pertrechos de las bases militares de la Fuerza de Defensa del Pueblo Unido (FDPU) sita en Uganda. Los oficiales comisionados tutsis, del ejército ugandés, tomaron posiciones en el EPR. La invasión de octubre de 1990 por las fuerzas ugandesas se presentó ante la opinión pública como una guerra de liberación librada por guerrilleros tutsis.

La militarización de Uganda

La militarización de Uganda formaba parte de la política exterior de Estados Unidos. El reforzamiento de la FDPU y del EPR estaba respal-

[19] La primera parte de este capítulo se escribió en 1994 para la primera edición inglesa de este libro. La segunda parte se basa en un estudio realizado por el autor y el economista belga Pierre Galand sobre el empleo de la deuda externa de Ruanda para financiar al ejército y a los paramilitares en 1990-1994.

dado por Estados Unidos e Inglaterra. Los ingleses proporcionaron entrenamiento militar en la base militar de Jinja:

> A partir de 1989 Estados Unidos empezó a apoyar los ataques conjuntos del FPR y Uganda [...] Hubo cuando menos 56 "informes de incidentes" en los archivos del Departamento de Estado en 1991 [...] Cuando se reforzaron las relaciones angloamericanas con Uganda y el FPR, hubo una escalada de las hostilidades entre Uganda y Ruanda [...] Ya en agosto de 1990 el FPR había empezado a preparar una invasión con pleno conocimiento y aprobación de la inteligencia británica.[20]

La tropas del EPR y de la FDPU habían estado apoyando también al Ejército de Liberación del Pueblo, de John Garang, en su guerra secesionista en el sur de Sudán. Detrás de estas iniciativas estaba Washington, sólidamente plantado, con el apoyo encubierto de la CIA.[21]

Lo que es más, al amparo de la Iniciativa de Reacción a la Crisis de África, a los oficiales ugandeses los entrenaban también las fuerzas especiales norteamericanas, en colaboración con una cuadrilla de mercenarios, Military Professional Resources Inc., contratada por el Departamento de Estado. Esta última había proporcionado un entrenamiento militar semejante al Ejército de Liberación de Kosovo y a las fuerzas armadas croatas durante la guerra civil de Yugoslavia y, recientemente, al ejército colombiano en el contexto del Plan Colombia, la ayuda militar norteamericana a este país.

La deuda externa de Uganda

Las reformas macroeconómicas realizadas bajo la supervisión del FMI apoyaban el logro de los objetivos geopolíticos norteamericanos. La acumulación de la deuda externa en Uganda durante el régimen del presidente Musaveni coincide en el tiempo con la guerra civil de Ruanda y del Congo. Con la subida al poder de Musaveni en 1986, la deuda externa del país era de 1.3 mil millones de dólares, y con la inyección de dinero fresco, de la noche a la mañana casi se triplicó a 3.7 mil millones en 1997. En realidad, Uganda no te-

[20] Africa Direct, Submission to the UN Tribunal on Rwanda, http://www.junius.co.uk/africa-direct/tribunal.html.

[21] Africa's New Look, *Jane's Foreign Report*, 14 de agosto de 1997.

nía pagos pendientes con el Banco Mundial al inicio de su "programa de recuperación económica". Para 1997 debía cerca de dos mil millones de dólares solamente al Banco Mundial.[22]

¿Adónde fue a parar el dinero? Se había decidido que los préstamos foráneos al gobierno de Musaveni apoyarían la reconstrucción económica y social del país. En la estela de una prolongada guerra civil, el "programa de estabilización económica" del FMI exigía recortes masivos al presupuesto de los programas civiles.

El Banco Mundial era el responsable de supervisar el presupuesto de Uganda, en representación de sus acreedores. En los términos de la "revisión del gasto público" el gobierno estaba obligado a revelar por entero la asignación precisa de los recursos. En otras palabras, todas y cada una de las categorías del presupuesto –el del Ministerio de Defensa incluido– quedaban expuestas al escrutinio del Banco Mundial. Pese a las medidas de austeridad (que se impusieron exclusivamente a los gastos "civiles"), los donadores permitían que los gastos de defensa aumentaran sin trabas.

Una porción del dinero destinado a los programas civiles se desvió hacia el subsidio de la FDPU, que también estaba inmiscuida en operaciones militares en Ruanda y el Congo. La deuda externa de Uganda se estaba utilizando para financiar estas operaciones en representación de Washington: a la postre, el pueblo de Uganda tendría que pagar la factura. En realidad, al recortar el gasto social, las medidas de austeridad habían facilitado la reasignación de los ingresos del estado a favor del ejército ugandés.

Financiamiento de las dos facciones de la guerra civil

También en Ruanda, bajo el régimen de Habyarimana, se estaban financiando los gastos militares con la deuda externa. La cruel ironía es que *ambas facciones de la guerra civil recibían financiamiento de las mismas instituciones donadores,* cuyo cancerbero era el Banco Mundial.

El régimen de Habyarimana tenía a disposición un arsenal de equipos militares, entre otros, lanzamisiles de 83 mm, gases enceguecedores fabricados en Francia, armas ligeras fabricadas en Bél-

[22] Jim Mugunga, "Uganda foreign debt hits Shs 4 trillion", *The Monitor*, Kampala, 19 de febrero de 1997.

gica y Alemania y armas automáticas, como los rifles Kalachnikov, fabricadas en Egipto, China y Sudáfrica, así como vehículos blindados AML-60 y M3.[23] Mientras que una parte de estas adquisiciones habían sido financiadas con la ayuda militar directa de Francia, los préstamos para el desarrollo procedentes de la filial para préstamos blandos del Banco Mundial, la AID, del Fondo para el Desarrollo de África, del Fondo Europeo para el Desarrollo, así como de Alemania, Estados Unidos, Bélgica y Canadá, habían sido desviados al financiamiento del ejército y de la milicia Interhamwe.

Una minuciosa investigación en los archivos, las cuentas y la correspondencia oficiales de Ruanda realizada por el autor en 1996-1997, junto con el economista belga Pierre Galand, confirmó que muchas de las compras de armamento habían sido negociadas por fuera del marco de los convenios de ayuda militar entre gobiernos y a través de intermediarios y traficantes de armas privados. No obstante, estas transacciones –registradas como gastos gubernamentales *bona fide*– se habían incluido en el presupuesto estatal, cuya supervisión estaba a cargo del Banco Mundial. Enormes cantidades de machetes y otros artículos utilizados en las matanzas étnicas de 1994 –clasificados como "mercancías civiles"– se importaron a través de los canales comerciales usuales.[24]

Según aparece en los archivos del Banco Nacional de Ruanda, algunas de estas importaciones habían sido subsidiadas violando los convenios signados con los donadores. En las facturas de importaciones del banco consta que *se importaron aproximadamente un millón de machetes a través de diversos canales, como Radio Mille Colli-nes [Radio Mil Colinas], una organización vinculada a la milicia Interhamwe utilizada para fomentar la animadversión étnica*.[25]

El dinero estaba destinado, según los donadores, a apoyar el desarrollo económico y social de Ruanda. Se había estipulado claramente que los recursos no podrían ser utilizados para importaciones: "gastos militares en armas, pertrechos y cualquier otro material militar".[26] En realidad, el convenio de préstamo con la AID era mu-

[23] Michel Chossudovsky y Pierre Galand, *L'usage de la dette extérieure du Rwanda, la responsabilité des créanciers*, Mission Report, PNUD/Gobierno de Ruanda, Ottawa y Bruselas, 1997.

[24] *Ibid.*

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.* Las importaciones registradas fueron del orden de quinientos mil kilos de machetes, o aproximadamente un millón de machetes.

cho más restrictivo: el dinero no podía ser empleado en la importación de mercancías civiles como combustibles, alimentos, medicinas, ropa ni zapatos "destinados al uso militar o paramilitar". Con todo, los registros del banco confirman que el gobierno de Habyarimana utilizó el dinero para financiar la importación de machetes y que estas adquisiciones se clasificaron como "mercancías civiles".[27]

Un ejército de consultores y auditores fue enviado por el Banco Mundial para evaluar el "desempeño de las políticas" del gobierno estipuladas en el convenio.[28] El empleo de los fondos de los donadores para importar machetes y otros artículos utilizados en las matanzas de civiles no apareció en la auditoría comisionada por el gobierno y el Banco Mundial.[29] En 1993, el Banco Mundial decidió suspender el desembolso de la segunda entrega del préstamo. Según la misión del banco, hubo desafortunados "equívocos" y "demoras" en la aplicación de las políticas. Las reformas encaminadas al libre mercado se habían dejado de fomentar y no se había cumplido con los condicionantes –entre otros, la privatización de los bienes propiedad del estado. El que el país estuviera inmerso en una guerra civil, ni siquiera se mencionó. *Nunca se le dio importancia a la forma en que se había gastado el dinero*.[30]

Aunque el Banco Mundial congelara la segunda entrega del préstamo de la AID, el dinero otorgado en 1991 había sido depositado en una cuenta especial del banco Bruxelles Lambert, en Bruselas, cuenta abierta y accesible al antiguo régimen (en el exilio) todavía dos meses después de las matanzas étnicas de abril de 1994.[31]

Encubrimiento en la posguerra

Tras la guerra civil, el Banco Mundial envió una misión a Kigali para que elaborara un supuesto "informe complementario".[32] Se trataba de un ejercicio de rutina, ampliamente inclinado hacia cuestio-

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.* Véase también documento anexo 1.2 del Convenio de Crédito para el Desarrollo con la AID, Washington, 27 de junio de 1991 (Credit IDA 2271 RW).

[29] Chossudovsky y Galand, *op. cit.*

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

[32] *World Bank completion report*, citado en Chossudovsky y Galand, *op. cit.*

nes macroeconómicas más que políticas. El informe reconocía que "el esfuerzo de la guerra obligó al [antiguo] gobierno a aumentar sustancialmente los gastos, mucho más allá de las metas fijadas en el SAP".[33] El uso inapropiado del dinero del banco no se mencionó. Pero sí se celebró al gobierno de Habyarimana por "haber realizado un genuino esfuerzo, especialmente en 1991, para reducir los desequilibrios financieros nacionales y externos, eliminar las distorsiones que obstaculizaban el crecimiento y la diversificación de las exportaciones e introducir, con una perspectiva de mercado, mecanismos para reasignar los recursos".[34] Las matanzas de civiles no se mencionaban; desde el punto de vista de los donadores, "nada había ocurrido". En efecto, el informe complementario del Banco Mundial ni siquiera reconoció que hubiera habido una guerra civil antes de abril de 1994.

Restablecimiento de las mortales reformas económicas del FMI después de la guerra civil

En 1995, a menos de un año de las matanzas étnicas, los acreedores externos de Ruanda emprendieron conversaciones con el gobierno tutsi del FPR sobre la cantidad adeudada por el régimen anterior, que se había empleado para financiar dichas matanzas. El FPR decidió reconocer plenamente la legitimidad de las "odiosas deudas" de 1990-1994. El vicepresidente Paul Kagame, el hombre fuerte del FPR, instruyó al gabinete para que no prosiguiera con el asunto ni se aproximara al Banco Mundial. Presionado por Washington, el FPR no debía establecer ninguna forma de negociación, ni siquiera un diálogo informal con los donadores.

La legitimidad de las deudas de la época de la guerra nunca se cuestionó. En lugar de ello, los acreedores establecieron diligentemente unos procedimientos para garantizar el rembolso rápido. En 1998, en una reunión especial de donadores que tuvo lugar en Estocolmo, se creó un fideicomiso multilateral de 55.2 millones de dólares para una supuesta reconstrucción de posguerra.[35] En realidad, ni un centavo de este dinero estaba destinado a Ruanda, sino para

[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*
[35] Véase Banco Mundial, *Rwanda*, en http://www.worldbank.org/afr/ rw2.htm.

el servicio de las "odiosas deudas" de Ruanda con el Banco Mundial (esto es, con la AID), con el Banco de Desarrollo Africano y con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.

Dicho de otro modo, el "dinero fresco", que Ruanda tendrá que rembolsar tarde o temprano, se prestó para que Ruanda pudiera cumplir con los pagos desviados para financiar las matanzas. Los viejos préstamos se intercambiaron por nuevas deudas, supuestamente para la reconstrucción de posguerra.[36] Las "odiosas deudas" se blanquearon; desaparecieron de los libros. La responsabilidad de los acreedores quedó borrada. Y a ello agréguese que la estafa quedó condicionada a la aceptación de una nueva oleada de reformas del FMI y el Banco Mundial.

"Reconstrucción y reconciliación" de posguerra

Para la "reconstrucción y la reconciliación" se administró un amargo remedio económico. El paquete de reformas del FMI para la era posconflicto fue mucho más severo que el impuesto en los inicios de la guerra civil en 1990. Aunque habían caído ya los salarios y el empleo a niveles abismales, el FMI, de todos modos, exigió el congelamiento de los salarios de los funcionarios civiles, junto con la reducción del número de maestros y de trabajadores de la salud. La meta era "recuperar la estabilidad macroeconómica". Comenzó el recorte de los servidores públicos;[37] sus salarios no debían exceder el 4.5% del PIB; los "servidores públicos poco aptos" (principalmente maestros) debían desaparecer de la nómina del estado.[38]

Entre tanto, el ingreso per cápita del país se había desplomado de 360 (antes de la guerra) a 140 dólares en 1995. Los ingresos del estado se destinarían al servicio de la deuda externa. Las deudas de Kigali con el Club de París se reprogramaron a cambio de reformas de "libre mercado". Los bienes del estado que quedaban se vendieron al capital extranjero a precios de ganga.

El gobierno tutsi del FPR, en lugar de demandar la cancelación de

[36] *Ibid.*, las cursivas son mías.

[37] Se puso un tope de 38 mil empleados públicos para 1998, de los 40 600 en 1997. Véase, en http://www.imf.org/external/np/loi/060498.htm, 1998, la carta de intención del gobierno de Ruanda, además de la carta anexa dirigida a Michel Camdessus, director administrativo del FMI.

[38] *Ibid.*

las odiosas deudas de Ruanda, había recibido a las instituciones de Bretton Woods con los brazos abiertos. Necesitaban la "luz verde" del FMI para levantar el ejército.

No obstante las medidas de austeridad, los gastos de defensa continuaron aumentando. Se restableció el patrón de 1990-1994. Los préstamos para el desarrollo otorgados a partir de 1995 no se utilizaron para el financiamiento del desarrollo económico y social del país. Dinero externo fue nuevamente desviado para subsidiar el reforzamiento militar, esta vez del Ejército Patriótico Ruandés (EPR). Y esto ocurrió en el periodo inmediatamente anterior al estallido de la guerra civil en el antiguo Zaire.

Guerra civil en el Congo

Tras la instauración de un régimen clientelar en Ruanda, en 1994, las fuerzas armadas ruandesas y ugandesas, entrenadas en Estados Unidos, intervinieron en el antiguo Zaire, reducto de influencia francesa y belga durante el mandato del presidente Mobutu Sese Seko. Como es bien sabido, las tropas de operaciones especiales norteamericanas –sobre todo los Boinas Verdes del 3er. Grupo de Fuerzas Especiales, estacionado en Fort Bragg, Carolina del Norte– habían estado entrenando al EPR. Este programa era la continuación del apoyo y la ayuda militar encubiertos que se habían prestado al EPR antes de 1994. A su vez, el trágico final de la guerra civil ruandesa y la crisis de los refugiados habían puesto el escenario para la participación del EPR ugandés y ruandés en la guerra civil del Congo:

Washington inyectó ayuda militar al ejército de Kagame; las fuerzas especiales y otros miembros del ejército norteamericano dieron entrenamiento a cientos de soldados ruandeses. Pero Kagame y sus colegas tenían sus propios planes. Mientras los Boinas Verdes entrenaban al Ejército Patriótico Ruandés, este mismo ejército entrenaba secretamente a los rebeldes en Zaire... [En] Ruanda, funcionarios norteamericanos hablaron públicamente de su compromiso con el ejército como si estuvieran casi exclusivamente dando entrenamiento en derechos humanos. Pero los ejercicios de las fuerzas especiales cubrían otras áreas, como adiestramiento para el combate... Cientos de soldados y de oficiales fueron enrolados para los programas de entrenamiento de los norteamericanos, tanto en Ruanda como en Estados Unidos... Capitaneados por las fuerzas especiales, los ruandeses estudiaron técnicas de camufla-

je, desplazamiento de unidades pequeñas, procedimientos para llevar tropas, trabajo en equipo entre los soldados... Y mientras esto ocurría, oficiales norteamericanos se reunían con Kagame y otros líderes prominentes ruandeses para conversar sobre el peligro continuo para el [antiguo] gobierno [ruandés, en el exilio] que representaba Zaire... Está claro que el centro de la discusión entre militares ruandeses y norteamericanos había variado de cómo promover los derechos humanos a cómo combatir una rebelión... Con el apoyo del [presidente ugandés] Museveni, Kagame fraguó un plan para respaldar un movimiento rebelde en el este de Zaire [encabezado por Laurent Desiré Kabila]... La operación fue iniciada en octubre de 1996, unas pocas semanas después del viaje de Kagame a Estados Unidos y de que la misión de entrenamiento de las fuerzas especiales terminara... Una vez empezada la guerra [en el Congo], Estados Unidos prestó "asistencia política" a Ruanda... Un funcionario de la embajada norteamericana, en Kigali, viajó muchas veces al este de Zaire para servir de intermediario con Kabila. Pronto los rebeldes avanzaron y arrasaron con el ejército de Zaire con ayuda del ejército de Ruanda; cruzaron la tercera nación más grande de África en siete meses, con pocos enfrentamientos militares significativos. Mobutu huyó de la capital, Kinshasa, en mayo de 1997, Kabila tomó el poder y cambió el nombre del país por Congo... Los funcionarios norteamericanos niegan que hubiera personal militar de su país con las tropas de Ruanda en Zaire durante la guerra, aunque corrieron rumores, no confirmados, de la presencia de consejeros norteamericanos en la región desde los primeros días de la guerra.[39]

Intereses mineros norteamericanos

Lo que estaba en juego en estas operaciones militares en el Congo eran los vastos recursos minerales del este y del sur de Zaire, entre otros, las reservas estratégicas de cobalto, de importancia decisiva para la industria norteamericana de defensa. Durante la guerra civil, varios meses antes de la caída de Mobutu, Laurent Desiré Kabila, que vivía en Goma, en el este de Zaire, había renegociado los contratos mineros con diversas compañías americanas e inglesas, como la American Mineral Fields, cuyas oficinas generales están en Hope, Arkansas, el pueblo natal del ex presidente William Clinton.[40]

[39] Lynne Duke, "Africans use US military training in unexpected ways", *Washington Post*, 14 de julio de 1998, p. A01.

[40] Musengwa Kayaya, "U.S. company to invest in Zaire", *Pan African News*, 9 de mayo de 1997.

Entre tanto, en Washington, los funcionarios del FMI se afanaban revisando la situación macroeconómica de Zaire. Sin pérdida de tiempo, se decidió la agenda económica pos-Mobutu. En un estudio publicado en abril de 1997, a un mes escaso antes de que el presidente Mobutu Sese Seko abandonara el país, el FMI recomendaba "detener el asunto de la moneda completamente y de inmediato", como parte de un programa de recuperación económica.[41] Unos meses después, al asumir el poder en Kinshasa, el nuevo gobierno de Kabila recibió la orden del FMI de congelar los salarios de los servidores públicos, con vistas a la "recuperación de la estabilidad macroeconómica". Erosionado por la hiperinflación, el salario promedio del sector público había caído a treinta mil nuevos zaires al mes, el equivalente de un dólar norteamericano.[42]

Las exigencias del FMI significaban mantener a la población entera en la pobreza abyecta. Excluyeron desde el principio la posibilidad de una reconstrucción medianamente significativa y por ende contribuyeron a seguir alimentando la guerra civil congolesa, en la que han muerto cerca de dos millones de personas.

Una guerra no declarada entre Francia y Estados Unidos

La guerra civil en Ruanda fue una lucha cruenta por el poder político entre el gobierno hutu de Habyarimana, apoyado por Francia, y el FPR tutsi, respaldado financiera y militarmente por Washington. Las rivalidades étnicas fueron utilizadas deliberadamente en la búsqueda de objetivos geopolíticos. Participaron tanto la CIA como la inteligencia francesa.

En palabras del ex ministro de Cooperación francés, Bernard Debré, durante la gestión del primer ministro Henri Balladour, "lo que no se dice es que, si bien Francia estaba de un lado, del otro estaban los americanos, armando a los tutsis, y éstos armaron a los ugandeses. No quiero parecer como que tengo la última palabra, pero hay que hablar con la verdad".[43]

[41] FMI, *Zaire hyperinflation 1990-1996*, Washington, abril de 1997.

[42] Alain Shungu Ngongo, "Zaire economy: How to survive on a dollar a month", *International Press Service*, 6 de junio de 1996.

[43] Citado en Thérèse LeClerc, "Who is responsible for the genocide in Rwanda?", página web de *World Socialist* en http://www.wsws.org/index.sthml, 29 de abril de 1998.

Además de la ayuda militar prestada a las facciones en pugna, la afluencia de préstamos para el desarrollo tuvo un importante papel en el "subsidio al conflicto". En otras palabras, tanto la deuda externa de Uganda como la de Ruanda habían sido desviadas para apoyar al ejército y a los paramilitares. La deuda externa de Uganda se incrementó en más de dos mil millones de dólares, mucho más rápidamente que la de Ruanda, que creció aproximadamente 250 millones de dólares de 1990 a 1994. En retrospectiva, el EPR (que recibió ayuda militar de Estados Unidos y financiamiento de la deuda externa de Uganda) estaba mucho mejor equipado y entrenado que las fuerzas armadas de Ruanda, leales al presidente Habyarimana. Desde el principio el EPR tuvo una ventaja militar definitiva sobre las fuerzas armadas ruandesas.

Según testimonio de Paul Mugabe, ex miembro de la unidad del alto comando del FPR, el general mayor Paul Kagame ordenó personalmente que se derribara el avión del presidente Habyarimana en abril de 1994, porque tenía en la mira tomar el control del país. Sabía perfectamente que el asesinato de Habyarimana desencadenaría un "genocidio" en contra de los civiles tutsis. Las fuerzas del EPR estaban completamente desplegadas en Kigali, en el momento en que tuvieron lugar las matanzas, y no tomó ninguna acción para impedir que ocurrieran:

La decisión de Paul Kagame de derribar la aeronave del presidente Habyarimana fue el catalizador de un drama inédito en la historia de Ruanda, y el general mayor Paul Kagame tomó esa decisión sabiendo perfectamente lo que hacía. Su ambición ocasionó la exterminación de nuestras familias: tutsis, hutus y twas. Todos salimos perdiendo. La toma del poder de Kagame arrancó la vida a muchísimos tutsis y originó el éxodo innecesario de millones de hutus, muchos de los cuales eran inocentes y cayeron en las manos de los cabecillas del genocidio. Algunos ruandeses ingenuos proclamaron a Kagame su salvador, pero el tiempo ha demostrado que fue él quien ocasionó nuestro sufrimiento y nuestras desventuras... ¿Puede Kagame explicar al pueblo ruandés por qué envió a Claude Dusaidi y a Charles Muligande a Nueva York y a Washington para detener la intervención militar de la ONU, que supuestamente se enviaría para proteger al pueblo ruandés del genocidio? La razón de evitar esa intervención militar era permitir a los líderes del fpr apoderarse del gobierno en Kigali y mostrar al mundo que ellos –el FPR– habían detenido el genocidio. Recordemos que el genocidio tuvo lugar a lo largo de tres meses, aun cuando Kagame ha dicho que pudo detenerlo la primera semana

después de que se estrellara el avión. ¿Puede explicarnos el general mayor Paul Kagame por qué conminó a MINUAR? a que abandonara el suelo ruandés en cuestión de horas, mientras la ONU examinaba la posibilidad de aumentar sus tropas en Ruanda para detener el genocidio?[44]

El testimonio de Paul Mugabe sobre el derribo del avión de Habyarimana es corroborado por documentos e información de inteligencia presentados durante la investigación realizada por el parlamento francés. Un estudio reciente de Wayne Madsen revela la complicidad de funcionarios de alto rango de Naciones Unidas:

La revelación más grave es el destino de la grabadora de la cabina del avión Mystère Falcon 50 abatido, o "caja negra". Según ciertos oficiales involucrados en los movimientos aéreos de la ONU en la región, la caja negra fue trasladada en secreto a la sede de la ONU en Nueva York, donde aún permanece... Según fuentes de la ONU, los datos de la caja negra no se han revelado por las presiones del gobierno de Estados Unidos... [y porque] la juez canadiense Louise Arbour, fiscal especial para el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra que tuvo a su cargo el genocidio en Ruanda, ordenó que los sucesos que condujeron al abatimiento de la aeronave el 6 de abril [de 1994] no se investigaran. Los funcionarios de la ONU se vieron obligados por Arbour ha ocuparse exclusivamente de los sucesos ocurridos después de la caída del avión. Además, Arbour... ordenó a sus subordinados, entre ellos al ex comisionado de la Real Policía Montada de Canadá Al Breau, que pararan la investigación una vez que quedó claro que el FPR y sus patrocinadores norteamericanos fueron partícipes en la planeación del ataque a la aeronave. Había pruebas de que el FPR tenía el control de los tres principales accesos al aeropuerto internacional Kayibanda la noche anterior al ataque, y que mercenarios europeos, pagados por el FPR y la inteligencia norteamericana, ocuparon tres bodegas alquiladas por una compañía suiza para planear y lanzar el ataque con misiles al Mystère Falcon. Además, los investigadores canadienses y de la ONU descubrieron pruebas de que durante 1996 y 1997 la AID canadiense otorgó asistencia humanitaria y para el desarrollo al gobierno del FPR, que fue desviada a la compra de armas. Cuando los auditores internos de la aid se enteraron de esto, el gobierno canadiense detuvo abruptamente la investigación.[45]

[44] Paul Mugabe, "The shooting down of the aircraft carrying Rwandan President Habyarimana", testimonio presentado ante la Asociación Internacional de Estudios Estratégicos, Alexandria, Virginia, 24 de abril de 2000.

[45] Wayne Masden, "UN and Canada complicit in Rwanda cover-up: Americans

En palabras de Madsen, estas "actividades encubiertas en beneficio de Estados Unidos y Canadá" fueron respaldadas por el entonces subsecretario general de la ONU responsable de la paz, Kofi Annan, en estrecha colaboración con Madeleine Albright (a la sazón embajadora de Estados Unidos en la ONU) y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.[46] "Al secretario general de la ONU, el general Boutros Boutros Ghali, Estados Unidos lo dejó fuera de la jugada, y luego logró removerlo de su puesto en 1996, sustituyéndolo por Annan."[47]

Instalación de un protectorado angloamericano

No obstante las buenas relaciones diplomáticas existentes entre París y Washington, y la aparente unión de la alianza militar occidental, *había una guerra no declarada entre Francia y Estados Unidos*. Al apoyar el reforzamiento del ejército de Uganda y de Ruanda, y al intervenir directamente en la guerra civil del Congo, Washington tiene responsabilidad directa en las matanzas étnicas cometidas en el este del Congo, así como de los cientos de miles de personas que murieron en los campos de refugiados. El general mayor Paul Kagame era un instrumento de Washington. La pérdida de la vida de los africanos no era importante. La guerra civil de Ruanda y las masacres étnicas formaban parte de la política exterior de Estados Unidos, cuidadosamente planeadas con miras a la obtención de objetivos estratégicos y económicos.

Los políticos norteamericanos sabían de sobra que una catástrofe se desataría. De hecho, cuatro meses antes del genocidio, la CIA había prevenido al Departamento de Estado, en un comunicado confidencial, que los Acuerdos de Arusha no tendrían éxito y "que, si se reiniciaban las hostilidades, más de medio millón de personas morirían".[48] Esta información no fue dada a conocer a la ONU: "no se le dio esta información al general mayor Dallaire [a cargo de las

and RPF planned and launchaed aircraft attack", *L'Observatoire de l'Afrique Centrale* 3:35, 25 de septiembre a 1 de octubre de 2000 y también http://www.obsac.com/OBSV3N35-Madsen.html. Véase también "Tutsi informants killed Rwandan president", *Ottawa Citizen*, 2 de marzo de 2000.

[46] *Ibid.*

[47] *Ibid.*

[48] Linda Melvern, "Betrayal of the century", *Ottawa Citizen*, 8 de abril de 2000.

fuerzas de la ONU en Ruanda] hasta después del genocidio".[49]

La finalidad de Washington era expulsar a Francia, desacreditar al gobierno francés (que había apoyado al régimen de Habyarimana) e instalar un protectorado angloamericano en Ruanda, con Paul Kagame a la cabeza. Deliberadamente, Washington no hizo nada para impedir las matanzas.

Cuando se sugirió la presencia de tropas de la ONU, Kagame maniobró para demorar su llegada, diciendo que no aceptaría una fuerza pacificadora hasta que el ERP asumiera el control de Kigali. "Temía que las fuerzas de la ONU, constituidas por más de cinco mil soldados... interfirieran y le arrebataran [al ERP] la victoria".[50] El Consejo de Seguridad, tras una deliberación y un informe del secretario general Boutros Boutros Ghali, decidió posponer la intervención.

El "genocidio" en Ruanda persiguió fines estrictamente estratégicos y geopolíticos. Las matanzas étnicas constituyeron un revés a la credibilidad de Francia, cosa que permitió a Estados Unidos establecer una plataforma neocolonialista en África central. Al mando del gobierno tutsi expatriado del FPR, Kigali, la capital de Ruanda, ha dejado de ser un escenario inequívocamente francobelga para convertirse en uno angloamericano. El inglés se ha convertido en la lengua dominante en el gobierno y entre el sector privado. Muchos negocios privados, propiedad original de los hutus, fueron expropiados en 1994 por los tutsis expatriados que estaban de vuelta, que habían estado exiliados en el África anglohablante, en Estados Unidos y en Inglaterra.

El EPR utiliza la lengua inglesa y el kinyarwanda; la universidad, anteriormente vinculada a Francia y Bélgica, utiliza el inglés, lengua que se ha vuelto oficial, junto con el francés y el kinyarwanda. Con el tiempo, la influencia política y cultural de Francia desaparecerá. Washington se ha convertido en el nuevo amo colonial de un país francófono.

Otros países francófonos del África subsahariana han cerrado convenios de cooperación militar con Estados Unidos. Estos países son los candidatos de Washington a seguir el modelo de Ruanda. Mientras tanto, en el África occidental el dólar americano está desplazando rápidamente al franco CFA, eslabonado a la tesorería de Francia por un convenio ministerial de divisas.

[49] *Ibid.*

[50] Scott Peterson, "Peacekeepers will not halt carnage, say Rwandan rebels", *Daily Telegraph*, Londres, 12 de mayo de 1994.

8

"EXPORTANDO EL APARTHEID" AL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Durante el mandato de Nelson Mandela, el ala derecha del Frente de Liberación Afrikaner (Afrikaner Freedom Front [FF]), liderado por el general Constant Viljoen, promovió el desarrollo de un "Corredor Agrícola" a lo largo de la parte meridional del continente, desde Angola hasta Mozambique. La agroindustria afrikaner pretende extender su control a los países vecinos con inversiones en gran escala en la agricultura comercial, procesamiento de alimentos y ecoturismo. Las uniones de productores afrikaner del Estado Libre de Orange y Transvaal Oriental son socios; su objetivo es establecer granjas de propietarios blancos más allá de las fronteras de Sudáfrica.[1]

Sin embargo, el "Corredor Agrícola" no significa "alimentos para los habitantes locales". Por el contrario, según este proyecto, los campesinos perderán sus tierras; los pequeños propietarios se convertirán en trabajadores agrícolas o arrendatarios en las grandes plantaciones propiedad de los bóers. Además, la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola (South African Chamber for Agricultural Development [SACADA]), organización sombrilla, está integrada por varias organizaciones de derecha, incluyendo al FF dirigido por Viljoen y la secreta Afrikaner Broederbond. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Sudafricanas durante el régimen del apartheid, el general Viljoen tuvo que ver con los ataques contra dirigentes del Congreso Nacional Africano, incluyendo el asesinato de activistas en contra del apartheid y críticos.[2] El FF, aunque "moderado" en comparación con el derechista extremo Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) de Eugene Terre'Blanche, es un movi-

[1] "Ten Years Ago", *Weekly Mail and Guardian*, Johannesburgo, 23 de junio de 1995.

[2] Véase Stefaans Brummer, "The web of stratcoms", *Weekly Mail and Guardian*, Johannesburgo, 24 de febrero de 1995; veáse también *Antifa Info Bulletin*, vol. 1, núm. 1, 23 de enero de 1996.

miento político racista comprometido con el Afrikaner Volksstaat.[3] No obstante, la iniciativa de SACADA-FF contó con el respaldo político del Congreso Nacional Africano (CNA), así como con la bendición personal del presidente Nelson Mandela.

En discusiones con el presidente Mandela, el general Viljoen alegó que "el asentamiento de agricultores afrikaner estimulará la economía de los estados vecinos, proporcionará alimentos y empleo a los habitantes locales, y que esto contendrá el flujo de inmigrantes ilegales a Sudáfrica".[4]

Viljoen también ha mantenido reuniones de alto nivel sobre inversiones agrícolas afrikaner con representantes de la Unión Europea, las Naciones Unidas y otras agencias crediticias.[5]

Por su parte, Pretoria negoció con varios gobiernos africanos en nombre de SACADA y el FF. El gobierno del CNA estaba ansioso de facilitar la expansión de la agroindustria en los países vecinos. "Mandela pidió al gobierno de Tanzania que acepte agricultores afrikaner para que ayuden a desarrollar el sector agrario. SACADA se ha aproximado a unos doce países africanos 'interesados en los campesinos sudafricanos blancos'."[6] En una empresa fundada en 1994 por la Corporación para el Desarrollo de Sudáfrica, el gobierno del Congo otorgó a los bóers concesiones de 99 años sobre tierras cultivables. El presidente Mandela respaldó el plan convocando a las naciones africanas "a aceptar a los inmigrantes como una especie de ayuda externa".[7]

Una caravana anterior de agricultores blancos a Zambia y el Congo, a principios de los noventa, tuvo resultados mixtos. En lugar de vincularse a los intereses de la agroindustria corporativa (como en el caso de SACADA), su aliciente era el reasentamiento de agricultores afrikaner particulares (a menudo arruinados) sin respaldo político, apoyo financiero ni la legitimación de la Nueva Sudáfrica.

[3] Al fundar el Freedom Front, Viljoen abandonó el Afrikaner Volksfront (AVF), cuyo liderazgo compartía. También abandonó sus amenazas de resistencia armada poco antes de las elecciones de 1994.

[4] "EU backs Boers trek to Mozambique", *Weekly Mail and Guardian*, 1 de diciembre de 1995.

[5] "Trade block planned for Eastern regions", *Weekly Mail and Guardian*, Johannesburgo, 12 de mayo de 1995.

[6] *Ibid*.

[7] "The Boers are back", *South Africa: Programme Support Online*, 4, 1996. Véase también "Boers seek greener pastures", *Los Angeles Times*, 2 de septiembre de 1995.

Presionados por el Banco Mundial y la OMC, los países africanos receptores acogieron, en términos generales, la entrada de inversiones afrikaner. La liberalización del comercio y de la inversión extranjera respaldó la extensión de los intereses comerciales afrikaner en toda la región.

LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS DE LABRANZA

A la larga, el "Corredor Agrícola" desplazará el sistema de cultivo preexistente; no sólo se está apropiando de la tierra, sino que expropia la infraestructura económica y social del país huésped, lo que se traduce en un mayor nivel de pobreza en el campo. Debilita la agricultura de subsistencia así como la economía campesina de cosechas para exportación; desplaza a los mercados agrícolas en el nivel local y agrava el hambre endémica prevaleciente en la región. Para Jen Kelenga, portavoz de un grupo prodemócrata en el Congo (antes Zaire), los bóers "están en busca de nuevos territorios en donde aplicar su racista estilo de vida".[8]

El "Corredor Agrícola" modifica el paisaje rural de la región sudafricana, ya que es necesario el desarraigo y el desplazamiento de los pequeños agricultores de un vasto territorio. Según el proyecto propuesto, millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables se entregan a la agroindustria sudafricana. Los bóers administrarán explotaciones agrícolas comerciales en gran escala, utilizando a los campesinos como "arrendatarios" y como trabajadores agrícolas temporales.

Aunque el proyecto pretende "traer desarrollo" y "transferir la muy necesaria experiencia agrícola", la iniciativa tiende sobre todo a "exportar el apartheid" a los países vecinos. Este último objetivo, por su parte, es apoyado por toda la gama de reformas económicas patrocinadas por el FMI-Banco Mundial-OMC.

La inversión afrikaner en agricultura va de la mano de la Ley Agraria patrocinada por el Banco Mundial. La expropiación de tierras campesinas suele ser exigida por los acreedores como condición para la renegociación de las deudas del Club de París. Las tierras campesinas (que formalmente pertenecían al estado) se venden

[8] "The Boers are back", *op. cit.*

(a precios muy bajos) o se concesionan a agroindustrias internacionales (por ejemplo, por 50 a 99 años). Los flacos productos de las ventas de tierras se utilizarán para el servicio de la deuda externa.

El Banco Mundial ha promovido cambios en la legislación agraria que a la larga corren el peligro de abolir el derecho a la tierra de millones de pequeños campesinos. Idéntica legislación agraria se ha ido imponiendo en toda la región: las leyes agrarias nacionales (elaboradas con asesoría técnica del departamento legal del Banco Mundial) son, con pocas variantes, "copias al carbón unas de otras": "La constitución [en Mozambique] dice que la tierra es propiedad del estado y no puede ser vendida ni hipotecada. Ha habido fuertes presiones, particularmente de Estados Unidos y del Banco Mundial, para que la tierra sea privatizada y para que se permitan las hipotecas..."[9]

Las empresas y los bancos sudafricanos están participando también en programas de privatización a nivel nacional (siguiendo el programa de ajuste estructural), adquiriendo a precios ínfimos la propiedad de los bienes del estado en minería, servicios públicos y agricultura. Con respecto a esta última, las granjas experimentales, los centros de investigación y las plantaciones de propiedad estatal, las productoras de semillas, etc., han sido puestos en el paquete de subastas. Con la desregulación de los mercados agrícolas por consejo del Banco Mundial, el sistema de comercialización del estado es clausurado o acaparado por inversionistas extranjeros.

DEROGACIÓN DE LOS DERECHOS CONSUETUDINARIOS SOBRE LA TIERRA

No obstante la legislación agraria propuesta, tanto SACADA como el Banco Mundial promovieron la protección de los derechos agrarios tradicionales. El pequeño campesinado debe ser "protegido" mediante el establecimiento de "reservas de tierras consuetudinarias" ubicadas en la vecindad inmediata de las granjas comerciales de blancos. En la práctica, en virtud de la nueva legislación agraria la mayoría de los agricultores quedarán encerrados en pequeños enclaves territoriales ("tierras comunales"), mientras que el grueso de

[9] Joseph Hanlon, *Supporting peasants in their fight for land*, Londres, Christian Aid, noviembre de 1995.

las mejores tierras cultivables se venderán o alquilarán a inversionistas privados.

Esto significa también que las comunidades agrarias que practican la rotación de cultivos en grandes áreas, así como las dedicadas al pastoreo, de aquí en adelante, serán procesadas por usurpación de tierras destinadas a la agricultura comercial, aun si no tienen conocimiento previo. Empobrecidos por las reformas macroeconómicas, sin acceso al crédito ni a los insumos agrícolas modernos, estos enclaves consuetudinarios constituirán "reservas de mano de obra" para la agroindustria en gran escala.

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AFRIKANER EN MOZAMBIQUE

SACADA tenía planes para invertir en Mozambique, Zaire, Zambia y Angola, "siendo Mozambique un experimento de prueba".[10] El presidente de este país, Joaquim Chissano, y el presidente Nelson Mandela firmaron un convenio intergubernamental, en 1996, que garantizaba a la agroindustria afrikaner el derecho a desarrollar inversiones en por lo menos seis provincias, abarcando concesiones territoriales de unos ocho millones de hectáreas:[11] "Mozambique necesita la experiencia técnica y el dinero, y nosotros tenemos la gente [...] Preferimos un área que no esté demasiado poblada, porque si hay demasiados habitantes en la tierra eso es un talón de Aquiles [...] Para los bóers, la Tierra está en el mismo nivel que Dios y la Biblia."[12]

En las áreas de SACADA concesionadas en Mozambique, el gobierno "socialista" del Frelimo garantizaría que no hubiera invasiones; los pequeños propietarios rurales y los agricultores de subsistencia (que invariablemente no poseen títulos legales sobre las tierras) serían expulsados o bien transferidos a tierras marginales.[13] Por su parte, a miembros del ejército y ministros del gobierno que desearan convertirse en "socios comerciales" de la agroindustria interna-

[10] "The second great trek", *op. cit.*

[11] Véase "Boers are back", *op. cit.*, y "Boers seek greener pastures", *op. cit.*

[12] Entrevista del autor con funcionarios de la Alta Comisión Sudafricana responsable del proyecto SACADA, Maputo, julio de 1996.

[13] Véanse los documentos de la Conferencia de la Tierra, *Conferencia Nacional de Terras, documento de trabalho*, Maputo, julio de 1996.

cional se les concesionaron millones de hectáreas de tierras ocupadas por campesinos.[14] El Banco Mundial, junto con los acreedores bilaterales, propuso (en nombre de inversionistas extranjeros potenciales) un sistema de registro de tierras que incluye un detallado levantamiento de mapas de las zonas agrícolas mediante fotografía aérea, con el fin de generar mapas digitalizados.[15]

En la provincia de Niassa, en Mozambique, las mejores tierras agrícolas se entregaron en concesión a los afrikaner por cincuenta años. "Existen tantos lugares hermosos y fértiles que elegir...", ha dicho Egbert Hiemstra, "que posee dos granjas en Lydenburg y desea una tercera en Mozambique".[16] Al precio simbólico de 0.15 centavos de dólar por año, la renta de tierras es un regalo.[17]

Con el establecimiento de Mosagrius (empresa mixta), SACADA está ahora firmemente instalada en el fértil valle del río Lugenda. Pero los bóers también tienen los ojos puestos en las zonas agrícolas a lo largo de los ríos Zambezi y Limpopo, así como en las instalaciones carreteras y ferrocarrileras que unen a Lichinga, la capital de Niassa, con el puerto marítimo de altura de Nagala. La línea férrea está siendo rehabilitada y modernizada (por un contratista francés) con "ayuda para el desarrollo" proporcionada por Francia.

Nuestra intención [de los granjeros afrikaner] es desarrollar las zonas altas [*highveld*] plantando maíz y trigo y con ganado vacuno, en vinculación con el mercado de agroprocesamiento y de exportación. En las tierras bajas [*lowvelds*] plantaremos variedades de árboles de frutos tropicales y estableceremos plantas productoras de jugos modernas. Nuestros institutos agrícolas instalarán centros de investigación en la zona con vistas a respaldar las iniciativas de SACADA [...] Con el tiempo nos gustaría también llegar a las áreas algodoneras de las provincias de Nampulo y Cabo Delgado.[18]

La infraestructura disponible, incluyendo numerosos edificios y empresas estatales, será cedida; varias explotaciones agrícolas estatales en Niassa se transferirán a los afrikaner junto con el Colegio

[14] Hanlon, *op. cit.*, p. 1.

[15] *Ibid.*

[16] Véase "EU backs Boer trek", *op. cit.*

[17] *Ibid.* La suma mencionada para el alquiler de la tierra es de 0.60 rands al año por hectárea.

[18] Entrevista del autor con funcionarios de la Alta Comisión Sudafricana en Maputo, julio de 1996.

Técnico de Lichinga. [19] Se apropiarán también de la Estación de Investigación Agrícola: "Lo que quieren es vender." Están buscando inversión afrikaner para mantener a flote la Estación de Investigación.[20] A la larga, la agroindustria afrikaner está decidida a apoderarse de las productoras estatales de semillas (SEMOC) en Niassa.[21]

En el proyecto Mosagrius, "el empuje principal provendrá de los agricultores prósperos de Sudáfrica, que ahora están buscando nuevas tierras, y que pueden movilizar considerables recursos financieros".[22] Operarán sus nuevas granjas como parte de sus empresas comerciales en Sudáfrica, despachando gerentes y supervisores afrikaner blancos a Mozambique. "Las granjas familiares con una buena trayectoria pero sin capacidad de inversión también son elegibles; podrán recurrir a SACADA para financiación."[23] Sin embargo, no se toma ninguna medida para ayudar a los agricultores afrikaner lanzados a la bancarrota como resultado del programa de liberalización económica de Pretoria. No obstante, estos agricultores pueden ser contratados para trabajar como administradores en Mozambique.

Por su parte, los bóers llevarán con ellos a sus "negros de confianza", a sus tractoristas y sus técnicos. En palabras del funcionario de enlace de Mosagrius, en el Alto Comisariado Sudafricano en Maputo: "Todos y cada uno de los agricultores afrikaner llevarán consigo a sus dóciles *kaffirs*", que se utilizarán para supervisar a los trabajadores locales. [24]

SACADA levantó mapas cuidadosos de las áreas designadas utilizando helicópteros. Los institutos de investigación agrícola de Sudáfarica habían supervisado el área, y proporcionaron una evaluación de las condiciones ambientales, climáticas y sociales prevalecientes. Demógrafos sudafricanos fueron llamados como asesores para evaluar las implicaciones que tendría el desplazar a los habitantes rurales.

[19] De acuerdo con reportes de prensa y funcionarios de la Alta Comisión Sudafricana en Maputo, julio de 1996. El tratado mismo se refiere explícitamente a unas 170 000 hs más las probabilidades de derechos de desarrollo en el lago Niassa. Véase "The Agreement on Basic Principles and Understanding concerning the Mosagrius Development Program", Maputo, mayo de 1996.

[20] Entrevista con funcionarios de la Alta Comisión Sudafricana responsable del proyecto Mosagrius.

[21] *Ibid*.

[22] *Ibid*.

[23] *Ibid*.

[24] *Ibid*.

LA CREACIÓN DE "MUNICIPIOS RURALES"

Según los lineamientos del proyecto SACADA, las comunidades rurales en Niassa, que ocupan las áreas concesionarias afrikaner, deben reagrupadarse en "municipios rurales" similares al régimen del apartheid:

> Lo que se hace es desarrollar aldeas a lo largo de la carretera próxima a las granjas [blancas]. Estas aldeas han sido planificadas muy cuidadosamente [por sacada] en la proximidad de los campos, de manera que los trabajadores agrícolas puedan ir y venir. Se da a las aldeas algunas infraestructuras y una parcela de tierra para cada familia, de modo que los trabajadores agrícolas puedan cultivar sus propias hortalizas.[25]

A no ser que los simbólicos derechos consuetudinarios a la tierra sean incluidos dentro de o en áreas contiguas a las concesiones, los campesinos se convertirán en trabajadores agrícolas sin tierras o "arrendatarios". Con este sistema, aplicado por los bóers en Sudáfrica desde el siglo XIX, las familias de campesinos negros desempeñan servicios (*corvée*) a cambio del derecho a trabajar una pequeña parcela de tierra. Formalmente prohibido en Sudáfrica en 1960 por el gobierno nacionalista, el "alquiler de la mano de obra" sigue existiendo en muchas partes de Sudáfrica, como en el Transvaal oriental y en Kwa-Zulu Natal.[26] Ha evolucionado y ahora se hace un pago de un salario nominal (muy bajo), principalmente para disfrazar la relación feudal (ilegal). Desde 1995, éste ha sido el objetivo de la ley de reforma agraria (*labor tenants*) del ministro de Asuntos Agrarios, Derek Hanekom.[27]

Los municipios establecidos en las concesiones constituyen "reservas" de mano de obra barata para las granjas comerciales blancas. Los salarios en Mozambique son sustancialmente más bajos que en Sudáfrica. Para los trabajadores temporales, el salario ha sido fijado en el salario mínimo estatutario, de apenas 18 dólares al mes, que el representante del FMI, Sergio Leite, en su declaración ante una reunión de acreedores en 1995, consideró "excesivo" de

[25] Entrevista con expertos agrícolas sudafricanos, Alta Comisión Sudafricana, Maputo, julio de 1996.

[26] Véase Eddie Koch y Gaye Davis, "Hanekom's bill to bury slavery", Johannesburgo, *Weekly Mail* y *Guardian*, 2 de junio de 1995.

[27] *Ibid*.

acuerdo con las normas internacionales. También señaló las presiones inflacionarias resultantes de las demandas salariales.[28]

La derogación de los derechos de los trabajadores y la desregulación del mercado laboral recomendadas por el FMI permite a los bóers no sólo pagar a sus trabajadores mozambiqueños salarios excesivamente bajos, sino también rehuir las demandas de los trabajadores agrícolas negros en Sudáfrica. Igualmente, permite que la agroindustria afrikaner invierta en los países vecinos para cabildear más eficazmente ante el gobierno del CAN en contra de la Reforma Agraria y los programas de "acción afirmativa" dentro de Sudáfrica.

Además, de acuerdo con el Convenio de Mosagrius (cláusula 42) el gobierno mozambiqueño será plenamente responsable de la negociación de las disputas sobre tierras y de garantizar la expropiación de tierras agrícolas "sin perjuicios o pérdidas que puedan presentarse por tales demandas al SDM [Mosagrius] y otros participantes de Mosagrius".[29]

AYUDA EXTERNA PARA APOYAR ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLAS DE BLANCOS

Los principales bancos comerciales de Sudáfrica, el Banco Mundial y la Unión Europea han respaldado firmemente el proyecto. El "Corredor Agrícola" se ha convertido en parte integral del programa de ajuste estructural promovido por el FMI-Banco Mundial. En palabras del secretario de SACADA, Willie Jordaan, "SACADA se ha esforzado por alinear sus políticas con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y ha declarado que estaba lista para convertirse en una agencia de desarrollo internacional" con el mandato para contratar con instituciones crediticias y llevar a cabo "programas de ayuda exterior" en su nombre.[30]

Aunque el mundo occidental respaldó la lucha del CNA contra el régimen del apartheid, está dando ahora (en la era postapartheid) apoyo financiero a una organización de desarrollo afrikaner racista. Bajo el disfraz de "ayuda extranjera", los acreedores occidentales contribuyeron a extender el sistema de apartheid a los países ve-

[28] "FMI não concorda", *Mediafax*, Maputo, 26 de septiembre de 1995, p. 1.

[29] Cláusula 42 del Convenio de Mosagrius.

[30] "FMI não concorda", *op. cit.* Véase también "The second great trek", *op. cit.*

cinos. La Unión Europea dio dinero a SACADA de un paquete de desarrollo destinado explícitamente por Bruselas al Programa de Reconstrucción y Desarrollo de Sudáfrica. Según un portavoz de la UE, el proyecto "era lo mejor que se había oído de África en 30 años".[31] El embajador de la UE para Sudáfrica, Erwan Fouéré, se reunió con el general Viljoen para discutir el proyecto. Fouéré confirmó que, si todo iba bien, se podría disponer de más dinero de la UE para cubrir los costos de "establecer granjas afrikaner en los países vecinos de Sudáfrica". El hecho de que el proyecto derogue los derechos sobre la tierra de los pequeños propietarios y reproduzca el sistema de "arrendamiento" que prevaleció en Sudáfrica durante el apartheid, no es tema de discusión.

PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO

La mayor parte de la línea costera mozambiqueña sobre el lago Niassa –incluyendo una franja de 160 km, en el valle del Rif, desde Meponda hasta Mapangula, que se extiende más al norte hacia Ilha sobre o Lago, junto a la frontera con Tanzania– ha sido destinada "para el turismo y otras actividades complementarias y subsidiarias [que sean] ecológicamente sustentables".[32] Estas últimas incluyen también áreas específicas para inversiones sudafricanas en pesca y acuacultura en el lago Niassa, desplazando a la industria pesquera local.[33]

Por su parte, el convenio transfirió a Mosagrius los derechos de desarrollo y operación de la Reserva de Fauna Silvestre de Niassa en la frontera con Tanzania. Ésta comprende una extensa área de unas 20 mil hectáreas destinadas al llamado "turismo ecológicamente sustentable". SACADA deberá cercar el área completa y establecer alojamientos para turistas de altos recursos en la periferia del parque; igualmente, para la gente rica, se ha contemplado la caza de animales silvestres "en áreas estrictamente controladas".[34] Según el funcionario de enlace de Mosagrius: "sin embargo, tal vez sea necesario

[31] "EU backs Boers trek to Mozambique", *op. cit.*

[32] Véase cláusulas 38 y 39 del Convenio de Mosagrius.

[33] Addendum 1, artículo 1 del Convenio de Mosagrius.

[34] Entrevista con funcionarios de la Alta Comisión Sudafricana, Maputo, julio de 1996.

repoblar la fauna de la reserva para garantizar que los turistas puedan ver algo que valga la pena".[35] Un especialista del Departamento de Conservación de la Naturaleza de Sudáfrica está asesorando a SACADA en la planificación del proyecto así como en la obtención de recursos financieros. El financiamiento internacional de los alojamientos y de la reserva de caza se está logrando gracias a cierto número de acaudalados inversionistas privados...[36]

En un proyecto de mucho mayor alcance, James Ulysses Blanchard III, magnate tejano de derecha, ha obtenido una concesión sobre un vasto territorio que incluye la Reserva de Elefantes de Maputo y la adyacente península de Machangula. Durante la guerra civil de Mozambique, proporcionó respaldo financiero a Renamo, la organización rebelde apoyada directamente por el régimen del apartheid y entrenada por las Fuerzas Armadas Sudafricanas.

Pero ahora parece que el hombre que una vez suministró el dinero a un ejército rebelde para que pelease una guerra de increíble destrucción y brutalidad (el Departamento de Estado norteamericano describió una vez las atrocidades de Renamo como peores que las del régimen de Pot Pol en Camboya) es probable que sea premiado otorgándosele el control de un enorme pedazo de la provincia más rica de Mozambique.[37]

Blanchard pretende crear un Parque de Ensueño en el Océano Índico, que incluiría un hotel flotante, alojamientos turísticos de lujo, de entre 600 y 800 dólares la noche, y un casino. Grandes parcelas de tierra en Machangula han sido asignadas también a inversionistas agrícolas del Transvaal oriental.[38] Las comunidades locales en el área concesionada a Blanchard serán expropiadas; en palabras de su gerente general, John Perrot: "Vendremos aquí y les diremos [a los aldeanos] '*Okay,* ahora están ustedes en un parque nacional. Su aldea tendrá que ser alambrada o tendrán a los animales salvajes caminando por su calle principal'."[39]

En esta rebatiña por territorios, el gobierno de Mozambique

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

[37] Eddie Koch, "The Texan who plans a dream park just here", *Weekly Mail* y *Guardian*, 18 de enero de 1996.

[38] "O A, B, C, do projecto de Blanchard", *Mediafax*, Maputo, 19 de febrero de 1996, p. 1.

[39] Eddie Koch, *op. cit.*

aceptó entregar varios millones de hectáreas de las llamadas "tierras baldías" a una organización religiosa, la Compañía El Cielo en la Tierra de Maharishi (Maharishi Heaven on Earth Company), con sede en los Países Bajos.[40] El presidente Chissano es un adepto del yogui Maharishi Mahesh, fundador del Partido de la Ley Natural. Desde la firma del acuerdo en julio de 1993, sin embargo, el gobierno parece haber dado marcha atrás en el trato y ha declarado que la iglesia del Maharashi "será tratada como cualquier otro inversionista extranjero, ni más, ni menos".[41]

ESCULPIENDO EL TERRITORIO NACIONAL

Un territorio autónomo, "un estado dentro del estado", se está desarrollando a partir de la provincia de Niassa; Mosagrius (pasando por encima de los gobiernos nacional y provincial) es la única autoridad en lo concerniente a los derechos de uso de la tierra en las áreas concesionadas (cláusula 34); de forma similar, el territorio se define como zona de libre comercio donde se permite el movimiento sin impedimentos de mercancías, capitales y personas (o sea, los sudafricanos blancos). Todas las inversiones en las áreas concesionadas "estarán libres de derechos aduanales u otras cargas fiscales".[42]

Junto con las concesiones otorgadas a inversionistas extranjeros en diversas partes del país, el territorio nacional está siendo dividido, una vez más, en cierto número de "corredores" separados que recuerdan el periodo colonial. Este sistema de concesiones territoriales, cada uno de cuyos corredores está integrado separadamente en el mercado mundial, tiende a favorecer la desaparición de la economía nacional.

La quiebra del aparato estatal en Mozambique, así como la fragmentación de la economía nacional, favorece la transformación de regiones enteras del país (por ejemplo la provincia de Niassa) en áreas concesionadas o "corredores" bajo la custodia política de acreedores, organizaciones no gubernamentales e inversionistas extranjeros. Estos últimos constituyen un "gobierno paralelo" *de facto*

[40] Philip van Niekerk, "Land for peace, TM group pursues Mozambique haven", *The Boston Globe*, 4 de diciembre de 1994.

[41] *Ibid.*

[42] Cláusula 35.2 del Convenio de Mosagrius, *op. cit.*

que cada vez más pasa por alto el sistema del estado. Además, en varias áreas del norte de Mozambique, el anterior grupo rebelde proapartheid, Renamo (que también ha establecido sus vínculos con los prestamistas), está formalmente al mando del gobierno local. Tras la guerra, varios líderes de Renamo se han convertido en "socios comerciales" de empresas sudafricanas que invierten en Mozambique, incluyendo las inversiones patrocinadas por SACADA: "Parecería que hubiera un entendimiento secreto, como parte del Acuerdo de Paz [1992], de que Renamo y sus patrocinadores obtendrían tierras."[43]

[43] Hanlon, *op. cit.*, p. 9.

9

ATAQUE A LA ECONOMÍA RURAL EN ETIOPÍA. DESTRUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Habiendo sembrado el hambre en Etiopía con el ajuste estructural, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial permiten a las multinacionales norteamericanas explotar este desastre repartiendo semillas genéticamente modificadas como ayuda alimentaria.

La "terapia económica" impuesta por la el FMI-Banco Mundial es responsable en gran parte de la hambruna y de la devastación social en Etiopía y en el resto del África subsahariana, al destruir la economía campesina y precipitar en la miseria a millones de personas. Con la complicidad del gobierno norteamericano, también se han abierto las puertas para que las corporaciones biotecnológicas, que tras bambalinas han estado promoviendo la adopción de sus propias semillas genéticamente modificadas bajo el disfraz de la "ayuda de emergencia" y del alivio del hambre, se apropien de las semillas tradicionales y las especies autóctonas.

CRISIS EN EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA

Más de ocho millones de personas en Etiopía (el 15% de la población) han quedado encerradas en "zonas de hambre". Los sueldos urbanos se desplomaron y los trabajadores temporales de las granjas y campesinos sin tierras, desempleados, han sido empujados a la más mísera pobreza. Las agencias internacionales de ayuda concuerdan, sin más investigación, en que los factores climáticos son la única razón de la pérdida de las cosechas y del consecuente desastre. Lo que la prensa omite es que, pese a la sequía y a la guerra fronteriza con Eritrea, varios millones de personas de las regiones agrícolas más prósperas también están empobrecidas. Su predicamento no se debe a la escasez de granos, sino a los "mercados li-

bres" y a la "medicina económica" prescrita por el FMI-Banco Mundial.

Etiopía produce más del 90% de sus necesidades de alimentos. Sin embargo, según cálculos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agricultural Organization [FAO]), en lo más grave de la crisis, el déficit alimentario para el año 2000 era de 764 mil toneladas métricas de grano, o sea, un déficit de 13 kilos por persona por año.[1] En Amhara, la producción de granos en 1999-2000 fue 20% mayor que las necesidades de consumo. A pesar de esto, 2.8 millones de personas en Amhara (que representa el 17% de la población de la región) quedaron encerradas en zonas de hambre y se encontraban "en riesgo", según la FAO.[2] Mientras que el excedente de granos en Amhara fue de 500 mil toneladas en ese mismo periodo, la "ayuda alimentaria necesaria" había sido señalada por la comunidad internacional en cerca de 300 mil toneladas.[3] El caso de Oromiya, el estado más populoso del país, es similar: 1.6 millones de personas fueron clasificadas "en riesgo", pese a la disponibilidad de más de 600 mil toneladas métricas de excedentes de grano.[4] En ambas regiones, que comprenden a más de un cuarto de la población del país, la *escasez de alimentos* no era, obviamente, la causa de la hambruna, de la pobreza ni de la indigencia social. Sin embargo, de entre la variedad de agencias internacionales de auxilio y de institutos de agricultura ninguno ofrece una explicación.

LA PROMESA DEL "MERCADO LIBRE"

En Etiopía, un gobierno de transición tomó el poder en 1991, luego de una prolongada y devastadora guerra civil. Tras la deposición del régimen prosoviético dergue, del coronel Mengistu Haile Mariam, un proyecto de emergencia para la recuperación y la reconstrucción, financiado por varios acreedores, fue puesto en marcha a toda prisa para hacer frente a la deuda externa, de más de nueve mil millones de dólares, que se había acumulado durante el gobierno de

[1] FAO, *Special report: FAO/WFP crop assessment mission to Ethiopia*, Roma, enero de 2000.

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*

Mengistu. La deuda pendiente de pago con los acreedores oficiales del Club de París fue reprogramada a cambio de reformas macroeconómicas de largo alcance. Con el respaldo de la política exterior de Estados Unidos, se prescribieron las dosis usuales de la medicina económica del FMI. Atrapado en la camisa de fuerza de la deuda y del ajuste estructural, el nuevo gobierno de transición de Etiopía, encabezado por el Frente Revolucionario Democrático Popular, conformado en gran medida por miembros del Frente de Liberación Popular Tigreano, se comprometió a poner en marcha las "reformas de libre mercado", pese a la inclinación marxista de sus líderes. Al poco tiempo, Washington exhibía a Etiopía, junto con Uganda, como un modelo de libre mercado.

Mientras que con el programa de ajuste estructural el presupuesto social se recortó al mínimo, el gasto militar, parcialmente financiado por el chorro de frescura de los préstamos para el desarrollo, se cuadruplicó en comparación con 1985.[5] Como Washington apoyaba a ambas partes de la guerra fronteriza entre Eritrea y Etiopía, la venta de armas americanas se disparó. La bonanza se la repartían los fabricantes de armas y la "colección" de empresarios agrícolas. Estos últimos, desde que terminó la guerra fría, se colocaron en el lucrativo negocio de procurar ayuda de emergencia a los países desgarrados por la guerra. Con el aumento del gasto militar, financiado con dinero prestado, casi la mitad de los ingresos por exportaciones etiopes se destinaba a cubrir las obligaciones de la deuda.

En Washington, funcionarios del FMI y del Banco Mundial redactaron cuidadosamente, en nombre del gobierno de transición, un documento con "parámetros de política económica" en el que se estipulaban los cambios precisos que debían efectuarse en Etiopía; este documento fue remitido a Addis Abeba para la firma del ministro de Finanzas. La obligatoriedad de las medidas severas de austeridad canceló virtualmente la posibilidad de una verdadera reconstrucción del país después de la guerra, así como la reedificación de la fragmentada infraestructura nacional. Los acreedores exigieron la liberalización del comercio y la total privatización de los organismos públicos, las instituciones financieras, las granjas y factorías estatales. Los servidores públicos, entre ellos los maestros y los trabajadores de la salud, fueron despedidos, se congelaron los salarios y

[5] Philip Sherwell y Paul Harris, "Guns before grain as Ethiopia starves", *Sunday Telegraph*, Londres, 16 de abril de 2000.

se rescindieron las leyes laborales para permitir que las empresas del estado "se deshicieran de los trabajadores sobrantes". Entre tanto, la corrupción se extendió. Los bienes del estado se subastaron al capital extranjero a precios irrisorios. Se comisionó a Price Waterhouse Cooper para la coordinación de la venta de las propiedades del estado.

Por otra parte, las reformas provocaron la quiebra del sistema fiscal federal. Se interrumpió el flujo de fondos a los gobiernos de los estados, dejando a las regiones libradas a su propia suerte. Respaldada por varios acreedores, esta "regionalización" se anunció como la "devolución de los poderes del gobierno federal a los gobiernos regionales". Las instituciones de Bretton Woods sabían perfectamente lo que hacían. Dicho por el FMI: "la capacidad [de las regiones] de realizar intervenciones efectivas y eficientes en pro del desarrollo varía ampliamente, así como su capacidad de recolectar impuestos".[6]

ATAQUE A LA ECONOMÍA CAMPESINA

Siguiendo el mismo modelo de reformas adoptadas por Kenia en 1991 (véase el recuadro 9.1), los mercados agrícolas fueron dolosamente manipulados en beneficio de los conglomerados de empresas agrícolas. El Banco Mundial exigió el abandono inmediato del control de precios y de los subsidios a los granjeros. Se liberalizaron los precios del transporte y carga, lo que contribuyó al aumento de los precios de los alimentos en las zonas remotas afectadas por la sequía. Además, los mercados de insumos agrícolas, como fertilizantes y semillas, se pusieron en manos de comerciantes privados, como Pioneer Hi-Bred International, que estableció una lucrativa asociación con Ethiopia Seed Enterprise, el monopolio productor de semillas perteneciente al gobierno.[7]

Al iniciarse las reformas en 1992, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (United States Agency for International Development [USAID]), bajo el programa del título III, "donó" grandes cantidades de fertilizantes fabricados en Estados Unidos, "a cambio de las reformas de libre mercado":

[6] FMI, *Ethiopia, recent economic developments*, Washington, 1999.

[7] Pioner Hi-Bred International, *General GMO facts* <www.pioner.com/usa/biotech/ value_of_producers/product_value.htm#

HAMBRE EN LA "CANASTA DE PAN"

El "mercado libre" de granos, impuesto por el FMI y el Banco Mundial, destruye la economía campesina y socava la "seguridad alimentaria". Malawi y Zimbabue fueron alguna vez prósperos países productores con excedentes de granos. Ruanda era prácticamente autosuficiente en alimentos hasta 1990, en que el FMI ordenó el dumping del sobrante de granos de la Unión Europea y de Estados Unidos en el mercado nacional, precipitando a los pequeños productores a la quiebra. En 1991-1992, el hambre ya había golpeado a Kenia, la "canasta de pan" más suculenta del este de África. Antes, el gobierno de Nairobi había sido puesto en la lista negra por no haber obedecido las prescripciones del FMI. Se había exigido la desregulación del mercado de granos como condición para la reestructuración de la deuda externa de Nairobi con los acreedores oficiales del Club de París.

Para levantar las sanciones económicas, el gobierno del presidente Daniel arap Moi necesitaba la luz verde del FMI. Los acreedores internacionales habían exigido que el estado keniano no interviniera ni regulara de ninguna otra forma la distribución de alimentos a las zonas remotas. El resultado era predecible: el precio de los alimentos en las regiones oriental y nororiental semiáridas de Kenia, limítrofes con Etiopía y Somalia, se disparó. Según las Naciones Unidas, cerca de dos millones de personas quedaron encerradas en "zonas de hambre". Sin embargo, la crisis no se redujo a las regiones semiáridas remotas. También golpeó al próspero valle de Rift, el corazón agrícola de Kenia. De un lado al otro del país había alimentos, pero el poder de compra se había desplomado por la acometida de las reformas propugnadas por el FMI. Y el excedente de granos se estaba exportando...

[Se proveerán] diversos artículos agrícolas a cambio de que se hagan reformas en la comercialización de los granos [...] y de la eliminación de los subsidios a los alimentos [...] La agenda de reformas tiene como puntos centrales la liberalización y la privatización de los sectores de fertilizantes y transportes, a cambio de financiamiento para fertilizantes y para la importación de camiones [...] Las iniciativas de este programa nos han abierto las puertas [...] para definir otras cuestiones importantes relativas a [políticas].[8]

Los abastos de fertilizantes donados por Estados Unidos se agotaron rápidamente y los productos químicos importados provocaron el desplazamiento de los productores locales de fertilizantes. Las mismas compañías dedicadas a la importación de productos

[8] USAID, *Mission to Ethiopia, concept paper: Back to the future,* Washington, junio de 1993.

químicos controlaban también la distribución nacional mayorista, y recurrían a los comerciantes locales como intermediarios.

Hubo un aumento de la producción en las granjas comerciales y en las zonas irrigadas (donde se habían utilizado los fertilizantes y las semillas de alto rendimiento). Con todo, había una tendencia general a una mayor polarización económica y social en el campo, marcada por un rendimiento considerablemente más bajo en las tierras marginales menos productivas, ocupadas por los campesinos pobres. Aun en las zonas donde el rendimiento había aumentado, los granjeros estaban atrapados en las garras de los comerciantes de semillas y fertilizantes.

En 1997, el Centro Carter, de Atlanta (que promovía enérgicamente el uso de herramientas biotecnológicas en la reproducción del maíz), orgullosamente anunció que "Etiopía se había convertido en exportador de alimentos por primera vez".[9] La cruel ironía es que los acreedores habían ordenado el desmantelamiento de las reservas de granos para emergencias (establecidas tras la hambruna de 1984-1985) y las autoridades dieron su aquiescencia.

En lugar de reabastecerse para emergencias, se exportaron los granos para el servicio de la deuda: cerca de un millón de toneladas de la cosecha de 1996, cantidad que hubiera sido más que suficiente (según datos de la FAO) para hacer frente a la emergencia de 1999-2000. En realidad, el mismo grano que se exportó (esto es, el maíz) se reimportó apenas unos meses más tarde. Las reservas de granos de Etiopía habían sido confiscadas, en cierta forma, por el mercado mundial.

Por otro lado, los excedentes de maíz modificado genéticamente (prohibido por la UE) se vendían en el cuerno de la abundancia africano a precios sumamente bajos, en forma de ayuda de emergencia. Estados Unidos había hallado el mecanismo conveniente para "lavar su grano sucio". Los grandes empresarios agrícolas no sólo acorralaron las exportaciones etiopes sino que también estaban implicados en los embarques de emergencia de granos hacia Etiopía. Durante la hambruna de 1999-2000, se otorgaron jugosos contratos de ventas de maíz a comercializadoras gigantescas, como Archer Daniels Midland y Cargill Inc.[10]

[9] Centro Carter, comunicado de prensa, Atlanta, Georgia, 31 de enero de 1997.

[10] Declan Walsh, "America finds ready market for GM food", *The Independent*, Londres, 30 de marzo de 2000, p. 18.

LAVADO DEL EXCEDENTE DE GRANOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

El excedente de granos de Estados Unidos vendido al menudeo en los países atormentados por la guerra contribuyó también al quebrantamiento del sistema agrícola. Alrededor de 500 mil toneladas de maíz y sus derivados fueron "donadas" en 1999-2000 por la USAID a agencias de ayuda, entre otras al Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme [WFP]), que también colabora muy de cerca con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Al menos el 30% de estos embarques (realizados por contrato con empresas estadunidenses) eran del excedente de los granos genéticamente modificados.[11]

La intromisión de la ayuda alimentaria contaminada, incrementada a raíz de la guerra fronteriza con Eritrea y la situación desafortunada de miles de refugiados había contribuido a la contaminación genética de la reserva de semillas y cepas nativas de Etiopía. En una cruel ironía, las grandes comercializadoras de granos estaban adquiriendo al mismo tiempo el control de los bancos de semillas etiopes, gracias a la introducción de la ayuda alimentaria contaminada. En palabras de Biowatch de Sudáfrica, "África está siendo tratada como el basurero del mundo [...] Donar alimentos no examinados a África no es un acto de bondad sino un intento de hacer a África más dependiente de la ayuda externa".

Además, una parte de la "ayuda alimentaria" había sido canalizada a través del programa "alimentos para trabajar", que contribuía aún más a desalentar la producción interna a favor de la importación de granos. Al amparo de este proyecto, se contrataba a campesinos empobrecidos y sin tierras para trabajar en programas de infraestructura rural a cambio de maíz estadunidense "donado".

Entre tanto, las ganancias en efectivo de los pequeños cafetaleros se desplomaron. Fue así como la Pioner Hi-Bred se colocó en la distribución y comercialización de semillas y la Cargill Inc. se estableció en los mercados de granos y de café a través de su propia subsidiaria, la Ethiopian Commodities.[12] Para los más de 700 mil pequeños productores con menos de dos hectáreas, que producen entre el 90 y el 95% del café del país, la desregulación de los créditos para el agro, combinada con los precios bajos del café a puerta de granja, desenca-

[11] *Ibid.*

[12] Maja Wallegreen, "The world's oldest coffee industry in transition", *Tea & Coffee Trade Journal*, 1 de noviembre de 1999.

denó un aumento del endeudamiento y del desposeimiento de tierras, sobre todo en Gojam oriental (la canasta de pan etiope).

LA BIODIVERSIDAD EN VENTA

Se estaba despojando al país de las extensas reservas de una variedad de semillas tradicionales (cebada, *teff*,* garbanzo, sorgo, etc.), que fueron genéticamente manipuladas y patentadas por las grandes empresas agrícolas: "En lugar de compensaciones y respeto, los etiopes hoy [...] reciben facturas de compañías extranjeras que han 'patentado' las especies nativas y que exigen pago por su uso."[13] El FMI y el Banco Mundial auspiciaron la fundación de una "industria de semillas competitiva".[14] La Ethiopian Seed Enterprise, el monopolio productor de semillas del gobierno, se aunó a la Pioner Hi-Bred en la distribución de cepas mejoradas y semillas genéticamente modificadas (GM), junto con un herbicida resistente a los híbridos, entre los pequeños productores. Al mismo tiempo, la comercialización de las semillas se transfirió a una red privada de contratistas y "compañías semilleras" con el apoyo financiero y la asistencia técnica del Banco Mundial. El intercambio "informal" de semillas entre campesinos desapareció para convertirse, gracias al programa del Banco Mundial, en un sistema "formal" de "productores y vendedores privados de semillas".[15]

Por otra parte, el Instituto Etiope de Investigación Agrícola trabajaba junto con el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo (International Maize and Wheat Improvement Center [CIMMYT]) en el desarrollo de nuevos híbridos a partir de variedades mexicanas y etiopes.[16] Este centro, establecido en 1940 por la Pioner Hi-Breed International con apoyo de la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, desarrolló una cómoda relación con las empresas agrícolas nor-

* *Eragrostis abyssinica*, cereal africano utilizado para producir harina blanca y como forraje.

[13] Laeke Mariam Demissie, "A vast historical contribution counts for little. West reaps Ethiopia's genetic harvest", *World Times*, octubre de 1998.

[14] Banco Mundial, *Ethiopia–Seed systems development project*, Proyecto ID ETPA752, 6 de junio de 1995.

[15] *Ibid*.

[16] Véase el plan de investigación y el presupuesto para 2000-2002 de CIMMYT en <www.cimmyt.mx/about/People-mtp2002.htm#>

teamericanas; junto con el Instituto Norman Borlaug de Gran Bretaña, constituye tanto la rama de investigación como el portavoz de los conglomerados de semillas. Según la Fundación para el Desarrollo del Campo, "los granjeros estadunidenses ya ganan 150 millones de dólares anuales plantando variedades de cebada desarrolladas a partir de cepas etiopes. Sin embargo, en Etiopía nadie les está enviando la factura".[17]

LOS IMPACTOS DEL HAMBRE

La hambruna de 1984-1985 amenazó seriamente las reservas etiopes de cepas de semillas tradicionales. En respuesta a la hambruna, el gobierno Dergue, por mediación de su Plant Genetic Resource Centre, en colaboración con Semillas para la Sobrevivencia (Seeds for Survival [SoS]), había lanzado un programa para preservar la biodiversidad en Etiopía.[18] Dicho programa (que prosiguió el gobierno de transición) hábilmente "unió la conservación en la granja y la mejora de las cosechas, por parte de las comunidades, con los servicios de apoyo del gobierno".[19] Se estableció una extensa red de parcelas de conservación y de sitios dentro de las granjas, en las que participaban alrededor de 30 mil campesinos. En 1998, coincidiendo cronológicamente con la violenta embestida de la hambruna de 1998-2000, el gobierno coaccionó a SoS y ordenó que se pusiera fin al programa.[20]

La intención oculta era que con el tiempo se desplazara a las variedades tradicionales y cepas nativas reproducidas en los semilleros de las aldeas, que surtían a más del 90% de los campesinos a través de un sistema de intercambio entre granjeros. Naturalmente, la hambruna contribuyó al agotamiento de los bancos de semillas locales: "Las reservas de granos que [el granjero] normalmente almacena para los días difíciles ya no existen. Al igual que otras 30 mil familias de la zona [de Galga], su familia ya también consumió sus reservas de semillas para la siguiente cosecha."[21] Un proceso simi-

[17] Laeke Mariam Demissie, *op. cit.*

[18] "When local farmers know best", *The Economist*, 16 de mayo de 1998.

[19] *Ibid.*

[20] Laeke Mariam Demissie, *op. cit.*

[21] Rageh Omaar, "Hunger stalks Ethiopia's dry land", BBC, Londres, 6 de enero de 2000.

lar ocurrió en el caso de la producción de café; la base genética de la variedad arábica se vio amenazada a consecuencia de la caída de los precios a puerta de granja y el empobrecimiento de los pequeños terratenientes.

En otras palabras, el hambre, en gran medida producida por las reformas económicas impuestas por el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos para favorecer a las grandes corporaciones de biotecnología, socavó la diversidad genética de Etiopía. Al debilitarse el sistema tradicional de intercambio, los bancos de semillas de las aldeas se reabastecieron con semillas comerciales mejoradas y genéticamente modificadas. A la vez, la distribución de las semillas entre los campesinos empobrecidos se integró a los programas de "ayuda alimentaria". Los paquetes de auxilio de WPF y USAID con frecuencia incluyen "donaciones" de semillas y fertilizantes, abriendo así las puertas de Etiopía a las compañías de biotecnología agrícola. Los programas de emergencia no son la "solución" del hambre sino su "causa". Al crear deliberadamente una dependencia de las semillas genéticamente modificadas, han sentado las bases para el estallido de nuevas hambrunas.

Este patrón destructivo, que invariablemente conlleva la hambruna, se repite de un lado al otro del África subsahariana. Desde el embate de la crisis de la deuda de principios de los ochenta, el FMI-Banco Mundial empezó a sentar las bases para acabar con la economía rural a lo largo de la región, con resultados devastadores. Ahora, en Etiopía, quince años después de que la primera hambruna dejara casi un millón de personas muertas, el hambre nuevamente acecha al país. Esta vez, cuando casi ocho millones de personas corren el peligro de morir de hambre, sabemos que no podemos culpar sólo al clima.

Esta página dejada en blanco al propósito.

III

ASIA MERIDIONAL Y SUDESTE ASIÁTICO

Esta página dejada en blanco al propósito.

10

LA INDIA: EL "DOMINIO INDIRECTO" DEL FMI

El dominio indirecto en la India tiene una larga historia: los rajputs *y los estados principescos tenían un buen grado de autonomía con respecto al gobierno colonial británico. En contraste, con la tutela del FMI-Banco Mundial, el ministro de finanzas de la Unión informa directamente al 1818 H Street NW, Washington, D.C., pasando por encima del parlamento y del proceso democrático. El texto del Presupuesto de la Unión, redactado formalmente por los burócratas hindúes en Delhi, se ha convertido en un documento repetitivo y redundante. Sus principales cláusulas están incluidas en los acuerdos de crédito firmados con el Banco Mundial y el FMI.*

INTRODUCCIÓN

La reducción del FMI del gobierno de minoría del Congreso del primer ministro P.V. Narasimha Rao en 1991 no parecía apuntar, a primera vista, a una quiebra económica de grandes proporciones ni a una desintegración de la sociedad civil comparable a la ocurrida en muchos países afectados por la deuda en América Latina y Europa oriental que sufren el "tratamiento de choque" del FMI. Aunque la India no experimentó hiperinflación ni la caída de su mercado de divisas, el impacto social en un país de 900 millones de personas fue devastador: el programa del FMI iniciado en julio de 1991 afectó directamente la subsistencia de muchos cientos de miles de personas. Hubo desnutrición crónica generalizada y empobrecimiento social como resultado directo de las medidas macroeconómicas.

En la India, el programa del FMI-Banco Mundial fue puesto en marcha con la caída del gobierno Janata Dal de V.P. Singh en 1990, y el asesinato de Rajiv Gandhi durante la campaña electoral en Tamil Nadu en 1991. El gobierno se vio obligado a transportar en avión 47 toneladas de oro a las bóvedas del Banco de Inglaterra para su "custodia en cajas de seguridad", con el fin de satisfacer las exi-

gencias de los acreedores internacionales.[1] El acuerdo del FMI, que se habría de poner en práctica poco después, debía proporcionar cuando más un breve respiro: con una deuda de más de 80 mil millones de dólares (ya destinados para pagar a los acreedores internacionales), el FMI y el Banco Mundial proporcionaron escasamente el dinero necesario para financiar seis meses de servicio de deuda.

La "cirugía económica" del FMI, dentro de la nueva política económica de 1991, exigió al gobierno indio recortar los gastos en programas sociales e infraestructura, eliminar los subsidios estatales y los programas de apoyo a los precios (incluyendo los subsidios alimentarios) y vender las empresas públicas más productivas, a "buen precio", a las grandes empresas privadas nacionales y al capital extranjero. Otras medidas de reforma fueron el cierre de gran número de las llamadas "empresas públicas enfermas", la liberalización del comercio, la libre penetración de capital extranjero, así como importantes reformas en la banca, las instituciones financieras y la estructura impositiva.

Supuestamente, el convenio de crédito del FMI junto con el préstamo de ajuste estructural del Banco Mundial (SAL), firmado en diciembre de 1991 (cuyo contenido y condiciones eran un secreto de estado celosamente guardado) pretendían "ayudar a la India" a aliviar sus dificultades con la balanza de pagos, reducir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias. El paquete del FMI-Banco Mundial, sin embargo, trajo consigo exactamente lo opuesto: empujó a la economía hacia la estanflación (el precio del arroz aumentó en más de 50% en los meses siguientes a las medidas económicas de 1991) y reforzó la crisis de la balanza de pagos (como resultado del aumento en el costo de las materias primas importadas y de la afluencia de importaciones para el consumo suntuario). Además, la liberalización del comercio, combinada con la compresión del poder de compra interno y la libre entrada de capitales extranjeros, empujaron a la bancarrota a gran número de productores nacionales.

En julio de 1991 se creó un Fondo de Renovación Nacional (FRN). Esta "red de salvamento nacional", diseñada por los asesores del Banco Mundial y dirigida hacia los llamados "grupos vulnerables", no proporcionó compensaciones adecuadas para los 4 a 8 millones de trabajadores de los sectores público y privado (de un total de

[1] Véase M.K. Pandhe, *Surrender of India's sovereignty and self-reliance*, Nueva Delhi, Progressive Printers, 1991, p. 2.

fuerza laboral organizada de 26 millones) que fue necesario despedir como resultado del programa. El FRN estaba diseñado para comprar a la oposición sindical. En la industria textil, aproximadamente un tercio de los trabajadores debían ser despedidos. Una parte importante de la industria automotriz e ingenieril debía ser eliminada con la entrada del capital extranjero y el establecimiento de empresas mixtas. Los países del G-7 estaban ansiosos por "exportar su recesión"; las transnacionales occidentales y japonesas deseaban capturar una parte del mercado nacional indio así como obtener –con ayuda de las normas del GATT sobre los derechos de propiedad intelectual– la abrogación de la Ley de Patentes india de 1970. Esto les permitiría registrar patentes de productos en las manufacturas así como en la agricultura (a través de los derechos de los productores de semillas), obteniendo así el control virtual de gran parte de la economía de la India.

Hay que señalar que "políticas de éxito" como ésas no le dieron cabida, en un sentido significativo a los graves problemas de la burocracia y el mal manejo de las empresas del sector público, ni a la necesidad de modernizar la industria local. Aunque el programa del FMI negaba a la India la posibilidad de un desarrollo capitalista nacional autónomo (su "agenda secreta"), las reformas, sin embargo, recibieron el firme respaldo del gran capital nacional (en una frágil alianza con los cabilderos de la casta superior de terratenientes). Los Tatas y los Birlas se identificaban crecientemente con el capital extranjero y la economía de mercado global, más que con los "intereses nacionales". La tendencia a la concentración de la propiedad iba en aumento. El crédito preferencial a las empresas medianas y pequeñas fue eliminado y las familias del gran capital, en asociación con el capital extranjero, han ido entrando rápidamente en una variedad de áreas previamente reservadas a la industria en pequeña escala.

La llamada "política de salida" propuesta por el gobierno y el FMI era considerada por las grandes corporaciones industriales como "una oportunidad de cambiar las leyes laborales y librarse de nuestros trabajadores. Para nosotros es más provechoso subcontratar con pequeñas factorías que emplean mano de obra ocasional y no organizada".[2] Bata, la manufacturera multinacional de calzado, paga a sus obreros sindicalizados 80 rupias al día (tres dólares). Con

[2] Entrevista en Bombay con un importante industrial, enero de 1992.

las reformas a las leyes laborales, estaría en condiciones de despedir a sus obreros y subcontratar con zapateros independientes a no más de 25 rupias por día (aproximadamente un dólar). En la industria del yute, en la ingeniería menor, en la industria del vestido, los grandes monopolios corporativos tienden a subcontratar, reduciendo así la fuerza laboral del sector moderno.

EL APLASTAMIENTO DE LOS POBRES RURALES Y URBANOS

En lugar de extender las leyes laborales para proteger a los trabajadores ocasionales y temporales, el programa del FMI propuso "ayudar a los pobres" eliminando totalmente las leyes laborales, porque "estas leyes favorecen a la aristocracia laboral" y "discriminan" a los sectores no sindicalizados de la fuerza laboral. Ni el gobierno ni el FMI habían analizado el impacto social más amplio de la nueva política económica sobre los trabajadores agrícolas, los artesanos y las pequeñas empresas.

En la India, más del 70% de las cabezas del hogar rurales son pequeños agricultores marginales o trabajadores agrícolas sin tierra, que representan una población de más de 400 millones de personas. En las zonas irrigadas, los trabajadores agrícolas se emplean unos 200 días por año y, en la agricultura de temporal, por aproximadamente cien días. La progresiva eliminación de subsidios a los fertilizantes (una condición explícita del acuerdo del FMI) y el incremento en los precios de los insumos agrícolas y combustibles estaba llevando a la bancarrota a gran número de agricultores medianos y pequeños. El precio de los fertilizantes químicos se disparó en más del 40% inmediatamente después de la introducción de la nueva política económica de 1991.

Por su parte, millones de trabajadores agrícolas sin tierra, pertenecientes a las castas marcadas y atrasadas –ya muy por debajo de la línea de pobreza oficial–, eran aplastados por la nueva política económica del ministro de finanzas Manmohan Singh. Éstos son "los intocables de la política económica". Para las élites de las castas superiores, los *harijans* son personas que realmente no cuentan. El impacto de la "medicina económica" del FMI en estos sectores de la fuerza laboral fue cuidadosamente ignorado. Para el FMI y el gobierno, no había "políticas de salida" para los sectores no organizados.

En palabras del ministro de finanzas Manmohan Singh: "las industrias caseras no tienen problemas porque los salarios van a bajar".[3]

En Tamil Nadu, por ejemplo, el salario mínimo para trabajadores agrícolas fijado por el gobierno estatal era de 15 rupias al día (0.57 dólares) en 1992. La legislación laboral, sin embargo, no se hacía valer y los salarios reales pagados a los obreros agrícolas eran (a excepción del periodo de la cosecha) sustancialmente menores que el salario mínimo diario: para el trasplante del arroz en planta, por ejemplo, a los trabajadores se les pagaba entre 3 y 5 rupias por día; en la construcción pesada, los hombres recibían de 10 a 15 rupias por día y las mujeres de 8 a 10 rupias.[4] Quizá con la excepción de los estados de Kerala y Bengala Occidental, la legislación sobre el salario mínimo ha sido en gran medida ineficaz en la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas.

En la carretera nacional Hyderabad-Bangalore se puede ver a los niños obreros de las minas de piedra caliza de Dhone transportar cargas pesadas en cestos de bambú y subir un tramo de 60 escalones, hacia donde la piedra caliza se vacía en altos hornos de ladrillo. Tanto a los trabajadores adultos como a los niños se les paga 9.50 rupias al día: no ha habido alzas salariales desde el Presupuesto de la Unión de julio de 1991: "tenemos que trabajar aquí a pesar de los humos venenosos, el calor y el polvo. Los salarios son más altos que en las haciendas agrícolas...".[5]

"ELIMINAR A LOS POBRES" MEDIANTE LA MUERTE POR HAMBRE

Después de la independencia, las muertes por hambre estaban limitadas sobre todo a las áreas periféricas tribales (por ejemplo, en Tripura o Nagaland). Esto ya no sigue siendo así, hay evidencias de que el hambre se ha extendido desde la adopción de la nueva política económica en 1991. Un estudio sobre las muertes por hambre entre los tejedores de telar de mano, en una comunidad rural relativamente próspera en Andhra Pradesh, que ocurrieron

[3] Entrevista con el ministro de finanzas Manmohan Singh, Nueva Delhi, enero de 1992.

[4] Entrevistas con líderes de organizaciones de trabajadores agrícolas en Tamil Nadu, febrero de 1992.

[5] Véase "Around a Kiln, the child labourers of Dhone", *Frontline*, 13 de marzo de 1992, p. 52.

en los meses siguientes a la implementación de la nueva política económica, de 1991, nos permite identificar el mecanismo de transmisión que está detrás del programa patrocinado por el FMI: con la devaluación y la eliminación de controles en las exportaciones de hilo de algodón, el alza del precio interno del hilo de algodón provocó la caída del precio del *pacham* (24 metros) que el intermediario pagaba a destajo al tejedor.

Radhakrishnamurthy y su mujer alcanzaban a tejer entre tres y cuatro pachams por mes, llevando a su hogar el mezquino ingreso de 300-400 rupias para una familia de seis miembros; luego llegó el Presupuesto de la Unión del 24 de julio de 1991 y el precio del hilo de algodón se disparó y el peso se transfirió al tejedor. El ingreso de la familia Radhakrishnamurthy se redujo a unas 240-320 rupias al mes.[6]

Radhakrishnamurthy, de la aldea de Gollapalli en el distrito de Guntur, murió de desnutrición el 4 de septiembre de 1991. Entre el 30 de agosto y el 10 de noviembre de 1991, se informó de por lo menos 37 muertes por desnutrición en sólo dos distritos de Andhra Pradesh. El programa del FMI-Banco Mundial, en vez de "eliminar la pobreza" como proclamaba el que era entonces presidente del Banco Mundial, Lewis Preston, en realidad contribuyó a "eliminar a los pobres". Combinado con un aumento del 50% en el precio del arroz (resultante de la devaluación y de la eliminación de subsidios a los alimentos y a los fertilizantes), las ganancias reales de los tejedores de telar de mano disminuyó en más del 60% en los seis meses siguientes a la adopción del programa del FMI en 1991.[7] Hay 3.5 millones de telares de mano por toda la India, que dan de comer a una población de 17 millones de personas.

Una situación similar prevalece en la mayor parte de las industrias nacionales rurales y urbanas, en pequeña escala, que operan a destajo. Por ejemplo, hay en la India más de un millón de talladores de diamantes que mantienen a una población de cerca de cinco millones de personas. Las grandes empresas exportadoras de diamantes establecidas en Bombay importan diamantes en bruto de Sudáfrica y subcontratan el trabajo, a través de intermediarios, a talle-

[6] Véase el excelente estudio de K. Nagaraj *et al.*, "Starvation deaths in Andhra Pradesh", *Frontline*, 6 de diciembre de 1991, p. 48.

[7] *Ibid.*

res rurales en Maharashtra. Siete de cada diez diamantes vendidos en Europa occidental y en Estados Unidos han sido tallados en la India. Mientras que en los países ricos se dice que los diamantes son "el mejor amigo de una mujer", en la India la pobreza es el insumo necesario para esta provechosa actividad exportadora: en palabras de una de las grandes empresas de exportación:

> Hacer joyería es un trabajo barato... [los precios de los alimentos han subido] pero no hemos aumentado los pagos en rupias a los trabajadores de las aldeas. Con la devaluación, nuestros costos por mano de obra en dólares bajan, somos más competitivos, pasamos algunos de los beneficios a nuestros clientes de ultramar...[8]

EL FMI APOYA LA EXPLOTACIÓN DE LAS CASTAS

El programa del FMI-Banco Mundial recomendó la revocación de la legislación sobre el salario mínimo así como la desindexación de los salarios. La propuesta "liberalización" del mercado de mano de obra contribuyó a reforzar las relaciones sociales despóticas, dando así, en la práctica, una mayor legitimidad a la explotación de las castas, la semiesclavitud y la mano de obra infantil. Siguiendo las órdenes del Banco Mundial, la tendencia señalaba el despojo (por medio de la eliminación formal de los topes del precio de la tierra) y la expropiación de tierras comunales de las aldeas por parte de los señores feudales y kulaks. La liberalización de la banca (esto es, la liquidación de las cooperativas de crédito rurales) contribuyó al fortalecimiento de los usureros de las aldeas.[9]

El programa del FMI se convirtió en un instrumento de "genocidio económico": varios cientos de millones de personas (trabajadores agrícolas, artesanos, pequeños comerciantes, etc.) sobrevivían con ingresos per cápita sustancialmente inferiores a los 50 centavos de dólar por día (a la vez que los precios nacionales, en la lógica del FMI, ascendían a niveles mundiales).[10] Un aumento en el precio del arroz y el trigo, de más

[8] Entrevista con una importante casa exportadora de diamantes en Bombay, enero de 1992.

[9] El informe de la Comisión Narasimhan, *India: Financial sector report*, es casi una "fotocopia" de las propuestas del Banco Mundial; véase el examen de S. Sanhar de este informe en *Indian Express*, 8 de diciembre de 1991.

[10] Para una mayoría de la población rural y urbana el ingreso familiar (con cinco

del 50% (en el año siguiente a la nueva política económica de julio de 1991), combinado con una disminución en el número promedio de días trabajados tanto en la agricultura de temporal como en la de riego, empujó a grandes sectores de la población rural a una "desnutrición crónica", proceso sin precedentes desde las grandes hambrunas de los cuarenta en Bengala.[11] En contraste, la caída del consumo alimentario interno se ha visto emparejada por un aumento en las exportaciones de arroz. En palabras de Tata Exports: "...la devaluación fue muy buena para nosotros: junto con la eliminación de restricciones cuantitativas a las exportaciones de arroz, esperamos aumentar nuestras ventas de arroz en el mercado mundial en un 60 por ciento".[12]

LA POBREZA SOSTIENE LAS EXPORTACIONES A LOS PAÍSES RICOS

Las reformas del FMI-Banco Mundial se nutren de la pobreza de la gente y de la contracción del mercado interno. Aunque la población de la India es sustancialmente mayor que la de todos los países desarrollados (aproximadamente 800 millones), las reformas económicas acarrean una reorientación de primer orden en la economía de la India hacia las exportaciones. En la lógica del programa de ajuste estructural, el único mercado viable es el de los países ricos. El programa del FMI reduce el consumo interno y reorienta el sistema productivo de la India hacia el mercado internacional. La pobreza es un insumo del lado de la oferta: los costos en dólares de la mano de obra son bajos, el poder de compra interno es bajo. Por ejemplo, a raíz de las medidas de 1991 patrocinadas por el FMI, la venta de tejidos en la India disminuyó a ocho metros per cápita por año (16 metros en 1965, diez metros en 1985), apenas suficiente para un sari y una blusa.

o seis miembros por hogar) es de menos de mil rupias al mes, esto es, un ingreso per cápita de menos de siete rupias por día (menos de 30 centavos de dólar).

[11] Según el National Nutrition Monitoring Bureau (NNMB), las investigaciones sobre dieta y nutrición llevadas a cabo entre 1977 y 1989 indicarían cierto avance en la "severa" desnutrición de la población infantil. Si bien según estas cifras la pobreza abyecta había declinado en la India, los niveles de pobreza promedio han permanecido muy elevados (véase "Starvation deaths and chronic deprivation", *Frontline*, 6 de diciembre de 1991, p. 81). La desnutrición crónica se difine como "la situación en que los sujetos subsisten con una dieta muy deficiente en energía por un largo periodo" (*Frontline*, 6 de diciembre de 1991, p. 79).

[12] Entrevista con Tata Exports en Bombay, enero de 1992.

HACIA EL COLAPSO POLÍTICO

Con un activo movimiento secesionista en Cachemira, Punjab y Assam, los disturbios en Amritsar y una incierta tregua a lo largo de la "línea de control" con Pakistán, la "medicina económica" del FMI ha contribuido a polarizar aún más a la sociedad hindú así como a crear las condiciones potenciales para el rompimiento político de la Unión india. Las medidas de austeridad impuestas por el FMI han exacerbado las tensiones entre la Unión y los gobiernos de los estados. De forma más general, el programa económico ha contribuido a agriar la lucha religiosa y étnica.

Tras la implantación de las reformas, el Partido del Congreso quedó profundamente dividido en cuanto a las políticas económicas, y varios ministros del gabinete se manifestaron abiertamente en contra del paquete del FMI. Además, el alza en los precios de los alimentos debilitó el apoyo popular al Partido del Congreso, mientras que su acercamiento a Israel desde la guerra del Golfo (en parte como resultado de las presiones de Estados Unidos) ha opacado su imagen como partido secular, facilitando el fortalecimiento de la Liga Musulmana.

El fundamentalismo hindú tanto como el islámico se nutren de la pobreza de las masas. El mayor partido de oposición, el Bharatiya Janata Party hindú (BJP), había condenado retóricamente la política de "puertas abiertas" del gobierno. Invocando la *swadeshi* (autosuficiencia) de Mahatma Gandhi, el Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS), movimiento fundamentalista padre del BJP, convocó a un boicot masivo de los productos extranjeros. A su vez, el Frente Nacional y el Frente Izquierdista, dirigidos por el Partido Comunista de la India (marxista), temía que si el gobierno minoritario del Congreso llegase a caer, el BJP tomaría su lugar. En 1996, con la derrota del Congreso en las elecciones parlamentarias, el BJP formó un gobierno.

EL DOMINIO INDIRECTO DEL FMI

La burocracia internacional sita en Washington había instalado en la India un "gobierno paralelo" que se apoyaba en estas divisiones sociales, religiosas y étnicas ("divide y vencerás"). Desde el periodo

de emergencia de mediados de los setenta, y con mayor fuerza aún desde el retorno al poder de Indira Gandhi en 1980, los antiguos funcionarios del FMI y del Banco Mundial habían venido ocupando posiciones decisivas de asesoría en los ministerios del gobierno central. No es sorprendente, pues, que el FMI considerara que

en general ha sido fácil negociar con los funcionarios indios [...] en comparación con otros países del tercer mundo, en donde ves muchas caras agrias en la mesa de negociaciones. El pensamiento económico ha ido principalmente en la misma dirección, su actitud ha sido en extremo conciliadora.[13]

Bajo la vigilancia estrecha del FMI, se estableció un sistema de supervisión trimestral. Dentro de este sistema computarizado, ubicado en el Ministerio de Finanzas, los funcionarios del FMI y del Banco Mundial tienen acceso a datos macroeconómicos claves no más allá de seis semanas después del final del trimestre. En palabras del funcionario de enlace del FMI en Delhi: "Tomamos muy seriamente la supervisión, examinamos minuciosamente toda la información que obtenemos [...] tenemos mucho cuidado de evitar que [el gobierno] haga trampa". Unas 40 variables económicas claves son sometidas a verificación trimestral por parte del FMI: "También hemos incluido en los acuerdos diez 'puntos estructurales de referencia'. Éstos no son condiciones explícitas del acuerdo de crédito, corresponden a amplias áreas de reforma estructural que nos gustaría que el gobierno tomara en cuenta [en futuras negociaciones de crédito]."[14]

A pesar de las metas precisas en cuanto al déficit fiscal (contenido en los acuerdos de crédito), el principal objetivo del FMI, sin embargo, era imponer el proceso de desplome fiscal y establecer un sistema por el que el gobierno se vea metido en una camisa de fuerza y deje de controlar los principales instrumentos de la política fiscal y monetaria. Desde el comienzo estas condiciones impidieron virtualmente la posibilidad de crecimiento económico. Sin embargo, el FMI no era quisquilloso con los números. De hecho, los "puntos estructurales de referencia", más que las metas cuantitativas, son lo que realmente importa. Lo que cuenta es la conformidad con las cosas que son comprendidas por ambas partes pero que no son ne-

[13] Entrevista con el funcionario de enlace del FMI en Delhi, enero de 1992.
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

cesariamente declaradas como condiciones explícitas en el acuerdo de crédito: "el gobierno debe darnos 'señales' de que está caminando en la dirección correcta...".[15]

En el marco de la "relación" del gobierno con las instituciones de Washington, los documentos gubernamentales claves eran redactados directamente por el FMI y el Banco Mundial en nombre del ministro de finanzas de la Unión. A este respecto, la prensa india tuvo cuidado de señalar (con un toque de humor) que el Memorándum sobre Políticas Económicas del 27 de agosto de 1991 (un documento clave en el acuerdo inicial del gobierno con el FMI), junto con la carta explicatoria dirigida al director general del FMI, Michel Camdessus, fue redactado en "*American script*" (muy probablemente por funcionarios de la sede de Washington), en contraste con la habitual construcción, estilo y ortografía británicos empleados por los burócratas en la India:[16] "Sí, señor, hay terribles errores de gramática, ortografía y sintaxis. Pero yo no lo mecanografié, señor. Llegó del Banco Mundial para que usted lo firme."[17] Pocos días antes del discurso del Presupuesto de la Unión del 29 de febrero de 1992, en Lok Sabha, resultó obvio que las principales propuestas presupuestarias no sólo habían sido "filtradas" por el ministro de finanzas en una carta al presidente del Banco Mundial, Lewis Preston, sino que, y esto es aún más importante, el presupuesto ya formaba parte integral de las condiciones contenidas en el acuerdo de préstamo para el ajuste estructural firmado con el Banco Mundial en diciembre de 1991.[18]

[16] Véase Praful Bidwani, *Times of India*, 18 de diciembre de 1991.

[17] Véase Laxman (el famoso caricaturista) en *Times of India*, reproducido en *Structural adjustment, Who really pays*, Nueva Delhi, Public Interest Research Group, marzo de 1992, p. 44.

[18] *Economic Times,* 28 de febrero de 1992, p. 1.

11

BANGLADESH: BAJO LA TUTELA DEL CONSORCIO DE "AYUDA"

EL GOLPE MILITAR DE 1975

El golpe militar de agosto de 1975 condujo al asesinato del presidente Mujibur Rahman y la instalación de una junta militar. Los autores del golpe estuvieron asistidos por individuos claves de la Inteligencia para la Seguridad Nacional de Bangladesh y la oficina de la CIA en la embajada americana en Dhaka.[1] En los meses que precedieron al complot del asesinato, el Departamento de Estado norteamericano ya había establecido un marco para una "transición política estable" que debía llevarse a cabo inmediatamente después de la toma del poder por los militares.

La iniciativa de Washington estaba firmemente respaldada por las instituciones de Bretton Woods: menos de un año antes del asesinato de Sheik Mujib, los acreedores internacionales de Dhaka habían exigido la formación de un "consorcio de ayuda" bajo la custodia del Banco Mundial. Si bien el programa de "ajuste estructural" no había sido lanzado aún oficialmente, el paquete económico de Bangladesh de mediados de los setenta contenía la mayor parte de sus principales ingredientes. En muchos aspectos, Bangladesh era una prueba de laboratorio, un país en el que se podía ensayar la "medicina económica" del FMI como en un laboratorio (antes de la crisis de la deuda de principios de los ochenta). Un programa de estabilización económica se había fijado: la devaluación y la liberación de los precios contribuyeron a exacerbar la situación de hambruna que había estallado en numerosas regiones del país.

Inmediatamente después del derrocamiento y el asesinato de Sheik Mujib, la continuación de la ayuda militar de Estados Unidos a Bangladesh se condicionó a la aceptación, por parte del país, de las prescripciones del FMI. El Departamento de Estado norteameri-

[1] Según el estudio de Lawrence Lifschutz, *Bangladesh, the unfinished revolution*, Londres, Zed Press, 1979, 2a. parte.

cano justificaba su programa de ayuda al nuevo régimen militar con el argumento de que la política exterior del gobierno era "pragmática y no alineada". Estados Unidos debía apoyar esta no alineación y ayudar a Bangladesh en su desarrollo económico.[2]

EL ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO PARALELO

Bangladesh ha estado bajo continua supervisión por la comunidad internacional de donadores desde el ascenso del general Ziaur Rahman a la presidencia en 1975 (asesinado a su vez en 1981), así como durante el régimen del general Hussein Mahommed Ershad (1982-1990).[3] El aparato del estado estaba bajo el firme control de las IFI y de las "agencias de ayuda" en colusión con la camarilla dominante de los militares. Desde su inauguración, el "consorcio de ayuda" se ha reunido anualmente en París. El gobierno de Dhaka suele ser invitado a enviar observadores a esta reunión.

El FMI estableció una oficina de enlace en el cuarto piso del banco central y había asesores del Banco Mundial en la mayoría de los ministerios. El Banco de Desarrollo Asiático, controlado por Japón, desempeñaba también un papel importante en la formación de la política macroeconómica. Una reunión de trabajo mensual, celebrada bajo los auspicios de la oficina del Banco Mundial en Dhaka, permitía a los diversos donantes y agencias "coordinar" eficientemente (fuera de los ministerios) los elementos claves de la política económica gubernamental.

En 1990, la creciente oposición a la dictadura militar y la dimisión del general Hussein Mahommed Ershad, acusado de rapiña y corrupción, llevó a la formación de un gobierno provisional y a la celebración de elecciones parlamentarias. La transición hacia la "democracia parlamentaria" bajo el gobierno de la señora Khaleda Zia, viuda del presidente general Ziaur Rahman, no produjo, sin embargo, un cambio importante en la estructura de las instituciones del estado. En muchos aspectos la continuidad se ha mantenido: mu-

[2] Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en 1979, citado en Lawrence Lifschutz, p. *cit.*, p. 109.

[3] El general Ziaur Rahman llega a jefe de estado como comandante en jefe de las fuerzas armadas en 1975, durante el periodo de ley marcial. Subsiguientemente fue nombrado presidente en 1978.

chos de los anteriores amigotes del general Ershad han sido designados para ocupar puestos claves en el nuevo gobierno "civil".

ESTABLECIMIENTO DE UNA DEMOCRACIA FICTICIA

Las reformas económicas patrocinadas por el FMI contribuyeron a reforzar una "economía rentista" controlada por las élites nacionales y dependiente en gran medida del comercio exterior y del reciclado del dinero de la ayuda. Con la restauración de la "democracia parlamentaria", individuos poderosos del estamento militar habían fortalecido sus intereses comerciales.[4] El partido del gobierno, Partido Nacional de Bangladesh (BNP), estaba bajo la protección de la camarilla dominante del ejército.

Con la restauración de la democracia formal en 1991, la hija del presidente asesinado Mujib Rahman Sheik, Hasina Wajed, del Partido de la Liga Awami, se convirtió en líder de la oposición. Con la opinión pública enfocada en la rivalidad en el parlamento entre la "viuda" y la "huérfana", los acuerdos de los grupos de poder locales, incluyendo a los miembros del ejército, con las "agencias de ayuda" y los donadores pasaron virtualmente inadvertidos. La comunidad de donadores se había convertido, en nombre del "buen gobierno", en la defensora de una engañosa fachada democrática controlada por las fuerzas armadas y aliada estrechamente al movimiento fundamentalista Jamaat-i-islami. En algunos aspectos, Begum Zia se había convertido en una "marioneta política", más sumisa que el depuesto dictador militar general Ershad.

SUPERVISANDO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DEL ESTADO

El "consorcio de ayuda" tomó el control de las finanzas públicas de Bangladesh. Sin embargo, este proceso no consistió únicamente en imponer austeridad fiscal y monetaria; los acreedores supervisaban directamente la distribución de los fondos y la fijación de prioridades de desarrollo. Según un consejero del Banco Mundial: "No deseamos establecer un acuerdo para cada proyecto de inversión, lo

[4] Entrevista con el líder de un partido de oposición en Dhaka, febrero de 1992.

que queremos es imponer disciplina. ¿Nos gusta la lista de proyectos? ¿Cuáles proyectos deben conservarse? ¿Hay 'perros' en la lista?"[5]

Además, de acuerdo con las cláusulas del Crédito para el Manejo de Recursos Públicos (1992), el Banco Mundial obtuvo el control de todo el proceso presupuestario, incluyendo la distribución del gasto público entre los ministerios y la estructura de gastos operacionales en cada uno de ellos: "¡Por supuesto que no podemos hacer su presupuesto por ellos! Las negociaciones a este respecto son complejas. No obstante, nos aseguramos de que avancen en la dirección correcta [...] Nuestra gente trabaja con los muchachos en los ministerios y les enseñan cómo se prepara un presupuesto."[6]

El consorcio de ayuda controlaba también las reformas al sistema bancario implementadas durante el gobierno de la señora Khaleda Zia. Se ordenaron despidos de personal, se cerraron empresas paraestatales. La austeridad fiscal impedía que el gobierno movilizase sus recursos internos. Además, para la mayor parte de los proyectos de inversiones públicas, el "consorcio de ayuda" requería un sistema de oferta internacional. Las grandes compañías internacionales constructoras e ingenieriles tomaron el control de la inversión pública en detrimento de las empresas locales.

SOCAVANDO LA ECONOMÍA RURAL

El FMI impuso también la eliminación de subsidios a la agricultura, proceso que, ya desde comienzos de los años ochenta, llevó a la bancarrota a los pequeños y medianos agricultores. El resultado fue un marcado incremento en el número de agricultores sin tierras, empujados hacia terrenos marginales afectados por inundaciones recurrentes. Además, la liberación de los créditos agrícolas no sólo contribuyó a la fragmentación de las propiedades agrícolas (ya bajo considerable estrés, como resultado de las presiones demográficas), sino también al reforzamiento de la usura tradicional y del papel del prestamista lugareño.

Como resultado de la falta de créditos a los pequeños agricultores, los propietarios de equipos de irrigación fortalecieron su posición como una nueva clase rentista, la de los "señores del agua". Es-

[5] Entrevista con un consejero del Banco Mundial en Dhaka, 1992.

[6] *Ibid.*

tos hechos no condujeron, sin embargo, a la "modernización" de la agricultura, basada en la formación de una clase de agricultores-empresarios ricos (como, por ejemplo, en el Punjab). En otras palabras, el programa de ajuste estructural frustró el desarrollo de la agricultura capitalista desde el inicio. Además del abandono de la infraestructura agrícola, las instituciones de Bretton Woods exigieron la liberalización del comercio y la desregulación de los mercados de granos. Estas políticas contribuyeron al estancamiento de la agricultura alimentaria destinada al mercado nacional.

Un ejemplo palmario de la reestructuración impuesta por el FMI tiene que ver con la industria del yute. A pesar de la caída de los precios mundiales, el yute era uno de los principales aportadores de divisas para Bangladesh, en competencia con los sustitutos sintéticos producidos por las grandes empresas textiles multinacionales. ¿Competencia desleal?... El FMI exigió como una condición ligada a su crédito blando, dentro de la disposición modificada sobre ajuste estructural, el cierre de un tercio de la industria del yute (incluyendo empresas públicas y privadas) y el despido de unos 35 mil trabajadores.[7] Aunque estos últimos debían recibir pagos de indemnización, el FMI había omitido tomar en cuenta el impacto del programa de reestructuración sobre unos tres millones de hogares rurales (18 millones de personas) que dependían del cultivo del yute para su sobrevivencia.

DUMPING DE EXCEDENTES DE GRANOS DE ESTADOS UNIDOS

La desregulación del mercado de granos se utilizó también para apoyar el dumping de los excedentes de granos estadunidenses (bajo el disfraz del "programa de ayuda alimentaria" de Estados Unidos). Los programas de "alimentos por trabajar", auspiciados por USAID, se emplearon para "financiar" proyectos de trabajos públicos en el nivel de las aldeas mediante pagos en granos (en lugar de salarios en dinero) a los campesinos empobrecidos, desestabilizando con ello los mercados locales.

Cabe señalar que las ventas de granos de Estados Unidos en el mercado local servían a dos objetivos relacionados. Primero, se per-

[7] Como resultado de la liberalización del crédito, muchas de las pequeñas industrias del yute quebraron.

mitía que el grano estadunidense fuertemente subsidiado compitiera directamente con los alimentos básicos producidos localmente, socavando así el desarrollo de los productores nacionales. Segundo, las ventas de granos estadunidenses en el mercado local se utilizaron para generar "fondos de contraparte", canalizados a su vez hacia proyectos de desarrollo controlados por USAID, esto es, hacia aquellos que por su misma naturaleza mantenían la dependencia de Bangladesh del grano importado. Por ejemplo, a principios de los noventa, los fondos de contraparte generados por las ventas de granos (bajo PL 480) se usaron para financiar al Instituto de Investigaciones Agrícolas de Bangladesh. En este proyecto, USAID determinaba las áreas prioritarias de investigación que recibirían financiamiento.

SOCAVANDO LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

La autosuficiencia alimentaria en Bangladesh pudo haberse logrado aumentando la extensión de las tierras de cultivo mediante irrigación, así como a través de una reforma agraria inclusiva.[8] Además, un estudio reciente sugiere que los riesgos de inundaciones podrían reducirse significativamente si se desarrollara una infraestructura apropiada.

Sin embargo, el programa de ajuste estructural constituyó el principal obstáculo para el logro de estos objetivos. En primer lugar, obstruía el desarrollo de una política agrícola independiente; en segundo, ponía deliberadamente una tapa a las inversiones del estado en agricultura (con el programa de inversión pública [PIP], supervisado por el Banco Mundial). Este estancamiento "programado" de la agricultura alimentaria servía también a los intereses de los productores de granos estadunidenses. La austeridad fiscal impuesta por el "consorcio de ayuda" impedía la movilización de recursos nacionales en apoyo de la economía rural.

[8] Véase Mosharaf Hussein, A.T.M. Aminul Islam y Sanat Kumar Saha, *Floods in Bangladech, recurrent disaster and people's survival*, Dhaka, Universities' Research Center, 1987.

EL DESTINO DE LA INDUSTRIA LOCAL

La guerra de independencia tuvo como resultado la aniquilación del sector industrial, desarrollado desde 1947, y el éxodo masivo de empresarios y profesionistas.[9] Además, el impacto económico de la guerra fue tanto más devastador cuanto que el "consorcio de ayuda" no dejó ningún "espacio de respiro" a Bangladesh para reconstruir su economía destruida por la guerra y desarrollar sus recursos humanos.

El programa de ajuste estructural, adoptado en varias etapas desde 1974, asestó el último golpe letal al sector industrial del país. El marco macroeconómico impuesto por las instituciones de Bretton Woods contribuyó a socavar la estructura industrial existente impidiendo al mismo tiempo el desarrollo de nuevas áreas de actividad industrial orientadas hacia el mercado interno.

Además, con un sistema agrícola fragmentado y la virtual ausencia de manufactura rural, las oportunidades de empleo no agrícola en las zonas rurales de Bangladesh eran más o menos inexistentes. La industria urbana se limitaba, en gran medida, al ramo de la ropa de exportación, que contaba sobre todo con la mano de obra barata de las zonas rurales. Según el representante del FMI en Dhaka, las únicas industrias viables son las que usan insumos abundantes de mano de obra barata para el sector exportador: "¿Qué quieren proteger en este país? No hay nada que proteger. Quieren protección permanente, pero tienen, comparativamente, una ventaja poderosa en las industrias que utilizan mucha mano de obra."[10]

Desde la perspectiva del FMI, la fabricación de prendas de vestir debía constituir la fuente principal de empleo urbano. Hay unos 300 mil trabajadores del vestido, la mayor parte de los cuales son muchachas jóvenes. El 16% de esta fuerza laboral son niños de entre 10 y 14 años. La mayoría de los trabajadores provienen de áreas rurales empobrecidas.[11] La producción en las fábricas se caracteri-

[9] Véase Rehan Sobhan, *The development of the private in Bangladesh: A review of the evolution and outcome of state policy*, Research Report 124, Bangladesh Institute of Development Studies, pp. 4-5.

[10] Entrevista con el representante residente del FMI, Dhaka, 1992.

[11] El 70% de los trabajadores del vestido son mujeres, 74% proviene de áreas rurales; el trabajo infantil representa respectivamente 16 y 8% de los trabajadores hombres y mujeres (véase Salma Choudhuri y Pratima Paul-Majumder, *The conditions of garment workers in Bangladesh, An appraisal*, Dhaka, Bangladesh Institute of Development Studies, 1991).

za por horas extras forzosas y administración despótica: los salarios que incluían tiempo extra (1992) eran del orden de 20 dólares al mes. En 1992 una manifestación pública de trabajadores del ramo fue reprimida brutalmente por las fuerzas de seguridad. Según el gobierno, las demandas de los trabajadores constituían una amenaza para la balanza de pagos.

RECICLADO DEL DINERO DE LA AYUDA

Aunque muchas organizaciones no gubernamentales y de ayuda están comprometidas en proyectos importantes que buscan soluciones desde la raíz, muchos de los “planes para el alivio de la pobreza”, en lugar de ayudar a los pobres, constituyen una fuente importante de ingreso para profesionistas y burócratas urbanos. Mediante las diversas agencias ejecutivas nacionales ubicadas en Dhaka, las élites locales se han convertido en agentes de desarrollo y en intermediarios que actúan en nombre de la comunidad internacional de donadores. Los fondos destinados a los pobres rurales a menudo contribuyen al enriquecimiento de oficiales del ejército y burócratas. Entonces, este “dinero de ayuda” se recicla hacia inversiones comerciales y de bienes raíces, como edificios de oficinas, condominios de lujo, etcétera.

“LAS DIMENSIONES SOCIALES DEL AJUSTE”

Con una población de más de 130 millones de habitantes, Bangladesh está entre los países más pobres del mundo. El ingreso per cápita es del orden de 360 dólares por año (2000). El gasto anual en salud (1992) fue del orden de 1.50 dólares per cápita (de los cuales, menos de 25 centavos per cápita se emplearon en medicinas esenciales).[12] Con excepción de la planeación familiar, los gastos sociales se consideraban excesivos: en 1992-1993 el “consorcio de ayuda” de Bangladesh exigió que el gobierno implementara una nueva ronda de recortes en los presupuestos del sector social.

[12] Véase Banco Mundial, *Staff appraisal report, Bangladesh, fourth population and health project*, Washington, D.C., 1991.

La desnutrición se caracterizaba también por la deficiencia generalizada de vitamina A (resultante de una dieta constituida casi exclusivamente por cereales). Muchos niños y adultos, particularmente en las áreas rurales, se quedaron ciegos como resultado de la deficiencia de vitamina A.

La desnutrición crónica prevalecía en numerosas regiones del país. La reunión del "consorcio de ayuda" de 1992 en París urgió al gobierno de la señora Khaleda Zia a acelerar la implementación de las reformas como un medio para "combatir la pobreza". El gobierno de Bangladesh recibió la advertencia (de conformidad con los nuevos lineamientos del presidente del Banco Mundial, Lewis Preston) de que el apoyo de los donadores sólo se concedería a los países "que hicieran serios esfuerzos en el área de reducción de la pobreza".

En 1991, 140 mil personas murieron como consecuencia de la inundación que arrasó al país (la mayor parte eran campesinos sin tierras, marginados en zonas afectadas por inundaciones recurrentes). Diez millones de personas (casi un diez por ciento de la población) quedaron sin hogar.[13] Sin embargo, en estas estadísticas "oficiales" no se contabilizaron los que murieron de hambre después del desastre. Mientras las diversas agencias de ayuda y los donadores hacían hincapié en el papel perjudicial de los factores climáticos, la hambruna de 1991 se agravó como resultado de la política macroeconómica apoyada por el FMI. Primero, los candados a la inversión pública en agricultura y prevención de inundaciones impuestos por el donador desde los años setenta causaron el estancamiento de la agricultura. Segundo, la devaluación forzada, poco después de la inundación de 1991, disparó un aumento de 50% en el precio al detalle del arroz en el año siguiente al desastre. Y esta hambruna fue todavía más grave debido a que gran parte de la ayuda de emergencia proporcionada por los donadores se la apropiaron las élites urbanas privilegiadas.

[13] Véase Gérard Viratelle, "Drames naturels, drames sociaux au Bangladesh", *Le Monde Diplomatique*, París, junio de 1991, pp. 6-7.

12

LA DESTRUCCIÓN ECONÓMICA DE VIETNAM EN LA POSGUERRA

El ajuste estructural aplicado en Vietnam desde mediados de los ochenta ha tenido consecuencias sociales devastadoras. Los centros de salud y hospitales están clausurados, estallan hambrunas a nivel nacional que afectan hasta una cuarta parte de la población del país, y tres cuartos de millón de niños han abandonado el sistema escolar. Hay un resurgimiento de enfermedades infecciosas y se triplican las muertes por malaria registradas durante los cuatro primeros años de las reformas. Cinco mil empresas estatales (de un total de 12 mil) han sido empujadas a la quiebra, más de un millón de trabajadores y unos 200 mil empleados públicos, incluyendo decenas de miles de maestros y trabajadores de la salud, han sido despedidos.

En un acuerdo secreto realizado en París en 1993, que en muchos aspectos consistió en forzar a Vietnam "a compensar a Washington" por los costos de la guerra, se exigió que Hanoi reconociera las deudas del antiguo régimen del general Thieu en Saigón como condición para la concesión de nuevos créditos y el levantamiento del embargo de Estados Unidos.

Los logros de luchas pasadas y las aspiraciones de toda una nación están deshechos, borrados casi "de un plumazo". Nada de bombas naranja o de fragmentación, nada de napalm, nada de químicos tóxicos: una nueva fase de destrucción económica y social (antes que física) ha comenzado. Las herramientas aparentemente "neutrales" y "científicas" de la política macroeconómica (bajo la guía de las instituciones de Bretton Woods) constituyen, inmediatamente después de la guerra de Vietnam, un "instrumento de recolonización" y empobrecimiento igualmente "efectivo" y formalmente "no violento", que afecta a la sobrevivencia de millones de personas.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA DE LA GUERRA

En 1940, el gobierno de Vichy nombra al almirante Jean Decoux gobernador general para negociar los términos de la integración de

Indochina a la "Gran Esfera de Co-Prosperidad de Asia Oriental" de Japón, reteniendo Francia formalmente los territorios coloniales bajo el mandato de la administración de Vichy. El Frente Viet Minh, que había dirigido el movimiento de resistencia contra el régimen de Vichy y las fuerzas japonesas de ocupación, recibieron la aprobación de Washington ya desde 1944, con las armas y el apoyo financiero proporcionados a través de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), antecesora de la actual Agencia Central de Inteligencia (Central Inteligence Agency [CIA]). 2 de septiembre de 1945: en la Declaración de Independencia en la plaza Ba Dinh en Hanoi, proclamando la fundación de la República Democrática de Vietnam, los agentes de la estadunidense OSS estaban presentes al lado de Ho Chi Minh. Casi treinta años de historia separan este acontecimiento de la igualmente importante rendición del general Duong Vanh Minh, en el Salón de la Independencia de Saigón, el 30 de abril de 1975, señalando el final de la guerra de Vietnam y la apertura del periodo de reconstrucción nacional.

La devastación dejada por la guerra creó desde el comienzo de la posguerra una atmósfera de inercia política. El subsiguiente estallido de la guerra civil de Camboya –alimentada por el apoyo encubierto de Washington a las fuerzas de Pol Pot, después de 1979– y la invasión de China por la frontera norte obstaculizaron todavía más la reconstrucción de la economía civil. Con la reunificación, dos sistemas socioeconómicos divergentes se unieron: las reformas en el sur se impusieron de acuerdo a estrictas líneas del comité central, con poco discernimiento de las fuerzas sociales de trabajo: el comercio en pequeña escala en Ciudad Ho Chi Minh se suprimió mientras se desarrollaba un acelerado proceso de colectivización en el delta del río Mekong, con fuerte oposición de los campesinos medianos. La represión política afectó no sólo a aquellos sectores de la sociedad que tenían lazos con el régimen de Saigón sino también a muchos de aquellos que se opusieron al general Thieu.

Por su parte, el ámbito internacional había cambiado: las transformaciones del sistema de mercado mundial y la desmoronamiento del bloque soviético (que era el principal socio comercial de Vietnam) repercutieron en la economía nacional, creando una situación de crisis. El Partido Comunista no fue capaz de formular un programa coherente de reconstrucción económica. Divisiones profundas y cambios en el seno de su dirigencia comenzaron desde principios de los ochenta.

Actualmente, tras más de 50 años de lucha contra la ocupación extranjera, la historia de la guerra de Vietnam está siendo cautelosamente reescrita: el neoliberalismo constituye (con el apoyo técnico de las instituciones de Bretton Woods) la doctrina oficial del Partido Comunista. Burócratas e intelectuales son llamados sin reservas a apoyar el nuevo dogma en nombre del socialismo. Con la adopción en 1986 del lema "renovación" ("*Doi moi*"), las referencias al papel brutal ejercido por Estados Unidos en la guerra se consideran cada vez más impropias. La dirigencia del Partido Comunista ha subrayado recientemente el "papel histórico" de Estados Unidos en la "liberación" de Vietnam de las fuerzas japonesas de ocupación en 1945. Por su parte, los símbolos del periodo norteamericano han retornado gradualmente a las calles de Saigón. En el Museo de los Crímenes de Guerra Norteamericanos, ahora rebautizado "Casa de Exhibición de los Crímenes de Agresión de la Guerra", en el kiosko de venta de souvenirs, puede comprarse un modelo del jet ligero de combate utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en sus bombardeos, con un emblema de Coca-Cola añadido al fuselaje, junto con una amplia selección de manuales sobre inversión extranjera y reformas macroeconómicas. Ni un solo texto sobre la historia de la guerra se halla a la vista. Fuera del museo, el frenesí de una incipiente economía de consumo está en agudo contraste con la escualidez de los mendigos, niños de la calle y bici-taxis, muchos de los cuales eran veteranos de guerra cuando la liberación de Saigón en 1975.

LA NUEVA GUERRA DE VIETNAM

La estilizada imagen retratada por gran parte de los medios occidentales da a entender que el libre mercado ha impulsado a Vietnam al estatus de un futuro "Tigre asiático". Nada podría estar más lejos de la verdad: después de la guerra, las reformas económicas lanzadas en 1986 bajo la guía de las instituciones de Bretton Woods, han iniciado una nueva fase de devastación económica y social. La reforma macroeconómica ha conducido al empobrecimiento del pueblo vietnamita golpeando simultáneamente a todos los sectores de la actividad económica.

El primer paso dado en 1984-1985 (antes del lanzamiento formal de *Doi moi* por el Sexto Congreso del Partido) consistió en destruir

la moneda vietnamita: la inflación y la "dolarización" de los precios nacionales logradas con repetidas devaluaciones que evocaban el espectacular derrumbe de la piastra en 1973, en el régimen de Saigón, al año siguiente del acuerdo de París y del "retiro" formal de las tropas de combate estadunidenses.[1] Hoy en día Vietnam, una vez más está inundado de billetes de dólares estadunidenses, que han sustituido al dong vietnamita como "reserva de valor". Si bien el FMI supervisa estrechamente las emisiones monetarias del banco central de Vietnam, la Reserva Federal de Estados Unidos, *de facto,* emite moneda (esto es, una masiva operación de crédito por propio derecho) para su antiguo enemigo de guerra. La apariencia de "progreso económico" y prosperidad reflejada detalladamente en la prensa occidental se basa en el crecimiento rápido de pequeños pero muy visibles sectores de consumismo al estilo occidental, concentrados especialmente en Saigón y Hanoi. Las duras realidades económicas y sociales son diferentes: precios de los alimentos aumentando vertiginosamente, hambrunas a nivel local, despidos masivos de trabajadores urbanos y funcionarios públicos y la destrucción de los programas sociales de Vietnam.[2]

REMBOLSO DE LA "DEUDA IMPAGABLE" DEL RÉGIMEN DE SAIGÓN

Vietnam nunca recibió pagos de indemnización de guerra, pero Hanoi fue obligado, como condición para la "normalización" y el levantamiento del embargo estadunidense en febrero de 1994, a "pagar la cuenta" de las deudas multilaterales en que incurrió el régimen de Saigón, respaldado por Estados Unidos. En la conferencia de donadores celebrada en París en noviembre de 1993, un total de 1.86 mil millones de dólares en préstamos y dinero para "ayuda" fue generosamente otorgado en apoyo a las reformas de Vietnam, pero

[1] Las devaluaciones de 1984-1985, aconsejadas por el FMI, fueron determinantes para que el dong vietnamita se colapsara diez veces, en gran medida en la misma magnitud de lo ocurrido en Vietnam del Sur en 1973. El dong valía 0.10 centavos de dólar al cambio oficial en 1984; un año más tarde valía 0.01.

[2] Las reformas han disparado una caída en el nivel de vida en muchas formas, tal como en Vietnam del Sur durante el antiguo régimen del general Thieu. Entre 1973 y 1974, después de la "retirada" de las tropas de Estados Unidos, se registró un aumento de ocho veces en el precio del arroz.

inmediatamente después de la conferencia se celebró otra reunión (separada), esta vez "a puerta cerrada", con los acreedores oficiales del Club de París.[3] En la agenda: la renegociación de la "deuda impagable" en que incurrió el régimen de Saigón antes de 1975. ¿Quién da luz verde a quién? El FMI puso su sello de aprobación a las reformas económicas de Vietnam antes de la conferencia de París. Sin embargo, en última instancia, los resultados de las reuniones con el Club de París fueron decisivos para dar "luz verde a Washington". Y sólo después del levantamiento formal del embargo se permitieron los desembolsos multilaterales y bilaterales.

El reembolso de los 140 millones de dólares (adeudados por Saigón) al FMI se exigió también como condición para la reanudación del crédito. A este efecto, Japón y Francia (los antiguos amos coloniales de Vietnam en el periodo de Vichy) formaron un supuesto comité de "amigos de Vietnam" para "prestar a Hanoi" el dinero que necesitaba "para reembolsar al FMI". Al reconocer plenamente la legitimidad de estas deudas, Hanoi en realidad aceptó pagar préstamos que habían sido utilizados para financiar la guerra en contra de Vietnam. Irónicamente, estas negociaciones se emprendieron con la participación de un antiguo ministro de finanzas (y primer ministro interino) del gobierno militar del general Duong Vanh Minh, instalado por la misión militar estadunidense en 1963, inmediatamente después de los asesinatos del presidente Ngo Dinh Diem y de su hermano menor. El doctor Nguyen Xian Oanh (un prominente economista que había sido también funcionario del FMI) ocupó el puesto de asesor económico del primer ministro Vo Van Kiet. (Oanh había trabajado estrechamente con Kiet desde principios de los ochenta, cuando este último era secretario del Partido Comunista en Ciudad Ho Chi Minh.)[4]

DESTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Mediante el mecanismo aparentemente inocuo del "libre" mercado (y sin necesidad de guerra ni de destrucción física), las reformas con-

[3] Para el desglose de la composición de las ayudas y créditos internacionales en la conferencia de donadores, véase *Vietnam Today*, 2, 6, Singapur, 1994, p. 58.

[4] Entrevista con el doctor Nguyen Xian Oanh en Ciudad Ho Chi Minh, abril de 1994.

tribuyeron a una masiva desmovilización de la capacidad productiva: más de cinco mil de las 12 300 empresas de propiedad estatal (EPE) para 1994 habían sido cerradas o empujadas a la quiebra.

Este proceso se vio exacerbado todavía más como resultado del desmantelamiento del comercio con los países del antiguo bloque soviético. En 1990 se adoptaron reglas para la liquidación de las empresas estatales, que llevaron a una reducción aún mayor de la base industrial mediante la reestructuración de las empresas restantes.[5] Más de un millón de trabajadores y unos 136 mil empleados públicos habían sido despedidos para finales de 1992 (en su mayoría, trabajadores del sector salud y maestros).[6] El objetivo del gobierno, con la "decisión núm. 111", fue despedir a otros cien mil empleados para fines de 1994, reduciendo el tamaño del servicio civil en un 20%. Además, con la retirada de las tropas vietnamitas de Camboya, se desmovilizaron unos 500 mil soldados y 250 mil trabajadores regresaron desde Europa oriental y el Medio oriente con pocas perspectivas de empleo.[7]

Según datos del Banco Mundial, el crecimiento del empleo en el sector privado era insuficiente para acoger a los recién llegados en la fuerza laboral. Con los precios subiendo vertiginosamente, las ganancias reales de "los que conservaban su empleo" habían caído a niveles abismalmente bajos: incapaces de subsistir con los salarios del gobierno de 15 dólares por mes, una variedad de "actividades de sobrevivencia" se había desplegado, incluyendo el doble empleo frecuente de los empleados estatales, conduciendo a altas tasas de ausentismo y a la parálisis *de facto* de todo el aparato administrativo. Con excepción de las empresas mixtas, en donde el salario mínimo recomendado se estableció en 30-35 dólares por mes (1994) (no es obligatorio), no había ninguna legislación sobre salario mínimo ni

[5] De mediados de 1991 a mediados de 1992, unas cuatro mil empresas cesaron sus operaciones, liquidando a unos 1 259 empleados. Algunas de las empresas que dejaron de operar estaban asociadas con otras empresas estatales (véase Banco Mundial, *Viet Nam, transition to market economy*, Washington, D.C., 1993, p. 61).

[6] En el sector de las EPE, la decisión 176 adoptada en 1989 causó que 975 mil trabajadores (36% de la fuerza laboral) fuesen despedidos entre 1987 y 1992. El crecimiento en el empleo del sector privado no fue suficiente para acomodar a los recién llegados al mercado del empleo (véase Banco Mundial, *Viet Nam, transition…*, *op. cit.*, pp. 65-66; véase también el cuadro 1.3, p. 233).

[7] *Ibid.*, p. 65. Véase también República Socialista de Vietnam, *Vietnam: A development perspective* (documento principal preparado para la Conferencia de donadores de París), Hanoi, septiembre de 1993, p. 28.

directrices para la indexación de los salarios. “La política de libre mercado del Partido es que el mercado laboral también debería ser libre.”[8]

Mientras que según patrones occidentales muchas de las EPE eran notoriamente “ineficientes” y “nada competitivas”, su desaparición había sido fraguada mediante la manipulación deliberada de las fuerzas del mercado: la reestructuración de las instituciones bancarias y financieras del estado (incluyendo la eliminación de las cooperativas de crédito comunales) provocó la “congelación” de todos los créditos a mediano y largo plazo para los productores nacionales. Los créditos a corto plazo podían conseguirse con tasas de interés de 35% anual (1994). Además, según los términos del acuerdo con el FMI, al estado no le estaba permitido otorgar apoyo presupuestario ni a la economía de propiedad estatal ni a un incipiente sector privado.

La ruina de la economía estatal se pergeñó también para que resultara un sistema impositivo altamente discriminatorio: mientras que en una situación en que todos los subsidios y créditos estatales habían sido eliminados, las EPE seguían pagando un 40-50% de impuestos retenidos de las ganancias, sistema heredado de la planeación centralizada; los inversionistas extranjeros (incluyendo todas las empresas mixtas) gozaban de generosas exenciones de impuestos. Además, los impuestos sobre retención de ganancias ya no se recaudaban sobre una base regular de las empresas del sector privado.[9]

La “agenda secreta” subyacente a estas reformas era desestabilizar la base industrial de Vietnam: la industria pesada, petróleo y gas, los recursos naturales y minería, la producción de acero y cemento serían reorganizadas y apropiadas por el capital extranjero, proceso en que los conglomerados japoneses tenían un papel decisivo y dominante. Las empresas estatales con mayor rendimiento se transferirían a compañías mixtas. Los dirigentes no manifestaron ninguna preocupación por reforzar y preservar su base industrial, ni, por cierto, por desarrollar una economía capitalista poseída y controlada por “nacionales”... La opinión prevaleciente entre la “comunidad de donadores” era que se requería un “recorte” de la economía estatal “para hacer lugar” al desarrollo espontáneo de un sector privado vietnamita. Se decía que las inversiones estatales “estor-

[8] Entrevista con funcionarios gubernamentales en Hanoi, abril de 1994.

[9] Véase Banco Mundial, *Viet Nam, transition...*, *op. cit.*, p. 47.

baban" la formación de capital privado. Las reformas no sólo desmovilizaron la economía estatal, también impidieron una transición hacia un capitalismo nacional.

Además, la relativa debilidad de los grupos empresariales vietnamitas, la congelación de los créditos y la virtual ausencia de apoyo estatal contribuyeron a frustrar el desarrollo del sector privado nacional. Si bien algunos incentivos simbólicos habían sido ofrecidos a los Viet Kieu ("vietnamitas de ultramar") que volvían al país, gran parte de la "diáspora vietnamita", incluyendo a los refugiados de la guerra de Vietnam y los que vivían en barcos, tenían poco en términos de recursos financieros o ahorros. Con algunos excepciones, sus actividades estaban principalmente concentradas en empresas familiares de tamaño mediano en el comercio y los servicios.[10]

Un ejemplo patente de "ingeniería económica" puesta en marcha por las reformas del mercado, concierne al destino de la industria del acero de Vietnam. Cerca de ocho millones de toneladas de bombas junto con una gran cantidad de maquinaria militar abandonada habían surtido a la industria pesada de Vietnam con un amplio suministro de chatarra. Ironía de la historia, la única "contribución" tangible de Estados Unidos a la reconstrucción en la posguerra fue revocada: con la "política de puertas abiertas", grandes cantidades de chatarra se "reexportaban" libremente (a precios sustancialmente inferiores a los valores del mercado mundial). Mientras que la producción en las cinco principales acerías de Vietnam estaba en paro debido a la escasez de materias primas (para no mencionar una prohibición legal a la importación de chatarra por empresas estatales), un conglomerado japonés formado por las corporaciones Kyoei, Mitsui e Itochu estableció en 1994 una moderna acería mixta en la provincia de Ba-Ria Vung Tau, que importa la chatarra (a precios del mercado mundial) "de vuelta" a Vietnam.

EXCLUSIÓN DE LOS PRODUCTORES NACIONALES DE SU PROPIO MERCADO

Mediante la manipulación deliberada de las fuerzas del mercado, los productores nacionales estaban siendo literalmente "excluidos de su

[10] En contraste con los "chinos de ultramar", no puede decirse que la diáspora vietnamita sea una "élite económica".

propio mercado", incluso en áreas en donde se consideraba que tenían "una ventaja comparativa". Las barreras arancelarias habían sido eliminadas y gran parte de la industria ligera de Vietnam fue desplazada por una afluencia masiva de bienes de consumo importados. Desde 1986, gran parte de las escasas ganancias en divisas de Vietnam habían sido destinadas a la importación de bienes de consumo, creando un vacío en la disponibilidad de equipos de capital para la industria nacional. Las reformas permitían a las EPE dedicadas a la exportación utilizar libremente sus ganancias en divisas fuertes para importar bienes de consumo. Se estableció una red entre los gerentes de las EPE dedicadas al negocio de importación-exportación, los burócratas nacionales y los comerciantes privados. Despilfarraban las ganancias en divisas y se apropiaban grandes sumas de dinero. Con las reformas patrocinadas por el FMI, muchas de las EPE escapaban al control estatal y se dedicaban a gran variedad de actividades ilícitas. Con la eliminación del apoyo presupuestario estatal y el congelamiento del crédito, las actividades productivas estaban abandonadas.

En las nuevas áreas de la industria ligera y de procesamiento, promovidas como resultado de la política de "puertas abiertas", el mercado interno está "fuera el alcance" de las compañías vietnamitas. Los productores de ropa barata, trabajando en empresas mixtas o que subcontratan convenios con capital extranjero, usualmente exportan toda su producción. En contraste, el mercado interno vietnamita se aprovisiona con ropa de segunda mano importada y con los desechos de las fábricas de Hong Kong, lo que ha llevado también a la ruina a los sastres y pequeños productores de la economía informal. (El precio de la ropa usada comprada en los países desarrollados es de 800 dólares la tonelada.)

BLOQUEO DE LOS CANALES DEL MERCADO INTERNO

Las reformas promovieron la "balcanización económica" de distintas regiones, cada una de ellas integrada separadamente en el mercado mundial: la desregulación de la industria del transporte provocó que se disparasen los precios del transporte de carga. Las compañías de transporte estatales fueron empujadas a la bancarrota y gran parte de la industria del transporte fue acaparada por empresas mixtas.

Por otra parte, con la congelación de las transferencias presupuestarias desde el gobierno central a las provincias y municipios recomendada por el Banco Mundial, las autoridades provinciales y locales fueron quedando cada vez más "libres" para establecer sus propias relaciones de inversión y comercio con empresas extranjeras, en detrimento del comercio interno. Las provincias negociaban numerosos convenios de inversión y comercio, incluyendo la concesión de tierras a inversionistas extranjeros así como concesiones que permitían que el capital extranjero (en un medio completamente falto de regulaciones) saqueara los recursos forestales de Vietnam. En el contexto de la crisis presupuestaria, estos diversos convenios constituían a menudo el único medio para cubrir los gastos de los gobiernos central y provinciales, incluyendo los salarios de los funcionarios del gobierno.

Además, en una situación en que los salarios de los empleados públicos son excesivamente bajos (de 15 a 30 dólares mensuales), la cooperación extranjera y las empresas mixtas constituyen inevitablemente un medio para obtener "suplementos salariales" en forma de honorarios por consultoría, gastos de viaje, etc. Estos últimos, desembolsados invariablemente en divisas, permiten que los inversionistas y contratistas extranjeros aseguren la lealtad de los cuadros profesionales y de los funcionarios. El estado está en bancarrota y no es capaz de remunerar a sus funcionarios (bajo las cláusulas de sus convenios con los acreedores). Los contratistas extranjeros y las "agencias de ayuda" no sólo acaparan el capital humano en institutos de investigación y departamentos gubernamentales, sino que se convierten en fuente principal de ingresos para burócratas de nivel alto y medio implicados en el manejo de la inversión y el comercio extranjeros.

LA DESINTEGRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Las reformas han encerrado las finanzas públicas del estado en una camisa de fuerza. Al banco central no se le permite aumentar el suministro de dinero o emitir moneda sin la aprobación del FMI. Tampoco se le permite otorgar créditos o financiar a las EPE. A su vez, estas últimas son precipitadas a la quiebra como resultado de la congelación de los créditos y los fondos del gobierno. Por su parte, la

bancarrota de las empresas estatales conduce al desplome de los ingresos fiscales del estado, lo que también repercute en las finanzas públicas del estado.

La situación con respecto a los bancos estatales era similar. Éstos habían sido afectados por la caída de los depósitos en dongs de la población (que prefería conservar sus ahorros en billete de dólar), para no mencionar la eliminación de subsidios estatales, las exigencias de estricta reserva y las elevadas deducciones de impuestos. A su vez, la contracción del crédito así como la creciente falta de préstamos por parte de las EPE estaba empujando a los bancos del estado a la ruina, en beneficio de los diferentes bancos extranjeros y mixtos que operan en Vietnam. En 1994, más de diez mil de las 12 300 empresas estaban fuertemente endeudadas con los bancos del estado.

Sin embargo, a las empresas estatales no se les permitía contactar directamente con los bancos extranjeros en busca de crédito. Por otra parte, los bancos extranjeros tenían acceso a este lucrativo mercado de créditos a corto plazo al otorgar créditos colaterales a los bancos estatales vietnamitas.

EL DESMANTELAMIENTO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL

Las reformas contribuyeron a una impresionante caída de la inversión pública. Entre 1985 y 1993, la porción del gasto de administración del gobierno decreció un 63%, del 8.2 a 3.1% del PIB. En agricultura y silvicultura, la disminución (90%) fue aún más dramática, esto es, de 1.0 a 0.1% del PIB. En industria y construcción, el presupuesto cayó de 2.7 a 0.1% del PIB (una disminución de 96 por ciento).[11]

Reglas nuevas relacionadas con los niveles del gasto recurrente y de inversión se establecieron en concordancia con los convenios negociados con las instituciones de Bretton Woods. Se fijaron techos precisos para todas las categorías del gasto, se despidió a empleados públicos, se congelaron las partidas para la salud y la educación, etc. El objetivo fundamental era reducir el déficit presupuestario. En otras palabras, ya no se le permitía al estado movilizar sus propios

[11] Véase Banco Mundial, *Viet Nam, transition...*, p. 246. Cabe señalar que las estadísticas en dongs corrientes y constantes no se consideran confiables.

recursos para la construcción de infraestructura pública, carreteras u hospitales, etc.; esto es, los acreedores no sólo se convirtieron en "corredores" de todos los principales proyectos de inversión, sino que también decidían acerca de qué tipo de infraestructura pública era más adecuado para Vietnam, y qué debía o no ser financiado por la "comunidad de donadores" en el contexto del Programa de Inversión Pública (PIP) establecido bajo los auspicios técnicos del Banco Mundial. No es necesario decir que el proceso de financiar la inversión pública creaba deuda y esto, a su vez, reforzaba el control de los acreedores sobre la política económica.

Esta supervisión se aplicaba no sólo al *volumen de inversión pública*, afectaba también la composición del gasto público y la fijación de prioridades de inversión por parte de los acreedores. Requería igualmente el despojo y privatización de la mayor parte de las EPE en sectores de infraestructura y estratégicos. A su vez, los préstamos prometidos en la Conferencia de Donadores de París, en noviembre de 1993, requerían un sistema de licitación internacional que destinaría en su totalidad la ejecución de los proyectos de obras públicas a las constructoras y empresas de ingeniería internacionales. Estas últimas, a su vez, extraían grandes sumas de dinero (que en última instancia Vietnam tendría que reembolsar) en una variedad de honorarios de consultoría y administración. Por su parte, las empresas vietnamitas (tanto públicas como privadas) estaban excluidas del proceso de licitación aunque gran parte del trabajo real de construcción era realizado por compañías locales (utilizando mano de obra barata vietnamita) en subcontratos independientes firmados con las transnacionales.

REINTEGRACIÓN DEL IMPERIO JAPONÉS

Hay una tendencia hacia la reintegración de Vietnam a la esfera de influencia japonesa, situación reminiscente de la segunda guerra mundial cuando Vietnam formaba parte de la "Gran Esfera de Co-Prosperidad de Asia Oriental" lanzada por Japón. Esta posición dominante del capital japonés se realizaba mediante el control de más del 80% de los créditos de los proyectos de inversión e infraestructura. Estos préstamos, canalizados a través del Fondo de Cooperación Económica Exterior de Japón así como a través del Banco

Asiático de Desarrollo (BAD), apoyaban la expansión de las grandes compañías comerciales y transnacionales japonesas.

Con el levantamiento del embargo estadunidense en febrero de 1994, el capital norteamericano sacó las garras para restaurar su posición en un terreno comercial dominado por Japón (y en menor medida por la Unión Europea). Los japoneses llevaban la delantera no sólo en inversiones clave, sino que también controlaban gran parte del crédito de largo plazo a Vietnam. Pueden preverse confrontaciones entre Washington y Tokio a medida que las transnacionales estadunidenses intentan restablecer la posición que detentaban en Vietnam del Sur (por ejemplo, antes de 1975, en las plataformas petroleras). Otros actores importantes son los coreanos, y los chinos de Taiwán y Hong Kong. Prevalece una clara demarcación, sin embargo: los últimos tienden a concentrarse en la manufactura y procesos para exportación mientras que los grandes proyectos de infraestructura, petróleo, gas y recursos naturales están en manos de conglomerados japoneses y europeos.

Cabe señalar que Japón controla también gran parte de los créditos utilizados para financiar las importaciones de bienes de consumo. Este frenesí consumista de los productos de marcas japonesas se apoya masivamente en dinero prestado, obtenido por la inyección de cientos de millones de dólares de los llamados "préstamos de desembolso rápido" prometidos por Japón a los bancos multilaterales (incluyendo el BAD, el Banco Mundial y el FMI).[12] Estos créditos (que en el discurso oficial se dice que constituyen una "ayuda para la balanza de pagos") se destinan explícitamente a la importación de mercancías. Administrados por el banco central de Vietnam, los desembolsos de estos préstamos se distribuyen en forma de cuotas en divisas extranjeras a miles de empresas estatales involucradas en el comercio de importación. Este proceso acelera el diluvio de bienes de consumo contribuyendo al mismo tiempo a inflar la deuda externa. Con la excepción de un número pequeño de corporaciones estatales (y de aquellas dedicadas al negocio de importación), las reformas han contribuido a desmovilizar sectores enteros de la economía nacional: el único medio para que una empresa nacional pueda "sobrevivir" es entrar en el lucrativo negocio de la importación o establecer una "empresa mixta" en la que el "socio extranje-

[12] En la Conferencia de donadores de París, de noviembre de 1993, se empeñaron más de 1.8 mil millones de dólares en crédito multilateral y bilateral.

ro" tenga acceso al crédito (en divisas) y control sobre la tecnología, la fijación de precios y las remesas de utilidades. Además, todo el sistema de comercio internacional, desde sus escalones más bajos hasta los más altos funcionarios del gobierno, es proclive a la corrupción y el soborno de los contratistas extranjeros.

La crisis económica de Vietnam no se tradujo, sin embargo, en una caída en la tasa "registrada" de crecimiento del PIB. Este último ha aumentado notablemente como resultado del rápido enderezamiento de la economía hacia el comercio exterior (desarrollo de petróleo y gas, recursos naturales, exportación de bienes básicos y manufacturas de mano de obra barata).

A pesar de la oleada de quiebras y de la compresión del mercado interno, hubo un crecimiento significativo de las empresas mixtas orientadas a la exportación. Por su parte, la afluencia "artificial" de bienes importados contribuyó al crecimiento del sector comercial y su participación en el PIB.

El crecimiento económico estaba siendo alimentado por la deuda. De 1986 a 1993, la carga del servicio de la deuda aumentó en más de diez veces. También aumentó como resultado del acuerdo del gobierno con el Club de París, a finales de 1993, en el que se reconocieron las deudas abrumadoras del régimen de Saigón.

HAMBRE A NIVEL REGIONAL

Entre las reformas de 1981 en apoyo de la producción nacional, la adopción de un "sistema de contratos agrícolas" más flexible fue ampliamente acogida por los campesinos. En contraste, la segunda oleada de reformas agrícolas adoptadas desde 1986 contribuyó al empobrecimiento de grandes sectores de esa misma población. Bajo la guía del Banco Mundial y de la FAO, las autoridades abrogaron la política de "autosuficiencia alimentaria regional", diseñada para prevenir la escasez de alimentos en las distintas regiones del país. En las zonas altas del Vietnam central, se animaba a los agricultores a especializarse "según las ventajas comparativas de su región", o sea, a dejar de lado el cultivo de subsistencia y dedicarse a cultivos comerciales de "alto valor" para la exportación. El cultivo excesivo de café, mandioca, nuez de la india y algodón, combinado con el derrumbe de los precios mundiales de las mercancías y el alto costo

de los insumos agrícolas importados, provocó el estallido de hambrunas regionales.

Irónicamente, el proceso de sustitución de cultivos de exportación resultó en una clara disminución de las ganancias en divisas, debido a que grandes embarques de productos agrícolas fueron vendidos por las compañías comerciales del estado a contratistas internacionales, con importantes pérdidas financieras:

> Movilizamos a los agricultores para que produzcan mandioca y algodón, pero no pueden exportar con ganancia porque el precio internacional ha caído [...] Lo que sucede es que las compañías comerciales del estado están obligadas a exportar el café o la mandioca con pérdidas. Sin embargo, se las arreglan para compensar estas pérdidas porque utilizan los réditos en divisas para importar bienes de consumo. También obtienen grandes ganancias aumentando los precios de los fertilizantes importados.[13]

En otras palabras, las corporaciones exportadoras del estado, al mismo tiempo que arrojaban ganancias de valor contable, contribuían de hecho a la generación de deuda (en divisas extranjeras) al vender rutinariamente productos básicos por debajo de su precio en el mercado mundial. En muchas de las zonas donde faltaban alimentos, los cultivos de exportación de los agricultores (que habían abandonado las siembras de comestibles) no se vendieron debido a la situación de sobreoferta en el mercado mundial. El resultado fue el hambre, porque los agricultores no podían ni vender los cultivos de exportación ni producir sus propios alimentos.

Una situación similar prevalecía con respecto a las EPE involucradas en el comercio del arroz. Éstas preferían exportar con pérdidas financieras en lugar de vender en el mercado nacional. Con la completa desregulación del mercado de granos y las ventas en manos de los comerciantes privados, los precios nacionales se dispararon, particularmente en las zonas donde faltaban alimentos. Mientras que el arroz se exportaba por debajo de los precios del mercado mundial, la escasez de alimentos estallaba severamente en regiones en donde la producción de arroz con cáscara se había abandonado a causa de la política de "especialización regional". En 1994, por ejemplo, las autoridades reconocieron la existencia de una hambruna en la pro-

[13] Entrevista con el ministro de Agricultura e Industria Alimentaria, Hanoi, abril de 1994.

vincia de Lai Cai, en la frontera con China, que afectaba a más de 50 mil personas. Si bien la escasez de alimentos se había ido agravando en Lai Cai durante un periodo de cinco meses (sin que se hubiese proporcionado ninguna ayuda de emergencia), dos millones de toneladas de arroz quedaron sin venderse en el delta del Mekong como resultado de la quiebra de las compañías comercializadoras del estado.

El hambre no se limitaba a las áreas con déficit de alimentos, afectaba a las principales regiones, incluyendo áreas urbanas y el delta del Mekong con su "economía de excedentes alimentarios". En esta última región, 25.3% de la población adulta tenía una ingesta diaria de energía inferior a las 1 800 calorías.[14] En las ciudades, la devaluación del dong, junto con la eliminación de subsidios y controles de precios, provocaron que se dispararan los precios del arroz y otros alimentos básicos. La desindexación de los salarios y el desempleo urbano masivo (a consecuencia de los recortes de servidores públicos y trabajadores de las EPE) resultaron también en niveles más bajos de ingesta de alimentos y deterioro del estatus nutricional de los niños de las zonas urbanas.

DESNUTRICIÓN INFANTIL

La desregulación del mercado de granos disparó la hambruna y una elevada incidencia de desnutrición infantil. A pesar de la incrementada "disponibilidad" de alimentos básicos, como lo sugerían los datos de la FAO, una investigación sobre nutrición confirmó el abrupto deterioro del estatus nutricional tanto de los niños como de los adultos. La escasa ingestión de energía de los adultos (per cápita/por día) para el país era de 1 861 calorías, pero el 25% de la población adulta ingería por debajo de las 1 800 calorías (1987-1990), lo que indica una situación de desnutrición extrema.[15] En un 9% de los hogares de la muestra, la ingesta de energía de los adultos era de menos de 1 500 calorías. Para niños menores de seis años, la in-

[14] Véase Banco Mundial, *Vietnam, population, health and nutrition sector review*, Washington, D.C., 1993, cuadro 3.6, p. 47.

[15] El porcentaje de niños menores de cinco años que padecen desnutrición se calcula en 45% de acuerdo con el criterio de peso por edad y de 56.5% de acuerdo con la altura por edad (*ibid.*, pp. 38-46 y 62).

gesta de energía registrada era, en promedio, de 827 calorías per cápita.

Con respecto a la desnutrición infantil, la situación fue reconocida por el Banco Mundial:

Vietnam tiene la proporción más elevada de niños bajos de peso y de crecimiento retardado [del orden del 50%] que cualquier otro país del Sur o del Sudeste Asiático, con excepción de Bangladesh [...] La magnitud de los problemas de desarrollo retardado y debilidad entre los niños, ciertamente, parece haber aumentado significativamente [...] también es posible que la crisis macroeconómica, empeorada en el periodo 1984-1986 pueda haber contribuido al deterioro en el estatus de la nutrición.[16]

También vale la pena señalar (según la investigación) que la deficiencia de vitamina A que causa ceguera (resultante de una dieta compuesta casi exclusivamente por cereales) está extendida entre los niños en todas las regiones del país, con excepción de Hanoi y del sudeste. Esta situación es comparable con la de Bangladesh (véase el capítulo 11).

La desregulación del mercado de granos (bajo la guía del Banco Mundial) permitía el acceso fácil al mercado mundial (aunque a precios muy bajos para las materias primas), al tiempo que trastornaba los canales del comercio interno y desencadenaba hambrunas.[17] Este patrón fue reconocido, cándidamente, por el Banco Mundial:

Por supuesto que, dado que los flujos del sector privado responden típicamente a los incentivos a los precios, el problema de la disponibilidad de alimentos en las áreas con déficit alimentario no desaparecerá de la noche a la mañana, puesto que los consumidores en esas áreas no tienen el poder adquisitivo para pujar el precio pagado por los cereales de las regiones con excedentes. De hecho, en la actualidad es financieramente más remunerador exportar arroz fuera de Vietnam que transferirlo a las regiones deficitarias dentro del país. A medida que se expande el sector privado del comercio de granos, la disponibilidad de alimentos en las regiones deficitarias puede declinar, inicialmente, antes de mejorar.[18]

[16] Véase Banco Mundial, *Vietnam, population...*, p. 42.

[17] La política de autosuficiencia alimentaria regional se dictó a causa de las deficiencias de las redes internas de transporte ferroviario y por carretera, destruidas durante la guerra.

[18] Banco Mundial, *Vietnam, population...*, p. 42.

EN LA RED DE LA AGROINDUSTRIA INTERNACIONAL

La dirección general de la política del gobierno con respecto a los granos coincidía en gran medida con los intereses de la agroindustria internacional: dejar el arroz por una variedad de cultivos diferentes (cítricos, maíz híbrido, nuez de la india, etc.) estaba siendo estimulado incluso en regiones favorables a los cultivos arroceros (por ejemplo el delta del Mekong). En el sur, en la provincia de Dong Nai, por ejemplo, se alentaba a los agricultores a abandonar los arrozales, las semillas de maíz híbrido podían comprarse a un conglomerado internacional de granos con créditos a corto plazo (a 2.5% por mes), financiados por el banco agrario del estado. El maíz cosechado era entonces "recomprado" por Pronoco (una empresa agroindustrial mixta que exporta y vende alimentos para animales en el mercado nacional) para producir cárnicos para Taiwán y Hong Kong.[19] El crédito a corto plazo podía obtenerse sólo para cosechas comerciales designadas, con periodos más cortos (menos de 180 días) que los requeridos para completar el ciclo de la producción agrícola y de la comercialización de las mercancías.

VIETNAM COMO EL MAYOR EXPORTADOR DE ARROZ

Entre 1987-1989 y 1992, tuvo lugar un impresionante incremento en la producción de los arrozales, esto permitió a Vietnam avanzar de una posición de importador neto a la de exportador de arroz. Esta tendencia se sostuvo sin que hubiera un aumento en las áreas de cultivo destinadas a los arrozales. Y, principalmente, fue resultado del cambio a nuevas variedades así como a la mayor utilización de fertilizantes y pesticidas, que implicaban costos sustancialmente más altos para el pequeño agricultor. El gobierno había dejado de proporcionar insumos agrícolas; las EPE que producían pesticidas se habían arruinado. Una porción cada vez mayor de los insumos agrarios eran importados:

> Nuestra productividad ha aumentado pero nuestros ingresos no; tenemos que pagar las nuevas variedades de semillas, los insecticidas y los fertilizan-

[19] Entrevistas realizadas en la provincia de Dong Nai así como con miembros del Instituto de Investigación Agrícola, Ciudad Ho Chi Minh, abril de 1994.

tes. Los costos del transporte han aumentado. Si los precios siguen subiendo, ya no podremos continuar las actividades agrícolas; el empleo fuera de las granjas, las artesanías y el trabajo en la ciudad son indispensables; la agricultura no proporciona suficiente dinero para sobrevivir.[20]

Centrado principalmente en el delta del Mekong, este incremento en el rendimiento de los arrozales (y el correspondiente incremento de las exportaciones) provocó también una mayor concentración de tierras. En el delta del río Rojo, los pequeños agricultores pagaban regalías al Instituto Internacional para la Investigación del Arroz (apoyado por el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller) por una nueva variedad de arroz que estaba siendo reproducida en viveros locales. Los institutos de investigación agrícola, cuyo suministro de fondos había sido cortado por el estado, habían entrado en el lucrativo negocio del desarrollo y producción de semillas.[21]

La expansión en la producción de los arrozales, sin embargo, parece haber alcanzado su máximo: la retirada del apoyo del estado en la provisión de infraestructura de riego, conservación del agua y mantenimiento, desde 1987, afectará los futuros patrones de rendimiento. El riego en gran escala y el drenaje han sido dejados de lado: el Banco Mundial recomienda la recuperación de los costos y la comercialización de los recursos acuíferos, reconociendo, no obstante, que "los agricultores fuera del delta del Mekong son demasiado pobres para soportar un aumento en las tarifas [de irrigación] en este momento".[22] El riesgo de inundaciones y sequías recurrentes ha aumentado, también, como resultado del desmantelamiento de las empresas estatales responsables de las rutinas de operación y mantenimiento. Existe una situación similar en los servicios de apoyo y extensión agrícolas:

La provisión de servicios de apoyo agrícola (suministro de fertilizantes, semillas, créditos, control de plagas, servicios veterinarios, servicios de maquinaria, asesoría en investigación y extensión) hasta finales de los ochenta fue una función predominantemente gubernamental [...] Este sistema, aunque todavía funciona sobre el papel, se ha desplomado casi totalmente, debido, en realidad, al restablecimiento de un sistema de cultivo de base fa-

[20] Entrevistas con agricultores en la comuna Da Ton, distrito de Gia Lam, cerca de Hanoi, abril de 1994.

[21] Banco Mundial, *Viet Nam, transition...*, p. 144.

[22] *Ibid.*, p. 141.

miliar, déficit crecientes en el presupuesto real y tasas salariales del servicio civil devaluadas a su mínima expresión a causa de la inflación. Aquellos servicios de apoyo que implican un producto o servicio comercializable han sido semiprivatizados con cierto éxito, y los restantes apenas funcionan. En la burocracia de los servicios de apoyo, gran número de empleados sobreviven en actividades extra laborales, mientras que, según los informes, unos ocho mil graduados de las escuelas agrotécnicas están "desempleados".[23]

LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

Todo tiende a una crisis de primer orden en la producción, mayor polarización social en las zonas rurales y mayor concentración de la propiedad de la tierra: grandes sectores de la población rural en el delta del río Rojo y del Mekong están siendo sacados de sus tierras; también se han dado hambrunas en las regiones con excedente de arroz. La ley de tierras aprobada en la Asamblea Nacional, en octubre de 1993, se redactó con el apoyo del Departamento Legal del Banco Mundial. Los expertos legales organizaron seminarios en el Banco Mundial para estudiar detenidamente las implicaciones de la ley de tierras:

> Los expertos extranjeros traídos por el Banco Mundial piensan que la ley de tierras es adecuada para nuestras condiciones particulares: si los agricultores carecen de capital o recursos, pueden "transferir" la tierra, o bien mudarse a las ciudades, o trabajar para "una familia acomodada" [...] La falta de tierra no es la causa de la pobreza, los pobres carecen de conocimientos y experiencia y tienen una educación limitada; los pobres también tienen demasiados hijos.[24]

Según esta ley, las tierras agrícolas (dentro de un sistema formal de arrendamientos a largo plazo) pueden ser "transferidas" (es decir, vendidas) libremente e hipotecadas como "aplicaciones colaterales" (oficialmente, sólo con un banco del estado, pero en la práctica, también con acreedores privados). Entonces, si hay incumpli-

[23] *Ibid.*, p. 143.

[24] Entrevista con el Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Hanoi, abril de 1994.

miento de pago, la tierra puede ser "transferida" o vendida.

La consecuencia ha sido el resurgimiento (particularmente en el sur) de la usura y el arrendamiento de la tierra, forzando el regreso de la economía campesina a las mismas luchas por la tierra y el crédito que tuvieron lugar a finales del periodo colonial francés. En el sur, la concentración de la tierra está ya bastante avanzada, marcada por el desarrollo de las plantaciones de tamaño mediano (incluyendo numerosas empresas mixtas con capital extranjero). Muchas instalaciones agrícolas del estado han sido transformadas en plantaciones mixtas que emplean trabajadores permanentes y temporales. Los campesinos sin tierras, que constituyen una porción cada vez mayor de la población rural, se ven obligados a buscar empleo en las ciudades o como trabajadores temporales en las plantaciones comerciales de los agricultores ricos o de las empresas mixtas. Los salarios rurales en el delta del río Rojo eran del orden de 50 centavos de dólar por día (1994).

Mientras que la confiscación de la tierra de los pequeños campesinos en el norte de Vietnam está todavía en un nivel incipiente, la ley de tierras abre el camino para la apropiación de grandes porciones de tierras agrícolas por los comerciantes y prestamistas urbanos.

Hay que mencionar que las políticas agrícolas del régimen del general Thieu en Saigón están resurgiendo. En el sur, los títulos de las tierras, otorgadas en 1973 por los programas estadunidenses de "ayuda" para "pacificar" las áreas rurales, están reconocidos plenamente por las autoridades. En cambio, miles de campesinos que abandonaron sus aldeas para luchar junto a las fuerzas de liberación, carecen de derechos de propiedad sobre las tierras agrícolas. Recordemos que el programa de distribución de tierras de Estados Unidos se implementó a raíz de los acuerdos de París de 1973, durante los últimos años del régimen de Thieu. Este periodo de la llamada "vietnamización" de la guerra coincidió con la retirada formal de las tropas de combate estadunidenses y del apuntalamiento del gobierno de Saigón con un volumen masivo de "ayuda" de Estados Unidos. Según el Ministerio de Agricultura, el programa de guerra de Estados Unidos es un "modelo" útil: "Nuestra actual política es emular el programa norteamericano de distribución de tierras para aquel periodo, aunque carecemos de suficientes recursos financieros."

LA DESTRUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN

Quizá el impacto más dramático de las reformas ha sido en las áreas de la salud y la educación. Educación universal y alfabetización fue un objetivo clave de la lucha contra el dominio colonial francés.

De 1954 (a raíz de la derrota de los franceses en Dien Bien Phu) a 1972, el registro en las escuelas primarias y secundarias en Vietnam del Norte ha aumentado siete veces (de 700 mil a cerca de cinco millones). Tras la reunificación en 1975, se puso en marcha una campaña de alfabetización en el sur. Según cifras de la UNESCO, las tasas de alfabetización (90%) y de asistencia escolar estaban entre las más elevadas del Sudeste asiático.

Las reformas han destruido deliberada y conscientemente el sistema educativo al recortar en gran medida el presupuesto para educación, bajar los salarios de los maestros y "comercializar" la educación secundaria, la vocacional y la universitaria por medio de la exacción de matrículas. Este movimiento tiende a la transformación de la educación en una mercancía. En el lenguaje oficial de las agencias de las Naciones Unidas, se requiere "que los consumidores de servicios [educativos] paguen cuotas mayores, que se aliente a las instituciones a autofinanciarse y que se usen incentivos para privatizar la educación y el entrenamiento en donde esto sea apropiado".[25]

Revocando virtualmente todos los logros anteriores, incluyendo la lucha contra el analfabetismo emprendida desde 1945, las reformas arreglaron una caída sin precedentes en la inscripción escolar, junto con una alta tasa de deserción observada en los años finales de la escuela primaria. La obligación de pagar matrículas está ahora integrada en la constitución, que fue cuidadosamente vuelta a redactar en 1992. Según datos oficiales, la proporción de graduados de educación primaria que entraron en el programa de educación secundaria, que es de cuatro años, disminuyó un 92% en 1986-1987 (antes de las matrículas), hasta un 72% en 1989-1990, una deserción de más de medio millón de estudiantes. De igual manera, unos 231 mil estudiantes, de un total de 922 mil, abandonaron la preparatoria. En otras palabras, *un total de cerca de tres cuartos de millón de niños fueron arrojados del sistema escolar secundario durante los tres prime-*

[25] Véase Ministerio de Educación, UNDP, UNESCO (National Project Education Sector Review and Human Resources Sector Analysis), *Vietnam, education and human resources analysis*, 1, Hanoi, 1992, p. 39.

ros años de las reformas (a pesar del aumento de más del 7% de la población en edad escolar). Aunque no es posible conseguir cifras recientes de registros de inscripción, nada indica que esta tendencia se haya invertido.[26] Los datos disponibles de los años ochenta señalan una tasa de deserción de 0.8% por año en la educación primaria, con un aumento en la inscripción total, pero sustancialmente por debajo del crecimiento de la población en edad escolar. La estructura de descapitalización disparará una erosión acelerada de la educación primaria en los próximos años.

El estado asignó (1994) un promedio de 3 a 4 dólares por año y por niño en el nivel de la escuela primaria. En la región del delta del río Rojo, el costo para los padres de los materiales y libros escolares (previamente financiados por el gobierno), en 1994, equivalía a 100 kg de arroz por niño y año (una fracción significativa del consumo total de una familia).

No obstante, el gobierno y los "donadores" expresaron "preocupación" ante el hecho de que con la disminución tan rápida de los registros de inscripción "los costos por unidad hubieran aumentado" y que ahora tuviera "un exceso de maestros".[27] Con un sistema escolar "disminuido", debería prestarse atención a "la calidad, más que a la cantidad", haciéndose (según "los donadores") despedir a los maestros que sobran. Todos los escalones del sistema educativo están afectados por este proceso: las guarderías de preprimaria, apoyadas por el estado, están siendo eliminadas y, en adelante, serán manejadas como empresas comerciales.

La recuperación de costos se impuso también a las universidades y a todas las secundarias. Los institutos de investigación aplicada fueron convocados a recuperar sus costos comercializando los productos de sus investigaciones: "Las universidades e institutos de investigación están tan escasos de fondos que su sobrevivencia depende de generar fuentes independientes de ingresos." El estado cubría solamente el 25% del total de los salarios de investigación y otros gastos de operación de los principales institutos de investigación.[28] Los establecimientos de investigación, sin embargo, recibían una tasa de interés preferencial en los créditos a corto plazo (1.8% por mes en lugar del 2.3 por ciento).

[26] Ministerio de Educación, UNDP, UNESCO, *op. cit.*, p. 65.
[27] *Ibid.*, p. 60.
[28] Banco Mundial, *Viet Nam, transition...*, p. 145.

En la educación vocacional y técnica, incluyendo la normal de maestros, se duplicó una congelación en el registro de inscripciones (con "techos" precisos), de acuerdo con los lineamientos de la administración de los donadores externos. El resultado: un gran recorte en el suministro de capital humano y profesionales calificados.

En el contexto anterior, el control financiero y la supervisión de la mayor parte de los institutos de investigación y entrenamiento está en manos de la administración de donadores externos que financian selectivamente los suplementos salariales en divisas, contratos de investigación, etc., dictando al mismo tiempo las orientaciones para investigación y desarrollo de programas académicos.

DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

En la salud, el impacto más inmediato de las reformas fue el desmantelamiento de los hospitales distritales y de los centros de salud a nivel comunal. Hasta 1989, había unidades de salud que daban consultas médicas así como medicamentos esenciales gratuitos a la población. La desintegración de las clínicas de salud en el sur, en general, está más avanzada ahí donde la infraestructura de salud se desarrolló a partir de la reunificación en 1975. Con las reformas, se introdujo un sistema de cuotas de registro. Se aplicó la recuperación de costos y el libre mercado de medicamentos. El consumo de medicamentos esenciales (mediante el sistema de distribución pública) descendió en un 89%, empujando a la industria farmacéutica y de suministros médicos a la bancarrota.[29]

Para 1989, la producción nacional de fármacos cayó en 98.5% en relación con su nivel de 1980; un gran número de compañías farmacéuticas cerró. Con la completa desregulación de la industria farmacéutica, incluyendo la liberalización de los precios de los medicamentos, las medicinas importadas (vendidas ahora exclusivamente en el mercado "libre" a precios muy altos) han desplazado a las marcas nacionales. Se ha abierto un mercado comercial considerablemente "encogido" aunque muy rentable para las grandes transnacionales farmacéuticas. El consumo promedio anual de medicamentos

[29] Cifras del Ministerio de Salud citadas en Banco Mundial, *Vietnam, population...*, cuadro 4.6, p. 159.

comprados en el mercado "libre" es del orden de un dólar por año (1993), que incluso el Banco Mundial considera demasiado bajo.[30] El impacto sobre el grado de salud de la población es dramático.

El gobierno (aconsejado por la "comunidad de donadores") descontinuó también el apoyo presupuestario a la provisión de equipos médicos y su mantenimiento, conduciendo a la virtual parálisis de todo el sistema de salud pública. Los salarios reales del personal médico y las condiciones laborales bajaron de nivel: el salario mensual de los médicos en un hospital de distrito era de apenas 15 dólares al mes (1994). Con la caída de los salarios estatales y el surgimiento de un pequeño sector de práctica privada, cientos de miles de médicos y trabajadores de la salud abandonaron la salud pública. Una encuesta llevada a cabo en 1991 confirmó que la mayoría de los centros de salud a nivel comunal se habían vuelto inoperantes: con un personal promedio de cinco trabajadores por centro, el número de pacientes había disminuido a menos de seis por día (ligeramente más de un paciente para cada uno de los trabajadores por día).[31] Desde las reformas, también ha habido un marcado descenso en la admisión de estudiantes a las principales escuelas de medicina del país, que actualmente sufren masivos recortes en sus presupuestos de operación.

REAPARICIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

La reaparición de cierto número de enfermedades infecciosas, como la malaria, la tuberculosis y la diarrea, fue reconocida por el Ministerio de Salud y los donadores. Un estudio de la OMS confirmó que el número de muertes por malaria aumentó tres veces durante los primeros cuatro años de las reformas, junto con el desplome de los servicios de curación y los vertiginosos aumentos en los precios de los medicamentos contra la malaria. Lo más notorio en estos datos es que el número de muertes por malaria aumentó a una tasa más rápida que el crecimiento de los casos de malaria denunciados, lo que sugiere que el desmantelamiento de los servicios de salud desempeñó un papel decisivo en el aumento de la mortalidad por ma-

[30] *Ibid.*, p. 89.
[31] *Ibid.*, p. 86.

laria.[32] Estas tendencias se confirman ampliamente por los datos en el nivel comunitario: "El estado de salud solía ser mucho mejor; antes se hacía un chequeo anual de tuberculosis, ahora ya no hay medicamentos para tratar la malaria, los agricultores no tienen dinero para ir al hospital de distrito, no pueden pagar las cuotas de registro..."[33]

El Banco Mundial ha reconocido el desmantelamiento del sistema de salud (las "causas" macroeconómicas subyacentes, sin embargo, no fueron mencionadas):

> A pesar de su impresionante desempeño en el pasado, el sector salud vietnamita actualmente está languideciendo [...] hay una grave carencia de medicamentos, de suministros y equipos médicos y las clínicas de salud del gobierno están notablemente subutilizadas. La escasez de fondos para el sector salud es tan aguda que no está claro si las instalaciones básicas van a encontrar los insumos para seguir funcionando en el futuro.[34]

Si bien el Banco Mundial concedía que los programas de control de enfermedades contagiosas para diarrea, malaria e infecciones respiratorias agudas "[en el pasado] habían estado entre las más exitosas de las acciones de salud en Vietnam", las "soluciones" propuestas consistían en la "comercialización" (esto es, mercantilización) de la salud pública así como en el despido masivo de doctores y trabajadores del sector. El Banco Mundial propuso que los salarios de los trabajadores se aumentaran dentro del mismo marco presupuestario: "un aumento en los salarios de los trabajadores de la salud del gobierno casi necesariamente tendrá que ser compensado por una amplia reducción en el número de trabajadores de la salud...".[35]

Las reformas fueron inhumanas; desmantelaron los sectores sociales, destruyendo los esfuerzos y luchas del pueblo vietnamita durante cerca de 40 años, invirtiendo los progresos pasados. Hay un patrón constante y coherente: el deterioro en la salud y la nutrición (en los años que siguieron a las reformas) es similar (cronológicamente) a lo observado en la inscripción escolar. Tras una guerra

[32] *Ibid.*, cuadro 4.2, p. 154.
[33] Entrevista realizada en la comuna de Phung Thuong, distrito de Phue Tho, provincia de Hay Tay, Vietnam del Norte.
[34] Banco Mundial, *Viet Nam, transition...*, p. 169.
[35] *Ibid.*, p. 171.

cruel y agresiva, la comunidad internacional debe tomar conocimiento del impacto “terrible” de las políticas macroeconómicas aplicadas a un antiguo enemigo en el campo de batalla.

Esta página dejada en blanco al propósito.

IV

AMÉRICA LATINA

Esta página dejada en blanco al propósito.

13

DEUDA Y "DEMOCRACIA" EN BRASIL

El escándalo político durante la presidencia de Fernando Collor de Mello desempeñó un papel significativo en la reestructuración del estado brasileño. La primera presidencia "elegida democráticamente" marcó la desaparición de la dictadura militar, así como la transición hacia una nueva "democracia autoritaria" bajo el control directo de los acreedores y de las instituciones financieras internacionales sitas en Washington.

Pocas semanas después de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, una encuesta del congreso confirmó que el presidente Collor de Mello estaba implicado personalmente, a través de su brazo derecho y antiguo dirigente de campaña P.C. Farías, en un negocio sucio de extorsión multimillonaria que incluía el uso de fondos públicos. El dinero del soborno (que involucraba al gobierno en contratos con compañías constructoras) había sido canalizado hacia "cuentas bancarias fantasma" o desviado para pagar gastos personales de la casa del presidente, incluyendo el guardarropa de su esposa Rosane. La opinión pública tenía los ojos puestos en el escándalo político y la desgracia del presidente: las audiencias del congreso televisadas tuvieron más espectadores que las de los juegos olímpicos.

Mientras tanto, "tras bambalinas", otro trato multimillonario mayor aun estaba siendo negociado entre el ministro de Finanzas y los acreedores internacionales de Brasil: estas negociaciones se desarrollaron entre junio y septiembre de 1992, "a puertas cerradas", coincidiendo cronológicamente con el proceso de enjuiciamiento. Los ministros de gobierno dimitieron y declararon públicamente que no apoyaban al presidente. El ministro de Finanzas Marcilio Marques Moreira, "internacionalmente respetado", se mantuvo firme, asegurando que la relación con el FMI y los acreedores comerciales era necesaria. El debilitamiento del estado junto con la inestabilidad en la bolsa de São Paulo y la fuga de capitales sirvieron también para aumentar la presión sobre el gobierno. Las negocia-

ciones con los bancos comerciales fueron anunciadas por el presidente Collor, en junio de 1992, al comienzo del escándalo.[1] Un convenio preliminar sobre la fórmula de "reestructuración" (según el Plan Brady) de los 44 mil millones de dólares que se debían a los bancos internacionales fue revelado poco después del enjuiciamiento del presidente por el senado, el 29 de septiembre de 1992. Fue una liquidación: como resultado del trato, la carga del servicio de la deuda de Brasil aumentaría sustancialmente.[2]

La campaña para enjuiciar al presidente sirvió para distraer la atención pública de la realidad social: la gran mayoría de la población se había empobrecido como resultado del "Plan Collor", lanzado en marzo de 1990 por la controvertida ministra de economía y Finanzas, la señora Zelia Cardoso de Mello; seguido por la más ortodoxa, pero igualmente perjudicial terapia económica de su sucesor, Marcilio Marques Moreira: el desempleo se multiplicó, los salarios reales se habían derrumbado y los programas sociales estaban aniquilados.

La devaluación del cruzeiro fue impuesta por los acreedores, la inflación estaba en más de 20% al mes, precisamente como resultado del "programa antiinflacionario" del FMI. Un alza en las tasas de interés real, impuestas a Brasil en 1991 por el FMI,[3] contribuyó a aumentar la deuda interna así como a atraer grandes sumas de dinero "sucio" y de "capital golondrino" al sistema bancario brasileño. Unas 300 empresas financieras e industriales grandes obtuvieron inmensas ganancias. Estos grupos eran los responsables mayores de "esa inflación beneficiosa"; la participación del capital en el PIB aumentó de 45% en 1980 a 66% a principios de los noventa. La "democracia" había asegurado a las élites económicas (en alianza con los acreedores internacionales) lo que los regímenes militares nacionalistas no fueron capaces de lograr plenamente.

La "agenda secreta" del FMI consistía en apoyar a los acreedores debilitando al mismo tiempo al estado central. Noventa mil millones de dólares de intereses habían sido pagados ya durante los

[1] El senado aprobó la fórmula de reestructuración de la deuda en diciembre de 1992.

[2] Los pagos de intereses a los acreedores internacionales se limitaron al 30% en una moratoria parcial negociada con los bancos comerciales en 1989, durante el gobierno de José Sarney. Según el plan de reestructuración, los pagos de intereses aumentarían al 50 por ciento.

[3] Contenido en la Carta de Intención dirigida al FMI en diciembre de 1991.

ochenta, casi tanto como el total de la deuda misma (120 mil millones de dólares). Cobrar la deuda, sin embargo, no era el objetivo principal. Los acreedores internacionales de Brasil querían asegurarse de que el país permaneciera endeudado indefinidamente en el futuro y que la economía nacional y el estado fuesen reestructurados en su beneficio, para el pillaje continuo de los recursos naturales y el medio ambiente, la consolidación de la economía de exportación de mano de obra barata y el acaparamiento de las empresas estatales más rentables por el capital extranjero.

La propiedad estatal se privatizaría a cambio de la deuda, los costos de la mano de obra bajarían a causa de la desindexación de los salarios y los despidos de trabajadores. La inflación fue consecuencia directa de las reformas macroeconómicas. La pobreza no fue sólo "el resultado" de las reformas, sino también "una condición explícita" del acuerdo con el FMI.

LA SAGA DE LA DEUDA DE BRASIL. ACTO I: EL PLAN COLLOR

¿Quiénes son los "personajes" en la "saga de la deuda" de Brasil?

El Plan Collor, iniciado en 1990, fue una combinación de la política monetaria intervencionista con privatizaciones al estilo del FMI, liberalización del comercio y tasa de cambio flotante. Debía eliminarse un déficit presupuestario de 31 mil millones de dólares, y despedir a 360 mil empleados federales, seis ministerios fueron abolidos. Introducido en marzo de 1990, poco después de la toma de posesión presidencial, el Plan Collor era en muchos aspectos una continuación del "Plan Verão", adoptado en 1989 durante el gobierno de Sarney. La meta de despedir a 360 mil empleados no se logró porque el gobierno no recibió la aprobación del congreso. Sólo se liquidó a 14 mil con indemnizaciones por despido, muchos de los cuales fueron reintegrados durante la presidencia de Itamar Franco.

Las cuentas de ahorros fueron congeladas por la ministra de Finanzas Zelia Cardoso de Mello en un ingenuo intento monetarista por controlar la inflación: "La inflación es un tigre, debemos matar al tigre." Pero, las medidas "mataron la actividad económica"; el desempleo aumentó a niveles récord y los pequeños negocios quedaron desmantelados debido a la congelación de los depósitos bancarios, esto llevó a por lo menos 200 mil despidos solamente en

1990. Las organizaciones sindicales respondieron al Plan Collor en septiembre de 1990 con una huelga, agrupando a más de un millón de trabajadores. En palabras del economista Paulo Singer: "el golpe fue cruel, monstruoso e innecesario".

La "agenda secreta" del Plan Collor consistía en recortar el gasto público y recortar los salarios con el fin de liberar el dinero requerido para el servicio de las deudas externa e interna. La fórmula para el pago de la deuda externa de Brasil, sin embargo, seguía teñida por la posición nacionalista del ex presidente Sarney con respecto a la deuda en 1989, esto es, "una moratoria parcial" (para disgusto de los bancos internacionales) que limitaba el servicio de la deuda al 30% del total de los pagos de intereses.

El FMI había otorgado su "venia" al "Plan Collor", pero un crédito de dos mil millones de dólares seguía en espera desde septiembre de 1990. En palabras del director general del FMI, Michel Camdessus: "antes de pedir la aprobación del consejo ejecutivo [del FMI], debo estar seguro de que las negociaciones con los bancos avanzan en la dirección correcta y de que sus resultados serán satisfactorios".[4]

Pocas semanas después, el gobierno reabrió las conversaciones sobre la deuda con los acreedores internacionales. Jorio Dauster, jefe del equipo negociador de la deuda, nombrado por el presidente Collor de Mello, argumentó de forma poco convincente que "los pagos de la deuda deben limitarse a la capacidad de Brasil para pagar".[5] El grupo asesor de 22 bancos comerciales, encabezados por Citicorp, replicó vetando el acuerdo de crédito del FMI e instruyendo a los bancos multilaterales a no otorgar "dinero nuevo" a Brasil.[6] Este veto fue sancionado oficialmente por el G-7 en una reunión en Washington. A su vez, el Tesoro de Estados Unidos ordenó al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) posponer cualquier nuevo préstamo a Brasil. El FMI, respondiendo también a instrucciones precisas de los bancos comerciales y del gobierno de Estados Unidos, pospuso su misión a Brasilia. El FMI sólo era una simple "burocracia financiera" responsable de llevar a cabo las reformas económicas en los países endeudados, en nombre de los acreedores.

[4] Citado en el *Jornal do Brasil*, 21 de septiembre de 1990.

[5] Véase Simon Fisher y Stephen Fidler, "Friction likely as Brazil reopens debt talks", *Financial Times*, Londres, 10 de octubre de 1990.

[6] Previamente al pago de los atrasos del servicio de la deuda, que ascendían a unos ocho mil millones de dólares.

El gobierno brasileño quedó atrapado en un círculo vicioso: la concesión de "dinero fresco" del FMI, requerido para pagar a los bancos comerciales, estaba siendo bloqueada por el grupo asesor que representaba a esos mismos bancos comerciales; era una situación imposible. El gobierno había satisfecho todas las condiciones planteadas por el FMI, pero Brasil seguía en la lista negra. Y no satisfacer las demandas de los acreedores comerciales podía convertirse fácilmente en un pretexto más para represalias y listas negras. La tensión aumentaba. En las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo en Nagoya, Japón, en abril de 1991, la señora Zelia Cardoso de Mello, ministra de Finanzas de Brasil, indignada, acusó al G-7 de usar presiones políticas desleales al bloquear el crédito multilateral para Brasil.[7]

ACTO II: SOMETIÉNDOSE AL "CONSENSO DE WASHINGTON"

Las reuniones de Nagoya marcaron un momento decisivo. El "discurso nacionalista" y las recriminaciones a la comunidad financiera internacional fueron considerados inoportunos e impropios. Zelia Cardoso fue despedida a principios de mayo. Un nuevo equipo económico, "más alineado" con el "consenso de Washington", entró en escena. El nombramiento de Marcilio Marques Moreira como ministro de Economía y Finanzas recibió el beneplácito del gobierno de Estados Unidos y de las IFI.[8] Cuando Marques Moreira fuera embajador en Washington, estableció una estrecha relación personal con Michel Camdessus, del FMI, y con David Mulford, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. El negociador de la deuda de Zelia Cardoso, Jorio Dauster, también fue destituido y remplazado por Pedro Malan, consejero del Banco Interamericano de Desarrollo y antiguo director ejecutivo del Banco Mundial. La asociación de Malan durante más de diez años con la escena de Washington así como las relaciones personales de Marques Moreira fueron factores significativos en la evolución de las negociaciones de la deuda de Brasil en la segunda parte de la presidencia de Collor.

[7] Véase Christina Lamb, "Brazil issues angry protest at suspension of development loans", *Financial Times*, Londres, 4 de abril de 1991.

[8] Véase Luiz Carlos Bresser Pereira, "O FMI e as carrocas", *Folha de São Paulo,* 27 de julio de 1991, pp. 1-3.

En junio de 1991, el FMI envió una nueva misión a Brasilia encabezada por José Fajgenbaum. El FMI había retirado su "venia" a las instrucciones del grupo asesor dirigido por Citicorp. Tuvieron que iniciarse nuevas negociaciones sobre la reforma macroeconómica. José Fajgenbaum, hablando en nombre de la misión del FMI, declaró que si Brasil quería alcanzar un nuevo acuerdo de crédito con el FMI "se requerían reformas económicas estructurales que implicaban enmiendas a la Constitución".[9] Se armó un revuelo en el parlamento; se acusó al FMI de "intromisión en los asuntos internos del estado". El presidente Collor de Mello pidió al FMI que sustituyera a Fajgenbaum como jefe de misión "por un individuo más calificado". "Una victoria populista para el presidente Collor" en su batalla con el FMI, dijo el *New York Times*.[10]

Aunque se calificó al incidente como una "mala interpretación", la declaración de Fajgenbaum estaba bastante alineada con las prácticas del FMI.[11] El FMI estaba exigiendo la adopción de "una medicina económica mucho más fuerte", con el objeto de que una porción mayor de los ingresos del estado se reorientasen hacia el servicio de la deuda con los bancos comerciales. Pero numerosas cláusulas de la Constitución de 1988 obstaculizaban el camino para el logro de esos objetivos. El FMI estaba plenamente consciente de que los objetivos presupuestarios no podían conseguirse sin recurrir a despidos masivos de empleados del sector público. Y sin embargo, esto requería una enmienda a una cláusula de la Constitución de 1988 que garantizaba seguridad en el empleo a los servidores públicos del gobierno federal. También estaba en cuestión la fórmula de financiamiento (incluida en la Constitución) de los programas estatales y municipales de fuentes del gobierno federal. Esta fórmula limitaba la capacidad del gobierno federal para reducir los gastos sociales y dirigir el ingreso hacia el servicio de la deuda.[12] Desde el punto de vista del FMI y los bancos comerciales, era imperativo enmendar la Constitución.

Las cláusulas del plan estatal de pensiones (A Previdencia Social) incluido en la Constitución de 1988 también se consideraban un

[9] En una entrevista con el *Jornal do Brasil,* citado en *Estado de São Paulo,* 23 de junio de 1991. Véase también "Missão do FMI adota discurso moderado", *Folha de São Paulo,* 19 de junio de 1991.

[10] Véase *O Globo*, 27 de junio de 1991.

[11] Véase *Folha de São Paulo*, 19 de julio de 1991.

[12] El derecho de huelga está contenido en la Constitución de 1988.

obstáculo para el servicio de la deuda del gobierno federal. La privatización de las empresas estatales en los sectores estratégicos de la economía (por ejemplo, petróleo y telecomunicaciones) necesitaban también una revisión constitucional.

La segunda ronda de negociaciones con el FMI terminó a finales de 1991: Michel Camdessus dio su aprobación a un nuevo acuerdo después de consultar con Nicholas Brady y David Mulford, respectivamente secretario y subsecretario del Tesoro del gobierno del presidente Bush.[13] La segunda Carta de Intención preparada por Marcilio Marques Moreira fue entregada personalmente por el presidente Collor de Mello a Michel Camdessus en un desayuno compartido durante la Cumbre Latinoamericana en Cartagena, Colombia, en diciembre. (Recuérdese que la primera, firmada por Zelia Cardoso en septiembre de 1990, había sido rota.)

Este nuevo acuerdo crediticio (dos mil millones de dólares), sin embargo, obligaba al gobierno brasileño a realizar un conjunto de reformas económicas todavía más perniciosas durante un periodo de 20 meses.[14] El ajuste fiscal era particularmente inhumano: 65% del gasto corriente estaba ya destinado para el servicio de la deuda y el FMI estaba exigiendo nuevos recortes al gasto social.

El acuerdo se firmó en el entendimiento explícito (no escrito) de que las autoridades brasileñas reanudarían las negociaciones con el Club de París y alcanzarían un arreglo con los bancos comerciales en cuanto a los atrasos del servicio de la deuda. En palabras de Marcilio Marques Moreira, el trato sobre la deuda comercial representaba "un nuevo capítulo lleno de oportunidades. Éste es el 'nuevo Brasil' que se reinserta en la comunidad internacional de una manera dinámica, competitiva y soberana."[15]

[13] Véase José Meirelles Passos, "FMI e EUA apoiam programa brasilieira", *O Globo*, 7 de diciembre de 1991.

[14] La Carta de Intención fue aprobada por el FMI en enero de 1992. Véase también "Carta ao FMI preve 'aperto brutal' em 92", *Folha de São Paulo*, 6 de diciembre de 1991.

[15] Citado en Stephen Fidler y Christina Lamb, "Brazil sets out accord on 44 billion debt", *Financial Times*, Londres, 7 de julio de 1992.

ACTO III: LAS REPERCUSIONES DEL ENJUICIAMIENTO DE COLLOR DE MELLO

El acto III de la saga de la deuda comenzó con la toma de posesión de Itamar Franco como presidente interino.[16] Un desmañado comienzo: el nuevo presidente prometió aumentar los salarios reales, bajar los precios de los servicios públicos y modificar el programa de privatización sin comprender que tenía las manos atadas debido al acuerdo firmado un año antes con el FMI. A pesar de la impresionante mayoría del congreso basada en una coalición de partidos, que iban desde la izquierda hasta la derecha (encabezada por el ex dirigente del Partido Comunista), el gabinete de Itamar Franco no recibió el apoyo inmediato de las instituciones de Washington.

Las declaraciones populistas de Franco incomodaron tanto a los acreedores como a las élites nacionales. El FMI había decidido ser mucho más duro con el nuevo gobierno: durante los primeros siete meses de la presidencia de Itamar Franco, se nombraron tres ministros de Finanzas y ninguno de ellos recibió el visto bueno del FMI. Entre tanto, éste envió a sus auditores a supervisar el progreso económico en los términos del préstamo: los objetivos trimestrales para el déficit presupuestario no se habían alcanzado (y no podían alcanzarse sin enmiendas a la Constitución). A pesar de que el congreso había aprobado una legislación para la reforma fiscal, tal como lo exigía el FMI, se consideraba que el programa "ya no era oportuno". Los desembolsos del préstamo otorgado en el marco de un acuerdo de derecho de giro se descontinuaron, Brasil estaba "de vuelta en la lista negra" y las negociaciones con el FMI sobre la reforma económica estaban nuevamente como al principio.

Durante otro desayuno de trabajo, esta vez en Washington, en febrero de 1993, con Paulo Haddad, el segundo ministro de Finanzas de Itamar Franco, Michel Camdessus insistió en que debía desarrollarse un nuevo programa económico para presentar a la aprobación del FMI dentro de un periodo de 60 días. Además, también se dejó claro, por parte del FMI, que no se concedería ningún préstamo auxiliar antes de la firma formal del acuerdo final con los bancos comerciales, y que por consiguiente era necesario sincronizar las fe-

[16] Itamar Franco fue nombrado presidente interino mientras estaba pendiente la decisión de los tribunales sobre el voto de enjuiciamiento del senado.

chas de vencimiento establecidas para la reforma de las políticas y la reestructuración de la deuda, respectivamente.[17]

No se perdió el tiempo. Pocas semanas más tarde, llegó a Brasilia una misión del FMI, encabezada por el notable José Fajgenbaum, quien dos años antes había aludido a la necesidad de una reforma constitucional. Continuidad en el personal del lado del FMI..., ¡pero no del lado brasileño! Paulo Haddad ya no estaba al mando. A la llegada de la misión, el equipo económico ministerial estaba en un estado de desorden; la cartera de Economía y Finanzas había sido cambiada pocos días antes. El tercer ministro de Finanzas de Itamar Franco era Eliseu Resende, que debía ir a Washington para encontrarse con Camdessus a finales de abril. Fue despedido en mayo.[18]

ACTO IV: UN SOCIÓLOGO MARXISTA COMO MINISTRO DE FINANZAS

Una nueva fase de la "saga de la deuda" se inició con el nombramiento de Fernando Henrique Cardoso, prominente intelectual y sociólogo marxista, como ministro de Finanzas. La comunidad de negocios, algo recelosa en un principio, se tranquilizó muy pronto: a pesar de sus escritos izquierdistas (*inter alia* sobre "las clases sociales en el capitalismo periférico"), el nuevo ministro declaró su apoyo incondicional al neoliberalismo: "olviden todo lo que he escrito...", dijo en una reunión con banqueros e industriales importantes. Pocos años antes, Cardoso había sido nombrado el "intelectual del año" por su análisis crítico de las clases sociales en Brasil.

Para julio de 1993, el presidente Itamar Franco, habiendo confiado plenamente la conducción de las reformas económicas a su nuevo ministro, renunció virtualmente a ejercer su poder. Como antiguo senador de la oposición, el ministro de Finanzas comprendió que la aprobación de las reformas del FMI exigiría la manipulación

[17] Pedro Malan (negociador de la deuda designado por Collor de Mello) confirmó en marzo, desde su oficina de Washington, que 802 bancos, incluyendo al Chase Manhattan y al Lloyds Bank, habían aprobado la fórmula de reestructuración. Sin embargo, en la práctica, el veto del comité asesor a la concesión de empréstitos multilaterales a Brasil seguía estando vigente (véase Fernando Rodrigues, "Bancos aderem ao acordo da divida externa", *Folha de São Paulo*, 16 de marzo de 1993).

[18] Véase Claudia Sofatle, "Missão do FMI volta sem acordo", *Gazeta Mercantil*, 17 de marzo de 1993.

de la sociedad civil así como asegurarse el apoyo de la legislatura. Convenció a la opinión pública de que la desindexación de los salarios era la única manera de "combatir la inflación". En junio de 1993, Cardoso anunció recortes presupuestarios de 50% en educación, salud y desarrollo regional, señalando al mismo tiempo la necesidad de revisiones a la Constitución en las futuras sesiones del congreso. Según la propuesta salarial de Cardoso –que recibió la aprobación del congreso– los salarios podían reducirse (en términos reales) hasta en un 31%, representando un "ahorro" estimado de 11 mil millones de dólares para el bolsillo público (¡y para los acreedores!).[19]

ACTO V: REPROGRAMACIÓN DE LA DEUDA COMERCIAL [20]

La "saga de la deuda" llegó a su último acto en abril de 1994. En Nueva York, se firmó un acuerdo sobre la "reestructuración", bajo el Plan Brady, de 49 mil millones de dólares de deuda comercial. El trato fue cuidadosamente negociado por Cardoso y el vicepresidente de Citibank Corp, William Rhodes, que representaba a unos 750 bancos internacionales acreedores.

En contraste con las anteriores rondas de negociaciones, se establecieron fechas de vencimiento precisas para asegurar la aprobación de las principales partes de la legislación "prescrita", que incluía enmiendas a la Constitución de 1988. El FMI había sido encargado de la tarea burocrática de imponer y vigilar cuidadosamente el proceso legislativo en nombre de los bancos comerciales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del ministro de Finanzas Cardoso para manipular a la sociedad civil, asegurarse apoyo político y abrir paso a las diversas reformas mediante un parlamento "soberano", el tiempo se había ido agotando. No pudo cumplirse con la fecha lími-

[19] *Financial Times*, 20 de agosto de 1993. Los 11 mil millones de dólares son los "ahorros" del estado en relación con un ajuste salarial propuesto por el congreso, que preveía un 100% de ajuste del costo de la vida para los trabajadores asalariados. Esta propuesta, adoptada por el congreso en julio, fue vetada por el gobierno. La propuesta salarial de Cardoso pretendía constituir una solución intermedia. Véase también *Folha de São Paulo*, 30 de julio de 1993.

[20] La última parte de este capítulo fue escrita en colaboración con Micheline Ladouceur.

te del 16 de marzo para la firma de una “carta de intención” con el FMI. Un programa rígido, la llamada “notificación de fecha tope”, para un arreglo con el comité directivo de los bancos comerciales, se había fijado para el 17 de marzo.

Si bien el acuerdo del 15 de abril se alcanzó fuera de la práctica formalmente establecida (que requiere la aprobación previa de un préstamo otorgado en el marco de un acuerdo de derecho de giro del FMI como subsidio para el programa de reestructuración de la deuda), se consideró, sin embargo, que las reformas económicas estaban “en marcha”. El director general del FMI, Michel Camdessus, afirmó que estaba impresionado con los pasos que se habían dado y prometió cooperar estrechamente con el gobierno. Por su parte, Cardoso (que mientras tanto se había convertido en candidato a la presidencia) declaró que “la promesa del FMI de seguir cooperando” (una vez que los elementos clave del programa económico estuvieran establecidos) debería ser suficiente para que progresara la reestructuración de la deuda. A pesar de los “retrasos desafortunados” en el proceso parlamentario, la principal condición –una cuantiosa entrega de recursos financieros del estado a favor de los acreedores– había sido cumplida: la legislatura había aprobado las reformas fiscales del FMI, incluyendo la creación de un “fondo de emergencia social” (FES) (según el modelo del Banco Mundial). El voto en el congreso (exigiendo una enmienda constitucional) obligó al gobierno a recortar el presupuesto federal (incluyendo la inversión pública) en un 43% y reorientar al mismo tiempo los ingresos del estado hacia el servicio de la deuda.

Las medidas impuestas por los acreedores constituyeron un último y mortífero golpe a los programas sociales de Brasil, ya en un estado avanzado de descomposición como resultado de sucesivas “terapias de choque”. La transferencia de fondos al FES fue “financiada con los recortes presupuestarios” mediante la simultánea desaparición de programas regulares y el despido masivo de empleados del gobierno. Su inauguración representó un importante hito político: se renunció a la soberanía en las políticas sociales; de ahí en adelante los presupuestos y las estructuras organizativas serían supervisados directamente por las instituciones de Bretton Woods, en Washington, en nombre de los bancos acreedores internacionales. El desmantelamiento y destrucción de los programas sociales del estado y la desaparición de parte del plan de pensiones del gobierno (Previdencia Social) eran “precondiciones” para la firma del

acuerdo. Además, las reformas preveían también un recorte de los salarios reales al establecer un "tope salarial" en el sector público,[21] así como el "cambio" de todos los contratos salariales a una nueva unidad monetaria, el URV (o "real").[22] Esta última reforma, que requería una legislación especial, había sido elaborada con mucha anticipación (en reuniones de alto nivel, a puertas cerradas) en estrecha consulta con la burocracia de Washington: Winston Fritsch, secretario de estado de Brasil a cargo de la política económica, en un descuido había dicho a la prensa, en octubre de 1993, que "entregaría al FMI el esqueleto de un plan de desindexación".[23]

La "terapia económica" del FMI redefinió igualmente, de manera fundamental, la relación entre los gobiernos centrales y regionales defendida en la Constitución de 1988. A este respecto, el "modelo" de reforma fiscal propuesto era análogo al impuesto por los acreedores internacionales a la Federación Yugoslava en 1990 (véase el capítulo 17): las transferencias federales al estado y a los gobiernos municipales destinadas a salud, educación y vivienda debían congelarse, las regiones tendrían que pasar a ser "fiscalmente autónomas" y los ahorros del tesoro federal correspondientes debían ser reorientados hacia el pago de intereses.

Pero el FMI señaló también la necesidad de enmiendas constitucionales que permitieran una rápida privatización de Petrobras y Telebras, las paraestatales del petróleo y las telecomunicaciones.

Cardoso "lo había hecho mucho mejor" que sus predecesores en la cartera de Finanzas durante la presidencia de Collor de Mello. El "éxito" en la realización del programa del FMI sería recompensado. El ministro de Finanzas fue elegido presidente en las elecciones de 1994, gracias a una campaña de muchos millones de dólares en los medios masivos de comunicación, así como al compromiso no escrito con los principales intereses comerciales del país para no aumentar los precios durante su campaña electoral. La introducción de la nueva moneda, cuando Cardoso fuera ministro de Finanzas, había sido una ingeniosa manera de lograr la desindexación de los salarios. Pero mantener bajas las tasas de inflación en los meses anteriores a su elección como presidente fue decisivo para que los sectores más desfavorecidos de la población, que sobrevivían margina-

[21] El "tope salarial" se establece en el contexto de la Medida Provisional núm. 382 (véase *O Globo,* 8 de diciembre de 1993, pp. 2-11).

[22] Operando inicialmente como una unidad de contabilidad.

[23] Citado en *Folha de São Paulo,* 3 de marzo de 1994, pp. 1-10.

dos del mercado laboral, respaldaran la candidatura de Cardoso.[24]

La continuidad con el régimen democrático autoritario, establecido con Fernando Collor de Mello, había quedado garantizada. En palabras de un alto ejecutivo de uno de los mayores bancos acreedores de Brasil:

> Collor tenía una doble personalidad, estaba muy comprometido con la reforma económica, actuaba como un catalizador para implementar lo que el pueblo brasileño deseaba... Su segundo gabinete, con Marcilio Marques Moreira como ministro de Finanzas, fue el mejor. Actualmente [1993] Fernando Henrique Cardoso está haciendo lo correcto a un ritmo más lento... Para alcanzar las metas de déficit establecidas por el fmi, el congreso debe aceptar el recorte presupuestario de seis mil millones de dólares, otros seis mil millones de dólares tendrán que venir de la revisión constitucional, principalmente mediante el despido de empleados públicos... Lo que necesitaríamos en Brasil es un "gobierno Pinochet blando", preferiblemente civil, algo como Fujimori, el ejército no es una opción...

ACTO VI, EPÍLOGO: EL MANEJO DE LA POBREZA A UN COSTO MÍNIMO PARA LOS ACREEDORES

La política macroeconómica había acelerado la "expulsión" de campesinos sin tierras de las zonas rurales, provocando la formación de una fuerza laboral migratoria y nómada que se desplazaba de un área metropolitana a otra. En las ciudades se había desarrollado una "capa de pobreza urbana" enteramente nueva (socialmente distinta de la que caracterizó a las *favelas*): miles de trabajadores asalariados y empleados de oficina que hasta entonces habían ocupado áreas residenciales de clase media y baja habían sido desalojados, marginados socialmente y a menudo "excluidos" de los barrios bajos.

El FES, establecido por Fernando Henrique Cardoso en 1994, requería un enfoque de "ingeniería social", un marco político para "administrar la pobreza" y atenuar la inquietud de la sociedad a un costo mínimo para los acreedores. Se afirmaba que las llamadas "metas programadas" destinadas a "ayudar a los pobres", combina-

[24] Entrevista con el ministro de finanzas Fernando Henrique Cardoso, Brasilia, agosto de 1993.

das con la "recuperación de costos" y la "privatización" de los servicios de salud y educación, constituían una forma "más eficiente" de distribuir programas sociales. Simultáneamente, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) debía ser cada vez más autosuficiente en sus finanzas, y para esto debía elevar sustancialmente las primas de sus contribuciones tanto a los trabajadores urbanos como a los rurales.[25] El estado, al eliminar muchos programas que estaban bajo la jurisdicción de los ministerios, será manejado en lo sucesivo por organizaciones de la sociedad civil a la sombra del FES, que financiará también "una red de seguridad social" (en forma de indemnizaciones) destinada a los trabajadores del sector público despedidos como resultado del proceso de la reforma constitucional.

El establecimiento del FES se realizó "en nombre del combate a la pobreza". La campaña "ciudadanos contra el hambre", iniciada a raíz del enjuiciamiento de Collor, en el senado, en 1992, proporcionó al gobierno de Itamar Franco la necesaria solidez ideológica así como un portavoz populista. La campaña había perdido su *momentum* original como movimiento de base amplia dirigido contra las políticas del estado. Aunque oficialmente la campaña no era partidista, tanto el opositor Partido de los Trabajadores (PT) como el gobierno estaban comprometidos en ella. También se había hecho un trato entre el líder de la campaña, Herbert de Souza ("Betinho"), y Alcyr Calliari, presidente del Banco de Brasil. El Banco de Brasil (poderoso brazo financiero del estado central) estaba encargado de establecer comités de campaña locales por todo el país. Más de dos tercios de esos comités de base estaban controlados por empleados del Banco de Brasil.[26] Por su parte, el magnate de los negocios, Roberto Marinho, que controla la red de televisión Globo, ofreció proporcionar a la campaña comerciales gratuitos al estilo de Hollywood durante el tiempo televisivo de mayor audiencia.

La pobreza y el hambre se retrataban en los estilizados periódicos de la prensa brasileña; estando los fondos en manos de las élites financieras, no se hacía ninguna vinculación penetrante entre la "medicina económica" del FMI y la aparición de la carestía. A medida que la crisis económica se agravaba, la campaña de los "ciudadanos contra el hambre" cumplía con el "conveniente" propósito de

[25] De acuerdo con las cláusulas de la Medida provisional núm. 381 (véase *O Globo*, 8 de diciembre de 1993, pp. 2-11).

[26] Véase *Veja*, Río de Janeiro, diciembre de 1993.

distraer la atención de los temas políticos reales; buscaba un amplio consenso nacional, evitaba la controversia y se abstenía de acusar directamente al gobierno o a las élites privilegiadas de Brasil.

La campaña contra el hambre cumplió con otra función relacionada: los principales "indicadores de pobreza" establecidos por ésta se basaban en las "estimaciones" del "*think tank* económico" oficial del gobierno, el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), ahora encargado de apoyar con "investigación" sobre el hambre y la pobreza. Groseramente manipulados y falseados, los "cálculos" del IPEA sugerían que apenas un 21% de la población brasileña estaba situada por debajo de la línea de "pobreza crítica".[27] Datos ambiguos: 32 millones de personas en Brasil contra 35.7 millones en Estados Unidos (según la definición del gobierno de este país).

En otras palabras, la campaña presentaba a la pobreza como perteneciente a una "minoría social" y, por consiguiente, reivindicaba el esquema del Banco Mundial de "orientarse selectivamente en favor de los pobres". No sólo distorsionaba la realidad sino que tácitamente negaba lo obvio (confirmado ampliamente por las estadísticas oficiales), a saber, que la mayoría de los sectores de la sociedad, incluyendo las clases medias, estaban empobreciéndose como consecuencia de las reformas económicas adoptadas desde el inicio del gobierno de Collor de Mello.[28]

El FES sancionó oficialmente la retirada del estado de los sectores sociales (proceso que ya estaba en marcha) y concedió "la administración de la pobreza" (en el nivel microsocial) a estructuras organizativas separadas y paralelas. Desde el inicio del gobierno de Collor de Mello, varias organizaciones no gubernamentales (ONG), financiadas por "programas de ayuda" internacionales, se habían ido haciendo cargo gradualmente de muchas de las funciones de los gobiernos municipales cuyos fondos habían sido congelados a causa del programa de ajuste estructural.

La producción en pequeña escala y los proyectos artesanales, la subcontratación para empresas procesadoras para la exportación, los programas de entrenamiento y empleo de base comunitaria, etc., habían sido puestos a la sombra de la "red de seguridad social". Se garantizaba a las comunidades un nivel reducido de sobreviven-

[27] Véase Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, *O Mapa da fome II: Informações sobre a "Indigencia por municipios" da Federação*, Brasilia, 1993.

[28] El 80% de la fuerza laboral tenía ingresos por debajo de 300 dólares mensuales en 1991, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

cia, al tiempo que se contenía el riesgo de levantamientos sociales. Un ejemplo de "administración de la pobreza a nivel micro" es el de Pirambu, una área extensa de barrios bajos con 250 mil habitantes en la ciudad nororiental de Fortaleza. Pirambu fue "remodelada", cada porción de espacio urbano estaba bajo la supervisión de una ONG diferente. En el barrio Couto Fernandes, de Pirambu, la Agencia de Ayuda Alemana GTZ respaldó el establecimiento de un modelo de "administración comunitaria".[29]

Esta "microdemocracia" instalada bajo el ojo vigilante de la "comunidad de donadores" cumplía también con el propósito de reprimir el desarrollo de movimientos sociales independientes. Los fondos alemanes financiaban los salarios de los expertos expatriados mientras que los fondos de inversión destinados a manufacturas en pequeña escala debían ser "autofinanciados" por medio de un "fondo revolvente" administrado por la comunidad local.

La "administración de la pobreza" en áreas rurales servía a los mismos grandes objetivos: someter al movimiento campesino en beneficio de la poderosa clase terrateniente brasileña, asegurando al mismo tiempo una mísera supervivencia a millones de campesinos sin tierras desarraigados y desplazados por la agroindustria en gran escala. En el estado nororiental de Sertão, por ejemplo, región afectada por sequías recurrentes, un programa mínimo de obras (*frentes de trabalho*) proporcionó empleo a cerca de 1.2 millones de trabajadores agrícolas sin tierras, a 14 dólares mensuales (1993).[30] Sin embargo, estos últimos solían ser contratados por los grandes terratenientes a expensas del gobierno federal. Financiada por la Ley Pública 480 (del programa de ayuda alimentaria de Washington [PL 480]), la distribución de excedentes de granos de Estados Unidos entre agricultores empobrecidos (a través de agencias del gobierno y de ayuda) cumplía también con el propósito relacionado de debilitar la agricultura alimentaria local y desarraigar a los pequeños campesinos. Los programas de distribución de alimentos se adoptaron en nombre de la campaña de "ciudadanos contra el hambre".

La expropiación de tierras campesinas formaba parte integrante del programa de ajuste estructural del FMI-Banco Mundial. En este contexto, el Instituto Nacional para la Colonización y la Reforma

[29] Entrevistas realizadas en Pirambu, Fortaleza, julio de 1993.

[30] Entrevistas con trabajadores agrícolas rurales en la región de Monsenhor Tabosa, Ceará, julio de 1993.

Agraria (INCRA), entre otras muchas agencias gubernamentales, estaba a cargo de la "red de seguridad rural" con programas simbólicos de distribución de tierras y desarrollo de cooperativas para los *posseiros* (agricultores sin tierras). Estos proyectos se establecían invariablemente en tierras marginales o semiáridas que no chocan con los intereses de la clase terrateniente. En los estados de Pará, Amazonas y Maranhão, numerosos donadores internacionales, incluyendo el Banco Mundial y la Agencia de Ayuda Japonesa (JICA), contribuyeron a financiar (por medio del INCRA) las llamadas "áreas de colonización".[31] Estas últimas servían principalmente como "reservas de mano de obra" para las plantaciones en gran escala. También vale la pena mencionar que las enmiendas constitucionales propuestas implicaron la derogación *de facto* de los derechos consuetudinarios de las tierras de los indígenas, un proceso que ya estaba en marcha con la transformación (también bajo la jurisdicción del INCRA) de las "reservas indígenas" del Amazonas en zonas de asentamiento para los trabajadores de las plantaciones.[32]

CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO PARALELO

Las reformas patrocinadas por el FMI contribuyeron a la polarización social y empobrecimiento de todos los sectores de la población, incluyendo a las clases medias. Además, a medida que se derrumba la estructura fiscal federal, existe el riesgo añadido de una balcanización regional: inestabilidad en el ejército, violación rutinaria de los derechos humanos fundamentales, violencia urbana y rural y un movimiento secesionista cada vez más sonado en el sur.

Desde la presidencia de Fernando Collor de Mello se ha ido desarrollando un "gobierno paralelo" *de facto* que se reporta regularmente con Washington. Con Fernando Henrique Cardoso en la presidencia (1994-1999), los acreedores tienen el control de la burocracia estatal y de sus políticos. El estado está en bancarrota y sus fondos están siendo embargados bajo el programa de privatización.

[31] Celia Maria Correa Linhares y Maristela de Paula Andrade, "A ação oficial e os conflitos agrarios no Maranhão", *Desenvolvimento e Cidadania*, 4, São Luis de Maranhão, 1992.

[32] Véase *Panewa,* Porto Velho, VI: 18, noviembre-diciembre de 1993, y VII: 19, enero de 1994.

14

TRATAMIENTO DE CHOQUE DEL FMI EN PERÚ

El 8 de agosto de 1990 un "Fujishock", nombrado así por el presidente Alberto Fujimori, fue anunciado en un mensaje a la nación por el primer ministro Juan Hurtado Miller: "Nuestros principales objetivos son recortar el déficit fiscal y eliminar las distorsiones de los precios"... De un día para otro, el precio de los combustibles aumentó 31 veces (2 968%) y el precio del pan aumentó más de doce veces (1 150%). En un auténtico "espíritu de liberalismo anglosajón", estos precios se "fijaron" mediante un decreto presidencial más que por el mercado "libre" (una forma de "liberalismo planificado"). El objeto del Fujishock era aplastar la hiperinflación: sin embargo, esto se consiguió mediante un aumento del 446% en los precios de los alimentos ¡en un solo mes! La inflación durante el primer año del gobierno del Cambio 90 había "caído" a un modesto 2 172 por ciento.

Muchos países de Latinoamérica han experimentado el "tratamiento de choque", pero el alcance de la "ingeniería económica" en Perú no tiene precedentes. Las consecuencias sociales fueron devastadoras: mientras que un trabajador agrícola en las provincias del norte de Perú recibía (en agosto de 1990) 7.50 dólares al mes (el equivalente del precio de una hamburguesa y un refresco embotellado), en Lima los precios al consumidor eran más elevados que en Nueva York.[1] Las ganancias reales descendieron un 60% en el curso de agosto de 1990; para mediados de 1991 el nivel de las ganancias reales era de menos del 15% de su valor en 1974 (un descenso de más del 85%). Las ganancias promedio de los empleados del gobierno habían disminuido un 63% durante el primer año del gobierno de Fujimori y un 92% en relación con 1980 (véase el cuadro 14.3).[2] En la lista negra del FMI desde mediados de los ochenta, Pe-

[1] *Cuánto*, Lima, septiembre de 1990.

[2] Estos cálculos se basan en estadísticas oficiales, véase *Perú en Números, 1991. Anuario estadístico*, cap. 21, *Cuánto*, Lima, 1991, y *Cuánto Suplemento*, 13, julio de 1991.

CUADRO 14.1. EL IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE CHOQUE EN LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN AGOSTO DE 1990
(zona metropolitana de Lima, agosto de 1990)

Aumento del porcentaje	INEI	*Cuánto*
Alimentos y bebidas	446.2	288.2
Transportes y comunicaciones	571.4	1428.0
Salud y servicios médicos	702.7	648.3
Renta, combustibles y electricidad	421.8	1035.0
Índice de precios al consumidor	397.0	411.9

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INEI), *Anuario estadístico, 1991*; *Cuánto, Perú en números*, cap. 21, Lima, 1991.

rú había sido "premiado" por la postura retórica del presidente Alan García (1985-1990) de limitar los pagos del servicio de la deuda a un 10% de las ganancias por exportaciones.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El primer programa de estabilización macroeconómica de Perú se inició a mediados de los setenta, a raíz del golpe de estado de 1975 contra el gobierno militar y populista del general Velasco Alvarado. Las reformas económicas fueron llevadas a cabo por la junta militar al mando del general Morales Bermúdez, el sucesor de Velasco, como condición para la renegociación de la deuda externa de Perú con los bancos comerciales y los acreedores oficiales. Estas reformas se negociaron directamente con los bancos acreedores, sin la participación del FMI. En 1978, un segundo "paquete económico" se puso en marcha, en esta ocasión en el contexto de un convenio formal con el FMI.

Estas primeras reformas económicas, adoptadas antes del lanzamiento formal del programa de ajuste estructural a principios de los ochenta, habían sido diseñadas siguiendo aquellas aplicadas en Chile (por el general Pinochet y los Chicago Boys, en 1973). Las cláusulas condicionantes, en general, eran menos rigurosas y más coherentes, en comparación con los acuerdos de "préstamo basado en políticas", de los programas de ajuste estructural iniciados a principios de los ochenta.

CUADRO 14.2. EL IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE CHOQUE A LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DE AGOSTO DE 1990
(zona metropolitana de Lima, agosto de 1990 - Intis)

Producto	*Antes del 3 de agosto*	*Después del 9 de agosto*	*Aumento en el porcentaje*
Queroseno (gal.)	19	608	3100
Gasolina (84 oct.) (gal.)	22	675	2968
Gas propano (924 lb)	41	1120	2632
Pan (36 g/unidad)	2	25	1150
Frijoles (kg)	240	2800	1067
Papas blancas (kg)	40	300	650
Harina (kg)	220	1500	531
Leche (l)	60	290	383
Espagueti (kg)	180	775	331
Aceite vegetal (l)	220	850	236
Arroz (grado A) (kg)	94	310	230
Leche en polvo (410 g)	100	330	230
Huevos (kg)	170	540	218
Pollo (kg)	213	600	182

FUENTE: *Cuánto*, 2: 19, agosto de 1990, p. 5.

No obstante, las reformas macroeconómicas de la última mitad de los setenta fueron decisivas para iniciar en Perú un proceso histórico de empobrecimiento: sucesivas devaluaciones de la moneda desencadenaron una espiral inflacionaria, el poder de compra real en el sector urbano moderno descendió aproximadamente un 35% entre 1974 y 1978 (cuadro 14.3). Esta reducción de los salarios reales (y de los costos de la mano de obra) no sirvió, sin embargo, para aumentar el potencial exportador de Perú, como pretendían las instituciones de Bretton Woods.

Con el mandato del presidente Fernando Belaúnde Terry en 1980, la política macroeconómica se hizo más cohesiva. Las medidas apoyadas con firmeza por el FMI contribuyeron a debilitar al estado y al sistema de empresas estatales establecido durante el gobierno del general Velasco Alvarado. Se otorgaron generosos contratos de exploración y explotación al capital extranjero (por ejem-

CUADRO 14.3. ÍNDICE DE SALARIOS REALES (1974-1991)
*(1974 = 100)**

Año	*Ingreso mínimo legal*	*Oficinistas del sector privado*	*Obreros del sector privado*	*Sector del gobierno*[2]
1974	100.0	100.0	100.0	
1975	93.1	100.6	88.3	
1976	85.6	83.3	95.1	
1977	75.3	72.4	79.2	
1978	58.4	62.2	71.3	
1979	63.6	56.9	70.9	
1980	79.9	61.1	75.0	
1981	67.9	62.1	73.5	100.0
1982	62.2	67.0	74.4	91.7
1983	64.6	57.4	61.6	66.3
1984	49.7	59.6	52.5	58.2
1985	43.5	48.8	45.4	46.4
1986	45.1	61.0	60.8	48.4
1987	49.0	63.9	65.5	59.2
1988	41.5	44.2	41.3	53.5
1989	25.1	36.3	37.6	35.3
1990	21.4	18.7	20.1	18.8
Julio	20.9	13.8	16.2	21.1
Agosto		7.5	8.3	8.9
Septiembre	19.4	11.1	12.9	8.6
Diciembre[1]	13.8	14.6	16.3	6.1
1991				
Abril	15.3	15.7	19.4	8.6
Mayo	14.1			7.6

FUENTE: Cálculos según datos del INEI, *Anuario estadístico, 1991*; *Cuánto, Perú en números, 1991*, cap. 2; *Cuánto suplemento*, 13 de julio de 1991.

* El año base para el índice de los salarios del sector gobierno es 1981.

[1] Incluye gratificación.

[2] Incluye ingresos en los gobiernos central y regionales e instituciones públicas descentralizadas.

NOTA: Las categorías del sector privado incluyen los salarios tanto de oficinistas como de obreros en la zona metropolitana de Lima. Desde 1983, el ingreso mínimo legal era igual a la unidad de referencia; de junio de 1984 a agosto de 1990 fue equivalente a la unidad de referencia más bonos adicionales. Desde agosto de 1990 el gobierno abolió el ingreso mínimo legal y lo sustituyó por la llamada "remuneración mínima vital"

plo, en el petróleo a Occidental). La reducción de los impuestos aduanales contribuyó también a socavar los sectores claves de la economía nacional. La participación del estado en el sector bancario fue recortada y se impulsó el flujo de capital extranjero hacia la banca comercial, así como el establecimiento de subsidiarias de cierto número de bancos internacionales, incluyendo el Chase, Commerzbank, Manufacturer's Hannover y el Banco de Tokio.[3]

Este programa, apoyado por el FMI, fue implementado por el gobierno de Belaúnde al inicio mismo de la crisis de la deuda: una bonanza de bienes de consumo importados resultante de la liberalización del comercio coincidió (cronológicamente) con la caída de los ingresos de las exportaciones y la declinación de los términos del comercio (1981-1982). La combinación de estos dos factores contribuyó a exacerbar la crisis de la balanza de pagos, dando como resultado una reducción del PIB del orden del 12% en 1982 y una tasa de inflación de más del 100% en 1983.

Entre 1980 y 1983, los niveles de desnutrición infantil aumentaron drásticamente. En 1985, el consumo de alimentos estimado había caído en un 25% en relación con su nivel de 1975. En el periodo de cinco años de la presidencia de Belaúnde (1980-1985), los ingresos reales del salario mínimo ("remuneración mínima vital") disminuyeron en más del 45%. Todas las categorías de la fuerza laboral se vieron afectadas: la disminución promedio de los ingresos reales para los trabajadores tanto de cuello blanco como de cuello azul fueron, respectivamente, de 39.5 y 20.5% (véase el cuadro 14.3).

En el periodo de diez años desde el final del gobierno de Velasco (1975) hasta el final de la presidencia de Belaúnde (1985), el salario mínimo descendió (según datos oficiales) en un 58.2%, el salario medio en 55.0% (obreros) y los sueldos promedio de los oficinistas de ingresos medios, en un 51.7 por ciento.

LA POLÍTICA ECONÓMICA NO ORTODOXA DE LA APRA (1985-1987)

El gobierno de Acción Popular del presidente Fernando Belaúnde Terry se había desacreditado. En la campaña electoral de 1985, la

[3] Carlos Malpica, *El poder económico en el Perú*, vol. I, Lima, Mosca Azul Editores, 1989.

opositora Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) (un partido populista fundado en los años veinte) había presentado un "programa económico alternativo". En abierta confrontación con las instituciones de Bretton Woods, el recién elegido gobierno de APRA, del presidente Alan García, presentó el llamado "plan económico de emergencia" en julio de 1985. Este programa iba directamente contra las prescripciones económicas usuales del FMI.

Al inicio de la presidencia de Alan García, la tasa anual de inflación llegó al 225%. El programa gubernamental consistía en reactivar la demanda de los consumidores. Se puso en práctica una congelación de precios en los productos básicos de consumo y los servicios públicos. Las tasas de interés fueron forzadas a descender y la tasa de cambio fue "estabilizada". La economía había permanecido estancada durante el gobierno de Belaúnde y operaba con considerable exceso de capacidad. Por consiguiente, al gobierno de APRA le fue posible reactivar la actividad económica "del lado de la demanda" sin crear presiones inflacionarias indeseables sobre los costos de producción.[4]

Durante su campaña electoral, el presidente Alan García se había comprometido a pagar precios más elevados a los agricultores con el fin de reactivar la producción y animar la redistribución del ingreso a favor de las zonas rurales. Durante el primer año de operación del paquete económico, según el Banco Mundial, hubo un incremento del 75% en términos rurales y urbanos del comercio y un notable crecimiento a corto plazo de la producción agrícola.[5]

En la economía urbana, las autoridades decretaron aumentos salariales y salarios algo superiores a la inflación. Se puso en marcha un programa de empleo temporal, se adoptó una política fiscal expansionista y el crédito se caracterizó por tasas de interés reales negativas. Varios incentivos fiscales y subsidios se diseñaron para apoyar esta reactivación de la demanda agregada. Estas exenciones, sin embargo, beneficiaban principalmente a las élites económicas y fi-

[4] El aumento del producto agrícola se logró ampliando la demanda agregada y el consumo básico ("consumo popular"), más que mediante el reajuste de la tasa de cambio preferencial aplicada a las importaciones de alimentos básicos y la eliminación de los subsidios (que principalmente apoyaban a los monopolios agroindustriales). Éstos indicaban que el desarrollo de la agricultura requería el mantenimiento de la demanda del consumo urbano.

[5] Véase Banco Mundial, *Peru, policies to stop hyperinflation and initiate economic recovery*, Washington, 1989, p. 10.

nancieras nacionales. La base contributiva del estado así como la posición de su reserva de divisas internacionales se debilitaron consecuentemente.

LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA DE LA APRA

En cuanto asumió la presidencia, el presidente García declaró una moratoria del pago de las obligaciones del servicio de la deuda. Esta última no debía exceder del 10% de las ganancias por exportaciones. Inmediatamente, la comunidad financiera internacional puso a Perú en la lista negra. El flujo de dinero fresco fue congelado; los bancos comerciales internacionales cortaron su apoyo al país en 1985. Para 1986 no se había concedido ningún préstamo comercial a Perú. Las agencias oficiales y los gobiernos de la OCDE también recortaron considerablemente sus desembolsos hacia Perú.[6]

A pesar de la moratoria, la deuda externa peruana aumentó dramáticamente –un promedio de 9% por año durante el gobierno de APRA.[7] En términos de flujos netos de capital, la retórica posición del presidente García sobre el servicio de la deuda no cumplió con sus propósitos: los pagos del servicio de la deuda reales eran en promedio del orden del 20% de las ganancias por exportaciones durante el periodo 1985-1989. Con la congelación de los nuevos préstamos, para no mencionar las fugas de capitales a cuentas bancarias del extranjero, el periodo 1985-1989 estuvo marcado por una salida masiva de recursos reales.[8]

EL PROGRAMA ECONÓMICO ENTRA EN UN PUNTO MUERTO

Durante los primeros 18 meses del gobierno de APRA hubo un crecimiento significativo del PIB. La inflación disminuyó, principal-

[6] Véase Drago Kisic y Verónica Ruiz de Castilla, “La economía peruana en el contexto internacional”, *CEPEI*, 2: 1, enero de 1989, pp. 58-59.

[7] *Perú Económico*, agosto de 1990, p. 26.

[8] Otro factor importante fue la decisión del gobierno aprista de revocar la convertibilidad de los certificados de depósito en divisas. Esta medida fue adoptada sin considerar la naturaleza del mercado de divisas y su relación con la narcoeconomía.

mente como resultado del sistema de "congelación de precios"; se redujo el proceso de dolarización de la economía nacional y los niveles de consumo aumentaron notablemente.

Pero el programa no pudo sostenerse más allá del corto plazo. Si bien el crecimiento económico había sido respaldado por una política fiscal expansionista, la base impositiva seguía siendo extremadamente frágil. Los impuestos indirectos habían sido reducidos, hubo una gran evasión fiscal y los diversos subsidios y exenciones a las grandes corporaciones se "sostenían" por medio de la financiación del déficit y una expansión del suministro de dinero. El sistema era proclive a la corrupción y la especulación. La estructura de tasas de cambio múltiples ("mercado único de cambios"), destinada teóricamente a ser un instrumento de redistribución del ingreso, benefició en última instancia al sector más rico de la sociedad peruana.[9]

En 1988, la reserva de divisas se desplomó a menos de 252 millones de dólares.[10] Mientras que los niveles del poder de compra se habían incrementado, una gran porción de las ganancias en divisas del país habían sido apropiadas por las élites económicas en forma de subsidios y exenciones de impuestos. El estado había puesto en práctica una política "contracíclica" keynesiana estándar en apoyo de la demanda agregada, sin abordar cuestiones estructurales más fundamentales. Si bien estas medidas exhibían algún nivel mínimo de coherencia técnica, en condiciones de extremo estancamiento y subutilización de la capacidad industrial eran incapaces de apoyar la recuperación económica más allá del corto plazo.

En la práctica, el gobierno de la APRA había mantenido intereses económicos encubiertos manipulando sus diversos instrumentos de políticas reguladoras. El modelo económico fue definido en términos técnicos estrechos apoyados por un discurso populista: la APRA no poseía la base social necesaria ni la voluntad política, por no hablar del apoyo de las masas para poner en práctica reformas económicas y sociales sustanciales y sustentables en áreas como reforma

[9] Los abusos relativos al "dólar MUC" (subsidiado) han sido documentados ampliamente: las solicitudes de asignaciones de dólares MUC para el propósito de importar mercancías estaban controladas por el banco central, las importaciones no se realizaron (o se falsificaron los recibos indicando una transacción por un volumen mayor, el dinero se convertía después en divisas *bona fide* o en moneda nacional con ganancias considerables). Véase, por ejemplo "Quién voló con los MUC", *Oiga*, 468, Lima, 5 de febrero de 1990, pp. 18-19.

[10] Véase Kisic y Ruiz, *op. cit.*, p. 60.

impositiva, regionalización, reactivación de la agricultura y apoyo a unidades productivas en pequeña escala de la economía informal.

Más allá de su discurso populista, el gobierno de la APRA no estaba dispuesto a adoptar acciones que afectasen directamente a los intereses encubiertos de las élites económicas. En 1987, la propuesta de nacionalización del sector bancario (que ni siquiera concordaba con un mandato políticamente definido), anunciada de manera retórica con la vista puesta en la "confianza en la democratización", fue burlada fácilmente por los bancos comerciales y las instituciones financieras en una batalla legal prolongada que condujo, en última instancia, al abandono del proyecto de nacionalización. El intento marcó el final de la "luna de miel populista" de la APRA con las élites financieras. Creó divisiones dentro de ella, desacreditó al gobierno y generó un aura de incertidumbre económica y desconfianza por parte del sector mercantil que, según algunos observadores, desencadenó el proceso hiperinflacionario de 1988-1990. Las élites económicas habían "declarado la guerra al gobierno".

De forma similar, al atacar el asunto de los derechos de propiedad, en 1990 el gobierno de la APRA demagógicamente presentó la cuestión en el nivel de "registro" formal de los derechos de propiedad ("registro predial") que, por ejemplo, permitirían que las unidades de la economía rural ("parceleros") y la economía informal tuvieran acceso a la propiedad formal. El problema de la concentración de la propiedad de los bienes raíces y del enriquecimiento de las clases privilegiadas fue cuidadosamente evitada.

EL "TRATAMIENTO DE CHOQUE" DE FACTO (1988-1990)

El crecimiento del poder adquisitivo conseguido entre 1985 y 1986 tuvo corta vida. La actividad económica empezó a perder velocidad hacia principios de 1987. La expansión fue sustituida por la contracción: el movimiento de los ingresos reales fue revertido en cuestión de meses. Entre diciembre de 1987 y octubre de 1988, los ingresos reales se desplomaron de un 50 a un 60%, los sueldos de los emplea-

[11] Véase Fernando Rospigliosi, "Izquierdas y clases populares: democracia y subversión en el Perú", en Julio Cotler (ed.), *Clases populares, crisis y democracia en América Latina*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1989, p. 127.

dos públicos disminuyeron en dos tercios.[11] Para mediados de 1988, los salarios reales estaban un 20% por debajo de su nivel de 1985.

En julio de 1988 el gobierno inició un nuevo plan de emergencia y en septiembre se introdujo un programa antiinflacionario más “ortodoxo”. El paquete de septiembre de 1988 contenía la mayor parte de los ingredientes importantes del programa estándar del FMI sin la ideología neoliberal y el apoyo de los acreedores internacionales.

En muchos aspectos, el paquete de septiembre de 1988 marcó el ritmo con que las medidas económicas de choque habrían de ser adoptadas por el gobierno de Fujimori en agosto de 1990. El paquete económico incluía todos los elementos esenciales: devaluación y unificación de la tasa de cambio, promulgación de los aumentos de precios de los servicios públicos y la gasolina, recortes sustanciales en los gastos del gobierno y la introducción de la recuperación de costos para la mayoría de las empresas públicas. El paquete implicaba también la desindexación de sueldos y salarios.

FRACASO DEL PAQUETE ECONÓMICO NO ORTODOXO DE LA APRA

El fracaso del paquete económico no ortodoxo, con el presidente Alan García, no justificaba el esquema neoliberal. El programa económico fue políticamente ambivalente desde su nacimiento. La APRA no adoptó una postura clara con respecto a la regulación de los márgenes de ganancia y la fijación de precios por parte de intereses comerciales y agroindustriales poderosos. Se adoptaron mecánicamente instrumentos keynesianos sin atacar las cuestiones estructurales fundamentales. Para tener éxito, el programa requería una afluencia positiva de divisas. Sucedió exactamente lo contrario: la salida neta de recursos siguió inamovible. Los acreedores internacionales mantuvieron su control sobre la balanza de pagos de Perú.

LA RESTAURACIÓN DEL DOMINIO DEL FMI

Durante la campaña electoral de 1990, Alberto Fujimori confrontó a su oponente, el escritor Mario Vargas Llosa de la Coalición Fren-

te Democrático (Fredemo). Vargas Llosa había propuesto un "tratamiento económico de choque" como solución a la crisis económica de Perú. El partido de Fujimori, Cambio 90, había rechazado la receta neoliberal prometiendo un programa económico que conduciría a una "estabilización sin recesión", combinando una solución a la hiperinflación y protegiendo al mismo tiempo el poder de compra de los trabajadores.[12]

Una política económica expansionista había sido contemplada por Fujimori en los meses precedentes al inicio de su mandato como presidente, el 28 de julio de 1990. Este programa, sin embargo, estaba circunscrito en términos técnicos estrictos (debatidos dentro de un círculo cerrado de economistas profesionales y académicos) sin prestar atención al proceso político requerido para llevarlo a cabo; había sido definido como una "solución" técnica para la crisis económica, aisladamente de un debate político más amplio y sin la participación de organizaciones representativas de la sociedad civil en su formulación.

En el avión en que volaba a Washington para reunirse con Michel Camdessus, director general del FMI, se dice que el presidente electo declaró pensativamente a su principal asesor económico: "si el choque económico llegase a funcionar, seguramente el pueblo peruano me perdonaría...". Fuertes presiones políticas internas y externas se ejercían sobre el presidente electo para que abandonara el "programa alternativo" en favor de un paquete ortodoxo patrocinado por el FMI. A su regreso de Washington y Tokio, de sus reuniones con los acreedores internacionales de Perú, el presidente electo se había convertido en un inflexible defensor de la "medicina económica fuerte". Pero este giro en la dirección política solamente se supo dentro de su entorno político inmediato: nada fue revelado al pueblo peruano que había votado contra el "tratamiento de choque económico" del Fredemo.

Surgieron divisiones en el interior del equipo de asesores económicos y el presidente electo desarrolló vínculos estrechos con otro grupo de economistas firmemente comprometido con el "Consenso de Washington" y el paquete del FMI. Sus principales asesores económicos dimitieron poco después de su ascenso a la presidencia, y un nuevo paquete de estabilización económica –no demasiado di-

[12] Véase "Plan de gobierno de Cambio 90: Una propuesta para el Perú", *Página Libre*, 21 de mayo de 1990, pp. 17-24.

ferente del propuesto por Mario Vargas Llosa durante su campaña electoral– fue elaborado a la carrera con el apoyo técnico del FMI y el Banco Mundial.

EL FMI-FUJISHOCK DE AGOSTO DE 1990

El tratamiento de choque de agosto de 1990 no sólo se ajustó a las prescripciones del FMI sino que fue mucho más allá de lo que se esperaba normalmente de un país endeudado como condición para la renegociación de su deuda externa. A pesar de los altos niveles de pobreza crítica prevalecientes en los últimos meses del gobierno de la APRA, se consideró necesario un "ajuste" posterior de los ingresos reales para "aliviar las presiones inflacionarias". Se decía que la causa de la hiperinflación de Perú eran los "factores de demanda", y que esto requería de un recorte aún mayor de salarios y gastos sociales, junto con despidos masivos de trabajadores del sector público.

La propagación de la epidemia de cólera en 1991 –en gran medida atribuible a la pobreza y al desmantelamiento de la infraestructura de salud pública del país desde el gobierno de Belaúnde–, fue también resultado del programa patrocinado por el FMI. Con un aumento de treinta veces en el precio del aceite para combustible, los habitantes de los "pueblos jóvenes" de Lima, incluyendo a las "clases medias", ya no podían abastecerse para hervir su agua o cocinar sus alimentos.

La publicidad internacional en torno al estallido de la epidemia de cólera (aproximadamente 200 mil casos declarados y dos mil muertes registradas en un periodo de seis meses) eclipsó, en la prensa internacional, un proceso más general de destrucción social: desde el Fujishock de agosto de 1990, la tuberculosis había alcanzado también proporciones epidémicas, incrementadas por la desnutrición y la descontinuación del programa de vacunación del gobierno. El desmantelamiento de la infraestructura de salud pública en la región de la Selva había conducido a un resurgimiento de la malaria, el dengue y la leishmaniosis.[13] Las escuelas públicas, las uni-

[13] Basado en entrevistas del autor con trabajadores de la salud, realizadas en Perú, en julio de 1991.

versidades y los hospitales habían sido cerrados a raíz de una huelga indefinida de maestros y trabajadores de la salud (sus salarios eran en promedio de 45 a 70 dólares mensuales [julio de 1991], 40 veces más bajos que en Estados Unidos).

Más del 83% de la población, incluyendo a las clases medias (estimado de mediados de 1991), no satisfacían los requerimientos mínimos de calorías y proteínas. La tasa registrada de desnutrición infantil en el nivel nacional era del orden de 38.5% (el segundo más alto en América Latina). En la Sierra, un niño de cada cuatro moría antes de los cinco años. En Lima, un niño de cada seis moría antes de los cinco años. La tasa de fertilidad total registrada era del orden de 4.8 (cuatro nacimientos vivos por madre), lo que sugiere que en la Sierra había, en promedio, una incidencia de por lo menos una muerte infantil por cada unidad familiar (véase el cuadro 14.4). Con todo, Fujimori había sido encomiado por la comunidad financiera internacional por su exitosa política económica.

LA TUTELA DEL FMI-BANCO MUNDIAL

"Pon en marcha un programa económico serio y te ayudaremos." La puesta en marcha de lo que el FMI llama "un programa económico serio" (en palabras del señor Martin Hardy, jefe de la misión del FMI que visitó Perú en 1991) suele ser una condición previa para el otorgamiento de financiamientos-puente por parte de un "grupo de apoyo internacional". No se agregaron "promesas" de las instituciones financieras internacionales a la realización del paquete económico de agosto de 1990. Este último fue un "programa sombra del FMI" (véase el capítulo 2), sin ningún préstamo monetario vinculado. Aunque no hubo presiones indebidas por parte del FMI, se dejó claro que Perú seguiría estando en la "lista negra", en tanto no cumpliera sus prescripciones económicas.

El paquete económico, sin embargo, fue llevado a cabo por el gobierno de Fujimori antes de la firma de un acuerdo crediticio y "antes" de alcanzar un acuerdo sobre la renegociación de la deuda externa de Perú. Una vez adoptado el primer juego de medidas, lo que quedaba por negociar era poco. Además, inmediatamente después de la fase de "estabilización económica" de agosto de 1990, las autoridades peruanas iniciaron cierto número de reformas estructura-

CUADRO 14.4. DESNUTRICIÓN, SUBALIMENTACIÓN Y MORTALIDAD INFANTIL

1] Subalimentación (ingesta insuficiente de calorías y proteínas según estándares de la OMS/FAO)
A nivel nacional (1991) más del 83% de la población[1]

2] Desnutrición infantil (1985-1986)
En el nivel nacional 38.5%
En zonas rurales 57.6%
En zonas urbanas 24.2%

3] Mortalidad infantil, menos de un año (1985-1986)[2]
Lima 61.4%
Sierra[3] 130-134%

4] Mortalidad infantil, menos de cinco años (1985-1986)[2]
Lima 16.5%
Sierra[3] 26.5%

5] Esperanza de vida al nacimiento (años) (1985-1986)
Lima 67.7
Sierra[3] 47.6-49.0

FUENTE: Ministerio de Salud y ENNIV.
[1] Cálculos del autor basados en datos de gastos domésticos.
[2] Cálculos según tasas de mortalidad por grupos de edad específicos (Ministerio de Salud).
[3] Basados en tasas registradas en Huancavelica y Cuzco.

les de primer orden ("fase dos") de conformidad con las prescripciones del FMI-Banco Mundial.

El gobierno Fujimori había esperado que el "choque económico" de agosto de 1990 abriría inmediatamente el camino para la formación de un grupo de apoyo internacional y la concesión de un "paquete de rescate". Sin embargo, por parte de los acreedores, había un rechazo a formar un grupo de apoyo. Perú estaba pagando fielmente todas sus obligaciones normales del servicio de la deuda y la política macroeconómica estaba conforme el menú del FMI.[14] Desde el punto de vista de los acreedores internacionales, sin embargo, no había necesidad de conceder "favores" a Perú (como en los casos de Egipto o Polonia).

[14] Para más detalles véase "Perú, situación económica", *Situación Latinoamericana*, 1: 2, abril de 1991, pp. 122-128.

Por supuesto, para el gobierno era difícil adoptar una posición independiente; esto es, "negociar con el FMI" cuando los funcionarios del FMI y el Banco Mundial ocupaban puestos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos asesores del gobierno aparecían directamente en las nóminas "de los préstamos" del FMI y el Banco Mundial a Perú.[15] Uno de los más importantes asesores del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña, formaba parte del personal de nómina del FMI.

CONCESIÓN DE DINERO FICTICIO

Al inicio, el objetivo principal del gobierno, al aceptar incondicionalmente rembolsar los pagos atrasados de la deuda de Perú a las IFI, era que lo borraran de la lista negra del FMI. Este objetivo debía alcanzarse con la negociación de "nuevos préstamos" de las IFI destinados "para pagar viejas deudas" (para más detalles, véase el capítulo 2).[16] Ni un solo dólar de este dinero llegaría a entrar realmente a Perú. Estos nuevos préstamos eran dinero que las IFI estaban "dándose a ellas mismas", legitimando incondicionalmente la deuda externa (sin ponerlo por escrito) y obligando a Perú a comenzar de inmediato el servicio de sus intereses atrasados. Los préstamos de las IFI otorgados en 1991 debían ser pagados durante un periodo de entre tres y cinco años. Como resultado directo de estos nuevos préstamos, las obligaciones del servicio de la deuda más que se duplicaron en 1991 (de 60 millones de dólares al mes a más de 150 millones).

EL PAPEL DEL EJÉRCITO

Perú respetó estrictamente el modelo de "democratización" dictado por Washington. Antes de tomar posesión en julio de 1990, Fujimo-

[15] Sus ingresos de 500-700 dólares diarios por consultas (incluyendo una "asignación diaria de subsistencia" de unos 130 dólares) era sólo ligeramente inferior al ingreso per cápita anual en Perú.

[16] Los préstamos del FMI se concederían bajo una cláusula de "acumulación de derechos". Los pagos atrasados de la deuda se estimaban (1991) en aproximadamente 14 mil millones de dólares, de los cuales 2.3 mil millones eran de las IFI.

ri se acuarteló en el recinto de las fuerzas armadas en Lima para mantener discusiones diarias con el alto mando del ejército. Se firmó un " trato" entre el presidente electo y los militares y se llevó a cabo una reorganización profunda de las fuerzas armadas. Se necesitaba este apoyo incondicional de las fuerzas armadas para reprimir a los disidentes civiles y para imponer el programa del FMI. Pocos días antes del Fujishock, se declaró el estado de emergencia en todo el país. El 8 de agosto de 1990, el ejército y las fuerzas de seguridad acordonaron cuidadosamente toda el área central de la ciudad de Lima con tropas, fuerzas antimotines y vehículos armados.

Bajo el velo de la "democracia parlamentaria", durante el mandato de Fujimori, los militares fueron teniendo un papel cada vez más activo en la administración "civil". Al comienzo de este gobierno, la situación era comparable en ciertos aspectos a lo ocurrido a principios de los setenta en Uruguay, durante la presidencia de Bordaberry, cuando los militares gobernaron bajo el disfraz formal de un gobierno civil.

EL DESPLOME DEL ESTADO

Las medidas de austeridad del FMI fueron decisivas para la desaparición de los programas del gobierno: la reducción de los gastos de salud y educación y el desmantelamiento de la administración civil en las regiones, etc. Este estado de cosas contribuyó también a desacreditar al gobierno central en beneficio de los insurgentes de Sendero Luminoso que combatían al estado.

Desde que comenzó su participación en las cuestiones civiles durante los sesenta y setenta, Sendero evolucionó como organización clandestina durante el gobierno de Belaúnde y consiguió controlar y establecer una administración paralela en algunas regiones de la Selva y la Sierra. En ciertas partes del país, el estado peruano había perdido el control de las funciones normales del gobierno civil. La aplicación de la cirugía económica del FMI en 1990-1991 contribuyó a exacerbar esta situación.

El estado estaba perdiendo el control del territorio nacional, y esto se aplicaba no sólo a las zonas de la Sierra y la Selva. La insurgencia de Sendero había ido penetrando cada vez más la zona metropolitana de Lima. El "programa de pacificación" iniciado durante el

gobierno de Belaúnde (y continuado durante los gobiernos de APRA y Cambio 90) implicaba la entrega de las funciones de la administración civil en la Sierra meridional y central a las fuerzas armadas. En lugar de debilitar a Sendero, sin embargo, esta estrategia –combinada con los fracasos de la política económica y social– contribuyó al avance de la insurgencia. Además, el estado, a través del su aparato militar y policiaco, sancionó oficialmente arrestos indiscriminados, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales y la tortura de "presos políticos", y el arresto de miembros de las familias y supuestos "simpatizantes" (ampliamente documentados por Amnistía Internacional). En otras palabras, "la contrainsurgencia" se caracterizaba por el recorte de las libertades civiles, particularmente entre los segmentos más pobres de la sociedad.[17] En 1988 aparecieron escuadrones de la muerte derechistas con el nombre "Comando Rodrigo Franco"; tenían la mira puesta en personalidades de izquierda y líderes sindicales.

Con Fujimori, la represión de la insurgencia de Sendero Luminoso se convirtió en un pretexto para el hostigamiento sistemático de las fuerzas de seguridad de la oposición civil al programa del FMI. Desde el comienzo del gobierno de Cambio 90, la tortura y ejecución indiscriminada de "sospechosos" se aplicó de forma mucho más sistemática. La estrategia del asesinato e intimidación de la oposición civil dirigida contra sindicatos, líderes campesinos y estudiantiles emanaba directamente del alto mando del ejército. En la conocida como "guerra sucia" con Sendero Luminoso, las órdenes oficiales (con respecto al trato de sospechosos) eran "ni prisioneros ni heridos" (como aparece en un documento militar secreto filtrado a la prensa en 1991).[18]

[17] Un informe de Amnistía Internacional confirmó que aproximadamente tres mil personas habían "desaparecido" entre 1982 y 1989 y que otras tres mil habían sido ejecutadas "extrajudicialmente". Amnistía denunció también la práctica de detenciones ilegales y torturas por las fuerzas de seguridad y la ausencia de sanciones contra miembros de las fuerzas de seguridad implicadas en los asesinatos y torturas (*Página Libre*, 17 de marzo de 1990, p. A2; véase también *La República*, 11 de febrero de 1990, p. 14).

[18] Véanse los documentos secretos revelados por el periodista César Hildebrandt en la serie de TV *En persona*, julio de 1991, que provocaron el cierre del programa y el recorte de la mayor parte de los programas de televisión dedicados a cuestiones públicas.

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA RURAL

El programa del FMI tuvo un impacto inmediato en la economía rural: con la excepción del cultivo ilegal de coca, hubo una contracción de primer orden en la producción agrícola en el año siguiente al tratamiento de choque de agosto de 1990.

El empobrecimiento de la población rural empeoró debido al control continuo de los canales de mercadeo y distribución por parte de poderosos monopolios agroindustriales. Los productores nacionales fueron desplazados como consecuencia de la importación de productos agrícolas baratos. Las medidas económicas de 1990 fueron las causantes de inmediatas y abruptas alzas en los precios de combustibles, insumos agrícolas, fertilizantes y crédito agrícola: en muchas áreas rurales de la Sierra, los costos de producción aumentaron muy por encima de los precios a pie de granja. El resultado fue la quiebra del pequeño agricultor independiente. En la Sierra, por ejemplo, unos 800 mil productores de fibras de lana y alpaca, que se encuentran entre los sectores más pobres de la población rural, se empobrecieron todavía más como resultado de la declinación del precio real de estas fibras en 1990-1991.

LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

La privatización de las tierras agrícolas contribuyó a socavar la estructura existente de la economía rural, caracterizada por la producción individual en pequeña escala ("parceleros") y por comunidades agrícolas. La ley agraria de 1991 exigía una unidad mínima de propiedad de diez hectáreas. La concentración de la tierra fue estimulada de esta manera, llevando al fortalecimiento de parcelas de tamaño mediano y a la consolidación del campesinado medio. Los parceleros empujados a la quiebra por las reformas económicas estaban obligados a vender o abandonar sus tierras.[19] Este proceso inicial de concentración de la tierra no era, sin embargo, más que un primer paso hacia la reestructuración de la propiedad agrícola. El crédito agrario también fue reformado. Las unidades de producción inferiores a diez hectáreas ya no eran elegibles para el crédito agrario.

[19] Véase *Alerta Agraria*, junio de 1991, p. 2.

Por su parte, el campesinado medio se vio sometido firmemente a los intereses bancarios y comerciales a través de la hipoteca de sus títulos agrarios adquiridos recientemente. La legislación, introducida en 1991, condujo al decomiso de la tierra del parcelero y a la compra de grandes lotes de tierra por los intereses comerciales urbanos.

Mientras que las comunidades campesinas de la Sierra estaban "protegidas" formalmente de la privatización de la tierra, los precios cada vez más altos de los combustibles y los transportes contribuían a alejarlos de la economía de mercado. Los precios a pie de granja habían sido forzados a descender por debajo de los costos. Muchas comunidades campesinas que anteriormente vendían sus excedentes agrícolas en mercados locales se vieron obligadas a retirarse completamente de la agricultura comercial.

Hubo un retorno *de facto* a la agricultura de subsistencia. Insumos agrícolas comerciales tales como semillas, fertilizantes, etc., ya no se utilizaban; había una tendencia hacia la consolidación de la "agricultura tradicional" marcada por una reducción drástica de los niveles de productividad tanto de los parceleros como de las comunidades campesinas. Las zonas rurales se polarizaron cada vez más. Las comunidades campesinas empobrecidas debido al ajuste estructural ya no podían sobrevivir sin fuentes externas de ingreso. Progresivamente las comunidades campesinas se convirtieron en "reservas de mano de obra" para la agricultura comercial.

LA NARCOECONOMÍA ILEGAL

El choque económico de agosto de 1990 creó las condiciones para que el comercio de drogas continuara creciendo. La contracción de la demanda interna de alimentos, aunada al levantamiento de las barreras arancelarias de los alimentos básicos importados, contribuyó a una grave recesión de la producción agrícola. Combinada con la subsiguiente revocación de la reforma agraria, los campesinos empobrecidos de la Sierra emigraron a las zonas productoras de coca en el valle del Alto Huallaga. En la Sierra, el cultivo de coca como producto comercial de exportación empezó a desarrollarse en gran escala.

Perú es con mucho el mayor productor de hoja de coca, que se

utiliza para producir cocaína (más del 60% de la producción mundial total, siendo Bolivia el segundo productor más importante) (véase el capítulo 15). Tanto Perú como Bolivia son productores directos y venden pasta de coca a los cárteles colombianos que la procesan como cocaína en polvo. Sin embargo, a principios de los noventa, con la represión al cártel de Medellín, hubo un giro en los canales de procesamiento y mercadeo y en el desarrollo de los intermediarios comerciales de Perú así como en un mayor uso del sistema bancario peruano como puerto financiero seguro para transferir fondos dentro y fuera del país. El debilitamiento del cártel de Medellín y el desarrollo del cártel de Cali favorecieron inicialmente una mayor "autonomía", tanto de Perú como de Bolivia, en el comercio de la droga.

Además, un gran volumen de billetes de dólar de la economía de la droga había sido canalizado hacia el mercado informal de divisas en las calles de Lima ("el mercado Ocoña"). Desde el gobierno de Belaúnde (1980-1985), el banco central había venido utilizando periódicamente el mercado callejero Ocoña para rellenar sus decrecientes reservas internacionales. En otras palabras, la capacidad de Perú para cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda dependía del reciclado de los narcodólares en el mercado de divisas. En 1991, se calculó que el banco central compró unos ocho millones de dólares por día en el mercado informal de divisas, gran parte de los cuales estaban destinados al servicio de la deuda externa de Perú.

Con la congelación de los salarios y el gasto gubernamental (impuesta por el FMI), las emisiones monetarias del banco central habían sido recortadas de manera importante. Irónicamente, esta estricta política monetaria –combinada con la inundación del mercado Ocoña con billetes de dólar introducidos al país por el comercio ilegal de cocaína– ocasionó, como a principios de 1991, la caída del dólar norteamericano contra la moneda peruana, para gran desaliento del FMI, que había insistido en una "devaluación real" en apoyo del sector exportador.

La demanda interna se había reducido pero también lo habían hecho las exportaciones: a consecuencia de las medidas económicas, todos los sectores de la economía nacional, con excepción de la producción ilegal de coca, estaban marcados por una profunda recesión.

EL CONVENIO ANTIDROGA CON WASHINGTON

Los "programas de erradicación de la coca", de Washington, habían estado combinados invariablemente con programas de contrainsurgencia y "pacificación", con fuerte respaldo militar y de inteligencia de Estados Unidos y de la DEA (Drug Enforcement Administration) al ejército peruano y a la política de los militares. La DEA estableció una base militar en Santa Lucía, en la región de Huallaga.[20]

Sin embargo, en lugar de debilitar a Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, estas operaciones militares le permitieron conseguir algunos elementos de apoyo entre los productores de coca. Vale la pena señalar que durante la presidencia de Fujimori los militares se involucraron crecientemente en la comercialización de la pasta de coca y el lavado del dinero de la droga.

El convenio antidroga firmado en mayo de 1991 con Estados Unidos tuvo una influencia directa en la política macroeconómica. En palabras de un testigo ante el comité del senado de Estados Unidos: "La estrategia nacional de control de drogas del presidente [George Bush] ... dice que la ayuda económica está condicionada a los resultados del control de drogas y a la existencia de políticas económicas sólidas."[21]

Pero, irónicamente, estas mismas "políticas económicas sólidas" contribuyeron ampliamente al desarrollo rápido de la narcoeconomía. En otras palabras, las reformas económicas alentaron la migración de campesinos empobrecidos a las áreas productoras de coca.

Además, las políticas macroeconómicas adoptadas con Fujimori, incluyendo la privatización de tierras agrícolas y la reforma del sistema de crédito agrícola, habían destruido virtualmente, desde un principio, la posibilidad de "un desarrollo alternativo" en el valle del Alto Huallaga, tal como se contemplaba en el Convenio Antidroga. Este último se basaba en la sustitución de la coca por cosechas comerciales alternativas (tabaco, maíz, etc.). Pero a causa de las reformas patrocinadas por el FMI (que se incluyeron también como "condicionamientos cruzados" en el Convenio Antidroga), la agri-

[20] Otras instituciones estadunidenses operaban desde la base militar Santa Lucía: la NAS (una afiliada de la DEA) y CORAH (un proyecto de Estados Unidos establecido para la erradicación de las cosechas de coca).

[21] Senado de Estados Unidos, Comité de Asuntos Gubernamentales, *Cocaine production, eradication and the environment: Policy, impact and options,* Washington, agosto de 1990, p. 51.

cultura comercial en la región de Huallaga –con la excepción de la producción ilegal de coca– ya no era viable.

Como una consecuencia del programa de ajuste estructural, el comercio ilícito de narcóticos se había reforzado. La economía legal había sido socavada: el proceso de "sustitución de cultivos" fue desde las "cosechas alternativas" (por ejemplo, tabaco, maíz, etc.) hasta la coca, marcado por un constante aumento de la superficie destinada al cultivo de hoja de coca (véase el cuadro 14.5).[22]

OBJETIVOS MILITARES Y DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS

Gran parte del apoyo que Estados Unidos otorgó bajo convenio fue en forma de ayuda militar. En otras palabras, también los condicionamientos de la deuda fueron utilizados por Estados Unidos para lograr objetivos militares y de seguridad en la región andina, bajo el paraguas formal del Programa Antidroga. Este último fortaleció además a los militares peruanos en el Alto Huallaga y consiguientemente su capacidad para "proteger" la narcoeconomía.

A este respecto, vale la pena mencionar que existe evidencia abundante de que la CIA (Central Intelligence Agency) utilizó el "lavado" de dinero de la droga para financiar sus operaciones encubiertas y apoyar a grupos pro ejército estadunidense y paramilitares en todo el mundo.[23]

Si Washington hubiera estado realmente interesado en una solución al comercio de la droga, no habría obligado a Perú a adoptar una política económica, bajo la guía del FMI, que fortaleciera la posición de los comerciantes de la droga en alianza con los militares.

Mientras que un brazo del estado norteamericano estaba implicado en programas *bona fide* de erradicación de la droga, el otro estaba haciendo exactamente lo contrario. El lavado de "dinero sucio"

[22] En la región de San Martín (en la zona productora de coca), las áreas con cultivos de "cosechas alternativas" tales como maíz, arroz y cacao, sostenidas por créditos del Banco Agrario, decrecieron en un 97% entre 1988-1989 y 1990-1991, de 101 100 a 6 730 hectáreas. Para mayores detalles véase *Revista Agronoticias*, 138, Lima, junio de 1991, p. 7.

[23] Para una revisión del supuesto apoyo de la CIA al lavado del dinero de la droga en Indochina y el Triángulo de Oro desde principios de los cincuenta, véase Alfred McCoy, *The politics of heroin in Southeast Asia*, Nueva York, Harper and Row, 1972.

CUADRO 14.5. PRODUCCIÓN DE COCA EN EL ALTO HUALLAGA (1974-1971)

Año	*Área*	*Toneladas métricas*	*Población*
1974	16700	12200	7000
1978	21540	18120	9900
1982	50600	47000	23500
1986	60200	61000	27350
1991	90000	84750	50000

FUENTE: Cooperativa Alto Huallaga, Uchiza, *Agronoticias*, 138, junio de 1991, p. 14.

fue reforzado también por las reformas del sistema bancario y del régimen de cambio de divisas patrocinados por el FMI, permitiendo el movimiento "libre" del dinero dentro y fuera del país. Reforzar la narcoeconomía, sin embargo, servía también a los intereses de los acreedores internacionales de Perú, porque contribuía a generar los ingresos en dólares requeridos por Perú para poder cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda.

En otras palabras, la reforma macroeconómica socavó la economía legal, reforzó el comercio ilícito y contribuyó al reciclado del "dinero sucio" hacia los acreedores oficiales y comerciales de Perú.

15

LA DEUDA Y LA ECONOMÍA ILEGAL DE LA DROGA: EL CASO DE BOLIVIA

La experiencia boliviana es juzgada por las instituciones de Bretton Woods como un modelo "exitoso" de ajuste estructural que debe ser emulado por los países "que desean estabilizar su economía y establecer un proceso sostenido de crecimiento económico". También vale la pena señalar la similitud entre los procesos de ajuste boliviano y peruano. Ambas economías dependen fuertemente de las exportaciones ilegales de coca como fuente principal de obtención de divisas. En ambos países el "reciclado" de narcodólares constituye un medio para el servicio de la deuda externa.

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA DE BOLIVIA

En septiembre de 1985, el gobierno del MNR de Víctor Paz Estenssoro inició un paquete de estabilización económica ortodoxo ("Decreto Supremo 21 060") tendiente a "combatir la inflación" y "eliminar los desequilibrios internos y externos". El paquete económico contenía todos los elementos esenciales del programa de ajuste estructural del FMI. Se devaluó la moneda, se unificó la tasa de cambio y se estableció una subasta de divisas ("bolsín").

El gobiernó recortó sus gastos y despidió a unos 50 mil empleados públicos. Se adoptó una política monetaria sólida junto con la eliminación de controles de precios, la desindexación de los salarios y la "liberalización" del mercado de mano de obra. El paquete incluía también la liberalización del comercio lo que implicaba reducciones sustanciales de los aranceles de importación.[1]

[1] Para más detalles véase Juan Antonio Morales, *The costs of the Bolivian stabilisation programme*, documento de trabajo núm. 01/89, La Paz, Universidad Católica Boliviana, 1989, p. 4.

El programa estabilizador estuvo seguido de una reorganización de la industria minera estatal, la clausura de las minas no rentables y el despido de unos 23 mil trabajadores.

El arquitecto del paquete de ajuste económico para Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (quien se convirtió en presidente de Bolivia en 1993), describió los acontecimientos que siguieron a la adopción de la "nueva política económica" (NPE), en agosto de 1985, de la siguiente manera:

> Una vez que hubimos implementado las medidas, tuvimos una huelga general, el país quedó paralizado durante diez días en septiembre de 1985 [...] En el décimo día, los líderes sindicales declararon una huelga de hambre, lo que fue una gran equivocación. Entonces, decidimos declarar el estado de emergencia. [El presidente] Paz había esperado que la gente sería de la opinión de que la situación no podía seguir así. De modo que capturamos a los líderes sindicales y los deportamos al interior del país. Esto desarticuló el movimiento laboral. Clausuramos Comibol, el consorcio minero estatal, y despedimos a 24 mil trabajadores además de unos 50 mil empleados públicos a nivel nacional. Eliminamos el seguro de desempleo.[2]

No obstante, esta política tuvo "éxito" en controlar la inflación en cuestión de meses. Antes de la adopción de las medidas de septiembre de 1985, la tasa de inflación crecía aproximadamente a 24 000% al año. El objetivo de la estabilización de precios, sin embargo, se alcanzó con la "dolarización" de los precios (más que como resultado de las medidas de estabilización económica): "dado que la mayoría de los precios fueron indexados *de facto* a la tasa de cambio, la estabilización de esta última implicó una estabilización casi inmediata de los primeros".[3]

Se negoció un plan de reducción de la deuda. De acuerdo con este plan, los donadores oficiales financiarían la "recompra" de la deuda comercial de Bolivia con descuentos sustanciales de los bancos comerciales. Esta recompra de la deuda estaba condicionada a la adopción del programa del FMI.

[2] Entrevista con Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de finanzas en el gobierno del MNR de Paz Estenssoro y arquitecto del paquete económico boliviano (*Caretas*, 1094, Lima, 5 de febrero de 1990, p. 87).

[3] Morales, *op. cit.*, p. 6.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

El paquete de estabilización condujo a un deterioro significativo en los niveles de empleo y de las ganancias reales. Por su parte, la contracción de los salarios repercutió en el sector urbano informal y en la economía rural. Un poder de compra reducido, combinado con el impacto de la liberalización del comercio (y la afluencia de alimentos importados baratos), contribuyeron a debilitar la economía rural, que se apoyaba en gran medida en el mercado interno. De forma similar, la eliminación de aranceles contribuyó al desplazamiento de la industria manufacturera nacional. Las importaciones comerciales florecieron en gran medida a expensas de la producción interna.

Los ingresos y el gasto gubernamental ya habían descendido dramáticamente en la primera parte de los años ochenta, durante el gobierno de Siles Zuazo. Pero en el momento inmediatamente siguiente a las reformas económicas de 1985 el gasto real del gobierno fue recortado en otro 15% (particularmente en las áreas de salud y educación).[4] Mientras que los salarios en el sector moderno habían decrecido (según datos oficiales) en sólo 20%, el número de personas empleadas había descendido a niveles abismales. Con la reducción del empleo en el sector moderno, sobre todo a causa de despidos, la caída en las ganancias fue sustancialmente mayor al 20 por ciento.

ESTANCAMIENTO ECONÓMICO PROGRAMADO

El programa del FMI iniciado en 1985 contribuyó a la paralización de los principales sectores de la economía nacional (minería, industria y agricultura), con la excepción de la economía ilegal de la coca y el sector de servicios urbanos. Este patrón es comparable al observado en Perú con Fujimori (véase el capítulo 14).

El estancamiento en la industria minera (constituida principalmente por el consorcio estatal Comibol y un pequeño sector de minas de propiedad privada) resultó del cierre de “minas improductivas” (y del despido de obreros) y de la caída del mercado internacio-

[4] *Ibid.*, p. 9a.

nal del estaño. La reducción de los términos del comercio exacerbó aún más el impacto de las reformas económicas.

Los mineros despedidos invirtieron sus indemnizaciones en la adquisición de tierras en la zona productora de coca, de tal manera que tanto el capital como la mano de obra fueron redirigidos hacia la economía de la coca. La NPE no proporcionó otra fuente de empleo alternativa para los trabajadores despedidos por Comibol.

El sector manufacturero (orientado principalmente hacia el mercado interno) fue desplazado en parte (por ejemplo, los textiles y la agroindustria) como resultado de la liberalización de las importaciones. La reducción del poder de compra interno y el surgimiento de actividades de contrabando desempeñaron también un papel importante en la quiebra de las empresas manufactureras en pequeña escala.

EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA RURAL

La agricultura boliviana consta de tres subsectores distintos:

a] la economía campesina, caracterizada por "parceleros" (agricultura en pequeña escala) y comunidades campesinas, concentradas en los valles andinos y el altiplano. La economía campesina es producto de la reforma agraria de los cincuenta y del desmantelamiento de las "haciendas". Igual que en Perú, las comunidades campesinas del altiplano se caracterizan por una alta incidencia de pobreza crítica (97% de la población rural está clasificada como "pobre" y entre el 48 y el 77% como "pobreza crítica");[5]

b] un subsector de agricultura comercial dirigida principalmente hacia el mercado exportador y caracterizada por plantaciones de tamaño mediano y grande, particularmente en las nuevas áreas de colonización agrícola, conocidas como "llanos orientales" (por ejemplo, en la zona de Santa Cruz);

c] la producción de coca tanto para procesar pasta de coca como para exportar, así como también para la venta "tradicional" en el mercado nacional.

La NPE contribuyó a debilitar la economía campesina. Los merca-

[5] Véase *ibid.*, p. 6. Véase también Juan Antonio Morales, *Impacto de los ajustes estructurales en la agricultura campesina boliviana*, mimeo, La Paz, Universidad Católica Boliviana, 1989.

dos de granos locales fueron afectados por la introducción de importaciones de alimentos baratos (trigo), así como la ayuda alimentaria y el contrabando desde Argentina y Brasil. Esto deprimía los precios reales de los alimentos básicos producidos en el país. Los precios reales de mayoreo agrícola descendieron 25.9% en los tres años siguientes a la adopción de la NPE, en 1985.

La declinación en el precio (real) a pie de granja estuvo acompañada también de un alza significativa en los márgenes entre precios al por menor y al mayoreo. Una gran porción del excedente era acaparada por los comerciantes e intermediarios en detrimento de los productores agrícolas directos. El dramático incremento en los costos del transporte fue también un factor decisivo en la reducción de los ingresos del campesinado y en la expansión de la brecha entre el precio a pie de granja y el precio al mayoreo.[6]

El programa de 1985 patrocinado por el FMI no contribuyó a incrementar la producción de cosechas efectivas para la exportación, con excepción del frijol de soja (localizado principalmente en las áreas de los llanos de cultivos comerciales). Como en Perú, se produjo un giro de las cosechas tradicionales de exportación a la economía ilegal de la coca.

EL LAVADO DE DINERO

Las élites económicas nacionales, incluyendo a los bancos comerciales, estaban atadas al tráfico ilegal de la droga. Las políticas monetarias y de divisas del gobierno apoyaban el papel de la banca comercial en el lavado de los dólares de la coca.

La liberalización del mercado de divisas por medio del sistema holandés de subastas ("bolsín") estuvo acompañada por resoluciones que otorgaban legitimidad al lavado de narcodólares en el sistema bancario interno. Se introdujo "el secreto bancario" en las transacciones de divisas y se estimuló la apertura de depósitos en dólares para la repatriación de capitales hacia el sistema bancario nacional. Tasas de interés anormalmente elevadas (5% por encima del LIBOR) contribuyeron a atraer "depósitos de dinero caliente" a los bancos comerciales bolivianos.

[6] Véase Morales, *The costs...*, *op. cit.*, pp. 24a-25a.

Estos depósitos incluían también las ganancias del tráfico de la droga de los intermediarios bolivianos. El secreto bancario ("sin preguntas"), las reformas del régimen de cambio de divisas que permitía el libre movimiento de dinero dentro y fuera del país, junto con las altas tasas de interés, estimularon el depósito de narcodólares en el sector bancario comercial boliviano.

Las reformas al sistema bancario contribuyeron a una reducción significativa en la inversión productiva real. Entre 1986 y 1988, la tasa de interés del crédito (en dólares estadunidenses) era de entre 20 y 25% al año; el crédito a la agricultura y a las manufacturas se había congelado.[7]

"ERRADICACIÓN" DE LA PRODUCCIÓN DE COCA

Mientras que el marco macroeconómico apoyaba directamente la narcoeconomía y el lavado de dinero, el gobierno había adoptado también nuevas leyes, con el apoyo de la DEA, teniendo como objetivo la reducción de la producción de coca. De acuerdo con el mandato de la legislación pertinente (*ley del régimen de la coca*), el gobierno había establecido unidades de vigilancia móvil rural (Umopar, Unidad Móvil de Patrullaje Rural) en las áreas productoras de coca. Estas unidades, sin embargo, estaban principalmente dedicadas a acciones represivas contra el pequeño productor de coca (a menudo en áreas de producción tradicional). Sus actividades tenían poco impacto en el narcotráfico y en los intereses diversos y poderosos implicados en la comercialización y exportación de pasta de coca. De acuerdo con un informe, se rumoreaba que el Umopar estaba controlado por la mafia de la droga.[8]

[7] La tasa del préstamo estaba entre el 12 y el 16%, con una diferencia entre las tasas pasiva y activa de entre 6.8 y 14.0%. Para más detalles véase Morales, *The costs...*, *op. cit.*, p. 14, cuadro 7.

[8] Para detalles sobre la implicación de personalidades políticas y sociales importantes en el narcotráfico, véase Amalia Barrón, "Todos implicados en el narcotráfico", *Cambio 16*, Madrid, 8 de agosto de 1988.

EL NARCOESTADO

La economía de la coca había sido "protegida" por el más alto nivel de funcionarios del gobierno de Bolivia durante la dictadura de García Meza (1980-1982), que en los círculos internacionales se conocía comúnmente como el "gobierno de la cocaína".[9] La estructura del estado no fue modificada, sin embargo, con la restauración de la democracia parlamentaria. Importantes intereses financieros e industriales seguían teniendo vínculos directos con el comercio de la coca, incluyendo el uso de las ganancias de la coca para financiar inversiones en la economía moderna.

Desde mediados de los setenta, el desarrollo de los servicios urbanos, coincidente con el mercado de ingresos altos estaba financiado principalmente por la narcoeconomía. El reciclado de narcodólares, en la formación de capital nacional, contribuyó al desarrollo de zonas residenciales, centros comerciales, infraestructura turística y de entretenimiento, etc. Este proceso se vio reforzado como resultado del programa patrocinado por el FMI.

Con la adopción de la "nueva política económica" en 1985, el partido gobernante (MNR) abandonó su posición populista y dio un giro a su devoción política uniendo fuerzas con el derechista Partido de Acción Democrática Nacional (ADN), del ex dictador y general Hugo Bánzer. (Esto representó un vuelco político, puesto que históricamente el MNR había dependido del apoyo de la fuerza laboral organizada.)

Supuestamente, Bánzer fue una figura clave en el tráfico ilegal de la coca desde mediados de los setenta, y había pruebas sólidas de que miembros del grupo parlamentario de ADN, junto con altos funcionarios del ejército, estaban conectados con la mafia de la droga.[10]

El "pacto por la democracia" entre el MNR y el ADN permitió al gobierno del MNR llevar adelante los diversos componentes de la legislación de la NPE en el parlamento, incluyendo la desregulación del mercado laboral y la represión del movimiento obrero.

El partido ADN conservó su compromiso en la coalición gubernamental con el ascenso del presidente Paz Zamora, del MIR (Izquierda Revolucionaria), en 1989. Paz Zamora era el segundo competi-

[9] Véase Henry Oporto Castro, "Bolivia: El complejo coca-cocaína", en García Sayán (ed.), *Coca, cocaína y narcotráfico*, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989, p. 177.

[10] Véase G. Lora, *Política y burguesía narcotraficante*, La Paz, Mi Kiosko, 1988.

dor en la carrera presidencial de 1989, detrás de Hugo Bánzer y el candidato del MNR Gonzalo Sánchez de Lozada. Paz accedió a la presidencia en 1989, en el contexto de un arreglo político con el general Hugo Bánzer. Mientras que Paz Zamora ocupó la silla presidencial, el general Bánzer y ADN controlaron algunos ministerios claves.

La coalición de gobierno ADN/MIR prosiguió las políticas macroeconómicas iniciadas con la NPE en 1985 bajo el MNR. El partido ADN y su líder Hugo Bánzer aseguraron así, en los dos gobiernos civiles elegidos democráticamente, tanto la continuidad política como el mantenimiento de un vínculo cohesivo entre la política del gobierno y los intereses del tráfico ilegal de la coca.

V

LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA Y LOS BALCANES

Esta página dejada en blanco al propósito.

16

LA “TERCERMUNDIZACIÓN” DE LA FEDERACIÓN RUSA

REFORMA MACROECONÓMICA EN LA FEDERACIÓN RUSA. FASE I: EL TRATAMIENTO DE CHOQUE DE ENERO DE 1992

“En Rusia estamos viviendo una situación de posguerra...”, pero no hay reconstrucción de posguerra. El “comunismo” y el “imperio del mal” han sido derrotados, pero la guerra fría, aunque oficialmente concluida, aún no ha alcanzado su clímax: el corazón de la economía rusa es el complejo militar-industrial y el “G-7 quiere quebrantar nuestras industrias de alta tecnología [...] el objetivo del programa económico del FMI es debilitarnos” e impedir el desarrollo de una potencia capitalista rival.[1]

El “tratamiento de choque” al estilo del FMI, iniciado en enero de 1992, impidió desde su comienzo una transición hacia el “capitalismo nacional”, esto es, una economía capitalista nacional poseída y controlada por una clase empresarial rusa y apoyada, como en otras grandes naciones capitalistas, por las políticas económicas y sociales del estado. Para Occidente, el enemigo no era el “socialismo” sino el capitalismo. ¿Cómo domar y someter al oso polar; cómo apoderarse del talento, la ciencia, la tecnología; cómo apoderarse del capital humano; cómo adquirir los derechos de propiedad intelectual? “Si Occidente piensa que pueden transformarnos en un refugio exportador de mano de obra barata y alta tecnología y pagar a nuestros científicos 40 dólares por mes, están muy equivocados, el pueblo se rebelaría...”[2]

Mientras promovía acuciosamente los intereses tanto de los comerciantes rusos como de las mafias comerciales, la “medicina económica” estaba matando al paciente, destruyendo la economía nacional y empujando el sistema de empresas estatales a la bancarrota. Median-

[1] Entrevista con un economista de la Academia de Ciencias rusa, Moscú, octubre de 1992.

[2] *Ibid.*

te la deliberada manipulación de las fuerzas del mercado, las reformas habían definido a cuáles sectores de actividad económica se les permitiría sobrevivir. Las cifras oficiales señalaban una disminución de 27% en la producción industrial durante el primer año de las reformas; la caída real de la economía rusa en 1992, fue calculada por algunos economistas en el orden del 50 por ciento.[3]

Las reformas FMI-Yeltsin constituyen un instrumento de "tercermundización"; son una copia al carbón del programa de ajuste estructural impuesto a los países deudores en Latinoamérica y el África subsahariana. Jeffrey Sachs, economista titulado en Harvard y asesor del gobierno ruso, aplicó en Rusia la misma "cirugía macroeconómica" que en Bolivia, en donde fue asesor económico del gobierno del MNR en 1985 (véase el capítulo 15). El programa del FMI-Banco Mundial adoptado en nombre de la democracia constituye un programa coherente de empobrecimiento de grandes sectores de la población. Fue diseñado (en teoría) para "estabilizar" la economía, pero en 1992 los precios al consumidor aumentaron más de un ciento de veces (9 900%) como resultado directo del "programa antiinflacionario".[4] Como en los "programas de estabilización" del tercer mundo, el proceso inflacionario se impulsaba principalmente por medio de la "dolarización" de los precios internos y el desplome de la moneda nacional. El "programa de liberalización de precios" no resolvía, sin embargo (como lo proponía el FMI), la distorsionada estructura de precios relativos que existía en el sistema soviético.

El precio del pan aumentó (en más de cien veces) de 13-18 kopecks en diciembre de 1991 (antes de las reformas) a más de 20 rublos en octubre de 1992; el precio de un televisor (de producción nacional) aumentó de 800 rublos a 85 mil. Los salarios, en contraste, aumentaron aproximadamente diez veces, esto es, las ganancias reales disminuyeron en más del 80% y miles de millones de rublos de ahorros de toda una vida desaparecieron. Los rusos comunes estaban indignados: "el gobierno robó nuestro dinero".[5] Según un

[3] Una disminución del 50% en relación con el promedio de los tres años anteriores. Entrevistas con varios economistas de la Academia de Ciencias rusa, Moscú, septiembre de 1992.

[4] Basado en una recopilación del autor de aumentos de precios durante el periodo diciembre de 1991-octubre de 1992, de unos 27 bienes de consumo esenciales como alimentos, transportes, vestido y artículos de consumo duraderos.

[5] Según la declaración oficial del gobierno al parlamento ruso, los salarios aumentaron once veces entre enero y septiembre de 1992.

funcionario del FMI, fue necesario "absorber la liquidez excesiva, el poder de compra era demasiado elevado...";[6] "el gobierno optó por 'un golpe máximo'" para eliminar el ahorro familiar "al comienzo del programa de reforma".[7] Según un consejero del Banco Mundial, esos ahorros "no eran reales, eran sólo una percepción porque [en el sistema soviético la gente] no estaba en condiciones de comprar nada".[8] Un economista de la Academia de Ciencias rusa veía las cosas de forma distinta:

> En el sistema comunista nuestro nivel de vida nunca fue muy alto. Pero todos estábamos empleados y las necesidades humanas básicas y los servicios sociales esenciales, aunque de segunda clase según las normas occidentales, eran gratuitos y estaban disponibles. Pero ahora las condiciones en Rusia son similares a las del tercer mundo.[9]

Los sueldos promedio estaban por debajo de diez dólares al mes (1992-1993), el salario mínimo (1992) era del orden de tres dólares al mes, un profesor universitario ganaba ocho dólares, un empleado de oficina siete dólares, una enfermera calificada en una clínica urbana ganaba seis dólares.[10] Con los precios de muchos bienes de consumo subiendo rápidamente hacia los niveles del mercado mundial, estos salarios en rublos eran apenas suficientes para comprar comida. Un abrigo de invierno podía comprarse por 60 dólares, el equivalente a la paga de nueve meses.[11]

El derrumbe de los niveles de vida que se dio como resultado de la política macroeconómica, no tiene precedentes en la historia de Rusia: "Durante la segunda guerra mundial teníamos más que comer."

[6] Entrevista con el jefe de la Misión Residente del FMI, Moscú, septiembre de 1992.

[7] Véase Banco Mundial, *Russian economic reform. Crossing the threshold of structural reform*, Washington, D.C., 1992, p. 18.

[8] Entrevista con un consejero del Banco Mundial, Moscú, octubre de 1992.

[9] Entrevista con un economista de la Academia de Ciencias rusa, Moscú, septiembre de 1992.

[10] Entrevista en una policlínica de Moscú, entrevistas con trabajadores en diferentes sectores de la actividad económica, Moscú y Rostov del Don, septiembre-octubre de 1992. Véase también Jean-Jacques Marie, "École et santé en ruines", *Le Monde Diplomatique*, junio de 1992, p. 13.

[11] Los niveles de precios y salarios son los prevalecientes en septiembre-octubre de 1992. La tasa de cambio en septiembre de 1992 era del orden de 300 rublos por dólar.

EL ESTÁNDAR DE VIDA SE DESPLOMA EN EUROPA ORIENTAL

En Rumania, después de que entró en vigor el "tratamiento de choque" del FMI, "los precios de la gasolina y del diesel, que ya se habían duplicado a principios de enero [1997], subieron de nuevo el 50%, el de los trenes 80, el de las telecomunicaciones 100 y el de la electricidad hasta 500%... El FMI y el Banco Mundial –los arquitectos del plan, tras bambalinas– han convenido en prestar 400 millones de dólares para compensar a los más afectados por las medidas. Pero, con los millones de familias cuya dieta se ha reducido a coles y papas este invierno, la posibilidad de desórdenes sociales se cierne como una amenaza..."

FUENTE: Colin Woodward, "New leader aims to break Romania of authoritarianism", *San Francisco Chronicle*, 24 de febrero de 1997, p. A10.

Según las indicaciones del FMI-Banco Mundial, los programas sociales deben llegar a autofinanciarse: escuelas, hospitales y guarderías (para no mencionar los programas mantenidos por el estado en deportes, cultura y las artes) eran instruidos para generar sus propias fuentes de ingreso mediante la exacción de cuotas.[12] Las tarifas para cirugía en los hospitales equivalían a los salarios de entre dos y seis meses, lo que sólo los nuevos ricos podían costear. No sólo hospitales sino también teatros y museos fueron empujados a la quiebra. El famoso teatro Taganka fue desmantelado en 1992, muchos teatros pequeños ya no tenían fondos para pagar a sus actores. Las reformas llevaron al hundimiento del estado benefactor. Muchos de los logros del sistema soviético en salud, educación, cultura y las artes (ampliamente reconocidos por los especialistas occidentales) quedaron destruidos.[13]

No obstante, se mantuvo la continuidad con el antiguo régimen. Bajo la máscara de la democracia liberal, el estado totalitario seguía indemne: una cuidadosa mezcla de stalinismo y mercado "libre". De un día para otro, Yeltsin y sus amigotes se convirtieron en fervientes partidarios del neoliberalismo. Un dogma totalitario fue rempla-

[12] Para mayores detalles véase Jean-Jacques Marie, *op. cit.*

[13] Los asesores económicos rusos no han descubierto las falsedades teóricas del esquema económico del FMI. No hay ningún análisis acerca de cómo el paquete de medidas del FMI actúa en realidad, y poco conocimiento en la antigua Unión Soviética acerca de experiencias políticas en otros países, incluyendo el África subsahariana, Latinoamérica y Europa occidental.

zado por otro, la realidad social fue distorsionada, las estadísticas oficiales acerca de las ganancias reales fueron falsificadas: el FMI declaró, a finales de 1992, que el nivel de vida "se había elevado" desde el comienzo del programa de reforma económica.[14] El Ministerio de Economía ruso mantenía que "los salarios estaban aumentando más rápidamente que los precios".[15] En 1992, el índice de precios al consumidor, calculado con el apoyo técnico del FMI, señaló un aumento en los precios de 15.6 veces (1 660%).[16] "Pero la gente no es estúpida, simplemente no le creemos [al gobierno]; sabemos que los precios han aumentado en cien veces."[17]

EL LEGADO DE LA PERESTROIKA

Durante el periodo de la perestroika, comprar a precios regulados por el estado y revender en el mercado libre, junto con el soborno y la corrupción, eran las fuentes principales de formación de riqueza. Estos "negocios oscuros" de antiguos burócratas y miembros del partido quedaron legalizados en mayo de 1988 con la ley de cooperativas promulgada durante el gobierno de Mijail Gorbachov.[18] Esta ley permitía la formación de empresas comerciales privadas y compañías de capital social que operaban al lado del sistema de empresas estatales. En muchos casos, estas "cooperativas" eran establecidas como empresas privadas por los gerentes de empresas estatales, que vendían (a precios oficiales) el rendimiento producido por su empresa estatal a sus "cooperativas" de propiedad privada (es decir, a ellos mismos) y luego revendían en el mercado libre con una importante ganancia. En 1989 se permitió a las "cooperativas" crear sus propios bancos comerciales y realizar transacciones de comercio exterior. Conservando un sistema de precios doble, las reformas de 1987-1989 a las empresas, en lugar de estimular a los empresarios capitalistas *bona fide,* apoyaron el enriquecimiento personal, la corrupción y el desarrollo de una "burguesía de bazar" espuria.

[14] Entrevista con un funcionario del FMI, Moscú, septiembre de 1992.
[15] Véase *Delovoi Mir* [Mundo de Negocios], 34, 6 de septiembre de 1992, p. 14.
[16] Durante los nueve primeros meses de 1992.
[17] Entrevista con ciudadanos rusos comunes, Rostov del Don, octubre de 1992.
[18] Véase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo y Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, *A study of the Soviet economy*, vol. 1, París, 1991, parte II, cap. 2.

DESARROLLO DE UNA "BURGUESÍA DE BAZAR"

En la antigua Unión Soviética, "el secreto de la acumulación primitiva" se basaba en el principio del "dinero rápido": robarle al estado y comprar a un precio y revender a otro. El nacimiento del nuevo *biznesmany* de Rusia, un producto de la nomenklatura comunista del periodo de Brezhnev, se debe al desarrollo del "capitalismo de los apparatchik". "Adán mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del 'socialismo'."[19]

No es sorprendente que el programa del FMI obtuviese el respaldo político incondicional de los "demócratas"; es decir, que las reformas del FMI apoyaban los estrechos intereses de esta nueva clase comerciante. El gobierno de Yeltsin defendió inequívocamente los intereses de estas "élites dolarizadas". La liberalización de precios y la caída del rublo, bajo la guía del FMI, impulsaron el enriquecimiento de un pequeño sector de la población. El dólar se manejaba en la subasta de dinero de Interbank; también se negociaba libremente en los kioskos callejeros de toda la Unión Soviética. Las reformas se tradujeron en el hecho de que el rublo ya no se seguía considerando un "depósito de valor" seguro, esto es, el hundimiento de la moneda nacional se exacerbó aún más porque los ciudadanos ordinarios preferían conservar sus ahorros domésticos en dólares: "la gente está dispuesta a comprar dólares a cualquier precio".[20]

DISTORSIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES

La guerra fría fue una guerra sin destrucción física. En sus crueles secuelas, los instrumentos de la política macroeconómica desempeñan un papel decisivo en el desmantelamiento de la economía de una nación derrotada. Las reformas no pretenden (como proclama Occidente) construir un capitalismo de mercado ni una socialdemocracia al estilo occidental, sino neutralizar al ex enemigo e impedir el desarrollo de Rusia como gran potencia capitalista. También es importante el alcance en que las medidas económicas contribuyeron a destruir

[19] Paráfrasis de "Adán mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del género humano", en Karl Marx, "La llamada acumulación originaria", *El capital* (libro 1).

[20] Véase "Rouble plunges to new low", *Moscow Times*, 2 de octubre de 1992, p. 1.

la sociedad civil y distorsionar las relaciones sociales fundamentales: la criminalización de las actividades económicas, el saqueo de la propiedad estatal, el lavado de dinero y la fuga de capitales son promovidos por las reformas. Por su parte, el programa de privatización (a través de la subasta pública de las empresas estatales) favoreció también la transferencia de una porción importante de la propiedad estatal al crimen organizado. Este último impregna el aparato estatal y constituye un poderoso cabildo que respalda ampliamente las reformas macroeconómicas de Yeltsin. Según cálculos recientes, la mitad de los bancos comerciales de Rusia estaban, en 1993, bajo el control de las mafias locales, y la mitad de los bienes raíces comerciales en el centro de Moscú estaban en manos del crimen organizado.[21]

EL PILLAJE DE LA ECONOMÍA RUSA

La caída del rublo fue decisiva para el pillaje de los recursos naturales de Rusia: petróleo, metales no ferrosos y materias primas estratégicas podían ser comprados en rublos en una fábrica estatal por los comerciantes rusos y revendidos en divisas a comerciantes de la Comunidad Europea, a un precio diez veces superior. El petróleo crudo, por ejemplo, se compraba a 5 200 rublos (17 dólares) la tonelada (1992); una licencia de exportación podía adquirirse sobornando a un funcionario corrupto, y el petróleo se revendía en el mercado mundial a 150 dólares la tonelada.[22] Las ganancias de estas transacciones se depositaban en cuentas bancarias del exterior o se canalizaban hacia el consumo suntuario (importaciones). Aunque oficialmente ilegal, la fuga de capitales y el lavado de dinero se facilitaban por la desregulación del mercado de divisas y las reformas del sistema bancario. Se estimaba que la fuga de capitales podía haber ascendido a más de mil millones de dólares al mes durante la primera fase de las reformas del FMI (1992).[23] Hay pruebas de que miembros prominentes del establishment político transfirieron grandes sumas de dinero al exterior.

[21] Véase Paul Klebnikov, "Stalin's heirs", *Forbes*, 27 de septiembre de 1993, pp. 124-134.

[22] Se dice que el gobierno concedió licencias de exportación en 1992 que representaban el doble de las exportaciones registradas de petróleo crudo.

[23] Según cálculos del Instituto Internacional de la Banca sito en Washington.

SOCAVANDO EL CAPITALISMO RUSO

¿Qué papel representará "la Rusia capitalista" en la división internacional del trabajo durante un periodo de crisis económica global? ¿Qué destino tendrá la industria rusa en un mercado global deprimido? Con los cierres de fábricas en Europa y Norteamérica, ¿hay lugar para el capitalismo ruso en el mercado mundial? La política macroeconómica que exige el FMI ajusta la relación de Rusia con la economía global. Las reformas tienden a apoyar la exportación libre y no regulada de bienes primarios, como petróleo, metales estratégicos y alimentos básicos; mientras que los bienes de consumo, incluyendo automóviles de lujo, artículos duraderos y alimentos procesados, se importan libremente para un mercado privilegiado, pero no hay protección para la industria nacional, ni ninguna medida para rehabilitar el sector industrial o para transformar las materias primas nacionales. El crédito para la compra de equipos está congelado, la desregulación de precios de los insumos (petróleo, energía y transportes) está empujando a la industria rusa a la bancarrota.

Además, el desplome del nivel de vida ha repercutido sobre la industria y la agricultura, esto es, el dramático aumento de la pobreza no favorece el crecimiento del mercado interno. Irónicamente, de "una economía de escasez" durante el sistema soviético (caracterizado por largas colas), la demanda del consumidor se ha comprimido en tal medida que la población apenas puede comprar alimentos.

En contraste, el enriquecimiento de un pequeño sector de la población ha estimulado un mercado dinámico de bienes suntuarios, que incluye largas colas frente a las tiendas de dólares en la elegante zona Kuznetsky de Moscú. Los nuevos ricos desdeñan los artículos producidos en el país: ellos prefieren los Mercedes Benz, los BMW, la alta costura de París, para no mencionar el "vodka ruso" de alta calidad, importado de Estados Unidos a 345 dólares, en botella de cristal (cuatro años de sueldo de un trabajador promedio). Esta "demanda dinámica" de los grupos de altos ingresos, por lo tanto, se desvía principalmente hacia las importaciones de bienes de consumo financiadas mediante el pillaje de los recursos primarios de Rusia.

ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD ESTATAL "A BUEN PRECIO"

Las ganancias enormes que acumulan las nuevas élites comerciales se reciclan también en la compra de propiedades estatales "a buen precio" (o comprándolas a los administradores y trabajadores una vez que han pasado por el plan de privatización del gobierno). Como el valor contable registrado de la propiedad estatal (denominado en rublos corrientes) se mantenía bajo artificialmente (y como el rublo estaba tan barato), los fondos del estado podían adquirirse prácticamente por nada.[24] Una instalación para la producción de cohetes de alta tecnología podía comprarse por un millón de dólares. Un hotel del centro de Moscú podía adquirirse por un precio inferior al de un departamento en París. En octubre de 1992, el gobierno de la ciudad de Moscú puso a subasta gran número de apartamentos: las ofertas debían empezar en tres rublos.

Aunque la anterior nomenklatura, las nuevas élites de comerciantes y las mafias locales son las únicas personas que tienen dinero (y que están en condiciones de adquirir propiedades), no poseen ni la destreza ni la visión para manejar la industria rusa. Es improbable que puedan desempeñar un papel fuerte y decisivo en la reconstrucción de la economía rusa. Como en muchos países del tercer mundo, estas élites de compradores prosperan principalmente a través de su relación con el capital extranjero.

Además, las reformas económicas favorecen el desplazamiento de los productores nacionales (estatales o privados) y el acaparamiento de grandes sectores de la economía nacional por el capital extranjero mediante la formación de empresas mixtas. Marlboro y Philip Morris, los gigantes estadunidenses del tabaco, por ejemplo, ya han adquirido el control de empresas estatales de producción que estaban a la venta en el mercado nacional; British Airways ha conseguido el acceso a las rutas aéreas nacionales por medio de Air Russia, una empresa fusionada con Aeroflot.

Sectores importantes de la industria ligera están siendo clausurados y sustituidos por importaciones, mientras que los sectores más rentables de la economía rusa (como las empresas de alta tecnología del complejo industrial militar) están siendo acaparados por empresas mixtas. El capital extranjero, sin embargo, ha adoptado una

[24] Se calcula que con una compra de mil dólares de propiedad estatal (según el valor contable de la empresa) se adquieren valores reales por 300 mil dólares.

LA GENERAL ELECTRIC ADQUIERE LA PLANTA RUSA CONSTRUCTORA DE MOTORES DE AVIÓN

En 1996, la General Electric adquirió, con una "inversión" de 300 mil dólares, el control de la gigantesca planta constructora de motores de avión ubicada en Rybinsk, a orillas del río Volga. Durante la época soviética, esta planta, con una fuerza laboral de 22 mil personas, proveía del 80% de los motores a la flota militar del país y 60% a la aviación civil. Como efecto de las reformas, Rybinsk fue orillada a la quiebra; sus bienes y valores contables, devaluados fuertemente por empresas contables occidentales: el capital registrado de la empresa mixta se fijó arbitrariamente en 600 mil dólares.

La General Electric no sólo se apoderará de la producción de motores para la aviación civil; sino que, al mismo tiempo, se ha convertido en uno de los principales contratistas para la defensa al proveer de motores al Ministerio de Defensa ruso para modernizar los jets militares.

actitud de "a ver qué pasa". La situación política es incierta, los riesgos son grandes: "necesitamos garantías relativas a la propiedad de la tierra y a la repatriación de las utilidades en divisas".[25] Muchas empresas extranjeras prefieren entrar "por la puerta trasera", con pequeñas inversiones. A menudo esto implica empresas mixtas o la compra de empresas nacionales a muy bajo costo, principalmente para asegurar el control de la mano de obra barata (altamente calificada) y del espacio fabril.

DEBILITAMIENTO DE LA ECONOMÍA RUSA DE ALTA TECNOLOGÍA

La manufactura para exportación se está desarrollando en las áreas de alta tecnología. Constituye un negocio muy lucrativo: Lockheed Missile y Space Corporation, Boeing and Rockwell International, entre otras, tienen la mirada puesta en las industrias aeroespacial y aeronáutica. Empresas de alta tecnología europeas y estadunidenses (incluyendo contratistas de la defensa) pueden comprar los servicios de científicos rusos de primera fila en fibras ópticas, diseño de

[25] Entrevista con el ejecutivo de un banco comercial occidental, Moscú, octubre de 1992.

computadoras, tecnología de satélites, física nuclear (para nombrar sólo unas pocas opciones) por un salario promedio inferior a cien dólares mensuales, por lo menos 50 veces inferior al usual en Silicon Valley. Hay un millón y medio de científicos e ingenieros en la antigua Unión Soviética que representan una importante reserva de "capital humano barato".[26]

La política macroeconómica apoya los intereses de las empresas occidentales de alta tecnología y de los contratistas militares porque debilita el antiguo aeroespacio soviético y las industrias de alta tecnología, y bloquea la capacidad de Rusia para competir en el mercado mundial (en su derecho como potencia capitalista). El talento y el *know-how* científico pueden comprarse y las instalaciones pueden incautarse o clausurarse.

Gran parte del complejo militar-industrial está bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. Llevados a cabo bajo sus auspicios, los diversos "programas de conversión" negociados con la OTAN y los ministerios de defensa occidentales tienden a desmantelar ese complejo, incluyendo su rama civil, y a evitar que Rusia se convierta en un rival potencial en el mercado mundial. Los planes de conversión apuntan, concretamente, a desmovilizar las capacidades productivas de Rusia en lo militar, la aeronáutica y las áreas de alta tecnología, facilitando al mismo tiempo la incautación y el control, por parte del capital occidental, de la base de conocimiento (los derechos de propiedad intelectual) y del capital humano rusos, incluyendo sus científicos, ingenieros e institutos de investigación. AT&T Bell Laboratories, por ejemplo, ha adquirido mediante una "empresa mixta" los servicios de todo un laboratorio de investigación en el Instituto de Física General de Moscú. McDonnell Douglas ha firmado un convenio similar con el Instituto de Investigación Mecánica.[27]

Según una fórmula de conversión particular, los equipos y los bienes militares se "transformaron" en chatarra vendida en el mercado mundial. Los productos de estas ventas fueron luego depositados en un fondo (del Ministerio de Defensa) que podía emplearse para la importación de bienes de capital, el pago de las obligaciones del servicio de la deuda o invertirse en los programas de privatización.

[26] Véase Tim Beardsley, "Selling to survive", *Scientific American*, febrero de 1993, pp. 94-100.

[27] *Ibid.*

APODERÁNDOSE DEL SISTEMA BANCARIO RUSO

Desde las reformas de 1992 y el desplome de muchos bancos estatales, unos dos mil bancos comerciales han surgido en la antigua Unión Soviética, 500 de los cuales se localizan en Moscú. Con el hundimiento de la industria, sólo los bancos más fuertes y aquellos que tengan lazos con bancos internacionales podrán sobrevivir. Esta situación favorece la fusión de bancos y la penetración del sistema bancario ruso por bancos comerciales extranjeros.

DEBILITAMIENTO DE LA ZONA DEL RUBLO

El programa del FMI se proponía también abolir la zona del rublo y debilitar el comercio entre las antiguas repúblicas. Estas últimas fueron alentadas desde el principio a establecer su propia moneda y su propio banco central, con asistencia técnica proporcionada por el FMI. Este proceso propiciaba la "balcanización económica": con el derrumbe de la zona del rublo se desarrolló el poder económico regional que sirve a los intereses estrechos de los magnates y burócratas locales.

Han brotado amargas disputas financieras y comerciales entre Rusia y Ucrania. Mientras que el comercio con el mundo exterior se liberalizaba, se instalaban nuevas "fronteras internas" que impedían el movimiento de mercancías y personas dentro de la Unión de Estados Independientes.[28]

FASE II: LAS REFORMAS DEL FMI ENTRAN EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA

Las reformas patrocinadas por el FMI (con el primer ministro Yegor Gaidar) entraron en un callejón sin salida a finales de 1992. Surgió la oposición tanto en el parlamento como en el banco central. El FMI concedía que si el gobierno había de alcanzar las metas para el déficit fiscal, más del 40% de las plantas industriales se verían forza-

[28] Con asistencia técnica del Banco Mundial se diseñó para la Federación Rusa un arancel uniforme para las importaciones.

das a cerrar. Gerashchenko, presidente del banco central, con el apoyo de Arkady Volsky, del Partido Unión Cívica, tomó la decisión (contra el consejo del FMI) de extender el crédito a las empresas estatales, recortando al mismo tiempo, drásticamente, los gastos en salud, educación y jubilaciones. Unión Cívica había planteado un "programa alternativo" en septiembre de 1992. A pesar de la subsiguiente sustitución de Yegor Gaidar como primer ministro, durante la crisis parlamentaria de diciembre de ese año, el programa de Unión Cívica nunca llegó a ponerse en práctica.

No obstante, a finales de 1992, el FMI había aceptado la posibilidad del "menos ortodoxo" enfoque de la centrista Unión Cívica antes de la dimisión de Gaidar. En palabras del representante del FMI residente en Moscú: "el FMI no está casado con Gaidar, tiene un enfoque económico similar pero trabajaremos con su sucesor".

A comienzos de 1993, la relación entre el gobierno y el parlamento desembocó en una confrontación abierta. El control legislativo sobre la política presupuestaria y monetaria del gobierno sirvió para debilitar la "ejecución suave" del programa del FMI. El parlamento había aprobado una legislación que desaceleraba la privatización de la industria estatal, establecía restricciones a los bancos extranjeros y limitaba la capacidad del gobierno para rebanar a los subsidios y los gastos sociales, como lo exigía el FMI.[29]

La oposición a las reformas había surgido principalmente desde el seno de las élites políticas dominantes, de la facción centrista moderada (que incluía a colaboradores anteriores de Yeltsin). Mientras que representaba una minoría dentro del parlamento, Unión Cívica (en la que participaba también la unión de industriales dirigida por Arcady Volsky) favorecía el desarrollo del capitalismo nacional, defendiendo al mismo tiempo un papel fuerte para el estado central. Los principales actores políticos en la confrontación de Yeltsin con el parlamento (esto es, Alexander Rutskoi y Ruslan Jasbulatov), por lo tanto, no pueden ser tildados de "comunistas de línea dura".

El gobierno no fue capaz de evitar completamente la promulgación de esas leyes. Ambos parlamentos se suspendieron por decreto presidencial el 21 de septiembre de 1993.

[29] El banco central estaba bajo la jurisdicción del parlamento. A principios de septiembre de 1993, se alcanzó un acuerdo por el que el banco central respondería tanto al gobierno como al parlamento.

ABOLICIÓN DEL PARLAMENTO EN NOMBRE DE LA "GOBERNABILIDAD"

Dos días después, el 23 de septiembre, Michel Camdessus, director general del FMI, señaló que la segunda partida de un préstamo de tres mil millones de dólares para el rubro STF del FMI no sería desembolsado porque "Rusia no había cumplido con sus compromisos", en gran medida a causa de la usurpación parlamentaria. (El préstamo STF es similar en forma a los préstamos de ajuste estructural negociados con los países endeudados del tercer mundo; véase el capítulo 2.)

En la Cumbre de Vancouver de abril de 1993, el presidente Clinton declaró que la "ayuda" occidental estaba vinculada a la puesta en práctica de una "reforma democrática". Las condiciones fijadas por el FMI y los acreedores occidentales, sin embargo, sólo podían satisfacerse suspendiendo completamente el parlamento (práctica no infrecuente en muchos países endeudados del tercer mundo). Así, el ataque a la Casa Blanca por tropas de élite y morteros de artillería principalmente, estuvo dirigido a neutralizar a los disidentes políticos entre las filas de la nomenklatura tanto en Moscú como en las regiones, y a librarse de los individuos que se oponían a las reformas al estilo del FMI.

El G-7 había respaldado el decreto del presidente Yeltsin que abolía ambos parlamentos antes de su promulgación formal, y sus embajadas en Moscú habían sido avisadas con anticipación. El decreto presidencial del 21 de septiembre estuvo seguido inmediatamente por una oleada de decretos destinados a acelerar el paso de la reforma económica y satisfacer las condiciones contenidas en el acuerdo crediticio del FMI, firmado por el gobierno ruso en mayo: rápidamente, el crédito fue asegurado y las tasas de interés aumentaron, se adoptaron medidas para agilizar el ritmo de la privatización y la liberalización del comercio. En palabras del ministro de Finanzas Boris Fyodorov, ahora libre del control parlamentario: "podemos hacer pasar cualquier presupuesto que queramos".[30]

El momento para el decreto del presidente Yeltsin estuvo bien elegido: el ministro de Finanzas de Yeltsin, Boris Fyodorov, tenía programado acudir a la reunión de los ministros de finanzas del G-7 el 25 de septiembre; el ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Kosyrev, estaba en Washington para encontrarse con el presi-

[30] Citado en *Financial Times*, 23 de septiembre de 1993, p. 1.

CUADRO 16.1 ESCÁNDALO EN EL PARLAMENTO RUSO.
CRONOLOGÍA MACROECONÓMICA (*septiembre-octubre de 1993*)

Septiembre 13	El presidente Yeltsin vuelve a llamar a Yegor Gaidar al gobierno.
Septiembre 20	Las embajadas del G-7 reciben el anuncio de la suspensión del parlamento.
Septiembre 21	Boris Yeltsin disuelve el parlamento y deroga la constitución.
Septiembre 22	Mensajes de apoyo a Boris Yeltsin de los miembros del G-7
Septiembre 23	Michel Camdessus, director del FMI, declara que no están en marcha las reformas económicas de Rusia.
	Una oleada de decretos económicos es iniciada por Yegor Gaidar.
Septiembre 24	Tropas y policías antimotines rodean la Casa Blanca.
Septiembre 25	El ministro de Finanzas Boris Fyodorov se reúne con sus homólogos del G-7.
Septiembre 28	La reunión anual del FMI y el Banco Mundial se celebra en Washington; Boris Fyodorov se reúne con Michel Camdessus.
	Una misión de economistas del FMI está en Moscú para supervisar los progresos de las reformas económicas.
Octubre 1	Fecha límite para la decisión del FMI concerniente al préstamo en espera.
Octubre 4	Ecándalo en la Casa Blanca.
	Decisión del FMI (basada en el informe de la misión económica) de retrasar los desembolsos del préstamo.
Octubre 5	Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón apoyan la decisión de Yeltsin de aplastar la rebelión del parlamento.
	Purgas masivas de los opositores de Yeltsin comienzan en Moscú y en las provincias.
Octubre 8	Encuentro del Club de Londres en Frankfurt para ocuparse de la renegociación de la deuda de Rusia con los bancos comerciales.
Octubre 12	Boris Yeltsin llega a Tokio.
Octubre 14	El precio de la pieza de pan aumenta de 100 a 300 rublos.

FUENTE: *Financial Times*, septiembre y octubre de 1993, varios números.

dente Clinton; la reunión anual del FMI-Banco Mundial estaba programada para comenzar en Washington el 28 de septiembre, y el 1 de octubre fue señalado como fecha límite para decidir sobre el préstamo otorgado en el marco de un acuerdo de derecho de giro del FMI, antes de la celebración, en Frankfurt, de la reunión del Club de Londres de acreedores de la banca comercial (presidida por el Deutsche Bank), el 8 de octubre. Y el 12 de octubre el presidente Yeltsin debía viajar a Japón para iniciar las negociaciones sobre el destino de cuatro islas Kuriles, a cambio del alivio de la deuda y de "ayuda" japonesa.

Luego de la suspensión del parlamento, el G-7 expresó "su muy fuerte esperanza de que los últimos acontecimientos ayudarían a Rusia a dar un paso decisivo en la senda de las reformas del mercado".[31] El ministro de finanzas alemán, Theo Wagel, dijo que "los dirigentes rusos deben dejar claro que las reformas económicas van a continuar, o perderán la ayuda financiera internacional". Michel Camdessus expresó su esperanza de que los sucesos políticos en Rusia contribuirían a "acelerar el proceso de la reforma económica".

Pero a pesar del estímulo occidental, el FMI todavía no estaba preparado para dar a Rusia la "luz verde": Viktor Gerashchenko, presidente del banco central y partidario de Unión Cívica, formalmente seguía teniendo el control de la política monetaria; una misión del FMI que viajó a Moscú a fines de septiembre de 1993 (durante lo más duro de la revuelta parlamentaria) había advertido a Michel Camdessus que "los planes ya anunciados por el gobierno para recortar los subsidios y controlar los créditos eran insuficientes".[32]

El impacto de los decretos económicos de septiembre de 1993 fue casi inmediato: la decisión de liberalizar aún más los precios de la energía y de aumentar las tasas de interés sirvieron al objetivo de empujar rápidamente a grandes sectores de la industria rusa a la bancarrota. Con la desregulación de Rosjliebprodukt, la compañía estatal distribuidora de pan, a mediados de octubre de 1993, los precios del pan aumentaron tres o cuatro veces de la noche a la mañana.[33] Vale la pena subrayar que esta "segunda oleada" de empobrecimiento del pueblo ruso ocurría luego de una reducción de

[31] *Ibid.*, p. 1.

[32] Según el *Financial Times*, 5 de octubre de 1993.

[33] Véase Leyla Boulton, "Russia's breadwinners and losers", *Financial Times*, 13 de octubre de 1993, p. 3.

aproximadamente un 86% en el poder de compra en 1992.[34] Puesto que todos los subsidios se financiaban con el presupuesto estatal, el dinero ahorrado podía ser reorientado hacia el servicio de la deuda externa rusa (siguiendo instrucciones del FMI).

La reforma del sistema fiscal, propuesta por el ministro de Finanzas Boris Fyodorov tras el golpe de septiembre de 1993, seguía la fórmula del Banco Mundial impuesta a los países del tercer mundo. Exigía la "autonomía fiscal" para las repúblicas y gobiernos locales recortando el flujo de ingresos desde Moscú hacia las regiones y desviando los recursos financieros del estado central hacia el reembolso a los acreedores. Las consecuencias de estas reformas fueron el colapso fiscal, la balcanización económica y política, y un control perjudicial del capital occidental y japonés sobre las economías de las regiones rusas.

"AYUDA OCCIDENTAL" A BORIS YELTSIN

Para 1993, las reformas habían conducido a un saqueo masivo de la riqueza rusa que derivó en una salida significativa de los recursos reales: el déficit de la balanza de pagos, en ese año, era del orden de 40 mil millones de dólares, aproximadamente el volumen de la "ayuda" (43 mil millones de dólares) prometida por el G-7 en su Cumbre de Tokio en 1993. Pero la mayor parte de esta "ayuda" occidental era ficticia: se daba principalmente en forma de préstamos (más que de ayuda subvencionada) que servían para el propósito "útil" de engrosar la deuda externa de Rusia (del orden de 80 mil millones de dólares) y fortalecer el control de los acreedores occidentales sobre la economía rusa.

Rusia estaba siendo manipulada por los acreedores en forma muy parecida a un país del tercer mundo: de un total de 43.4 mil millones de dólares, que habían sido prometidos en 1993, menos de tres mil millones de dólares fueron efectivamente desembolsados.

[34] Chris Doyle, *The distributional consequences of Russia's transition*, documento de discusión núm. 839, Centre for Economic Policy Research, Londres, 1993. Este cálculo coincide con la evaluación del autor de los movimientos de precios de bienes de consumo básicos durante el periodo diciembre de 1991-octubre de 1992. Las estadísticas oficiales (que son groseramente manipuladas) reconocen un desplome del 56% en el poder de compra desde mediados de 1991.

Además, el acuerdo alcanzado con el Club de París en cuanto a la renegociación de la deuda oficial rusa, aunque "generoso" a primera vista, en realidad ofrecía a Moscú un "espacio de respiro muy breve".[35] Sólo la deuda contraída durante la era soviética sería renegociada;[36] las grandes deudas contraídas por el gobierno de Yeltsin estaban excluidas de estas negociaciones (irónicamente sobre todo como resultado de las reformas económicas).

Con respecto a los compromisos bilaterales, el presidente Clinton ofreció solamente 1.6 mil millones de dólares en la Cumbre de Vancouver en 1993, 970 mil millones en forma de créditos, sobre todo para comprar alimentos a los agricultores estadunidenses, y 630 millones eran atrasos de los pagos rusos por granos de Estados Unidos que debían financiarse con el "programa de alimentos para el progreso" del Departamento de Agricultura estadunidense, poniendo así a Rusia al mismo nivel que los países del África subsahariana que reciben ayuda alimentaria estadunidense bajo el PL 480. De forma similar, el grueso de la "ayuda" bilateral a Rusia eran fondos destinados a la "seguridad de las compañías japonesas" que estaban invirtiendo en ese país.[37]

EN LA CAMISA DE FUERZA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

La eliminación de la oposición parlamentaria en septiembre de 1993 tuvo como resultado un giro inmediato en la estrategia de la negociación de la deuda de Moscú con los bancos comerciales. Una vez más la coordinación era de importancia crítica. Ninguna "solicitud escrita", ni nada por escrito sobre la deuda comercial rusa, exigió el equipo negociador ruso en las reuniones de Frankfurt del Club de Londres, que se celebraron a principios de octubre de

[35] La cantidad elegible para la reestructuración referente a la deuda oficial contraída antes de enero de 1991 (17 mil millones de dólares). Dos mil millones se debían en 1993, 15 mil millones fueron renegociados por 10 años con un periodo de gracia de cinco años.

[36] Sólo las deudas contraídas antes de la fecha límite (enero de 1991) habían de ser renegociadas; 15 de los 17 mil millones fueron renegociados, dos mil millones se debían al Club de París en 1993.

[37] Véase *Wall Street Journal*, Nueva York, 12 de octubre de 1993, p. A17. Véase también Allan Saunderson, "Legal wrangle holds up Russian debt deal", *The European*, 14-17 de octubre de 1993, p. 38.

1993, apenas cuatro días después de la borrascosa reunión de la Casa Blanca. Según el trato propuesto, la fecha de reconocimiento sería pospuesta temporalmente, 24 de los 38 mil millones de dólares de la deuda comercial se renegociarían. Todas las condiciones del Club de Londres fueron aceptadas por el equipo negociador ruso, con excepción de la negativa de Rusia a renunciar a su "inmunidad soberana a la acción legal". Esta renuncia habría permitido a los bancos acreedores embargar las empresas estatales rusas y confiscar bienes físicos si no se satisfacían las obligaciones del servicio de la deuda. Para los bancos comerciales, esta cláusula no era en absoluto una formalidad: con la caída de la economía rusa, una balanza de pagos en crisis, las obligaciones acumuladas del servicio de la deuda debidas al Club de París, Rusia estaba siendo empujada hacia una "moratoria técnica", esto es, a una situación de *incumplimiento de facto*.

Los acreedores extranjeros también habían contemplado mecanismos para convertir las reservas de divisas rusas (en el banco central, así como los depósitos en dólares en los bancos comerciales rusos) en servicio de deuda. También tenían puestos los ojos en los depósitos en divisas en cuentas bancarias de rusos en el extranjero.

La medicina económica del FMI no sólo estaba diseñada para imponer las obligaciones del servicio de la deuda, sino también para "ampliar la deuda". Las reformas contribuyeron a paralizar la economía nacional, creando con ello una mayor dependencia del crédito externo. Por su parte, el *incumplimiento* de la deuda estaba preparando el camino hacia una nueva fase crítica en las relaciones de Moscú con sus acreedores. Con la apariencia de un régimen servil y sumiso tercermundista, el estado ruso estaba atrapado en la camisa de fuerza de la deuda y el ajuste estructural: los gastos estatales se recortan brutalmente con el fin de liberar fondos estatales para pagar a los acreedores.

EL DERRUMBE DE LA SOCIEDAD CIVIL

A medida que la crisis se agravaba, la población estaba cada vez más aislada y era más vulnerable. La "democracia" había sido instalada formalmente pero los nuevos partidos políticos, divorciados de las masas, tomaban más en consideración los intereses de los comer-

DEVASTACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA GRAN REGIÓN SIBERIANA DEL NORTE DE RUSIA

A consecuencia de la austeridad fiscal, Moscú ha recortado drásticamente sus aportaciones presupuestarias a la vasta región septentrional de Siberia, que comprende alrededor del 70% del área total del país. Se trata de un territorio abierto que produce una gran parte del petróleo y del gas natural del país, el cien por ciento de los diamantes y la mayoría de las otras piedras preciosas. Las medidas de austeridad han provocado una reducción drástica de los envíos de combustibles y bienes de consumo necesarios para sus once millones de habitantes.

Según Alexander Nazarov, gobernador del Distrito Autónomo de Chukotsky, en el extremo nororiental de Rusia, sólo se ha recibido la mitad de los fondos que Moscú ha desembolsado para pagar los embarque anuales hacia las zonas remotas. Al borde de la catástrofe, la región entera se ha convertido en una nueva frontera, a merced de compañías petroleras y mineras extranjeras.

ciantes y los burócratas. El impacto sobre el empleo del programa de privatización fue devastador: para 1993, más del 50% de las plantas industriales habían sido empujadas a la bancarrota.[38] Además, ciudades enteras en los Urales y en Siberia, pertenecientes al complejo militar-industrial y dependientes de créditos y adquisiciones estatales estaban en proceso de clausurarse. En 1994 (según cifras oficiales), los trabajadores de unas 33 mil empresas endeudadas, incluyendo corporaciones industriales del estado y granjas colectivas, no estaban recibiendo salarios sobre una base regular.[39]

La tendencia no era únicamente hacia el empobrecimiento continuado y el desempleo masivo, una fractura mucho más profunda de la trama social rusa estaba ocurriendo, aunada a la destrucción de sus instituciones y la posible ruptura de la Federación Rusa. Los diseñadores de las políticas del G-7 deberían evaluar cuidadosamente las consecuencias de sus acciones, en interés de la paz mundial. Los riesgos globales, geopolíticos y de seguridad son de largo alcance: la adopción continuada del paquete económico del FMI significa el desastre para Rusia y para Occidente.

[38] El Banco Mundial recomendó al gobierno "fraccionar" las grandes empresas, es decir, dividirlas en entidades más pequeñas.

[39] Véase *Financial Times*, 1 de agosto de 1994, p. 11.

17

EL DESMANTELAMIENTO DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA; LA RECOLONIZACIÓN DE BOSNIA-HERZEGOVINA

Mientras las tropas de Estados Unidos y la OTAN, armadas con equipo pesado, imponían la paz en Bosnia, la prensa y los políticos describían la intervención de Occidente en la antigua Yugoslavia como una respuesta noble, aunque dramáticamente retrasada, al surgimiento de las masacres étnicas y violaciones a los derechos humanos. Después de los acuerdos de paz en Dayton, en noviembre de 1995, Occidente deseaba a toda costa retocar su autorretrato como el salvador de los eslavos del sur y continuar con "el trabajo de reconstruir" los nuevos "estados soberanos".

Conforme al patrón ya mencionado, la opinión pública fue hábilmente manipulada. La sabiduría convencional ejemplificada en los escritos del ex embajador de Estados Unidos en Yugoslavia, Warren Zimmermann, afirmaba que el problema de los Balcanes era el surgimiento de un "nacionalismo agresivo", resultado inevitable de tensiones étnicas y religiosas cuyos antecedentes históricos databan de tiempo atrás.[1] De igual manera, se dio gran difusión al "juego de poder en los Balcanes" y al choque de personalidades políticas: "Tudjman y Milosevic están despedazando a Bosnia-Herzegovina."[2]

Perdidas entre el cúmulo de imágenes y análisis autoadulatorios subyacen las causas económicas y sociales del conflicto. La profunda crisis económica que antecedió a la guerra civil ya se había olvidado. No se mencionan los intereses estratégicos de Alemania y Estados Unidos para sentar las bases de la desintegración de Yugoslavia, como tampoco el papel de los acreedores externos y las instituciones financieras internacionales. A los ojos de los medios del mundo, los poderes occidentales no tienen responsabilidad del

[1] Véase, por ejemplo, el texto escrito por el ex embajador Warren Zimmermann, "The last ambassador, a memoir of the collapse of Yugoslavia", *Foreign Affairs*, vol. 74, núm. 2, 1995.

[2] Para comentarios, véase Milos Vasic, *et al.*, "War against Bosnia", *Vreme News Digest Agency*, 13 de abril de 1992.

empobrecimiento y la destrucción de un país de 24 millones de personas.

Mediante el predominio del sistema financiero global, los poderes occidentales que perseguían intereses estratégicos nacionales y colectivos ayudaron a someter a la economía yugoslava y atizaron aún más los conflictos étnicos y sociales. No obstante, ahora los estados sucesores de Yugoslavia, devastados por la guerra, podrán sentir la inefable bondad de la comunidad financiera internacional.

En tanto el mundo observaba los movimientos de tropas y los altos al fuego, las instituciones financieras internacionales se ocupaban de cobrar la deuda externa de los estados derivados de Yugoslavia y transformaban a los Balcanes en un paraíso para la libre empresa. Con el acuerdo de paz en Bosnia, firmado bajo la amenaza de las armas de la OTAN, a finales de 1995, Occidente desplegó un programa de "reconstrucción" que despojaba al maltratado país de su soberanía de manera tal como no se había visto en Europa desde finales de la segunda guerra mundial. Este programa consistía en dividir el territorio bosnio bajo la ocupación militar de la OTAN y la administración de Occidente.

BOSNIA NEOCOLONIAL

A partir de los acuerdos de Dayton, que crearon una "constitución" bosnia, Estados Unidos y sus aliados europeos instalaron una administración colonial absoluta en Bosnia, a la cabeza de la cual quedó el alto representante, Carl Bildt, ex primer ministro sueco y representante de la Unión Europea en las negociaciones de paz de Bosnia,[3] a quien se le concedieron todas las facultades en asuntos civiles, con preponderancia incluso sobre los gobiernos tanto de la Federación Bosnia como de la República Srpska (Bosnia serbia). Para dejar las cosas en claro, los acuerdos especificaban que *"el alto representante es la autoridad final* in situ *en lo relativo a la interpretación de los acuerdos"*.[4] Debía trabajar con el Alto Mando de la fuerza mi-

[3] Testimonio de Richard C. Holbrooke, subsecretario de Estado, Oficina de Asuntos para Europa y Canadá, ante el Comité de Apropiaciones del Senado, Subcomité de Operaciones Internacionales, Washington, 19 de diciembre de 1995.

[4] Acuerdos de Paz de Dayton, acuerdo sobre el alto representante, artículos I y II, 16 de diciembre de 1995.

litar multinacional (IFOR), así como con acreedores y donadores.

El Consejo de Seguridad de la ONU también designó a un "comisionado" que reportaría al alto representante para manejar una fuerza policiaca civil.[5] El oficial de la policía irlandesa, Peter Fitzgerald, con amplia experiencia en servir de policía a las Naciones Unidas en Namibia, El Salvador y Camboya, encabezaría a unos 1700 policías de 15 países. Una vez firmados los Acuerdos de Dayton en noviembre de 1995, la fuerza policiaca internacional fue despachada a Bosnia después de un entrenamiento de cinco días en Zagreb.[6]

La nueva "constitución", incluida como apéndice en los Acuerdos de Dayton, dejaba las riendas de la política económica a las instituciones de Bretton Woods así como al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), con sede en Londres. El FMI tenía facultades para designar al primer gobernador del banco central de Bosnia quien, al igual que el alto representante, "no deberá ser ciudadano de Bosnia y Herzegovina, ni de ningún estado vecino".[7]

Bajo la regencia del FMI, se le prohibió al banco central desempeñar las funciones propias de este tipo de institución: "Durante los primeros seis años... no podrá otorgar crédito creando dinero, operando en este sentido como un comité de divisas."[8] Tampoco se permitía a Bosnia tener su propia moneda —emitir papel moneda únicamente cuando contara con el respaldo de monedas extranjeras— como tampoco movilizar sus recursos internos. Desde el principio se le negó la capacidad de autofinanciar su reconstrucción mediante una política monetaria independiente.

Mientras que el banco central quedaba bajo la custodia del FMI, el EBRD encabezaba la "Comisión de empresas públicas" la cual, desde 1966, supervisa las operaciones de todas las empresas del sector público en Bosnia, incluyendo energía, agua potable, servicio postal, telecomunicaciones y transporte. El presidente del EBRD designa al presidente de la comisión y se encarga de la reestructuración del sector público, por ejemplo, la venta de activos de propiedad gubernamental o social, y el suministro de fondos de inversión de largo plazo.[9] Los acreedores occidentales crearon el EBRD con el propósi-

[5] Acuerdos de Paz de Dayton, acuerdo sobre la fuerza policiaca, artículo II.

[6] De acuerdo con una afirmación de las Naciones Unidas, Nueva York, 5 de enero de 1996. Véase también *Seattle Post Intelligencer*, 16 de enero de 1996, p. A5.

[7] Acuerdos de Paz de Dayton, acuerdo sobre el marco general, artículo VII.

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*, acuerdo sobre empresas públicas, artículo I.

to explícito de "dar al otorgamiento de crédito una dimensión eminentemente política".[10]

Y mientras Occidente proclamaba su apoyo a la democracia, el poder político real se encontraba en manos de un "estado" bosnio paralelo, cuyos puestos ejecutivos están ocupados por individuos que no son ciudadanos. Los acreedores occidentales han incluido sus intereses en una constitución redactada a toda prisa en su beneficio. Y lo han hecho sin una asamblea constitucional ni consultas con las organizaciones de ciudadanos bosnios. Sus planes de reconstruir Bosnia parecen más adecuados a saciar a los acreedores que a satisfacer siquiera las necesidades básicas de la población bosnia. La neocolonización de Bosnia fue un paso lógico de los esfuerzos occidentales para deshacer el experimento yugoslavo de "socialismo de mercado" y la autogestión de los trabajadores, y de imponer el dictado del "libre mercado".

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Yugoslavia socialista y multiétnica fue alguna vez una potencia industrial y un éxito económico. Durante los dos decenios previos a 1980, el PIB anual crecía 6.1% en promedio, el servicio médico era gratuito y el índice de analfabetismo de 9%; la esperanza de vida era de 72 años.[11] Sin embargo, tras un decenio de mediación occidental y un decenio de desintegración, guerra, boicot y embargos, las economías de la antigua Yugoslavia se encontraban postradas y el sector industrial, desmantelado.

La implosión de Yugoslavia se debió en parte a maquinaciones de Estados Unidos. Pese a la no alineación de Belgrado y las amplias relaciones comerciales con la Comunidad Europea y Estados Unidos, Reagan consideraba a la economía yugoslava un "secreto sumamente delicado" en una directiva de seguridad nacional (NSDD 133) emitida en 1984, titulada "Política estadunidense con relación a Yugoslavia". Una versión censurada, desclasificada en 1990 y publicada en 1982, retomaba la NSDD 64 con relación a Europa orien-

[10] "Stabilizing Europe", *The Times,* Londres, 22 de noviembre de 1990.

[11] Banco Mundial, *World Development Report 1991,* anexo estadístico, cuadros 1 y 2, Washington, 1991.

tal. Proponía "redoblar esfuerzos para promover una 'revolución silenciosa' con el fin de derrocar a los gobiernos y partidos comunistas" y reintegrar a los países de Europa oriental a una economía de mercado.[12]

Ya con anterioridad Estados Unidos se había sumado a la lista de acreedores internacionales de Belgrado para imponer una primera ronda de reformas macroeconómicas en 1980, poco antes de la muerte del mariscal Tito. Esa ronda inicial de reestructuraciones sentó las bases.

Las tendencias secesionistas, alimentadas por las divisiones sociales y étnicas, cobró ímpetu justamente durante un periodo de gran empobrecimiento de la población yugoslava. Las reformas económicas "provocaron estragos económicos y políticos... crecimiento más lento, acumulación de deuda exterior y, especialmente, el costo de servirla así como la devaluación provocaron un descenso en el nivel de vida de la población promedio en Yugoslavia... La crisis económica amenazaba la estabilidad política... y agravaba las tensiones étnicas en surgimiento".[13]

Estas reformas, acompañadas por la firma de los acuerdos de reestructuración de la deuda con acreedores gubernamentales y comerciales, también debilitaron las instituciones de los estados federados, creando divisiones políticas entre Belgrado y los gobiernos de las repúblicas y provincias autónomas. "El primer ministro [federal] Milka Planinc, quien supuestamente debía llevar a cabo el programa, debía prometer al FMI un aumento inmediato de las tasas de descuento, entre múltiples medidas impuestas por la política económica de Reagan..."[14] Durante el decenio de 1980, el FMI y el Banco Mundial se encargaron de prescribir periódicamente dosis adicionales de su amarga medicina económica mientras la economía yugoslava caía lentamente en coma.

Desde el inicio, diversos programas patrocinados por el FMI aceleraron la desintegración del sector industrial yugoslavo. A partir de la fase inicial de la reforma macroeconómica en 1980, el crecimiento industrial cayó a 2.8% en el periodo 1980-1987, para desplomarse a cero en el periodo 1987-1988 y a una cifra negativa de -10% en

[12] Sean Gervasi, "Germany, the U.S., and the Yugoslav crisis", *Covert Action Quarterly,* núm. 43, invierno de 1992-1993, p. 42.

[13] *Ibid.*

[14] Dimitrije Boarov, "A brief review of anti-inflation programs, the curse of dead programs", *Vreme New Digest Agency*, núm. 29, 13 de abril de 1992.

1990.[15] Este proceso se acompañó de un desmantelamiento gradual del estado benefactor yugoslavo, con todas las consecuencias sociales predecibles. Mientras tanto, los acuerdos de reestructuración incrementaron la deuda externa y la devaluación obligada de la moneda afectó aún más el nivel de vida de los yugoslavos.

EL SEÑOR MARKOVIC VIAJA A WASHINGTON

En el otoño de 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín, el primer ministro yugoslavo Ante Markovic se reunió en Washington con el presidente George Bush con el propósito de puntualizar las negociaciones para un nuevo paquete de ayuda financiera. A cambio de la asistencia, Yugoslavia debía instrumentar reformas económicas aún más drásticas, incluyendo otra devaluación de la moneda, nuevo congelamiento de salarios, recortes agudos en el gasto público y la eliminación de empresas de propiedad social o sindical.[16]

La nomenklatura de Belgrado, con ayuda de asesores de Occidente, había sentado las bases para la misión de Markovic al instrumentar de antemano muchas de las reformas exigidas, incluyendo una liberalización en gran escala de la legislación sobre inversión extranjera.

La "terapia de choque" comenzó en enero de 1990. Si bien la inflación había erosionado los ingresos, el FMI ordenó que los salarios se congelaran al nivel que tenían a mediados de noviembre de 1989. Los precios seguían escalando sin límite y los salarios reales se colapsaron 41% en los primeros seis meses de 1990.[17]

El FMI también tomó el control *de facto* del banco central de Yugoslavia. Su estricta política monetaria mermó aún más la capacidad del país para financiar programas económicos y sociales. Los ingresos del erario que debían haberse destinado a pagar a las repúblicas se emplearon para servir la deuda de Belgrado con los clubes de París y Londres. Las repúblicas quedaron a merced de sus propios recursos. El paquete económico se lanzó en enero de 1990 bajo un acuerdo provisional con el FMI y un préstamo de ajuste estructural

[15] Banco Mundial, "Industrial restructuring study: Overview, issues, and strategy for restructuring", Washington, D.C., junio de 1991, pp. 10, 14.

[16] Gervasi, *op. cit.*, p. 44.

[17] Banco Mundial, "Industrial restructuring study", *op. cit.*, p. viii.

del Banco Mundial (SAL II). Debido a los recortes presupuestales que exigían redirigir los ingresos federales al servicio de la deuda, Belgrado suspendió los pagos que debía hacer a los gobiernos de las repúblicas y provincias autónomas.

De golpe, los reformadores orquestaron el colapso final de la estructura fiscal federal de Yugoslavia e hirieron de muerte a sus instituciones políticas. Al cortar las arterias financieras entre Belgrado y las repúblicas, las reformas impulsaron tendencias secesionistas que atizaron los factores económicos y las divisiones étnicas, asegurando la secesión *de facto* de las repúblicas. La crisis presupuestaria inducida por el FMI creó una realidad económica que sentó las bases para la secesión formal de Croacia y Eslovenia en junio de 1991.

APLASTADO POR UNA MANO INVISIBLE

Las reformas exigían que los acreedores de Belgrado también dieran el golpe final al corazón del sistema de empresas de propiedad social o sindical de Yugoslavia. Como comentara un observador, "el objetivo era someter a la economía yugoslava a una privatización masiva y al desmantelamiento del sector público". "La burocracia del Partido Comunista, especialmente el sector militar y de inteligencia, fue sometida a un riguroso análisis y se le ofreció respaldo político y económico con la condición de que cortara de tajo la protección a los trabajadores yugoslavos."[18] Se trataba de una oferta que Yugoslavia no podía rehusar dado su grado de desesperación. En 1990, el índice de crecimiento anual del PIB se había desplomado a -7.5%. Y en 1991, declinó aún 15% más, y la producción industrial 21 por ciento.[19]

El programa de reestructuración diseñado por los acreedores de Belgrado pretendía abrogar el sistema de empresas de propiedad social. La ley de empresas de 1989 pedía la abolición de las Organizaciones de Base de Sindicatos Asociados (Basic Organizations of Associated Labor [BOAL]), unidades productivas autogestionarias de propiedad social, que se regían por el Consejo de Trabajadores. La

[18] Ralph Schoenman, "Divide and rule schemes in the Balkans", *The Organizer,* San Francisco, 11 de septiembre de 1995.

[19] Judit Kiss, "Debt management in Eastern Europe", *Eastern European Economics*, mayo-junio de 1894, p. 59.

ley de empresas de 1989 exigía la transformación de estas organizaciones de base en empresas privadas de tipo capitalista, y que se sustituyera al Consejo de Trabajadores por el llamado "consejo social" que estaría controlado por los propietarios de la empresa, incluidos los acreedores.[20]

REVISIÓN DEL MARCO LEGAL

Asesorados por abogados y consultores occidentales, se agregaron a la legislación textos sustentatorios. La ley de operaciones financieras de 1989 debía desempeñar un papel crucial en la orquestación del colapso del sector industrial de Yugoslavia, ya que proporcionaría un mecanismo "equitativo" al que se denominó "mecanismo impulsor transparente" que dirigiría a las supuestas empresas "insolventes" a la quiebra o a la liquidación. Otra ley relacionada llamada la ley de pagos, bancarrotas y liquidación forzosos pretendía salvaguardar los "derechos de los acreedores" e inició los procedimientos de quiebra, lo cual les permitió apropiarse y/o liquidar los activos de las empresas deudoras.[21]

La anterior ley de inversión extranjera de 1988 permitía la entrada irrestricta de capital extranjero, no sólo en el sector industrial, sino también en el bancario, de seguros y de servicios. Antes de que entrara en vigor esta ley, la inversión extranjera estaba limitada a coinversiones con las empresas de propiedad social.[22] A su vez, la ley sobre la circulación y administración del capital social de 1989 así como la ley de capital social de 1990 autorizaba la desinversión de empresas de propiedad social, incluyendo su venta a capital extranjero. La ley de capital social también preveía la creación de "agencias de reestructuración y recapitalización", cuya función era organizar la "valuación" de los activos de las empresas antes de privatizarlas. Al igual que en Europa del Este y la antigua Unión Soviética, empero, la valuación de activos se basaba en el "valor en libros" expresado en moneda local. Y este valor

[20] Véase Barbara Lee y John Nellis, *Enterprise reform and privatization in socialist economies*, Banco Mundial, Washington D.C., 1990, pp. 20-21.

[21] Para más detalles, véase Banco Mundial, *Yugoslavia, Industrial Restructuring*, p. 33.

[22] Banco Mundial, *Yugoslavia, industrial restructuring*, p. 29.

contable tendía a ser tan exorbitantemente bajo que aseguraba la venta de activos de propiedad social a precios irrisorios. Hacia 1990, Eslovenia y Croacia ya habían establecido su propio borrador de leyes de privatización.[23]

La agresión a la economía socialista también incluía una nueva legislación bancaria cuyo propósito era la liquidación de bancos asociados de propiedad social. En dos años, más de la mitad de los bancos del país habían desaparecido, fueron sustituidos por "instituciones independientes orientadas a generar ingresos" de reciente creación.[24] Para 1990, todo el "sistema bancario de tres niveles" que constaba del Banco Nacional de Yugoslavia, los bancos nacionales de las ocho repúblicas y provincias autónomas y los bancos comerciales, había sido desmantelado bajo la dirección del Banco Mundial. En junio de ese año se estableció una Agencia Federal para la Rehabilitación de Aseguradoras y Bancos, a la cual se asignó la tarea de reestructurar y "reprivatizar" los bancos reestructurados bajo la supervisión del Banco Mundial,[25] un proceso que debía llevarse a cabo en un plazo de cinco años. También se promovió el desarrollo de intermediarios financieros no bancarios, incluidas firmas de corretaje, empresas de asesoría de inversiones y aseguradoras.

EL PROGRAMA DE QUIEBRAS

Las industrias se catalogaron con gran cuidado. Conforme a las reformas auspiciadas por el FMI y el Banco Mundial, el crédito al sector industrial fue congelado con vistas a acelerar el proceso de quiebra. Ya se habían establecido los llamados "mecanismos de salida" de acuerdo con lo previsto en la ley de operaciones financieras de 1989.[26] Conforme a esta nueva ley, si un negocio no podía pagar sus deudas durante 30 días calendario, o durante 30 días en un plazo de 45 días, el gobierno podría iniciar el proceso de quiebra en los siguientes 15 días. Este mecanismo permitía a los acreedores —incluidos los bancos nacionales y extranjeros— convertir sus créditos en participación mayoritaria en la empresa insolvente. El gobierno no podía intervenir, y en caso de

[23] *Ibid.*, p. 23.
[24] *Ibid.*, p. 38.
[25] *Ibid.*, p. 39.
[26] *Ibid.*, p. 33.

que no se llegara a un acuerdo, se iniciaría el proceso de quiebra y los trabajadores no recibirían indemnización.[27]

En 1989, de acuerdo con fuentes oficiales, 248 empresas fueron llevadas a la quiebra o liquidadas y 89 400 empleados fueron despedidos.[28] Durante los primeros nueve meses de 1990 que siguieron a la adopción del programa del FMI, 889 compañías más, con una fuerza laboral combinada de 525 000 trabajadores, fueron sometidas al proceso de quiebra.[29] En otras palabras, en menos de dos años, el llamado "mecanismo impulsor" del Banco Mundial —incluido en la ley de operaciones financieras— había provocado el despido de 614 000 personas, de una fuerza laboral total de 2.7 millones. Las mayores concentraciones de despidos y compañías en quiebra se dieron en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Kosovo.[30]

Varias empresas de propiedad social intentaron evitar la bancarrota dejando de pagar salarios. Medio millón de trabajadores, que representaban alrededor de 20% de la fuerza laboral, no recibieron salario durante los primeros meses de 1990 para que pudieran satisfacerse las exigencias de los acreedores conforme al "acuerdo" estipulado en la ley de organizaciones financieras. Los salarios reales se reducían constantemente, los programas sociales se cancelaron y, ante la quiebra de grandes industrias, el subempleo se extendió, creando en la población el sentimiento de desesperanza social.

El paquete auspiciado por el FMI que se puso en marcha en enero de 1990 contribuyó a incrementar las pérdidas de las empresas y a precipitar a la quiebra a varias de las grandes compañías de energía, maquinaria, ingeniería, químicos y refinerías de petróleo. Para colmo con la desregulación del régimen comercial, el flujo de mercancías importadas contribuyó a desestabilizar aún más la producción nacional. Esas importaciones se financiaron con préstamos otorgados dentro del marco del paquete del FMI —por ejemplo, los diversos *"préstamos de desembolso rápido"* que contaban con el visto bueno del FMI, del Banco Mundial y de donadores bilaterales— para apoyar las reformas económicas. Si bien la bonanza de las importaciones aumentaba la deuda externa de Yugoslavia, las intempestivas alzas a las tasas de interés y al precio de los insumos aceleraron el

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.,* p. 34. Datos proporcionados por la Secretaría Federal de Industria y Energía. Del número total de empresas, 222 se fueron a la quiebra y 26 fueron liquidadas.

[29] *Ibid.,* p. 33. Estas cifras incluyen quiebra y liquidación.

[30] *Ibid.,* p. 34.

desplazamiento y la exclusión de los productores nacionales de su propio mercado nacional.

ELIMINACIÓN DE TRABAJADORES SUPERFLUOS

Durante los meses que precedieron a la secesión de Croacia y Eslovenia —mediados de 1991— la situación (confirmada por las cifras de quiebras de 1989 a 1990) subraya la magnitud y brutalidad del proceso de desmantelamiento industrial. No obstante, las cifras proporcionan apenas un pálido bosquejo de lo que era la situación al inicio del "programa de quiebras" que siguió a toda marcha en los estados sucesores de Yugoslavia durante los años posteriores a los acuerdos de Dayton.

El Banco Mundial ha estimado que todavía en septiembre de 1990, de un total de 7 531 empresas, 2 435 "perdían dinero".[31] Esto significa que esas 2 435 compañías, cuya fuerza laboral combinada ascendía a más de 1.3 millones de trabajadores, habían sido calificadas de "insolventes" conforme a lo previsto en la ley de operaciones financieras, lo cual requería la instrumentación inmediata del proceso de quiebra. Si recordamos que ya se había despedido a 600 000 trabajadores antes de septiembre de 1990, estas cifras sugieren que aproximadamente 1.9 millones de trabajadores —de un total de 2.7 millones— se consideraron "excedentes". Las empresas insolventes, que se concentraron en los sectores de energía, industria pesada, metales, silvicultura y textiles, se contaban entre las más grandes del país y representaban 49.7% del total de la fuerza laboral industrial que aún seguía empleada.[32]

En los inicios de 1991, los salarios reales iban en picada, se cancelaron los programas sociales y el desempleo era generalizado. El desmantelamiento de la economía industrial resultaba sorprenden-

[31] *Ibid.,* p. 13, anexo 1, p. 1.

[32] Una misión del BM calculó que la "mano de obra excedente" era del orden de 20% de la fuerza laboral total que ascendía a 8.9 millones, esto es, aproximadamente 1.8 millones de personas. Esta cifra es muy inferior al número real de trabajadores que resultaron redundantes con base en la categorización de empresas "insolventes". Tan sólo en el sector industrial, se despidió a 1.9 millón de trabajadores en septiembre de 1990, de 2.7 millones que estaban empleados en compañías clasificadas por el Banco Mundial como insolventes. Véase Banco Mundial, *Yugoslavia, industrial restructuring*, anexo 1.

te por su magnitud y sus efectos sociales y políticos, aun cuando no son fácilmente cuantificables, fueron tremendos. El presidente yugoslavo Borisav Jovic advirtió que las reformas "estaban mostrando efectos sumamente desfavorables" en la sociedad... Los ciudadanos han perdido la fe en el estado y sus instituciones... Mientras más se agrava la crisis económica, crecen las tensiones sociales, con resultados importantes en el deterioro de la seguridad política".[33]

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA DESINTEGRACIÓN

Algunos yugoslavos se unieron para librar una fútil batalla en contra de la destrucción de su economía y sistema político. Como descubrió un observador, la "resistencia de los trabajadores cruzaba fronteras étnicas ya que serbios, croatas, bosnios y eslovenios se movilizaron, hombro con hombro con sus compañeros trabajadores".[34] Empero, la lucha económica también agudizó las tensiones entre las repúblicas, y entre éstas y Belgrado.

Serbia rechazó abiertamente el plan de austeridad, y unos 650 000 trabajadores serbios hicieron una huelga contra el gobierno federal para obligarlo a aumentar los salarios.[35] El resto de las repúblicas siguió caminos diferentes y, en ocasiones, contradictorios.

En Eslovenia, una república relativamente rica, por ejemplo, los líderes secesionistas como el diputado del partido socialdemócrata, Joze Pucnik, apoyó las reformas: "Desde un punto de vista económico, no puedo dejar de estar de acuerdo con medidas que resultarán socialmente perjudiciales para nuestra sociedad, tales como el creciente desempleo y la eliminación de los derechos de los trabajadores, ya que son necesarias para promover el proceso de reforma económica."[36]

No obstante, Eslovenia se unió a otras repúblicas para manifestar su inconformidad de que el gobierno federal restringiera su autono-

[33] British Broadcasting Service, "Borisav Jovic tells SFRY assembly situation has dramatically deteriorated", 27 de abril de 1991.

[34] Schoenman, *op. cit.*

[35] Gervasi, *op. cit.,* p. 44.

[36] Federico Nier Fischer, "Eastern Europe: Social Crisis", *Inter Press Service*, 5 de septiembre de 1990.

mía económica. Tanto el líder croata Franjo Tudjman como el serbio Slobodan Milosevic se unieron a los líderes eslovenos en contra de los intentos de Belgrado de imponer reformas duras incitadas por el FMI.[37]

Durante las elecciones multipartidistas de 1990, la política económica se convirtió en el centro del debate político y las coaliciones separatistas expulsaron a los comunistas de Croacia, Bosnia y Eslovenia. Justo cuando el colapso económico incitaba a la ruptura y la escisión, ésta, a su vez, exacerbaba la crisis económica. La cooperación entre las repúblicas quedó prácticamente interrumpida y la lucha de todas contra todas embarcó al país en una espiral descendente.

El proceso se desbocó, ya que los líderes republicanos deliberadamente propiciaban divisiones sociales y económicas para fortalecerse. "Las oligarquías republicanas, cada una de las cuales imaginaba un 'renacimiento nacional', en lugar de elegir entre un mercado genuinamente yugoslavo y la hiperinflación, optaron por una guerra que disfrazaría las verdaderas causas de la catástrofe económica."[38]

La aparición simultánea de milicias leales a los líderes secesionistas apresuró la debacle y el caos. Estas milicias —financiadas secretamente por Estados Unidos y Alemania— y su escalada de atrocidades, no sólo dividieron a la población en grupos étnicos sino fragmentaron el movimiento de los trabajadores.[39]

"LA AYUDA DE OCCIDENTE"

Las medidas de austeridad habían sentado las bases de la recolonización de los Balcanes, aunque los poderes occidentales aún debatían si era necesaria la ruptura de Yugoslavia. Alemania impulsaba la secesión en tanto que Estados Unidos se mostraba reticente a abrir una caja de pandora nacionalista, por lo cual originalmente abogó por mantener Yugoslavia.

A partir de la victoria decisiva de Franjo Tudjman y la Unión De-

[37] Klas Bergman, "Markovic seeks to keep Yugoslavia one nation", *Christian Science Monitor,* 11 de julio de 1990, p. 6.

[38] Dimitrue Boarov, "Brief review of anti-inflation programs: The curse of the dead programs", *Vreme News Digest Agency,* 13 de abril de 1992.

[39] *Ibid.*

mocrática de derecha en Croacia en mayo de 1990, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, quien se mantenía en contacto casi diario con su homólogo en Zagreb, dio el visto bueno a la secesión de Croacia.[40] Alemania no apoyó la secesión de manera pasiva; "aceleró el paso de la diplomacia internacional" y presionó a sus aliados occidentales a que reconocieran a Eslovenia y Croacia. Alemania intentó tener manos libres para "conseguir el predominio económico en toda Europa central".[41]

Washington, por su parte, "favorecía cierta unidad y alentaba la democracia... [El secretario de estado] Baker le comunicó a Tudjman y a [el presidente de Eslovenia] Milan Kucan que Estados Unidos no apoyaría una secesión unilateral... y que si debían apartarse, tenían que hacerlo mediante un acuerdo negociado".[42] Entre tanto, el Congreso estadunidense aprobó la ley de apropiación/consignación de operaciones internacionales (Foreign Operations Appropriations) de 1991 que cortaba toda la asistencia financiera a Yugoslavia. En realidad, la CIA alguna vez comentó que esta ley era "una sentencia de muerte" para Yugoslavia,[43] y tuvo razón cuando predijo que "seguiría una guerra sangrienta".[44] La ley también exigía que el FMI y el Banco Mundial congelaran el crédito a Belgrado. Y el Departamento de Estado insistió en que las repúblicas yugoslavas —también consideradas entidades políticas *de facto*— "defendieran procesos electorales independientes antes de que se les siguiera brindando ayuda".[45]

RECONSTRUCCIÓN DE POSGUERRA Y LIBRE MERCADO

Después de los acuerdos de Dayton, firmados en noviembre de 1995, los acreedores occidentales volvieron su atención a los "estados sucesores" de Yugoslavia. La deuda exterior del país había sido puntualmente dividida y asignada a las repúblicas sucesoras, que

[40] Gervasi, *op. cit.*, p. 65.
[41] *Ibid.,* p. 45.
[42] Zimmerman, *op. cit.*
[43] Jim Burkholder, "Humanitarian intervention? Veterans for peace", sin fecha <www.veteransforpeace.org>.
[44] *Ibid.*
[45] *Ibid.*

quedaron estranguladas con los convenios independientes de reestructuración de deuda y el programa de ajuste estructural.[46]

El consenso entre donantes y organismos internacionales era que las anteriores reformas macroeconómicas impuestas a la Yugoslavia federal no habían cumplido con su meta, por lo cual se necesitaba una terapia de choque más agresiva para restaurar la "salud económica" a los países sucesores de Yugoslavia. Croacia, Eslovenia y Macedonia habían aceptado paquetes de préstamos para pagar su parte de la deuda yugoslava que exigía la consolidación del proceso iniciado con el programa de quiebras de Ante Markovic. El conocido patrón de cierre de plantas, quiebras bancarias inducidas y empobrecimiento ha seguido inalterado desde 1996. ¿Y quién llevaría a cabo los dictados del FMI? Los líderes de los nuevos estados soberanos, que han colaborado con los acreedores.

En Croacia, Franjo Tudjman fue obligado a firmar en 1993, en el clímax de la guerra civil, un acuerdo con el FMI. A cambio de créditos frescos que se destinarían principalmente al servicio de la deuda exterior de Zagreb, Franjo Tudjman aceptó llevar a cabo más cierres de plantas y quiebras, empujando los salarios a niveles abismalmente bajos. El índice oficial de desempleo aumentó de 15.5% en 1991 a 19.1% en 1994.[47]

Zagreb también había instituido una ley de quiebras mucho más rígida, al igual que el proceso de "desmembramiento" de las grandes empresas de servicios públicos. De acuerdo con su "carta de intención" a las instituciones de Bretton Woods, el gobierno croata prometía reestructurar y privatizar el sector bancario con el apoyo del EBRD y el Banco Mundial. Este último también exigió un mercado de capital croata estructurado, que aumentaría la penetración de los inversionistas institucionales y compañías de corretaje occidentales.

Dentro del acuerdo firmado en 1993 con el FMI, no se le permitía al gobierno de Zagreb movilizar sus recursos productivos mediante una política fiscal y monetaria. Éste se encontraba bajo el control de los acreedores externos, y los drásticos recortes presupuestales que exigía el acuerdo impedían la posibilidad de una re-

[46] En junio de 1995, el FMI, en representación de los bancos acreedores y del gobierno occidental, propuso redistribuir la deuda de la siguiente manera: Serbia y Montenegro 36%, Croacia 28%, Eslovenia 16%, Bosnia-Herzegovina 16% y Macedonia 5 por ciento.

[47] "Zagreb's about turn", *The Banker*, enero de 1995, p. 38.

construcción después de la guerra. Sólo podría llevarse a cabo con créditos frescos, un proceso que contribuyó a alimentar la deuda externa de Croacia hasta bien entrado el siglo XXI.

Macedonia había seguido un camino económico bastante similar al de Croacia. En diciembre de 1993, el gobierno de Skopje estuvo de acuerdo en comprimir los salarios reales y congelar el crédito con el propósito de obtener un préstamo con Systemic Transformation Facility (STF) del FMI. En un giro inusual, el magnate de los negocios George Soros participó en el grupo de apoyo internacional formado por el gobierno de los Países Bajos y el Banco de Pagos Internacionales, asentado en Basilea. No obstante, el dinero proporcionado por el grupo de apoyo no se destinaría a la "reconstrucción" sino a que Skopje pagara viejas deudas vencidas al Banco Mundial...[48]

Peor aún, a cambio de reestructurar la deuda, el gobierno del primer ministro macedonio Branko Crvenkovski tuvo que aceptar la liquidación de las pocas empresas "insolventes" que aún quedaban y despedir a todos los trabajadores "excedentes" —lo cual incluía a los empleados de la mitad de las industrias del país. Como observara con toda seriedad el subsecretario de Finanzas, Hari Kostov, las astronómicas tasas de interés derivadas de las reformas bancarias auspiciadas por los donadores, "hacían literalmente imposible encontrar una compañía en el país que pudiera cubrir sus costos".[49]

En términos generales, la terapia económica que el FMI recetó en Macedonia era una continuación del "programa de quiebras" lanzado entre 1989 y 1990 en la Yugoslavia federal. Se pusieron a la venta en el mercado accionario los activos más lucrativos de Macedonia, pero esta subasta de empresas de propiedad social desembocó en el colapso industrial y en un desempleo masivo.

Entre tanto el capital global aplaudía. Pese a la naciente crisis en la seguridad y a su diezmada economía, en 1996 el ministro de Finanzas de Macedonia Ljube Trpevski le informó orgullosamente a la prensa que "el Banco Mundial y el FMI consideran a Macedonia uno de los países más exitosos en relación con las reformas vigentes hacia la transición".[50]

[48] Véase Banco Mundial, *Macedonia financial and enterprise sector*, Public Information Department, 28 de noviembre de 1995.

[49] Declaración del viceministro de Finanzas de Macedonia, Hari Kostov, *MAK News*, 18 de abril de 1995.

[50] Servicio de información y de vinculación de Macedonia, *MILS News*, 11 de abril de 1995.

El líder de la misión del FMI en Macedonia, Paul Thomsen, estuvo de acuerdo. Afirmó que los "resultados del programa de estabilización eran impresionantes" y le dio particular crédito a la "eficiente política salarial" adoptada por el gobierno de Skopje. No obstante, sus negociadores insistieron en que, pese a los logros, era necesario hacer más recortes al presupuesto.[51]

LA RECONSTRUCCIÓN AL ESTILO COLONIAL

La intervención de Occidente afectaba seriamente la soberanía nacional de Bosnia. El gobierno neocolonial impuesto por los acuerdos de Dayton y apoyado por las armas de la OTAN aseguraron que el futuro de Bosnia se determinara en Washington, Bonn y Bruselas, y no en Sarajevo.

Al término de los acuerdos de Dayton, el gobierno bosnio estimó que los costos de reconstrucción ascenderían a 47 mil millones de dólares. Los donantes occidentales inicialmente ofrecieron tres mil millones en préstamos para reconstrucción, de los cuales sólo una parte fueron concedidos. Incluso, una gran porción del dinero fresco que llegó a Bosnia se destinó a financiar algunos de los costos civiles del despliegue militar del IFOR en la región, así como a pagar a los acreedores internacionales.[52]

Los créditos frescos pagarían la antigua deuda. El banco central de los Países Bajos generosamente proporcionó un "préstamo puente" por 37 millones de dólares para que Bosnia hiciera sus pagos atrasados al FMI, sin los cuales el organismo no le prestaría dinero fresco. Y por cruel que resulte, los tan ansiados créditos de la recién creada "ventanilla de emergencias" del FMI para "países que han pasado algún conflicto" no se utilizarán para la reconstrucción de la posguerra sino para pagar al banco central de los Países Bajos.[53] Las deudas se acumulan y muy poco dinero se destina a la reconstrucción de la maltrecha economía bosnia, devastada por la guerra.

[51] *Ibid.*

[52] Conforme a los términos de los acuerdos de Dayton (anexo 1-A), "el gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina proporcionará sin costo alguna las instalaciones que la OTAN requiera para la preparación y ejecución de la operación".

[53] "FMI to admit Bosnia on wednesday", *United Press International*, 18 de diciembre de 1995.

Y mientras la reconstrucción se sacrifica en el altar del repago de la deuda, los gobiernos y empresas occidentales muestran cada vez más interés en tener acceso a los recursos naturales estratégicos. Con el descubrimiento de reservas petrolíferas en la región, la partición de Bosnia entre la Federación de Bosnia-Herzegovina y la República Serbo-Bosnia de Srpska, dictada por los acuerdos de Dayton, ha cobrado nueva importancia. Documentos en poder de Croacia y Serbo-Bosnia indican el descubrimiento de yacimientos de carbón y petróleo en la ladera oriental de las Dinárides, una parte de los Alpes en Yugoslavia occidental retomada por el ejército croata apoyado por Estados Unidos en una de sus últimas incursiones contra los rebeldes serbo-bosnios de Krajina antes de los acuerdos de Dayton. Funcionarios bosnios informaron que varias empresas petroleras iniciaron actividades de exploración en Bosnia, entre ellas Amoco, con sede en Chicago.[54]

Pozos petroleros "sustanciosos" también se encontraron "en la parte de Croacia en poder de los serbios", en Tuzla, justo al otro lado del río Sava, donde se encuentra el cuartel general de la zona militar estadunidense.[55] Las operaciones de exploración prosiguieron durante la guerra, pero el Banco Mundial y las multinacionales que las realizaron no lo informaron a los gobiernos locales, supuestamente para impedir que tomaran acción para apoderarse de zonas potencialmente valiosas.[56]

Con su atención centrada en el pago de la deuda y la posible bonanza derivada de los energéticos, tanto Estados Unidos como Alemania dedicaron todos sus esfuerzos —apoyados con 70 mil efectivos de las tropas de la OTAN para "imponer la paz"— a administrar la partición de Bosnia de acuerdo con los intereses estratégicos y económicos de Occidente.

En tanto que los líderes locales y los intereses occidentales se reparten el botín de la antigua economía yugoslava, han atizado las divisiones socioeconómicas en la estructura misma de la partición. Esta fragmentación permanente de Yugoslavia por etnias reduce la posibilidad de que haya una resistencia unida de los yugos-

[54] Frank Viviano y Kenneth Howe, "Bosnia leaders say nation sit a top oil fields", *The San Francisco Chronicle*, 28 de agosto de 1995. Veáse también Scott Cooper, "Western aims in ex-Yugoslavia unmasked", *The Organizer*, 24 de septiembre.

[55] *Ibid.*

[56] *Ibid.*

lavos de diferentes orígenes étnicos en contra de la recolonización de su patria.

Nada novedoso. Como acotara sarcásticamente un observador, todos los líderes de los países sucesores de Yugoslavia han cooperado estrechamente con Occidente: "Los líderes actuales de las repúblicas yugoslavas son ex funcionarios del Partido Comunista y rivalizan por cumplir con las exigencias del Banco Mundial y el FMI, con el propósito de calificar para los créditos y las prebendas por el liderazgo."[57]

DE BOSNIA A KOSOVO

El descoyuntamiento político ha sido el patrón en las diversas etapas de la guerra de los Balcanes, desde la intervención militar inicial de la OTAN en Bosnia, en 1992, hasta el bombardeo de Yugoslavia por "motivos humanitarios", en 1999. Bosnia y Kosovo son etapas en la recolonización de los Balcanes. El patrón de intervención armada de la OTAN en Bosnia, conforme a los acuerdos de Dayton, se ha repetido en Kosovo a solicitud expresa de las Naciones Unidas de "mantener el orden".

En el Kosovo de la posguerra, el terror de estado y el "libre mercado" van de la mano. En estrecha consulta con la OTAN, el Banco Mundial analizó con el mayor cuidado las consecuencias de una posible intervención militar que terminara con la ocupación de Kosovo. Casi un año antes de la guerra, el BM realizó "simulacros" que "anticipaban la posibilidad de un escenario de emergencia a raíz de las tensiones en Kosovo",[58] lo cual sugiere que la OTAN ya había advertido al Banco Mundial sobre estas acciones, desde las primeras etapas del plan militar.

Mientras se realizaba el bombardeo, el Banco Mundial y la Comisión Europea recibieron el encargo especial de "coordinar la asistencia económica de los donantes para los Balcanes".[59] Los términos de referencia no excluían el que Yugoslavia recibiera apoyo de do-

[57] Schoenman, *op. cit*.

[58] *World Bank Development News,* Washington, 27 de abril de 1999.

[59] "World Bank group response to post conflict reconstruction in Kosovo: general Framework for an emergency assistance strategy", <www.worldbank.org/html/extdr/kosovo/kosovo st.htm>, sin fecha.

nadores. No obstante, se estipuló claramente que Belgrado podría recibir préstamos para la reconstrucción "una vez que cambiaran las condiciones políticas".[60]

Después de los bombardeos, se impusieron en Kosovo "reformas de libre mercado" que en gran medida repetían las cláusulas del acuerdo de Rambouillet el cual, a su vez, era una réplica de los acuerdos de Dayton impuestos en Bosnia. El artículo I (capítulo 4o.) del acuerdo de Rambouillet estipulaba que "La economía de Kosovo funcionará de acuerdo con los principios del libre mercado".

Junto con las tropas de la OTAN, el Banco Mundial envió a Kosovo un ejército de abogados y consultores, con la consigna de "crear un ambiente propicio" para el capital extranjero y asegurar la acelerada transición de Kosovo hacia una "economía de mercado boyante, abierta y transparente".[61] A su vez, el gobierno provisional encabezado por el Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) fue convocado por la comunidad donante para que "estableciera instituciones transparentes y sustentables".[62] En ningún momento, la "comunidad internacional" consideró que los notorios vínculos del KLA con el crimen organizado y el narcotráfico en los Balcanes fuese un obstáculo para instaurar la "democracia" y el "buen gobierno".

En el Kosovo ocupado por órdenes de la ONU, el KLA dejó la administración de empresas estatales y de servicios públicos en manos de personas cercanas. Los líderes del gobierno provisional de Kosovo se convirtieron en "corredores" del capital multinacional, comprometidos con entregar la economía kosovar a inversionistas extranjeros, a precios de remate.

Entre tanto, los bancos estatales de Yugoslavia que operaban en Pristina fueron cerrados. El marco alemán fue adoptado como moneda de uso corriente y prácticamente todo el sistema bancario de Kosovo se dejó en manos del Commerzbank A.G, que tomó el control total de las funciones de banca comercial de la provincia, incluyendo transferencias y transacciones en divisas.[63]

[60] *Ibid.*

[61] Banco Mundial, *The World Bank's role in reconstruction and recovery in Kosovo,* <www.worldbank.org/html/extdr/pb/pbkosovo.htm> sin fecha.

[62] *Ibid.*

[63] International Finance Corporation (IFCC), *International consortium backs Kosovo's first licensed bank,* <www.ifc.org/ifc/pressroom/Archive/2000/00_90/00_90.html>, comunicado de prensa, Washington, 24 de enero de 2000.

EN PODER DE LA RIQUEZA MINERAL DE KOSOVO

Bajo la ocupación militar de Occidente, los ricos recursos minerales y el carbón de Kosovo se remataron al capital extranjero. Antes de los bombardeos, los inversionistas occidentales tenían los ojos puestos en el enorme complejo minero de Trepca, "la propiedad más cotizada de los Balcanes, con un valor estimado de al menos cinco mil millones de dólares".[64] El complejo de Trepca no sólo incluye enormes reservas de cobre y zinc sino cadmio, oro y plata. Cuenta con varias fundiciones, 17 plantas para la afinación de metales, una planta de energía y la planta de baterías más grande de Yugoslavia. En el norte de Kosovo también había reservas estimadas de 17 mil millones de toneladas de carbón y lignito.

Apenas un mes después de que la OTAN ocupara Kosovo, Bernard Kouchner, quien encabezaba la misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) publicó un decreto en el que se estipulaba que la "UNMIK administrará toda la propiedad mueble e inmueble que se encuentre en el territorio de Kosovo, incluyendo las cuentas y cualquier otra propiedad de, o que esté registrada a nombre de la República Federal de Yugoslavia o la República de Serbia, o cualquiera de sus organismos".[65]

Con la mayor celeridad, apenas unos meses después de la ocupación militar, el Grupo Internacional sobre Crisis (ICG) un equipo de expertos apoyado por el financiero George Soros, publicó el documento "Trepca: una luz en el laberinto", en el cual le recomendaba a la UNMIK "quitarle el complejo minero de Trepca a los serbios tan pronto como fuese posible, explicando las razones para ello".[66] En agosto de 2000, "tropas de paz" fuertemente armadas ("protegidas con máscaras contra humos tóxicos") enviadas por Bernard Kouchner ocuparon la mina con el pretexto de que representaba un riesgo ambiental debido a la excesiva contaminación del aire.

Simultáneamente, las Naciones Unidas le habían confiado la gerencia del complejo de Trepca a un consorcio occidental. Uno de los accionistas era Morrison Knudsen International, ahora parte de

[64] *New York Times,* 8 de julio de 1998, reportaje de Chris Hedges.

[65] Citado en Diana Johnstone, *How it is done, taking over the Trepca mines: Plans and propaganda,* <www.emperors-clothes.com/articles/Johnstone/howitis.htm> Emperors Clothes, 28 de febrero de 2000.

[66] Véase Johnston, *op cit.* Para el informe del ICG, véase <www.emperors-clothes.com/articles/Johnstone/icg.htm>

Raytheon Engineering and Construction. El nuevo consorcio es Washington Group, una de las empresas de ingeniería y construcción más importantes del mundo, y uno de los principales contratistas de la Defensa estadunidense. Otros socios minoritarios son TEC-Ingenierie de Francia y Boliden Contech, de Suecia.

LA INSTAURACIÓN DE LA MAFIA EN EL GOBIERNO

Mientras el financiero George Soros invertía en la reconstrucción de Kosovo, la Fundación George Soros para una Sociedad Abierta había instalado una oficina en Pristina, creando la Fundación de Kosovo para una Sociedad Abierta (KOSF), como parte de su red de "fundaciones no lucrativas" en los Balcanes, Europa del Este y la antigua Unión Soviética. Conjuntamente con el fondo de ayuda para sociedades en conflicto del Banco Mundial, la KOSF proporcionaba "apoyo dirigido" para "el desarrollo de gobiernos locales, con el fin de que puedan atender a sus comunidades de manera transparente, justa y confiable".[67] Y dado que la mayoría de estos gobiernos locales se encuentran en manos del KLA, que tiene estrechos vínculos con el crimen organizado, es poco probable que el programa cumpla con el objetivo declarado.[68]

A su vez, la "amarga medicina" impuesta por los acreedores externos ha fomentado aún más una economía basada en el crimen –firmemente implantada en Albania– que se alimenta de la pobreza y el desmembramiento económico.

Dado que Albania y Kosovo son el centro del narcotráfico en los Balcanes, se espera que Kosovo pague sus deudas a los acreedores extranjeros lavando dinero. Los narcodólares se reciclarán para servir la deuda de Kosovo y para "financiar" los costos de la "reconstrucción". Por consiguiente, el lucrativo flujo de narcodólares asegura que los inversionistas extranjeros involucrados en el programa de "reconstrucción" obtengan rendimientos sustanciosos.

[67] Banco Mundial, KOSF y Banco Mundial, *World Bank Launches First Kosovo Project,* Washington <www.worldbank.org/html/extdr/extme/097.htm>, 16 de noviembre de 1999, comunicado de prensa núm. 2000/097/ECA.

[68] De los 20 millones de dólares presupuestados para este programa, únicamente un millón de dólares fueron proporcionados por el Banco Mundial.

¿ES EL NEOLIBERALISMO LA ÚNICA SALIDA POSIBLE?

Administrada en dosis variadas desde el decenio de 1980, la medicina económica neoliberal apoyada por la OTAN ha contribuido a destruir Yugoslavia. No obstante, los medios del mundo entero han tenido buen cuidado de pasarla por alto o negar su papel medular. En cambio, se han unido al coro de alabanzas al "libre mercado", como el único camino para reconstruir una economía devastada por la guerra. Los efectos sociales y políticos de la reestructuración económica en Yugoslavia se han borrado cuidadosamente de la memoria colectiva y los dogmáticos líderes de opinión afirman que son las divisiones culturales, étnicas y religiosas la única causa de la guerra y la desolación. En realidad, son consecuencia de un proceso mucho más profundo de fractura económica y política.

Esta falsa conciencia no sólo enmascara la verdad sino que nos impide reconocer acontecimientos históricos precisos. En última instancia, distorsiona las verdaderas fuentes del conflicto social. Y al aplicarse a la antigua Yugoslavia, ensombrece los fundamentos históricos de la unidad, la solidaridad y la identidad de los pueblos eslavos del sur que constituyen una sociedad multiétnica.

En los Balcanes, la vida de millones de personas está en riesgo. La reforma macroeconómica, combinada con la conquista militar y la "vigilancia de la paz" a cargo de las Naciones Unidas han destruido el modo de vida, convirtiendo el derecho al trabajo en una broma. Necesidades básicas como la comida y el techo han quedado fuera del alcance de muchos; se han degradado la cultura y la identidad nacional. En el nombre del capital global, se retrazaron fronteras y se reescribieron nuevos códigos legales; se destruyó la industria, así como los sistemas financiero y bancario, y se eliminaron los programas sociales. No se permitirá ninguna alternativa al capital global, ni el "socialismo de mercado" yugoslavo ni el "capitalismo nacional".

Esta página dejada en blanco al propósito.

VI

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Esta página dejada en blanco al propósito.

18

EL AJUSTE ESTRUCTURAL EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Prácticamente en todos los sectores de la economía occidental las fábricas están cerrando y despidiendo a sus empleados. Los productores agrícolas en Norteamérica y Europa occidental se enfrentan a una inminente quiebra. La reestructuración corporativa de las industrias aeroespacial e ingenieril, la reubicación de la producción automotriz hacia Europa oriental y el tercer mundo, el cierre de las minas de carbón inglesas... Esta recesión de la industria repercute en los servicios: desregulación y reducción de las principales aerolíneas, fracaso de las grandes compañías de comercio al por menor, desplome de los imperios de bienes raíces en Tokio, París y Londres y la caída del valor de la propiedad han llevado a una falta de pago de los préstamos que hace temblar al sistema financiero entero. En la época de Reagan y la Thatcher, la recesión estuvo caracterizada por varias oleadas de quiebras de pequeñas empresas, el cierre de bancos locales (por ejemplo, durante la crisis de los ahorros y préstamos en Estados Unidos) y una bonanza de fusiones corporativas que generaron el crash de la bolsa, el "lunes negro" del 19 de octubre de 1987. En los noventa, con la ola de megafusiones corporativas y la desregulación financiera, la crisis económica global entraba en una nueva fase que culminó en una descomposición financiera global...

DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO BENEFACTOR

En el meollo de la crisis en Occidente están los mercados de deuda pública, en los que diariamente se hacen transacciones por miles y miles de millones de dólares en bonos gubernamentales y certificados de tesorería. La acumulación de deuda pública de grandes proporciones ha dado "un punto de apoyo político" a los intereses fi-

nancieros y banqueros así como el poder para dictar políticas económicas y sociales a los gobiernos. Las instituciones crediticias ejercen una "vigilancia en la Unión Europea y en Norteamérica" (sin la intervención formal del FMI ni del Banco Mundial). Desde los noventa, las reformas macroeconómicas adoptadas en los países desarrollados contienen muchos de los ingredientes esenciales de los "programas de ajuste estructural" aplicados en el tercer mundo y Europa oriental. Cada vez más se espera que los ministros de finanzas rindan cuentas a las grandes instituciones de inversión y a los bancos comerciales. Se imponen objetivos para los déficit presupuestales. El estado benefactor está destinado a desaparecer.

Las deudas de las empresas paraestatales, las instituciones públicas, los gobiernos estatales, provinciales y municipales son cuidadosamente clasificadas y "tasadas" por los mercados financieros (por ejemplo, con las tasas de Moody's y de Standard and Poor). En 1995, la evaluación negativa de la deuda sueca fue crucial en la decisión de reducir los programas de servicio social, como las becas para los niños y los beneficios del seguro de desempleo que tomó el gobierno socialdemócrata minoritario.[1] La evaluación del crédito para la deuda pública de Canadá, también hecha por Moody's, fue el factor decisivo para despedir empleados públicos y cerrar hospitales provinciales. Las provincias canadienses (que carecen de financiamiento adecuado) se han visto obligadas a "adelgazar" los fondos para salud, educación y seguridad social. De igual forma, en los términos del programa canadiense de privatización, impuesto por Wall Street, muchas propiedades del estado fueron subastadas, junto con toda la red ferroviaria Canadian National (desarrollada desde el siglo XIX), que se vendió en los mercados de capital por la modesta suma de dos mil millones de dólares (un poco menos del precio que se pidió por la compra del consorcio cervecero Canadian Labatt).[2]

Semejante desmantelamiento del estado, con todo, no se ha limitado a la privatización de edificios públicos, aerolíneas, telecomunicaciones o ferrocarriles: el capital corporativo aspira a privatizar la educación y la salud y, a la larga, adquirir el control de todas las actividades apoyadas por el estado. En la definición de "inversión" de

[1] Véase Hugh Carnegy, "Moody's deals rating blow to Sweden", *The Financial Times*, Londres, 6 de enero de 1995, p. 16; y "Swedish cuts fail to convince markets", *The Financial Times*, Londres, 12 de enero de 1995, p. 2.

[2] Cifras en dólares canadienses, *La Presse*, Montreal, 6 de mayo de 1995, p. F2.

la OMC, las actividades culturales y artísticas, los deportes, los servicios comunitarios municipales, etc., están destinados a tranformarse en operaciones que produzcan dinero. De la misma manera, las corporaciones tienen toda la intención de adquirir el control del agua, la electricidad, las carreteras nacionales, las redes de calles y avenidas, los parques nacionales, etcétera.

LA CONVERSIÓN DE LA DEUDA PRIVADA

Desde principios de los ochenta, muchas de las deudas de las grandes corporaciones y de los bancos comerciales han sido convenientemente desaparecidas y transformadas en deuda pública. Este proceso de "conversión de deuda" es una característica central de la crisis: las pérdidas de los negocios y de la banca han sido sistemáticamente transferidas al estado. Durante el *boom* de las fusiones de fines de los ochenta, la carga de las pérdidas corporativas se transfisrió al estado por medio de la adquisición de empresas en quiebra. De esta manera era posible cerrarlas y contabilizarlas como pérdidas impositivas. Los "préstamos no cubiertos" de los bancos comerciales también fueron borrados y transformados en pérdidas previas al pago de impuestos. Los "paquetes de rescate" para corporaciones y bancos comerciales con dificultades se basaron en el principio de transferir la carga de las deudas corporativas a la hacienda estatal.

A su vez, los múltiples subsidios estatales, en lugar de estimular la creación de empleos, beneficiaron generalmente a las grandes corporaciones para financiar megafusiones, introducir tecnología que requiriera menos mano de obra y reubicar la producción en el tercer mundo. El estado no sólo cargó con los costos relativos a la reestructuración de las grandes corporaciones, sino que el gasto público contribuyó directamente a una mayor concentración de la propiedad y a una contracción significativa de la fuerza laboral industrial. La ola de quiebras de las empresas pequeñas y medianas y el despido de trabajadores (que también pagan impuestos) contribuyeron a la contracción significativa de los ingresos por impuestos.

HACIA LA REDUCCIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES

El desarrollo de un sistema de impuestos regresivo en alto grado tuvo repercusiones en el aumento de la deuda pública. Mientras que se redujeron los impuestos de los grandes negocios, los nuevos ingresos por impuestos con que contribuía la población asalariada (de ingresos bajos y medios) se canalizaron al servicio de la deuda pública.[3] El estado recogía impuestos de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, tenía que pagar "un tributo" (en forma de contribuciones y subsidios) a los grandes negocios.

Impulsada por las nuevas tecnologías bancarias, la huida de las utilidades corporativas a los paraísos fiscales de las Bahamas, Suiza, las islas Canal, Luxemburgo, etc., contribuyó aún más a exacerbar la crisis fiscal. Las islas Caimán, colonia de la corona británica en el Caribe, por ejemplo, es el quinto centro bancario del mundo (en cuanto a la magnitud de los depósitos, la mayoría de los cuales pertenece a empresas fantasmas o anónimas).[4] El crecimiento del déficit presupuestal en Estados Unidos, durante los ochenta y los noventa, está directamente relacionado con la evasión masiva de impuestos y la salida de utilidades corporativas no declaradas. A su vez, grandes cantidades del dinero que se deposita en las islas Caimán y las Bahamas (parte del cual está controlado por organizaciones criminales) se utilizan para financiar inversiones en negocios en Estados Unidos.

BAJO LA TUTELA POLÍTICA DEL CAPITAL FINANCIERO

Se ha echado a andar un círculo vicioso. Los receptores de las "contribuciones" se convirtieron en los acreedores del estado. La deuda pública emitida por la hacienda para financiar a los grandes negocios había sido adquirida por los bancos y las instituciones financie-

[3] En Estados Unidos la contribución de las corporaciones a los ingresos federales descendió de 13.8% en 1980 (incluidos los impuestos por ganancias inesperadas) a 8.3 en 1992. Véase *US Statistical abstract*, 1992.

[4] Cálculos de Jack A. Blum, en *Jornadas: drogas, desarrollo y estado de derecho*, Bilbao, octubre de 1994. Véase también Jack A. Blum y Alan Block, "Le blanchiment de l'argent dans les Antilles", en Alain Labrousse y Alain Wallon (eds.), *La planète des drogues*, Seuil, París, 1993.

ras, que también eran los receptores de los subsidios estatales. Situación más absurda no puede haber: el estado estaba "financiando su propio endeudamiento", las "contribuciones" gubernamentales se canalizaban hacia la compra de bonos y certificados de tesorería. El gobierno estaba aprisionado entre los grupos empresariales cabildeando por "contribuciones", por un lado, y sus acreedores financieros por el otro. Y como una gran porción de la deuda pública correspondía a las instituciones bancarias y financieras, a éstas les fue posible presionar a los gobiernos para tener mayor control de los recursos públicos en la forma de *más* contribuciones y subsidios...

LA "INDEPENDENCIA" ILUSORIA DEL BANCO CENTRAL

A mayor abundancia, los estatutos de los bancos centrales de muchos de los países de la OCDE se modificaron para satisfacer las exigencias de las élites financieras. Los bancos centrales son hoy "independientes" y están "protegidos de influencias políticas".[5] En la práctica, esto se traduce en que la tesorería nacional cada vez más está a merced de los acreedores comerciales privados. En concordancia con sus nuevos estatutos, el estado no puede recurrir al banco central para créditos. Según el artículo 104 del Tratado de Maastricht, por ejemplo, "el que el banco central otorgue créditos al gobierno es enteramente discrecional; no se puede obligar al banco central a otorgar semejante crédito".[6] Estos estatutos están diseñados para que la deuda pública de las instituciones bancarias y financieras aumente.

En la práctica, el banco central (que no rinde cuentas al gobierno ni a la legislatura) opera como una burocracia autónoma bajo la tutela de intereses financieros y bancarios privados. En Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal está controlado por unos cuantos bancos privados que son los accionistas de los doce bancos de reserva federal. En la Unión Europea, el banco central europeo, sito en Frankfurt, está controlado por los grandes bancos alemanes que son el Deutsche Bank y el Dresdner Bank (ahora fusionados en

[5] Véase Carlo Cottarelli, *Limiting central bank credit to the government*, FMI, Washington, 1993, p. 5.

[6] *Idem.*

un conglomerado único), junto con unos cuantos bancos europeos e instituciones financieras.

Lo que esto significa es que *ya no existe una política monetaria como medio de intervención* estatal; ésta está en manos de la banca privada. En comparación con la notoria escasez de fondos estatales y la incapacidad del estado para financiar los programas gubernamentales con políticas monetarias, "la creación de dinero" (que implica tener el control de los recursos reales) tiene lugar dentro de la red interna del sistema bancario internacional, que lo único que persigue es acrecentar la riqueza privada. Actores financieros poderosos no sólo tienen la habilidad para *crear* y mover dinero sin ninguna clase de impedimento, sino también de manipular las tasas de interés y precipitar la baja a las principales divisas, como en el caso de la caída espectacular de la libra esterlina en 1992. En la práctica, lo que esto significa es que los bancos centrales ya no tienen la capacidad para regular la creación de dinero en el interés mayor de la sociedad (por ejemplo, movilizar la producción o generar empleos).

CRISIS DEL ESTADO

Con el neoliberalismo, la democracia de la sociedad occidental está en aprietos: aquellos elegidos para los altos puestos públicos cada vez más son los títeres o burócratas que operan en nombre del establishment financiero. Los acreedores del estado se han convertido en los depositarios del poder político real y operan discretamente tras bambalinas. Al mismo tiempo, se ha desarrollado un discurso económico e ideológico uniforme. Un "consenso" alrededor de las reformas macroeconómicas recorre el espectro político entero. El destino de las políticas públicas se fragua en los mercados estadunidense y europeo; las opciones políticas se presentan mecánicamente con los mismos eslóganes económicos generales: "debemos reducir el déficit, debemos combatir la inflación"; "la economía se está sobrecalentando: ¡metan los frenos!"...

En Estados Unidos, demócratas y republicanos se han puesto de acuerdo; en la Unión Europea, los gobiernos "socialistas" (incluidos los Verdes, en Alemania) se han convertido en los protagonistas que administran "la medicina económica fuerte"... Socialdemócratas, neolaboristas y ex comunistas se han convertido en los servidores

fieles del establishment financiero. Su discurso "progresista" y sus vínculos con la mano de obra organizada han hecho que sean más "eficaces" en el recorte de los presupuestos sociales y el despido de trabajadores. Los socialdemócratas se han convertido en corredores políticos en nombre del establishment financiero más astutos y complacientes que sus homólogos liberales o conservadores.

Los intereses del establishment financiero, sobre todo en Estados Unidos, se han filtrado hacia los altos escalones del Tesoro y de las instituciones de Bretton Woods: Robert Rubin, ex secretario del Tesoro, era un alto funcionario de Goldman Sachs; Lewis Preston, antiguo presidente del Banco Mundial y uno de los principales ejecutivos de J.P. Morgan, fue sucedido por James Wolfenson, prominente inversionista de la banca en Wall Street.

Mientras que los financieros participan en política, antiguos políticos y funcionarios de alto nivel de las organizaciones internacionales tienen intereses financieros en la comunidad de negocios. Al dejar la presidencia de la OMC, Peter Sutherland se incorporó a Goldman Sachs, en Wall Street. Nicholas Brady, senador republicano durante la administración de Reagan y ex secretario del Tesoro durante la administración de Bush padre, se dedicó al lucrativo negocio de la banca de ultramar:

> Por intermediación de su compañía privada Darby Overseas, participa en un consorcio registrado de las islas Caimán. [Su compañía] va a invertir en el sector de la banca comercial de Perú, de la que se dice que está en alto riesgo y a la espera de un plan Brady para reprogramar su deuda... Darby Overseas fue fundada hace un año [1992] por Brady, su principal asistente en el Tesoro, Hollis McLoughlin, y Daniel Marx, [antiguo] subsecretario de finanzas de Argentina [...] Primer actor detrás del IFH, constituido para pujar por Interbanc, está Carlos Pastor, ministro de economía peruano a principios de los ochenta.[7]

Corrompido por conflictos de intereses, el sistema estatal occidental está en crisis a consecuencia de su relación ambigua con los intereses económicos y financieros privados. En estas condiciones, la práctica de la democracia parlamentaria se ha convertido en un ritual. El electorado no tiene alternativa. El neoliberalismo forma par-

[7] Sally Bowen, "Brady investment in Peru", *The Financial Times*, Londres, 22 de julio de 1994.

te integrante de la plataforma política de los principales partidos políticos. Como si se tratara de un estado de un solo partido, los resultados de las elecciones prácticamente no tienen ningún efecto en la actual conducta de las políticas económicas o sociales estatales...

19

SOBRECALENTAMIENTO FINANCIERO GLOBAL

Desde que se desplomó del sistema de tasas de cambio fijas de Bretton Woods, en 1971, se ha ido desarrollando en varias etapas un nuevo entorno financiero global. La crisis de la deuda de principios de los ochenta (que, a grandes rasgos, coincide con la época Reagan-Thatcher) desencadenó una ola de fusiones, compras de acciones y quiebras en las empresas. Estos cambios abrieron el camino a la consolidación de una nueva generación de financieros agrupados alrededor de bancos mercantiles, inversionistas institucionales, casas de bolsa, grandes aseguradoras, etc. En este proceso, las funciones de la banca comercial se han aglutinado con las de la banca de inversión y las de la bolsa.[1]

Al mismo tiempo que estos "administradores del dinero" juegan un papel importante en los mercados financieros, están, con todo, cada vez más alejados de las funciones empresariales en la economía real. Entre sus actividades (que con frecuencia evaden la regulación estatal) están la transacción especulativa de futuros productos básicos y derivados, y la manipulación de los mercados de divisas. Como actores financieros principales suelen tener participación en los "depósitos de dinero caliente" en los "mercados emergentes" de Latinoamérica, el sudeste asiático y Europa oriental, y no digamos en el lavado de dinero y el desarrollo de "bancos privados" especializados ("que asesoran a clientes adinerados") en los múltiples paraísos bancarios. Dentro de esta red financiera global el dinero transita a gran velocidad de un paraíso bancario al siguiente,

[1] En Estados Unidos, la división entre banca comercial y banca de inversión está regulada por la ley Glass-Steagal, promulgada en 1933 durante la gran depresión con la finalidad de asegurar la separación de la suscripción de garantías y los préstamos, para evitar conflictos de intereses e impedir el colapso de los bancos comerciales. La Asociación Bancaria señaló recientemente la importancia de modificar esta ley para permitir la plena integración de las bancas comercial y de inversión. Véase American Banking Association, Postura del Presidente, "New ball game in Washington", ABA *Banking Journal*, enero de 1995, p. 17.

en la forma intangible de transferencias electrónicas. Los negocios "legales" e "ilegales" están cada vez más entretejidos y se han acumulado enormes cantidades no registradas de riquezas privadas. Beneficiadas por la desregulación financiera, las mafias han ampliado su acción también hacia las esferas de la banca internacional.[2]

EL CRASH DE WALL STREET EN 1987

El "lunes negro" del 19 de octubre de 1987 tuvo lugar la caída de la bolsa de Nueva York más grande de la historia en un solo día, mucho mayor que la del 28 de octubre de 1929, origen de la caída de Wall Street y comienzo de la Depresión. En el desastre de 1987 hubo un descenso de 22.6% del valor de las acciones americanas durante la primera hora de transacciones de la mañana del lunes... La caída en picada de Wall Street hizo sudar frío al sistema financiero entero, arrastrando consigo los mercados accionarios europeo y asiático.

EL ESPECULADOR INSTITUCIONAL

Este crash de Wall Street, en 1987, sirvió para "limpiar la casa" y sólo pudieron sobrevivir los "más fuertes". Al despertar de la crisis, una gran concentración de poder había tenido lugar. Luego de estas transformaciones el "especulador institucional" surgió como un agente poderoso, haciendo sombra y, a veces minando los intereses de los negocios *bona fide*. Mediante una variedad de instrumentos, estos agentes institucionales se apropian de la riqueza de la economía real. Con frecuencia dictan el destino de las compañías que aparecen en las listas de la bolsa de Nueva York. Al estar completamente apartados de las funciones empresariales de la economía real, tienen el poder de precipitar a la quiebra a grandes corporaciones industriales.

[2] Para el análisis detallado del papel de las organizaciones delictivas en la banca y las finanzas véase Alain Labrousse y Alain Wallon (eds.), *La planète des drogues*, París, Seuil, 1993, y Observatoire Politique des Drogues, *La drogue, nouveau désordre mondial*, París, Hachette, col. Pluriel-Intervention, 1993.

En 1993, un informe del Bundesbank de Alemania ya había advertido contra el hecho de que el comercio de derivados podía "desencadenar reacciones en cadena y poner en peligro el sistema financiero en su totalidad".[3] Aunque comprometido con la desregulación financiera, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, Alan Greenspan, había advertido: "La legislación no basta para impedir que se repita la crisis de Barings en un mundo de alta tecnología en el que las transacciones se realizan con sólo apretar un botón."[4] Según Greenspan, "la eficiencia de los mercados globales tiene la capacidad de propagar errores en el sistema financiero a una velocidad mucho mayor que una generación atrás, y en formas desconocidas".[5] Lo que no le dijo a la opinión pública fue que estos "errores", resultantes de transacciones especulativas en gran escala, son el origen de la acumulación de riqueza privada en una medida nunca antes vista.

Hacia 1995 el movimiento diario de transacciones en divisas extranjeras (1.3 billones de dólares) rebasaba las reservas de divisas extranjeras oficiales del mundo, estimadas en 1.2 billones de dólares.[6] Dicho de otro modo, el control de las reservas de divisas extranjeras en manos de "especuladores institucionales" privados rebasa sobradamente la capacidad de muchos bancos centrales; ya sea que operen individual o colectivamente, éstos no pueden evitar la marea de la actividad especulativa.

EL DESCALABRO FINANCIERO DE 1997

La crisis de 1987 tuvo lugar en octubre. Casi el mismo día, pero diez años después, el lunes 27 de octubre de 1997, los mercados accionarios del mundo se zambulleron en una turbulenta actividad de compraventa. El índice Dow Jones cayó en picada 554 puntos, un 7.2% de su valor, por doceava ocasión en la historia de la bolsa de Nueva York.

[3] Citado en Martin Khor, "Baring and the search for a rogue culprit", *Third World Economics*, 108, 1-15 de marzo de 1995, p. 10.

[4] *Ibid.*

[5] *Bank for International Settlements Review*, 46, 1997.

[6] Martin Khor, "SEA currency turmoil renews concern on financial speculation", *Third World Resurgence*, 86, octubre de 1997, pp. 14-15.

CUADRO 19.1. BOLSA DE NUEVA YORK: LAS PEORES CAÍDAS EN UN SOLO DÍA
(promedio industrial Dow Jones, en porcentaje)

Fecha	*Baja (%)*
19 de octubre de 1987	-22.6
28 de octubre de 1929	-12.8
29 de octubre de 1929	-11.7
6 de noviembre de 1929	-9.9
12 de agosto de 1932	-8.4
26 de octubre de 1987	-8.0
21 de julio de 1933	-7.8
18 de octubre de 1937	-7.6
27 de octubre de 1997	-7.2
5 de octubre de 1932	-7.2
24 de septiembre de 1931	-7.1
31 de agosto de 1998	-6.4

FUENTE: Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange).

Los principales intercambios que tienen lugar en el mundo están interconectados las veinticuatro horas a través de la comunicación instántanea por computadora: la volatilidad de Wall Street se desparramó hacia los mercados europeo y asiático, penetrando rápidamente en todo el sistema financiero. Los mercados europeos cayeron en la confusión y ocasionaron fuertes pérdidas en las bolsas de Frankfurt, París y Londres. La bolsa de Hong Kong había perdido un 10.41% el jueves anterior ("el jueves negro" del 24 octubre), cuando los administradores de fondos mutualistas y de pensiones descargaron rápidamente, a precios bajos, grandes cantidades de valores de primer orden. El deslizamiento de la bolsa de Hong Kong continuaba imparable cuando la apertura de operaciones el lunes por la mañana: a la caída de 6.7% del lunes le siguió otra de 13.7% el martes. Ésta fue la mayor pérdida de puntos en la historia de Hong Kong.

El sobrecalentamiento de los mercados financieros en 1997 se vio agravado por los intercambios computarizados y la ausencia de regulación gubernamental. El sistema electrónico Superdot de la bolsa de Nueva York que organiza las órdenes, puede manejar (sin necesidad de hacer cola) más de 300 mil órdenes al día (375 por segundo, en promedio), lo que representa una capacidad de manejo diario de más de mil millones de acciones. Como su velocidad y su

REPETICIÓN DE LAS MEDIDAS ERRÓNEAS DE FINES DE LOS AÑOS VEINTE

Wall Street se inclinó peligrosamente hacia las transacciones volátiles durante los meses anteriores a su estrepitosa caída del 29 de octubre de 1929. El *laissez-faire* era la orden del día durante las administraciones de Coolidge y de Hoover. La posibilidad de un sobrecalentamiento nunca se había considerado seriamente. El profesor Irving Fisher, de la Universidad de Yale, había afirmado con autoridad que "no hay peligro de que ocurra una caída ni nada que se le parezca". La ilusión de prosperidad económica persistió durante varios años después del crac de Wall Street de octubre de 1929. En 1930, el mismo Fisher declaró confiado que "para el futuro inmediato, cuando menos, las perspectivas son brillantes". Según la prestigiosa Sociedad Económica de Harvard, "la actividad manufacturera [en 1930]... estaba definitivamente en camino de recuperarse" (citado en John Kenneth Galbraith, *The great crash*, 1929, Londres, Penguin).

volumen se habían decuplicado desde 1987, el peligro de inestabilidad financiera era significativamente mayor.

Diez años antes, al día siguiente del crac de 1987, Wall Street advirtió al Tesoro de Estados Unidos que no interfiriera en los mercados financieros. Liberadas de la intromisión del gobierno, las bolsas de Nueva York y de Chicago pudieron establecer sus propios procedimientos regulatorios, que consistieron en gran medida en paralizar el programa computarizado de transacciones con los llamados "interruptores de circuito".[7]

En 1997, los interruptores de circuito probaron su total ineficacia para impedir sobrecalentamientos. El lunes 27 de octubre de 1997 un primer interruptor de circuito detuvo las transacciones durante 30 minutos, después de una caída de 350 puntos en el Dow Jones. Después de estos 30 minutos el pánico y la confusión se adueñaron de la situación; los corredores empezaron a vender grandes cantidades de acciones por debajo de su precio, cosa que contribuyó a la aceleración de la caída de los valores. Durante los siguientes 25 minutos, el Dow Jones bajó 200 puntos más, y se echó a andar un segundo interruptor de circuito, que puso fin a las transacciones del día en Wall Street.

[7] "Five years on, the crash still echoes", *The Financial Times*, 19 de octubre de 1992.

LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA ECONOMÍA APOYA LA DESREGULACIÓN FINANCIERA

¿Le suena conocida esta frase al lector? Al despertar del crac de 1997 prevalecía la misma autocomplacencia que durante el frenesí de fines de los veinte. Haciéndose eco palabra por palabra de los eslóganes económicos de Irving Fisher (véase el recuadro anterior), la ortodoxia económica de hoy no sólo rechaza la existencia de una crisis económica sino que rechaza también flagrantemente la posibilidad de un sobrecalentamiento financiero. Según el premio Nobel Robert Lucas, de la Universidad de Chicago, las decisiones de los agentes económicos se basan en supuestas "expectativas racionales", desechando así la posibilidad de "errores de sistema" que podrían conducir al mercado accionario por la dirección incorrecta... Resulta irónico que precisamente en el momento en que los mercados financieros estaban sumidos en un torbellino, la Real Academia Sueca anunciara que otorgaría el Premio Nobel de Economía de 1997 a dos economistas estadunidenses, por su "original fórmula para la evaluación de opciones accionarias [y de derivados] que utilizaban ya miles de corredores e inversionistas" (esto es, una fórmula algebraica que usan generalmente los especuladores en el mercado accionario de fondos de compensación). (Véase Greg Burns, "Two Americans share Nobel in economics", *Chicago Tribune*, 15 de octubre de 1997.)

LA CRISIS EN ASIA

Desde el punto de vista histórico, la crisis de 1997-1998 fue mucho más devastadora y perjudicial que cualquier otra anterior. Tanto el mercado accionario como el de divisas se vieron afectados. A diferencia de las crisis de 1929 y 1987, la de 1997-1998 estuvo marcada por el constante derrumbamiento de los mercados de divisas y acciones. Una relación casi simbiótica entre estos dos mercados se había desarrollado: los "especuladores institucionales" no sólo manipulaban los precios de las acciones sino que también tenían la habilidad de despojar a los bancos centrales de las reservas en divisas extranjeras, socavando la soberanía de los gobiernos y desestabilizando economías nacionales enteras.

En el curso de 1997, la especulación con divisas en Tailandia, Indonesia, Corea, Malasia y Filipinas implicó la transferencia de miles de millones de dólares de las reservas de los bancos centrales hacia capitales privados. Diversos observadores han señalado la manipu-

lación deliberada de los mercados de acciones de capital y de moneda corriente por parte de la banca de inversión y las compañías de corretaje.[8] Irónicamente, las mismas instituciones financieras occidentales que saquearon los bancos centrales de esos países en desarrollo ofrecieron también "salir al rescate" de las autoridades monetarias del sudeste de Asia. ING Baring, por ejemplo, firma bien conocida por sus operaciones especulativas, ofreció generosamente suscribir un préstamo de mil millones de dólares al banco central de Filipinas, en julio de 1997. En los meses siguientes, la mayor parte de estas reservas prestadas fueron reapropiadas por los especuladores internacionales, cuando el banco central vendió grandes cantidades de dólares en el mercado de futuros, en un intento desesperado de apuntalar el peso.

"PESTE ECONÓMICA"

Los pronosticadores económicos y los economistas académicos, por igual, habían desechado el peligro de un descalabro económico, alegando "fuertes razones económicas". Los líderes del G-7 temían abrir la boca o actuar de manera que pareciera que estaban dando "señales equívocas". Los analistas de Wall Street seguían chapuceando sobre "correcciones del mercado", dando muestras de muy poca comprensión del panorama completo.

La caída en picada de la bolsa de Nueva York el 27 de octubre de 1997 se atribuyó, sin más, a las "economías estructuralmente débiles" del Sudeste asiático, hasta hacía poco llamadas "tigres asiáticos" y ahora, "mansos gatitos". La seriedad de la crisis financiera fue minimizada: Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, tranquilizó a Wall Street haciendo resaltar, definitivamente, "el carácter contagioso de las economías nacionales, que dispersan sus debilidades de un país a otro". Después de semejante veredicto (28 de octubre), el "consenso" entre los corredores de Manhattan y los académicos americanos (sin debate ni análisis) era que "Wall Street se había contagiado de la gripe de Hong Kong"...

[8] Philip Wong, miembro de la asamblea legislativa nombrada por Beijing, acusó a Morgan Stanley, firma de corretaje de Manhattan, de "vender el mercado" (véase "Broker cleared of manipulation", *Hong Kong Standard*, 1 de noviembre de 1999, p. 21).

LA CAÍDA DEL MERCADO ACCIONARIO EN 1998

A los pocos meses, en el incierto despertar de Wall Street al recuperarse de la "gripe asiática" de 1997 (principalmente espoleada por la fuga en pánico de las acciones japonesas), los mercados financieros retrocedieron hasta alcanzar de nuevo un dramático punto crucial en agosto de 1998, con la espectacular caída en picada del rublo ruso. El Dow Jones cayó 554 puntos el 31 de agosto de 1998, la segunda caída más grande en la historia de la bolsa de Nueva York que, en septiembre, arrastró a los mercados accionarios del mundo. Unas pocas semanas después, 2.3 trillones de dólares en "ganancias en papel" se habían evaporado del mercado accionario de Estados Unidos.

La caída libre del rublo, en agosto, empujó a la quiebra a los bancos comerciales más importantes de Moscú, dejando abierta la posibilidad de que el sistema financiero ruso fuera incautado por un puñado de bancos y casas de corretaje occidentales. Por otra parte, con la crisis, se presentó el peligro de una falta de pago generalizada de la deuda a los acreedores occidentales de Moscú, entre ellos los bancos Deutsche y Dresdner. Desde el comienzo de las reformas macroeconómicas, tras la primera administración de la "terapia de choque" del FMI, en 1992, bienes rusos con un valor de 500 mil millones de dólares –incluyendo plantas del complejo industrial militar, infraestructura y recursos naturales– fueron confiscados y transferidos a las manos de capitalistas occidentales. En la dura era posterior a la guerra fría, todo un sistema económico y social estaba siendo desmantelado.

DESREGULACIÓN FINANCIERA

Tras la tormenta, más que domeñar a los mercados financieros, Washington estaba pujando por la aceptación de modificaciones legislativas en el senado, que habrían de incrementar los poderes de los gigantes de los servicios financieros y sus fondos de compensación asociados. Con la aprobación de la ley de modernización financiera, en noviembre de 1999, a una semana escasa de la histórica Cumbre del Milenio que la OMC llevó a cabo en Seattle, los legisladores estadunidenses montaron el escenario para una desregula-

ción de grandes dimensiones del sistema bancario estadunidense.

Luego de largas negociaciones, se revocaron de un plumazo todas las restricciones regulatorias a los principales conglomerados bancarios de Wall Street. Con las nuevas reglas, ratificadas por el senado y aprobadas por el presidente Clinton, bancos comerciales, casas de bolsa, fondos de compensación, inversionistas institucionales, fondos de pensiones y aseguradoras pueden invertir libremente en los negocios de unos y otros, así como integrar plenamente sus operaciones financieras.

La legislación revocaba la ley Glass-Steagall de 1933, pilar del New Deal del presidente Roosevelt, impuesta como respuesta al clima de corrupción, manipulación financiera y "comercio confidencial" que condujo a la quiebra a más de cinco mil bancos, en los años posteriores a la caída de Wall Street en 1929.[9] El control efectivo de toda la industria de servicios financieros en Estados Unidos (incluyendo compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de garantía, etc.) había sido transferido a un puñado de conglomerados financieros —que también son los acreedores y accionistas de las compañías de tecnología de punta, de la industria de la defensa, de los principales consorcios petroleros y mineros, etc. Lo que es más, como signatarios de la deuda pública en los niveles federal, estatal y municipal, los gigantes financieros han reforzado su control de los políticos así como de la conducción de las políticas públicas.

El "supermercado financiero global" va a ser supervisado por los gigantes de Wall Street y las instituciones bancarias competidoras, borradas del panorama financiero. Los bancos estatales de Estados Unidos serán desplazados o adquiridos, lo que llevará a una cadena mortal de quiebras bancarias. Mientras tanto, los poderes supervisores de la Reserva Federal (cada vez más, bajo el yugo de Wall Street) han sido debilitados significativamente.

Libres de la regulación del gobierno, los gigantes financieros tienen la capacidad de estrangular los negocios locales en Estados Unidos y de dominar la economía real. En realidad, debido a la falta de competencia, las leyes también permiten a los gigantes de los servicios financieros establecer las tasas de interés como les plazca, pasando por encima del consejo de la Reserva Federal y tácitamente coludidos unos con otros.

[9] Véase Martin McLaughlin, "Clinton Republicans agree to deregulation of US banking system", World Socialist <www.wsws.org/index.shtml>, 1 de noviembre de 1999.

FRENESÍ DE FUSIONES

Una nueva era de intensa rivalidad financiera se ha ido desarrollando. El Nuevo Orden Mundial, en gran medida controlado por el capital financiero norteamericano, pretendía minimizar, a la larga, los conglomerados bancarios rivales de Europa occidental y Japón, así como cerrar alianzas estratégicas con un "club selecto" de gigantes bancarios alemanes e ingleses.

Con antelación a la adopción de la ley de modernización financiera de 1999, violando leyes anteriores, varias megafusiones bancarias (NationsBanks con BankAmerica y Citibank con el grupo Travelers) ya se habían realizado, con el sello de aprobación del consejo de la Reserva Federal. Citibank, el banco más grande de Wall Street, y Travelers Group Inc., el conglomerado de servicios financieros y de seguros (que también es dueño de Salomon Smith Barney, gran firma de corretaje), combinaron sus operaciones en 1998, al realizar una fusión de 72 mil millones de dólares.[10]

Se habían negociado también fusiones estratégicas entre bancos americanos y europeos, poniendo en el corazón del panorama financiero norteamericano a algunos de los jugadores europeos claves, como el Deutsche Bank AG (vinculado a Banker's Trust), Crédit Suisse (vinculado a First Boston). La Hong Kong Shanghai Banking Corporation, conglomerado de bancos con base en el Reino Unido (que ya había cerrado una asociación con Wells Fargo y Wachovia Corporation), adquirió el Republic New York Bank, del finado Edmond Safra, por nueve mil millones de dólares.[11]

Mientras tanto, los bancos europeos rivales, marginados del círculo exclusivo de Wall Street, andaban a la rebatiña tratando de competir dentro de un medio financiero global cada vez más "hostil". La Banque Nationale de París había adquirido la Société Générale de Banques y Paribas, con lo que pasó a formar parte de los bancos más grandes del mundo, y ahora aspira a "trasladarse en grande a Norteamérica".[12]

[10] *Ibid*.

[11] Véase *Financial Times*, 9 de noviembre de 1999, p. 21.

[12] Jocelyn Noveck, "Deal would create largest bank" <http://sun-sentinel.com>, 9 de marzo de 1999.

CONCENTRACIÓN SIN PRECEDENTES DE PODER FINANCIERO GLOBAL

Mientras que la ley de servicios financieros norteamericana de 1999 no elimina propiamente las barreras al movimiento libre de capitales que quedan, en la práctica faculta a los principales jugadores de Wall Street (Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Lehman Brothers, entre otros) para que alcancen una posición hegemónica en la banca global, de tal manera que supervisarán, y a la larga desestabilizarán a los sistemas financieros en Asia, América Latina y Europa oriental.

La desregulación financiera en Estados Unidos ha creado un ambiente que favorece una concentración nunca vista de poder financiero global. Por otra parte, ha sentado el ritmo de las reformas financieras y comerciales globales bajo los auspicios del FMI y de la OMC. Las cláusulas tanto del "acuerdo general sobre comercio y servicios" (GATS), como del "acuerdo sobre servicios financieros" (ASF), de la OMC, implican el rompimiento de los restantes impedimentos al movimiento del capital financiero, lo que es tanto como decir que Merrill Lynch o Deutsche-Bankers Trust pueden ir a donde les dé la gana, desatando la quiebra de la banca nacional de cualquier país y de sus instituciones financieras.

En la práctica, este proceso ya ha tenido lugar en un gran número de países en vías de desarrollo, gracias a los programas de quiebras y de privatizaciones impuestos según los casos por las instituciones de Bretton-Woods (véase el capítulo 21). Dicho de otro modo, los megabancos han penetrado en el panorama financiero de los países en vías de desarrollo apoderándose del control de las instituciones bancarias y de los servicios financieros. Al hacerlo, se les ha otorgado *de facto* el tratamiento de "nacionales": sin tener que recurrir a las cláusulas del ASF, los bancos de Wall Street, por ejemplo, en Corea, Paquistán, Argentina o Brasil, se han convertido en bancos "nacionales" *bona fide*, que operan como si fueran instituciones locales y están regidas por las leyes nacionales, modificadas por la jurisdicción del FMI/Banco Mundial (véanse los capítulos 21 y 22).

Los gigantes de los servicios financieros norteamericanos y europeos no requieren la adopción formal del GATS para poder dominar las instituciones bancarias y supervisar a los gobiernos. El proceso de desregulación financiera global es ya, en muchos sentidos, un hecho. Wall Street ha ido invadiendo un país tras otro. El sistema bancario nacional se encuentra dentro del bloque de subastas, y se

reorganiza bajo la supervisión de los acreedores externos. Las instituciones financieras nacionales son sistemáticamente desestabilizadas y sacadas de la jugada, siendo el resultado, invariablemente, el desempleo masivo y la pobreza. Apoyado por el FMI (que obliga a los países a abrir el sector bancario nacional a la inversión extranjera), el capital extranjero se apodera de la banca pública, la compraventa de acciones y las aseguradoras, y las reorganiza. Citigroup, entre otros, ha hecho una gira de compras y ha adquirido bancos e instituciones financieras a precios de ganga en Asia, América Latina y Europa oriental. De una estocada, adquirió la red de 106 sucursales de Banco Mayo Cooperativo Ltda., convirtiéndose así en el segundo banco de Argentina

20

ESTRATEGIAS DE GUERRA ECONÓMICA

Con la caída de los mercados y el hundimiento progresivo de las economías en recesión, la crisis del 1997 del Este de Asia se ha convertido en una crisis económica global. Los administradores internacionales del dinero –cuyos ataques especulativos han contribuido grandemente a este hecho– han sido favorecidos por el FMI con su pugna por la desregulación de los flujos de capital internacional. Tras reducir paulatinamente la capacidad de los gobiernos de responder con eficacia a semejante "estrategia de guerra financiera", estas poderosas fuerzas están trabajando tras bambalinas para apoderarse de un mayor control de las instituciones de Bretton Woods y obtener un papel más directo en la conformación del edificio financiero internacional.

MANIPULACIÓN DEL "MERCADO LIBRE"

La contienda, de proporciones globales, para apropiarse de la riqueza a través de la "manipulación financiera" es la fuerza rectora detrás de la crisis. Es también el origen de la agitación económica y de la devastación social. Esta manipulación de las fuerzas del mercado por agentes poderosos constituye una forma de guerra financiera y económica. No hay necesidad de reconquistar territorios perdidos ni de enviar ejércitos invasores. A fines del siglo XX, la descarada "conquista de las naciones", que significa controlar los valores productivos, la mano de obra, los recursos naturales y las instituciones, puede llevarse a cabo de manera impersonal desde la sala del consejo: las órdenes salen de una computadora terminal o de un teléfono celular. Los datos necesarios se comunican al instante a los mercados financieros principales; con frecuencia, el resultado es perjudicial para la economía de algún país. La "estrategia de guerra financiera" aplica también instrumentos especulativos complejos; entre otros, toda la

gama del comercio de derivados, transacciones en divisas internacionales a futuro, opciones monetarias, fondos de compensación, etc. Los instrumentos especulativos han sido utilizados con la finalidad de captar riqueza financiera y adquirir el control de valores productivos. En palabras del primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, "la devaluación deliberada de la moneda de algún país por especuladores de divisas con el único fin de obtener ganancias es la negación de los derechos de las naciones independientes".[1]

La apropiación de la riqueza mundial por medio de la manipulación de las fuerzas del mercado, habitualmente es apoyada por las fatales intervenciones macroeconómicas del FMI, cuya acción paralela es desorganizar sin miramientos las economías nacionales de todo el mundo. Las "estrategias de guerra financiera" no conocen fronteras territoriales; sus acciones no se limitan a vencer a antiguos enemigos de la época de la guerra fría. En Corea, Indonesia y Tailandia las arcas de los bancos centrales fueron saqueadas por los especuladores institucionales mientras las autoridades monetarias trataban en vano de impulsar sus monedas en desgracia. En 1997, más de cien mil millones de dólares de las reservas duras de Asia, en unos pocos meses, se confiscaron y transfirieron a manos financieras privadas. Al día siguiente de la devaluación de las monedas, las ganancias reales y el empleo se desplomaron, con el consiguiente empobrecimiento de las masas, en países que durante el periodo de posguerra registraron progresos económicos y sociales significativos.

El fraude financiero en el mercado de divisas extranjeras desestabilizó a las economías nacionales, creando las condiciones para que los "buitres inversionistas extranjeros"[2] saquearan a continuación los activos productivos de los países asiáticos.

En Tailandia, 56 bancos e instituciones financieras nacionales fueron clausurados por orden del FMI y el desempleo se duplicó de un día para otro.[3] De modo similar, en Corea, la "operación de res-

[1] Declaración en la Reunión del Grupo de los 15 en Malaca, Malasia, el 3 de noviembre de 1997, citada en *South China Morning Report*, Hong Kong, 3 de noviembre de 1997.

[2] Michel Hudson, *Our World*, Kawasaki, 23 de diciembre de 1997. Véase también Michael Hudson y Bill Totten, "Vulture speculators", *Our World*, 197, Kawasaki, 12 de agosto de 1998.

[3] Nicola Bullard, Walden Bello y Kamal Malhotra, "Taming the tigers: The IMF and the Asian crisis", *Focus on Trade*, 23, número especial sobre el FMI, "Focus on the Global South", Bangkok, marzo de 1998.

cate" del FMI desencadenó una serie de quiebras fatal, que culminó en la liquidación total de los llamados "bancos mercantiles en problemas" (véase el capítulo 21).

LA CESIÓN DE LA BANCA CENTRAL

En muchos aspectos, esta crisis mundial marca el fin de la banca central, esto es, se derogó la soberanía de la economía nacional y el estado dejó de estar capacitado para controlar la creación de dinero en beneficio de la sociedad. En otras palabras, las reservas monetarias en manos de "especuladores internacionales" privados rebasan con mucho la limitada capacidad de los bancos centrales en el mundo, los cuales ya no son capaces, ni individual ni colectivamente, de contrarrestar la marea de la actividad especulativa. Los acreedores privados establecen las políticas monetarias, y pueden congelar el presupuesto de un gobierno, paralizar el proceso de pagos, impedir el desembolso regular de los salarios de millones de trabajadores (tal como ocurrió en la ex Unión Soviética) y acelerar la caída de la producción o de programas sociales.

A medida que la crisis se agrava, las incursiones especulativas en las reservas de los bancos centrales se han ido extendiendo hacia América Latina y el Medio Oriente, con consecuencias económicas y sociales devastadoras. A principios de 1999, con la dramática caída de la bolsa de São Paulo, se llegó a un nuevo clímax (véase el capítulo 22).

El saqueo de las reservas de los bancos centrales, sin embargo, no se limita para nada a los países en desarrollo. También ha golpeado a varios países occidentales, como Canadá y Australia, donde las autoridades monetarias no pudieron detener el deslizamiento de su moneda. En Canadá, en 1998, tras varios ataques especulativos, se pidieron préstamos por miles de millones de dólares a financieros privados para apuntalar las reservas del banco central. En Japón, donde el yen había caído a niveles nunca vistos, el "escenario coreano" fue considerado (según el economista Michael Hudson) como un "ensayo general" para que un puñado de bancos de inversión occidentales se apoderaran del sector financiero japonés.[4] Los jugadores principales fueron Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche

[4] Hudson, *op. cit.*

Morgan Gruenfell, entre otros, que compraron los préstamos bancarios insolventes en menos del diez por ciento de su valor real.

Inmediatamente después de la crisis asiática de 1997, Washington ejerció presión política sobre Tokio, insistiendo

> nada menos que en poder disponer inmediatamente de los préstamos bancarios insolventes –preferentemente por "buitres inversionistas" norteamericanos y de otras nacionalidades, a precios irrisorios. Para alcanzar sus objetivos están presionando incluso a Japón para reescribir su constitución, reestructurar su sistema político y su gabinete y rediseñar su sistema financiero... Una vez que los inversionistas extranjeros tomen el control de los bancos japoneses, estos mismos bancos se dispondrán a apoderarse de la industria japonesa...[5]

ACREEDORES Y ESPECULADORES

En una industria de servicios financieros integral, los bancos y las casas de bolsa más grandes del mundo son tanto los acreedores como los especuladores institucionales. En el contexto de la crisis asiática, contribuyeron directamente (con sus ataques especulativos) a desestabilizar la moneda de los diversos países, incrementando con ello el volumen de las deudas en dólares, que ellos mismos crearon manipulando los mercados de divisas. A fin de cuentas, durante la crisis intervinieron como "asesores de políticas" y consultores financieros, teniendo a su cargo los "programas de quiebra" patrocinados por el Banco Mundial, del cual también son beneficiarios. En Indonesia, por ejemplo, en medio de demostraciones callejeras y luego de la renuncia de Suharto, la privatización de sectores claves de la economía del país, ordenada por el FMI, fue encargada a ocho de los bancos mercantiles más importantes, entre otros: Lehman Brothers, Crédit Suisse-First Boston, Goldman Sachs y UBS/SBC Warburg Dillon Read.[6] A los más grandes administradores del dinero,

[5] Michel Hudson, "Big Bang is culprit behind yen's fall", *Our World*, 187, Kawasaki, 28 de julio de 1998. Véase también secretaria de Estado Madeleine K. Albright y ministro de Relaciones Exteriores de Japón Keizo Obuchi, conferencia de prensa conjunta, Ikura House, Tokio, 4 de julio de 1998, contenida en Official Press Release, US Department of State, Washington, 7 de julio de 1998.

[6] Véase Bullard, Bello y Malhotra, *op. cit.*

que prenden fuego a los países, luego los llaman para apagar el fuego (en los términos del "plan de rescate" del FMI). En última instancia son ellos los que deciden cuáles empresas han de cerrar y cuáles han de ser subastadas a inversionistas extranjeros a precios ínfimos.

¿QUIÉN FINANCIA LOS RESCATES DEL FMI?

Sometidos a repetidas acometidas especulativas, en 1997, los bancos asiáticos habían firmado contratos multimillonarios (en el mercado de divisas a futuro) en el intento inútil de proteger sus monedas. Con sus reservas de moneda completamente agotadas, las autoridades se vieron obligadas a pedir prestadas grandes cantidades de dinero, hecho estipulado en el acuerdo de salvamento del FMI. Sin embargo, siguiendo un plan diseñado durante la crisis mexicana de 1994-1995, ese dinero no estaba destinado "a rescatar al país". En realidad, el dinero nunca llegó a Corea, ni a Tailandia ni a Indonesia. Se destinó a rembolsar a los "especuladores institucionales", para garantizar que podrían cobrar su botín multimillonario. Por su parte, los tigres asiáticos –domesticados por sus amos financieros– habían sido transformados en "mansos gatitos". A Corea, Indonesia y Tailandia no les queda más que cubrir estas supuestas deudas en dólares hasta bien entrado el tercer milenio.

Pero, ¿de dónde vino el dinero para financiar estas operaciones por un valor de miles de millones de dólares? Sólo una pequeña fracción del dinero procedía de los recursos del FMI: empezando con el rescate mexicano de 1995, a los países del G-7, incluyendo el Tesoro de Estados Unidos, se les pidió que hicieran contribuciones grandes de un solo pago, para las operaciones de rescate del FMI, aumentando con ello enormemente la deuda pública en los propios países del G-7.[7] Irónicamente, la emisión de deuda pública para financiar los salvamentos en Asia fue suscrita y garantizada por el

[7] El 15 de julio de 1998, la casa de representantes, dominada por los republicanos, redujo la petición del gobierno de Clinton de 18 mil millones de dólares adicionales para financiar al FMI a 3.5 mil millones. Una parte de la contribución de Estados Unidos a los salvamentos sería financiada con los fondos para la estabilización de divisas extranjeras del Tesoro. El Congreso estimó el incremento de la deuda pública de Estados Unidos y la carga sobre los contribuyentes por la participación en los rescates de los países asiáticos.

mismo grupo de bancos mercantiles de Wall Street que participó en las acometidas especulativas.

Dicho de otro modo, los que garantizan la emisión de deuda pública para financiar el rescate son los mismos que a la larga se quedarán con el botín (como acreedores de Corea o de Tailandia, por ejemplo); es decir, son los beneficiarios finales del dinero prestado, situación que esencialmente constituye una red de seguridad para el especulador institucional. Las enormes cantidades de dinero otorgadas en los paquetes de rescate tienen la finalidad de permitir a los países asiáticos hacer frente a sus obligaciones de deuda con las instituciones financieras que contribuyeron a la desestabilización de sus divisas. Como resultado de este círculo vicioso, algunos bancos comerciales y casas de bolsa se han enriquecido más allá de todo límite; también han aumentado su control de gobiernos y políticos en todo el mundo.

UNA "MEDICINA ECONÓMICA" FUERTE

A partir de la crisis mexicana de 1994-1995, ha sido decisivo el papel del FMI en la conformación de los "campos de batalla financieros" en los que los administradores globales del dinero hacen sus incursiones especulativas. Los bancos globales ansían el acceso a la información interna. Los ataques especulativos certeros requieren, en los términos de los acuerdos con el FMI, la concomitante administración de fuertes "medicinas económicas" que los beneficien. Los "seis grandes" bancos comerciales de Wall Street (entre los que se encuentran Chase, Bank America, Citigroup y J.P. Morgan) y los "cinco grandes" bancos mercantiles (Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley y Salomon Smith Barney) fueron consultados sobre las cláusulas que se incluirían en los acuerdos de salvamento con los asiáticos (véase el capítulo 21).

Teóricamente comprometidos con la "estabilidad financiera", lo que en realidad quieren es fraguar el desplome de las monedas nacionales. Durante los meses anteriores a la crisis asiática, el Instituto de Finanzas Internacionales, en Washington, que agrupa planificadores e investigadores y que representa los intereses de cerca de 300 bancos globales y casas de bolsa, había "urgido a las autoridades de los mercados emergentes a que se opusieran a las presiones para ele-

var las tasas de cambio donde fuera necesario".[8] Esta petición se comunicó al FMI. No cabía la menor duda de que estaban sugiriendo que el FMI alentara la devaluación de las divisas nacionales.[9]

De hecho, apenas tres meses antes de la dramática caída de la rupia, el FMI le había ordenado a Indonesia que liberara su moneda. En palabra del multimillonario norteamericano y candidato presidencial, Steve Forbes:

> ¿Contribuyó el fmi en la precipitación de la crisis? Esta agencia pugna por la apertura y la transparencia en las economías nacionales, pero rivaliza con la cia en lo que a tapar sus propias operaciones se refiere. Por ejemplo, ¿sostuvo conversaciones secretas con Tailandia en las que aconsejó la devaluación que sin tardanza desencadenó la catastrófica cadena de acontecimientos? [...] ¿No exacerbaron la enfermedad las prescripciones del FMI? La moneda de estos países fue devaluada a niveles absurdamente bajos.[10]

DESREGULACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES

Las reglas que norman los movimientos de dinero y de capital al cruzar fronteras internacionales han tenido su parte en la conformación de los "campos de batalla financieros" en los que los bancos y los especuladores lanzan sus cotidianos ataques. En su ambición de apoderarse de la riqueza económica y financiera de un lado a otro del mundo, los bancos globales y las corporaciones multinacionales han estado presionando activamente para obtener la desregulación de los flujos de capital internacional, incluyendo el desplazamiento de dinero "caliente" y de dinero "sucio".[11] Cediendo a estas demandas (luego de consultas apresuradas con los ministros financieros

[8] Institute of International Finance, *Report of the Multilateral Agencies Group*, IIF Annual Report, Washington, 1997.

[9] Carta dirigida por el director administrativo del IIF, Charles Dallara, a Philip Maystadt, presidente del Comité Interino del FMI, abril de 1997, citada en IIF, 1997 *Annual Report*, Washington, 1997.

[10] Steven Forbes, "Why reward bad behavior", *Forbes Magazine*, editorial, 4 de mayo de 1998.

[11] El dinero "caliente" es el capital especulativo, el dinero "sucio" es el que proviene del crimen organizado y que suele ser lavado en el sistema financiero internacional.

del G-7), en 1998, el FMI emitió un veredicto para desregular los movimientos de capitales. El comunicado oficial decía que el FMI procederá a enmendar sus artículos con el fin de que "la liberación de los movimientos de capital se convierta en uno de los objetivos del Fondo, y de extender, si es necesario, la jurisdicción del Fondo con este fin".[12] El director administrativo del FMI, Michel Camdessus, concedió, en tono desapasionado, "que algunos países en desarrollo tal vez sufran ataques especulativos después de abrir su cuenta de capital", a la vez que reiteró que esto se podía evitar si se adoptan "políticas macroeconómicas sólidas y sistemas financieros fuertes en los países miembros" (esto es, la habitual "cura económica para desastres" del FMI).[13]

LOS ESPECULADORES SE HACEN CARGO DEL MANEJO DE LA CRISIS

A medida que se desarrolla la contienda por la riqueza global, los bancos internacionales y los especuladores (incluyendo sus fondos de emergencia afiliados) están ávidos de tener un papel más directo en la "vigilancia" de las reformas económicas en el ámbito nacional. Los conservadores pro libre mercado de Estados Unidos han exigido que este país tenga un mayor control sobre el FMI. También han sugerido que el FMI debería desempeñar, a partir de aquí, un papel más neutro (similar al de las agencias evaluadoras de acciones, como Moody's o Standard and Poor) y consignar el financiamiento de los salvamentos multimillonarios al sector de la banca privada.[14]

Los bancos y las casas de inversiones más grandes del mundo han propuesto la creación de un "cancerbero financiero" (algo así como un "consejo de asesores del sector privado"), con el mandato de "supervisar al FMI".[15] El propósito oculto detrás de esta iniciativa

[12] Fondo Monetario Internacional, comunicado del Comité Interino al Consejo de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, comunicado de prensa núm. 98/14, Washington, 16 de abril de 1998. La controvertida propuesta de enmendar los artículos sobre "liberalización de las cuentas de capital" se hizo por primera vez en abril de 1997.

[13] Véase comunicado del Comité Interino del FMI, Hong Kong, 21 de septiembre de 1997.

[14] IIF, "East Asian crisis calls for new international measures, say financial leaders", comunicado de prensa, 18 de abril de 1998.

[15] FMI, comunicado del Comité Interino al Consejo de Gobernadores, *op. cit.*

es transformar al FMI de su estatus actual de cuerpo intergubernamental en una burocracia plenamente desarrollada que sirva a los intereses de los bancos globales.

Lo que es más grave, los bancos y los especuladores quieren tener acceso a los detalles de las negociaciones que el FMI realiza con los gobiernos miembros, lo que les permitiría llevar a cabo sus embestidas especulativas con mayor eficacia. Los bancos globales (señalando la necesidad de "transparencia") han solicitado al "FMI que les proporcione detalles valiosos [en sus tratos con los gobiernos] aun sin revelar información confidencial".[16] Pero en realidad lo que quieren es información interna privilegiada, así como un papel directo en la negociación de los convenios de rescate el FMI. Irónicamente, son los especuladores y no los políticos los que están haciéndose cargo del manejo de las crisis. Con una lógica absurda, aquellos que promueven las turbulencias financieras han sido invitados por los ministros financieros del G-7 a señalar políticas que atenúen dichas turbulencias financieras...

Por su parte, las causas estructurales más generales de las crisis económicas llegan sin avisar. Cegados por el dogma neoliberal, los que deciden las políticas son incapaces de distinguir entre "soluciones" y "causas". La opinión pública está mal informada. Perdida en la cortina de humo de las noticias de unos medios que sólo sirven a sus propios intereses; las consecuencias funestas de la "peste económica" y los "mecanismos de mercado" específicos que desencadenan la inestabilidad financiera apenas se mencionan.

LA CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA

Esta reestructuración de los mercados y las instituciones financieras globales (junto con el despojo de las economías nacionales) ha per-

[16] El Instituto de Finanzas Internacionales propone que los bancos globales y las casas de bolsa podrían, con este fin, "rotarse y ser seleccionados a través de un proceso neutral [para garantizar la confidencialidad] y un intercambio regular de puntos de vista [que] es probable que no traiga sorpresas desagradables que perturben abruptamente a los mercados [...] En esta era de globalización, tanto los participantes en el mercado como las instituciones multilaterales tienen un papel decisivo; mientras más se comprendan unos a otras, mayores serán los prospectos de estabilidad financiera y de un mejor funcionamiento de los mercados". Véase la carta de Charles Dallara, *op. cit.*

mitido la acumulación de cantidades enormes de riqueza privada, gran parte de la cual ha sido amasada con transacciones estrictamente especulativas. No es necesario producir mercancías: cada vez más, el enriquecimiento tiene lugar fuera de la economía real, divorciado de las actividades productivas y comerciales *bona fide*. Según Steven Forbes, "los éxitos del mercado accionario de Wall Street [esto es, intercambio especulativo] produjeron el surgimiento de la mayoría de los multimillonarios durante el año pasado [1996]".[17] A su vez, parte del dinero acumulado gracias a transacciones especulativas se canaliza a cuentas confidenciales en los múltiples paraísos bancarios de ultramar. Este peligroso drenaje de miles de millones de dólares en fugas de capitales reduce drásticamente los ingresos por impuestos, paraliza los programas sociales, incrementa el déficit presupuestario y fomenta la acumulación de la deuda pública.

En cambio, las ganancias de los productores directos de bienes y servicios han disminuido; el nivel de vida de grandes sectores de la población mundial, incluidas las clases medias, ha bajado. Los programas de salud y de educación han sido recortados y la desigualdad salarial ha aumentado en los países de la OCDE. La pobreza se ha vuelto excesiva, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. La acumulación de riqueza que resulta de las transacciones financieras especulativas se nutre de la pobreza y de los bajos salarios.

[17] Charles Laurence, "Wall Street warriors force their way into the Billionaires Club", *Daily Telegraph*, Londres, 30 de septiembre de 1997.

21

LA RECOLONIZACIÓN DE COREA

Hacia finales de noviembre de 1997, un equipo de economistas encabezado por el "mediador" Hubert Neiss voló a Seúl con la instrucción de negociar un "rescate financiero estilo México" para "restaurar la salud económica y la estabilidad" a la brevedad posible. Con ello se sentaba un importante precedente: la amarga medicina del FMI, recetada de manera rutinaria a los países del tercer mundo y Europa oriental, se aplicaría por vez primera a una economía industrial avanzada.

Washington y la embajada de Estados Unidos en Seúl prepararon el escenario con el mayor esmero. Apenas una semana antes de la llegada de la misión del FMI, el presidente Kim Young Sam había pedido la renuncia al secretario de Finanzas, Kang Kyong-Shik, por "obstaculizar las negociaciones" con el Fondo. En su lugar nombró a un "negociador" más "aceptable" para Washington, Lim Chang-Yuel, quien casualmente había sido funcionario del FMI y del Banco Mundial en el decenio de 1980, durante el gobierno militar y el auge de la ley marcial en Corea (véase recuadro). También fue despedido sin previa advertencia el asesor económico de la presidencia, Kim In-Ho, por haber "desdeñado la opción del FMI afirmando que Seúl recuperaría la credibilidad internacional por su propio esfuerzo".[1]

El secretario de Finanzas Lim estaba bastante familiarizado con el entorno de Washington. No bien recibió el nombramiento partió a "negociar" con su antiguo colega, el subdirector del FMI Stanley Fischer. En realidad, la reunión en las oficinas del Fondo ya se había programado antes de que fuera nombrado para el cargo.

[1] Agencia France Presse, 19 de noviembre de 1997.

SECRETARIO DE FINANZAS COREANO DESPEDIDO POR "OBSTACULIZAR NEGOCIACIONES" CON EL FMI

En 1998, el ex secretario de Finanzas, Kang Kyong-Shik, fue enviado a prisión sin derecho a fianza por haber "obstaculizado las negociaciones [...] con el Fondo Monetario Internacional y por no haberle comunicado a su sucesor, Lim Chang-Yuel, lo que había negociado antes de su renuncia. El señor Kang afirma que fue obligado a renunciar con tal celeridad que nunca tuvo la oportunidad de informar al señor Lim, quien firmó el acuerdo para un paquete crediticio de casi 60 mil millones de dólares el 3 de diciembre" (Don Kirk, "Vague charges accuse Korean official of letting economy fall", *International Herald Tribune,* París, 21 de julio de 1998). Al dejar su cargo, el señor Lim fue electo gobernador de la provincia de Kyonggi, aunque más tarde fue arrestado bajo cargos de soborno y corrupción.

LA MISIÓN DEL FMI LLEGA A SEÚL

Las negociaciones entre el gobierno coreano y el FMI se mantuvieron como secreto de estado. El viernes 21 de noviembre, el gobierno anunció oficialmente que "buscaría negociar un rescate con el FMI" y, al siguiente día hábil, el 24 de noviembre, el "lunes negro de Seúl", la bolsa se derrumbó a su punto más bajo en diez años debido al temor de que el FMI impusiera medidas de austeridad así como a la "consiguiente quiebra de empresas y bancos". Qué lamentable ironía que la intervención del Fondo pretendiera ayudar al país "a recuperar la confianza y la estabilidad económica". Obedeciendo a pie juntillas las órdenes de Washington, el secretario de Finanzas Lim eliminó todos los controles del mercado de divisas con la idea de "atraer nuevamente a los inversionistas extranjeros", aunque con el inevitable resultado de propiciar un mayor golpe especulativo en contra del won.[2]

Dos días más tarde, el 26 de noviembre, la misión del FMI encabezada por Hubert Neiss arribaba al aeropuerto Kimpo de Seúl y, el 30 de noviembre, las partes llegaban a un "acuerdo preliminar". Conforme a la versión del principal negociador y secretario de Fi-

[2] Willis Witter, "Economic chief sacked in South Korean debt crisis; emergency measures are introduced", *Washington Times*, 20 de noviembre de 1997.

nanzas Lim, "los ajustes eran menores y no afectarían sustancialmente el acuerdo".[3]

En realidad no había nada que acordar, ya que Lim había sido funcionario del FMI-Banco Mundial. El borrador del documento se preparó en Washington antes de que llegara la misión y en tanto que las "soluciones políticas" se habían consultado previamente con Wall Street y el Tesoro, no se consideró necesario realizar ningún análisis ni negociación.

Michel Camdessus, director gerente del FMI, voló a Seúl la mañana del 3 de diciembre para cerrar el trato. Los funcionarios del Fondo redactaron aprisa una "carta de intención", que fue firmada por el gobernador del Banco de Corea, Kyung Shik Lee, y por el secretario de Finanzas Lim.[4] Presente en el cierre de las negociaciones se encontraba también David Lipton, subsecretario del Tesoro estadunidense, cuya oportuna visita a Seúl –en carácter "no oficial"– no se reveló a la opinión pública hasta que la estafa por 57 mil millones de dólares quedó debidamente firmada y sellada.

David Lipton, alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos, visitó Seúl la semana pasada, durante las negociaciones. Pese a lo que afirma la prensa coreana, el señor Lipton no estuvo presente en la sala de negociaciones aunque Hubert Neiss, el principal negociador del FMI, modificó varias veces su postura después de hablar con el señor Lipton. Se había acordado que Michel Camdessus, director gerente del FMI, firmaría una carta de acuerdo para el programa del préstamo el 3 de diciembre. No obstante, después de hablar con los funcionarios estadunidenses, se negó a dar su aprobación en tanto los tres candidatos en las elecciones presidenciales de Corea, previstas para el 18 de diciembre, no manifestaran su acuerdo con los términos.[5]

[3] Associated Press Worldstream, 30 de noviembre de 1997.

[4] Véase Fondo Monetario Internacional, *Corea, solicitud de acuerdo de ayuda,* Washington, 3 de diciembre de 1997. El texto del acuerdo de 1997 con el Fondo, al igual que el "Memorándum sobre el Programa Económico" se filtró a la prensa coreana y puede consultarse en <www.chosun.com/feature/imfreport.html>.

[5] "New illness, old medicine", *The Economist,* edición para Estados Unidos, Nueva York, 13 de diciembre de 1997, p. 65.

DE REGRESO A WASHINGTON

La misión del FMI concluyó con la mayor celeridad el 3 de diciembre. Hubert Neiss regresó a Washington para participar en la reunión que el consejo directivo del Fondo realizaría al día siguiente –4 de diciembre– con el propósito de ratificar el paquete de 57 mil millones de dólares. Una vez que el consejo directivo manifestó su anuencia, el subdirector del FMI, Stanley Fischer, admitió ingenuamente y con un suspiro de alivio, durante la conferencia de prensa que siguió al cierre que:

> El nuevo viceprimer ministro y secretario de Finanzas, el señor Lim, *afortunadamente había sido subdirector del Fondo, al igual que del Banco Mundial en el decenio de 1980,* por lo cual estaba familiarizado con estas instituciones. No obstante –reiteró–, hace unas dos semanas [...] era un negociador muy duro, como cabría esperar. Me parece que el acuerdo que se firmó muestra gran valentía y sabiduría para el futuro de la economía coreana.[6]

Ese mismo día, en Seúl, Lim, visiblemente perplejo por los acontecimientos, pidió disculpa a la nación en un mensaje televisivo:

> *A nombre de todo el equipo del Ministerio de Finanzas, pido una disculpa al pueblo...* La crisis de divisas en los países del Sudeste asiático desembocó en nuestra propia crisis de divisas. No respondimos adecuadamente [a la crisis]. *Pido perdón por haber tenido que aceptar el paquete de rescate del FMI.*[7]

"MANITA DE PUERCO" DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El trato aún no se había cerrado. El país se encontraba en vísperas de elecciones presidenciales y el candidato de centro-izquierda Kim Dae Jung, que llevaba la delantera, seguía oponiéndose firmemente al programa de rescate del Fondo. Hizo una advertencia a la opinión pública y acusó al gobierno saliente de organizar el "remate" masivo de la economía coreana:

[6] Transcripción de la conferencia de prensa del FMI, Washington, 5 de diciembre de 1997 (cursivas mías).

[7] Retransmisión con traducción al inglés en MacNeil/Lehrer Productions, The NewsHour con Jim Lehrer, 4 de diciembre de 1997 (cursivas mías).

los inversionistas extranjeros pueden comprar con toda libertad todo nuestro sector financiero, que incluye 26 bancos, 27 casas de bolsa, 12 compañías de seguros y 21 bancos mercantiles, todos los cuales están listados en la bolsa de valores de Corea, por tan sólo 5.5 trillones de wons, esto es, 3 700 millones de dólares.[8]

No obstante dio un viraje político. Apenas un par de semanas más tarde, una vez ganadas las elecciones presidenciales, Kim Dae Jung se convirtió en el más ferviente apóstol de la amarga medicina económica: "Mostraré valentía y abriré el mercado para que los inversionistas extranjeros inviertan con confianza"; en un mitin confirmó su inquebrantable apoyo al Fondo "[...] el dolor es necesario para lograr la reforma y deberíamos de tomar este riesgo como una oportunidad..."[9]

Kim Dae Jung, antiguo disidente, preso político y férreo opositor de los gobiernos militares de Park Chung Hee y Chun Doo Hwan, apoyados por Estados Unidos, sucumbió a la presión política y partió sigilosamente a Wall Street y Washington antes de tomar posesión como presidente electo democráticamente en su país. Washington había exigido en términos muy claros que los tres candidatos a la presidencia debían comprometerse a adoptar el programa del Fondo.

PUESTA EN MARCHA DE LA "LEGISLACIÓN FACULTATIVA" POR MEDIO DEL CHANTAJE FINANCIERO

Pese al aval de Kim Dae Jung, el acuerdo del FMI seguía en un limbo político. La legislación exigía el despido de trabajadores, lo cual se procedió a hacer de inmediato. El subsecretario del Tesoro Lipton voló nuevamente a Seúl, aunque esta vez su presencia fue anunciada formalmente. El 22 de diciembre, Kim Dae Jung –sometido ante las exigencias de Washington– acordó en una reunión con Lipton que era "necesario el despido de trabajadores como parte de la reestructuración industrial en beneficio de la competitividad eco-

[8] Michael Hudson, "Draft for our world", *Our World,* Kioto, 23 de diciembre de 1997.

[9] National Public Radio, 19 de diciembre de 1997.

nómica".[10] Kim también dio luz verde al parlamento coreano y, en sesión especial celebrada al día siguiente, 23 de diciembre, las cuatro mociones principales relativas al acuerdo con el FMI se adoptaron prácticamente sin debate alguno.[11]

La legislación instrumentada por vía del chantaje financiero también suprimía las funciones regulatorias y de supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas. El parlamento surcoreano se había transformado en un "sello de goma".

El FMI –en nombre de los acreedores extranjeros de Corea– también exigió la aprobación expedita de una legislación que otorgara "independencia al banco central", una medida que pretendía limitar la capacidad del gobierno coreano para financiar el desarrollo económico del país "desde adentro" por medio de la política monetaria; esto es, por medio del crédito interno sin depender de préstamos del extranjero. El sistema estatal de crédito, que había sido un factor decisivo en el dinámico desarrollo industrial del país durante los anteriores 40 años, desapareció de un plumazo.

Entre tanto, la agencia crediticia de Wall Street, Moody's, actuando en nombre de los intereses bancarios estadunidenses, recompensó el cumplimiento coreano "rebajando la calificación de los bonos corporativos y del gobierno coreano –incluyendo los bonos de 20 bancos– a la categoría de 'bonos chatarra' ".[12]

LOS BANQUEROS DE WALL STREET SE REÚNEN EN LA NOCHEBUENA

La legislatura coreana convocó a sesiones extraordinarias el 23 de diciembre. La decisión final, con relación al préstamo de 57 mil millones de dólares, se llevó a cabo el 24 de diciembre en Nueva York, después del horario de oficina. Los principales financieros de Wall Street: Chase Manhattan, Bank America, Citicorp y J.P. Morgan fueron convocados a una reunión en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En esta reunión prenavideña también había representantes de los "cinco grandes" bancos mercantiles de Nueva York, en-

[10] John Burton, "Korea bonds reduced to junk status", *Financial Times*, Londres, 23 de diciembre de 1997, p. 3.

[11] Choe Seung Chul, "Assembly opens to legislate key financial reforms", *Korea Herald*, 23 de diciembre de 1997.

[12] John Burton, *op. cit.*

tre ellos Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley y Salomon Smith Barney.[13] Casi simultáneamente, unos 80 bancos acreedores europeos, encabezados por Deutsche Bank A.G. se reunían a puerta cerrada en Frankfurt, en tanto que los diez principales bancos japoneses –que tenían una porción significativa de la deuda de corto plazo de Corea– sostenían discusiones de alto nivel en Tokio con el señor Kyong Shik Lee, gobernador del Banco de Corea.

En la medianoche del día 24, en cuanto los bancos dieron luz verde, el FMI recibió la autorización de "enviar con la mayor celeridad 10 mil millones de dólares a Seúl para hacer frente a la avalancha de vencimientos de la deuda a corto plazo".[14]

CERO FLUJO DE CAPITAL EN EL RESCATE

Estas reuniones prenavideñas fueron cruciales, ya que los bancos insistían en que el rescate multimillonario, financiado por los gobiernos del G-7, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo por ningún motivo debería proporcionarle a Corea un flujo de efectivo positivo. Las arcas del banco central de Corea habían sido saqueadas y los acreedores y especuladores esperaban ansiosos el botín. En otras palabras, el dinero del rescate ya se había destinado a las instituciones financieras occidentales y japonesas, así como a los corredores de divisas. Las mismas instituciones que antes especularan en contra del won coreano se cobraban con el dinero del rescate del Fondo. ¡Una auténtica farsa! Y Corea quedó condenada a pagar el servicio de esta deuda multimillonaria hasta el año 2006.

LA AGENDA MACROECONÓMICA

El rescate financiero derogaba la soberanía económica de Corea, estableciendo una administración colonial de facto bajo un presidente electo democráticamente que, virtualmente de la noche a la mañana, sumió al país en una profunda recesión. Los efectos so-

[13] *Financial Times,* 27-28 de diciembre de 1997, p. 3.
[14] Agencia France Presse, París, 26 de diciembre de 1997.

NEGOCIACIÓN DE UN RESCATE FINANCIERO POR 57 MIL MILLONES DE DÓLARES
10 de noviembre de 1997 - 24 de diciembre de 1997

19 de noviembre El presidente saliente Kim Sam Young despide al secretario de Finanzas, Kang Kyong Shik, por "obstaculizar las negociaciones" con el FMI. Lim Chang Yuel, ex director ejecutivo del Fondo, lo sustituye en el cargo.

20 de noviembre El secretario de Finanzas Lim parte aceleradamente a Washington para negociar con su ex colega, el subdirector del FMI, Stanley Fischer.

21 de noviembre El gobierno de la República de Corea anuncia formalmente que celebrará un acuerdo con el FMI. El secretario de Finanzas queda a cargo de las negociaciones.

24 de noviembre "Lunes negro de Seúl". Como respuesta a las posibles medidas de austeridad que podría imponer el FMI y a las quiebras previsibles de empresas y bancos el mercado accionario se derrumba a su mínimo histórico en diez años.

26 de noviembre La misión del FMI, encabezada por Hubert Neiss, llega a Seúl.

27 de noviembre Comienzan las pláticas secretas entre funcionarios del gobierno coreano y del Fondo.

30 de noviembre Después de cuatro días de negociaciones, el FMI y el gobierno coreano llegan a un "acuerdo preliminar".

1 de diciembre El borrador del acuerdo se somete a aprobación del gabinete de la República de Corea.

ciales fueron devastadores: el nivel de vida se desplomó, las reformas del Fondo deprimieron los salarios reales y dispararon un desempleo masivo.

El acuerdo elevó el tope de la propiedad extranjera y abrió el mercado nacional de bonos a los inversionistas extranjeros. "Las instituciones financieras internacionales están autorizadas a comprar acciones de los bancos nacionales sin restricción alguna."[15] El banco central, por su parte, quedó atrapado, ya que sus reservas en divisas fue-

[15] FMI, *Corea, solicitud de acuerdo de ayuda,* que incluye una carta de intención y el memorándum sobre el programa económico, véase párrafo 32, p. 44. Puede consultar el texto en <www.chosun.com/feature/imfreport.html>.

3 de diciembre El director gerente del FMI, Michel Camdessus, llega a Seúl para cerrar el trato. Después de varias pláticas con Camdessus, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Lipton, declara que el acuerdo no puede firmarse a menos que los tres candidatos a la presidencia apoyen el rescate del Fondo.

4 de diciembre El texto final del acuerdo es ratificado por el consejo de administración del FMI, el cual aprueba el envío provisional de 21 mil millones de dólares, de un paquete total por 57 mil millones.

5 de diciembre El candidato presidencial Kim Dae Jung manifiesta su oposición al acuerdo con el FMI y advierte a la opinión pública sobre sus devastadores efectos económicos y sociales.

18 de diciembre Kim Dae Jung gana las elecciones y de inmediato declara su apoyo incondicional al programa del Fondo.

22 de diciembre El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lipton, llega a Seúl y le exige a Kim Dae Jung el despido masivo de trabajadores.

23 de diciembre El parlamento coreano convoca a una sesión extraordinaria. La legislatura estampa el sello aprobatorio a cuatro mociones relativas al programa del Fondo.

24 de diciembre Los banqueros de Wall Street son convocados a una reunión extraordinaria la noche de navidad. A media noche, el FMI acepta enviar 10 mil millones de dólares a Seúl para hacer frente a la avalancha de vencimientos de la deuda a corto plazo.

26 de diciembre El presidente electo Kim Dae Jung se compromete a llevar a cabo acciones firmes: "Las compañías deben congelar o reducir drásticamente los salarios. Y si eso no es suficiente, los despidos serán inevitables."

ron saqueadas por especuladores institucionales. En noviembre de 1997, las reservas del Banco de Corea se habían desplomado a un mínimo histórico de 7 300 millones de dólares. Por consiguiente, el banco fue reorganizado bajo la supervisión directa de Wall Street y el FMI. El acuerdo de rescate –que estipulaba que los acreedores extranjeros de Corea dictarían las políticas fiscales y monetarias– marcó el fin de la banca central en la economía más pujante de Asia.

EL DESMANTELAMIENTO DE LOS *CHAEBOLS*

La devaluación del won –aparejada a la disolución del mercado accionario– generó una cadena mortal de quiebras que afectó tanto a empresas financieras como del sector industrial. La devaluación también contribuyó a desatar un marcado incremento en los precios al consumidor. Se instrumentó la llamada "política de salida" (esto es, el programa de quiebras): las operaciones de unos nueve bancos mercantiles "en problemas" se suspendieron el 2 de diciembre de 1997, antes de que concluyera la misión del FMI. Con la asesoría del FMI, se le ordenó al gobierno "preparar un amplio programa de acción para reforzar la supervisión y la regulación financieras..."[16]

La agenda secreta tenía como finalidad destruir el capitalismo coreano. El programa del Fondo contribuyó a fracturar los conglomerados coreanos conocidos como *chaebols,* que fueron invitados a establecer "alianzas estratégicas con empresas extranjeras"; esto es, a fusionarse y quedar bajo el control del capital extranjero. Por su parte, con el propósito de que algunos bancos coreanos selectos "resultaran más atractivos" a posibles compradores extranjeros, los préstamos de cobro dudoso se transfirieron a un "fondo de rescate público" denominado Korea Asset Management Corporation (KAMCO). El grupo automotor KIA, uno de los grandes consorcios coreanos, se declaró insolvente. Destino similar tuvo el grupo Halla, involucrado en negocios de astilleros, ingeniería y autopartes.

Como representante directo de Wall Street, el Fondo exigió el desmantelamiento del grupo Daewoo, que comprendía el remate de las doce filiales que se consideraron "en problemas". Daewoo Motors se puso a disposición, y la industria de autopartes coreana cayó en una crisis que desembocó en despidos generalizados y quiebras de los proveedores de autopartes.[17]

A su vez, los acreedores del imperio industrial más grande de Corea, Hyundai, exigieron el desmembramiento del grupo. Con la llamada "desincorporación" –esto es, la fractura de la empresa– se invitó al capital extranjero a "obtener las partes" a un buen precio. Esto comprendía las lucrativas armadoras de autos y astilleros de Hyundai.

[16] *Ibid,* párrafo 25.

[17] "Autoparts makers step up resistance to foreign control of Daewoo Motor", *Korea Herald,* 28 de junio de 2000.

La quiebra de la economía coreana estaba prevista en el acuerdo con el FMI. Al congelar el crédito, el banco central no podía acudir al rescate de las empresas o bancos en problemas. El acuerdo estipulaba que "se revocaría la licencia de aquellos bancos mercantiles que no pudiesen presentar los planes de reestructuración solicitados en un plazo de 30 días".[18]

La congelación del crédito también afectó en gran medida a la industria de la construcción y la economía de servicios: "los bancos se muestran cada vez menos dispuestos a otorgar créditos a las empresas y compiten por obtener los cada vez más escasos fondos del banco central".[19] De acuerdo con un informe, más de 90% de las constructoras –cuya deuda combinada con las instituciones financieras nacionales ascendía a 20 mil millones de dólares– estaban en peligro de quebrar.[20] La contracción del poder adquisitivo, debida a menores salarios y alto desempleo, también puso a temblar a la pequeña empresa coreana, siempre necesitada de liquidez. El gobierno reconoció que "un buen número de pequeñas empresas se hundirían..."[21]

WALL STREET VA DE COMPRAS

El *boom* de fusiones y adquisiciones golpeaba con gran fuerza. Ante la subasta de las empresas de alta tecnología, electrónica y manufactura de Corea, se desató la fiebre de compras entre los consorcios occidentales, que adquirieron activos industriales a precios bajísimos. La devaluación del won, combinada con el deslizamiento del mercado accionario de Seúl, deprimió drásticamente el valor en dólares de los activos coreanos.

El grupo Hanwha estaba vendiendo sus refinerías a Royal Dutch/Shell después de vender la mitad de su coinversión química a BASF de Alemania.[22] En unos cuantos meses, el valor de mercado

[18] *Corea, solicitud de acuerdo de ayuda,* párrafo 20, p. 8.

[19] Sah Dong Seok, "Credit woes cripple business sectors", *Korea Times,* 28 de diciembre de 1997.

[20] Song Jung Tae, "Insolvency of construction firms rises in 1998", *Korea Herald,* 24 de diciembre de 1997.

[21] *Korean Herald,* 5 de diciembre de 1997.

[22] Michael Hudson, *op. cit.*

de Samsung Electronics, el fabricante de chips de memoria para computadora más grande del mundo, se desplomó de 6,500 millones a 2 400 millones de dólares. "Ahora es más barato comprar una de estas empresas que comprar una fábrica, y dentro del paquete consigues también la distribución, el reconocimiento de marca y el personal capacitado..."[23]

LA COMPRA DE LOS BANCOS COMERCIALES DE COREA

Dentro de la agenda de "libre mercado", el FMI exigió la "nacionalización" de los seis grandes bancos comerciales del país, incluido Korea First Bank (KFB), Seoul Bank, el banco integrado por Commercial Bank of Korea y Hanil Bank, Korea Exchange Bank y Cho Hung Bank.[24] La intención, empero, era no transferir los bancos a manos estatales. La "banca nacionalizada" se "reprivatizaría".

El objetivo era transferir gran parte de los bancos comerciales a manos extranjeras: Korea First Bank y Seoul Bank se pusieron en subasta de inmediato. El encargado de la venta era uno de los principales bancos de inversión de Nueva York, Morgan Stanley Dean Witter.

¿Cómo lo hicieron? Únicamente se permitió participar a "inversionistas extranjeros" honrados y, para asegurar la transparencia, los "compinches capitalistas coreanos" se mantendrían al margen. Fue un verdadero fraude. Asesorado por Morgan Stanley, el gobierno también excluyó del proceso de privatización de esos dos bancos a "cualquier consorcio de empresas coreanas y postores extranjeros".[25]

MAGNATES DE CALIFORNIA Y TEXAS AL RESCATE

Estados Unidos llegó al rescate de los bancos coreanos que se encontraban "en problemas". La subasta de los activos de los bancos comerciales fue un gran fraude. Por tan sólo 454 millones de dóla-

[23] *Ibid.*

[24] Catherine Lee, "The wrong medicine; nationalization of commercial banks in South Korea", *The Banker,* diciembre de 1998.

[25] Texto de una declaración oficial del gobierno, citada en "Korea to let only O/S investors to two troubled banks", *Asia Pulse,* Seúl, 5 de noviembre de 1998.

res, la acción mayoritaria (51%) de KFB se transfirió a Newbridge Capital Ltd., grupo estadunidense especializado en compras apalancadas.[26] Newbridge estaba controlado por el financiero estadunidense Richard Blum, esposo de la senadora por California Dianna Feinstein, en sociedad con el multimillonario texano David "Bondo" Bonderman, del grupo Texas Pacific. Bonderman también está asociado con otro prominente magnate texano, Richard Bass, quien a su vez tiene participación en KFB.

De golpe, una empresa de inversiones de California –sin experiencia previa en banca comercial– obtuvo el control de una de las instituciones bancarias más antiguas de Corea, con cinco mil empleados y una moderna red de sucursales en todo el país. Los medios financieros occidentales aplaudieron el que Newbridge Capital generosamente *aceptara* comprar KFB por 500 mil millones de wons (454 millones de dólares). En realidad, con este fraude auspiciado por el FMI, Blum, Bonderman y socios *no pagaron un solo dólar de su bolsa. Korea First Bank les fue entregado sin ningún costo.*[27]

Conforme a los términos del acuerdo con Newbridge, el gobierno le concedió a KFB "opciones retrasadas", lo cual le permitía a los nuevos propietarios exigir una compensación por las pérdidas derivadas de préstamos de cobro dudoso otorgados antes de la venta. En la práctica, esto significaba que el gobierno coreano debía inyectar al banco 17 300 billones de wons –en plazos–, *una cantidad equivalente a 35 veces el precio que el gobierno recibió de Newbridge Capital.*[28] En una moderna forma de asalto a mano armada, una "inversión" totalmente ficticia de 454 millones de dólares realizada por Blum, Bonderman y asociados –junto con la rama de servicios financieros de General Electric, GE Capital– le permitía a los nuevos propietarios hacerse de 15 900 millones de dólares más como donación del gobierno. ¡Nada mal! Y detrás de este lucrativo fraude, el suscriptor de Wall Street, Morgan Stanley Dean Witter, también se embolsaba generosas comisiones tanto del gobierno de Corea como de los nuevos propietarios estadunidenses.

¿Y cómo financiaría el gobierno esta donación multimillonaria? Con salarios más bajos, el despido masivo de empleados públicos, in-

[26] Véase Michael Zielenziger, "A rebounding but unreformed South Korea making investors, officials nervous", *Knight Ridder Tribune News Service,* 11 de junio de 1999.

[27] "More tax money for KFB", *Korea Herald,* Seúl, 17 de agosto de 2000, p. 1.

[28] *Ibid.*

cluyendo maestros y trabajadores de la salud, recortes drásticos a los programas sociales y préstamos por miles de millones de dólares.

El gobierno quedó atrapado en un círculo vicioso. *La donación multimillonaria en favor de Wall Street se financió con préstamos de Wall Street, el FMI y el Banco Mundial*. El gobierno "financiaba su propio endeudamiento". De hecho, el préstamo por dos mil millones de dólares que el Banco Mundial concedió poco antes de la venta de KFB se había destinado a ayudar a los "inversionistas" estadunidenses que comprarían una acción mayoritaria del sector bancario de Corea.

De un día para otro, los nuevos propietarios estadunidenses de KFB se convirtieron en acreedores de los antes poderosos consorcios coreanos, que ahora se encontraban a sus pies. Los directivos coreanos fueron despedidos, y el nuevo presidente del consejo de administración del banco, designado por Newbridge, Robert Barnum, un connotado niño maravilla de las finanzas relacionado con el escenario texano, estaba muy vinculado con el multimillonario de Fort Worth, Robert Bass y su grupo. Otros integrantes del consejo de administración eran Micky Kantor, ex secretario de Comercio de Estados Unidos y negociador del TLCAN durante el gobierno de Bush, así como el magnate de los bienes raíces de Los Ángeles, Thomas Barrack, presidente de Colony Capital, Inc. y asesor financiero personal de Robert Bass.[29]

Financiados por el Tesoro de Corea, los nuevos propietarios texanos y californianos de KFB se habían convertido en "acreedores nacionales" de los consorcios coreanos "en problemas". Sin invertir un solo dólar, "según lo consideraran pertinente", tenían el poder de sacudir, reducir o cerrar filiales enteras de compañías de electrónica, armadoras, de industria pesada, de semiconductores, etc. El destino de los trabajadores de los *chaebols* también se encontraba en manos de los nuevos propietarios estadunidenses... De hecho, la mayoría de las propuestas de fusión y desinversión de los *chaebols* requirió el consentimiento directo de los intereses financieros occidentales.

El gobierno coreano no sólo había perdido el control del programa de privatización, también permitió que se fracturara la industria de servicios financieros. Chase Manhattan había adquirido la mayoría de las acciones de Good Money Securities; Goldman Sachs, el

[29] *Ibid.*

control de Kookmin Bank, en tanto que New York Life se había apoderado de su filial aseguradora, Kookmin Life.[30]

También se exigió la privatización de las principales empresas de servicios públicos, incluyendo Korea Telecom y Korea Gas. Korea Electric Power Corporation (KEPCO) debía subdividirse en varias empresas pequeñas suministradoras de electricidad antes de colocarse en la mesa de subastas. Pohang Iron & Steel Corp. (POSCO) también quedó totalmente privatizada. Un destino similar le espera a Hanjung, la empresa coreana de industria pesada y construcción, la cual formará una "alianza estratégica" con Westinghouse.

CAPITALISTAS ESTADUNIDENSES Y ALEMANES SE REPARTEN EL BOTÍN

En Corea, los intereses comerciales de Estados Unidos y Alemania se han dado la mano. Como parte del programa del FMI, el consorcio bancario alemán Deutsche Bank A.G. quedó a cargo de la administración de Seoul Bank, "nacionalizado" junto con KFB. Mientras tanto, Hubert Neiss, el hombre que negoció el malhadado rescate de diciembre de 1997 dejó el FMI pues fue nombrado presidente de Deutsche Bank Asia, con sede en Hong Kong. Sus nuevas funciones incluían la administración de Seoul Bank, en los términos especificados en el programa del Fondo que él mismo diseñó como funcionario del FMI en Washington.[31]

En otra negociación similar, el rival de Deutsche Bank, Commerzbank A.G. obtuvo el "control administrativo" de Korea Exchange Bank.[32] En otras palabras, de la noche a la mañana, los dos gigantes de la banca alemana quedaron como acreedores de facto de los *chaebols,* sin haber invertido ni un solo marco. En calidad de "administradores" representantes del gobierno coreano, estos bancos tomaban las decisiones relativas a la reestructuración de las deudas incobrables de los *chaebols,* así como a las diversas propuestas de fusión de los activos industriales de Corea con capital extranjero.

[30] *Asia Pulse,* 21 de enero de 2000.

[31] "Struggle to survive will intensify amid M&As", *Business Korea,* vol. 17, núm. 2, febrero de 2000, pp. 30-36.

[32] "Who, what, where", *The Asian Banker Journal,* 18 de mayo de 2000.

INSTAURACIÓN DE UN GOBIERNO COLONIAL DIRECTO

En 1945, el gobierno colonial japonés fue desplazado por el predominio político y militar de Estados Unidos en la región sur de la península de Corea. El general MacArthur colocó a Syngman Rhee, expatriado coreano que vivía en Estados Unidos, a la cabeza de un gobierno títere.

Detrás de los gobernantes militares instalados por Washington, los incipientes grupos comerciales de Corea del Sur controlaban la política económica. Este sistema de "gobierno indirecto", favoreció al "capitalismo nacional". Posteriormente, el régimen militar dio un apoyo decisivo a los *chaebols* coreanos, que se convirtieron en una fuerza poderosa en los mercados internacionales.

El crecimiento del capitalismo coreano no duró mucho. Desde el decenio de 1980, la "globalización económica" redujo los mercados y propició una economía mundial caracterizada por la sobreproducción (véase capítulo 3). En el decenio de 1990, surgió una profunda rivalidad entre los consorcios competidores y los *chaebols* coreanos fueron considerados intrusos que afectaban los intereses del poder corporativo estadunidense, europeo y japonés. El rescate del FMI en 1997 tenía el propósito deliberado de debilitar el capitalismo coreano y confiscar los activos industriales de los *chaebols*.

La agenda secreta era "domesticar a los tigres", desmantelar y someter a las empresas coreanas. El sistema de "gobierno colonial indirecto" instaurado por primera vez por el ejército estadunidense bajo el presidente Syngman Rhee en 1945, se había desarticulado. Las élites empresariales que gobernaban Corea fueron aplastadas, y un sistema totalmente nuevo, encabezado por el presidente Kim Dae Jung, se enfocó en fracturar los *chaebols* y desmembrar el capitalismo coreano. En otras palabras, el acuerdo de rescate del FMI marcó una transformación estructural significativa del estado coreano.

LA REUNIFICACIÓN Y EL "LIBRE MERCADO"

A principios de junio de 2000, unos días antes de la histórica Cumbre Intercoreana de Pyongyang entre Kim Dae Jung y el presidente de la República Democrática Popular de Corea, Kim Jong Il, una misión del FMI llegó a negociar a Seúl con un sentido de la oportu-

nidad pasmoso. Su presencia pasó prácticamente inadvertida para la prensa coreana. Otros asuntos políticos también se hicieron a un lado pues detrás de Kim Dae Jung, los sudcoreanos tenían los ojos fijos en la promesa de reunificación del país.

Mientras tanto, tras bambalinas y al margen de los acalorados debates públicos, el equipo del FMI daba sigilosamente los toques finales a un segundo acuerdo que incluía una "carta de intención" que debía firmar el secretario de Finanzas, Lee Hun-Jai, antes de partir para la Cumbre de Pyongyang.

Fue una venta cuidadosamente orquestada. El segundo acuerdo era aún más mortífero que el de 1997 y, sin debate ni discusión pública, el gobierno coreano reiteró el dominio absoluto del FMI sobre la economía coreana hasta 2003. Este segundo acuerdo (Memorándum de políticas económicas y financieras) puntualizaba los pasos a seguir con mucho mayor detalle que el controversial acuerdo de rescate de 1997, y proyectaba el desmembramiento del capitalismo sudcoreano durante un periodo de tres años (2000-2003).[33]

La misión del FMI tenía algo más bajo la manga. En contubernio con la embajada de Estados Unidos, asesoraba al secretario de Finanzas Lee Hun-Jai, quien estaba a cargo de la agenda de cooperación económica de la Cumbre de Pyongyang. Antes de asumir el puesto de secretario de Finanzas Lee, un títere del Fondo, había tenido a su cargo el infame comité de supervisión financiera, el poderoso perro guardián auspiciado por el Fondo, responsable de empujar a los *chaebols* a la quiebra. Una vez asesorado, Lee partió a Pyongyang a enarbolar los intereses comerciales de Estados Unidos bajo el disfraz de "cooperación económica intercoreana". En realidad, la agenda secreta de Washington dentro del proceso de reunificación es la paulatina recolonización de toda la península coreana.

LA COLONIZACIÓN DE COREA DEL NORTE

Conforme al "programa intercoreano de cooperación económica" firmado en Pyongyang, el gobierno de Seúl se comprometió a inver-

[33] "Commerzbank pledges active role in cleaning up Korea Exchange Bank", *Business Korea,* 8 de agosto de 2000.

tir en Corea del Norte. A su vez, Hyundai, el mayor consorcio coreano, invertiría y abriría fábricas en el norte.

No obstante, los *chaebols* coreanos –incluido Hyundai– están quedando en manos de compañías estadunidenses. En otras palabras, la "cooperación económica intercoreana" bien podría ser una forma disfrazada de "inversión extranjera" y una nueva ventana de oportunidad para Wall Street. Los nuevos propietarios estadunidenses de los *chaebols,* en estrecho contacto con el Departamento de Estado, serán quienes finalmente tomen las decisiones sobre la "cooperación económica intercoreana", incluyendo las inversiones principales en Corea del Norte:

> La estrategia de Kim Dae Jung es ayudar al desarrollo de Pyongyang, *aprovechar su mano de obra barata* y construir clientela e infraestructura que beneficien a Corea del Sur... "*Todos deben fingir que nada le sucederá al gobierno norcoreano, que la apertura no afectará su poder, y que se les brindará ayuda para realizar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial... No obstante, esperamos que esto los cimbre. Es el caballo de Troya...*"[34]

El gobierno del premio Nobel de la Paz, Kim Dae Jung, "preparó el escenario" en representación de Washington. Y con el respaldo del poderío militar estadunidense, la promesa de reunificación –a la cual aspiran todos los coreanos– podría llevar a la imposición de reformas de "libre mercado" en la comunista Corea del Norte, un proceso que desembocaría en la "recolonización" y el empobrecimiento de la península de Corea íntegra, bajo el dominio del capital estadunidense.

[34] Memorándum de políticas económicas y financieras y carta de intención, 14 de junio, Secretaría de Finanzas, Seúl, 2000, publicado en *Republic of Korea Economic Bulletin,* junio de 2000, en <http://epic.kdi.re.kr/home/ecobul/indexlist.html>. También publicado por el FMI: <www.imf.org/external/NP/LOI/2000/kor/01/INDEX.HTM>. El memorándum autoriza al Deutsche Bank a administar el KFB. *Los Angeles Times,* 16 de junio de 2000 (cursivas del autor).

22

EL DESASTRE ECONÓMICO DE BRASIL

La bolsa de valores de São Paulo se derrumbó el 13 de enero de 1999, miércoles negro, sucumbiendo a una violenta embestida especulativa. Las bóvedas del banco central de Brasil reventaron, abriéndose de par en par; la paridad del real con el dólar, fijada con alfileres se rompió.

El gobernador del banco central, Gustavo Franco, fue sustituido por el profesor de economía Francisco Lopes, quien inmediatamente fue enviado a Washington junto con el ministro de Finanzas Pedro Malan para "consultas" de alto nivel con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos. Estas negociaciones de fin de semana con funcionarios de Washington fueron el preámbulo para una reunión que tuvo lugar pocos días después a primera hora del día en el banco federal de la reserva con los acreedores de Brasil. En la lista del desayuno estaban George Soros, especulador del Quantum Hedge Fund; William Rhodes, vicepresidente del Citigroup; Jon Corzine de Goldman Sachs y David Komansky, de Merrill Lynch.[1] Esta reunión privada, celebrada a puertas cerradas, fue crucial: Rhodes encabezaba el New York Banking Committee en nombre de 750 instituciones acreedoras; la primera vez que tuvo tratos con el presidente F.H. Cardoso (cuando éste era ministro de Finanzas en 1993-1994) fue para negociar la "reestructuración" de la deuda externa de Brasil y el lanzamiento del "plan del real". El resultado fue un aumento de la deuda interna de Brasil, de 60 mil millones en 1994, a más de 350 mil millones en 1998.

Mientras tanto, la opinión pública fue cuidadosamente engañada con respecto a las causas de la crisis; se decía que la "gripe asiática" se estaba propagando... Los medios de comunicación mundiales culparon, casualmente, a Itamar Franco, ex presidente de Brasil y "gobernador bribón" de Minas Gerais, por declarar una moratoria en los pagos de la deuda al gobierno federal.[2] Se decía que la ame-

[1] *Estado de São Paulo*, 21 de enero de 1999.

[2] Se declaró una moratoria de 90 días. Véase *Financial Times,* Londres, 18 de enero de 1999, p. 4.

naza de inminente incumplimiento de la deuda por los gobiernos estatales había afectado la "credibilidad económica" de Brasilia.

El Congreso Nacional de Brasil fue culpado también por no haber sellado rápida e "incondicionalmente" la aprobación de la medicina económica letal del FMI. Este último exigía recortes del presupuesto del orden de 28 mil millones de dólares (incluyendo despidos generalizados de empleados civiles, desmantelamiento de programas sociales, venta de bienes del estado, congelación de transferencias de pagos a los gobiernos estatales y canalización de los ingresos del estado hacia el servicio de la deuda).[3]

EXPRIMIENDO EL CRÉDITO

Al insistir en una política monetaria rigurosa, las instituciones con sede en Washington, en consultas con Wall Street, estaban también empeñadas en desestabilizar la base industrial de Brasil, apoderarse del mercado interno y acelerar el programa de privatizaciones. El indicador de referencia del gobierno para la tasa de interés de los préstamos día a día se aumentó a principios de febrero, por instrucciones del FMI, hasta un sorprendente 39% (anual), lo que implicaba, para los bancos comerciales, tasas de crédito de entre 50 y 90% por año. Las manufacturas locales, aplastadas por deudas insuperables, fueron empujadas a la quiebra. El poder de compra se derrumbó, las tasas de interés de los préstamos al consumidor subieron hasta 150 y 250%, provocando un incumplimiento masivo...[4]

Aunque en los mercados financieros la "confianza" se había restablecido temporalmente, el real había perdido más del 40% de su valor, llevando a un aumento inmediato de los precios de combustibles, alimentos y bienes de consumo básicos. El debilitamiento de la moneda nacional contribuyó a reducir considerablemente el nivel de vida en un país de 160 millones de habitantes en donde más del 50% de la población vive por debajo del nivel de pobreza.

Por su parte, la devaluación había repercutido en el cinturón industrial de la zona sur de São Paulo, donde la tasa de desempleo

[3] Conferencia de prensa de Michel Camdessus y Stanley Fischer, Washington, 13 de noviembre de 1998. Véase también "Carta de intención" y "Brazil: Memorandum of economic policies", FMI, Washington, 13 de noviembre de 1998.

[4] Véase *Estado de São Paulo*, 21 de enero de 1999.

(oficial) había alcanzado el 17% en 1998. En los días siguientes al miércoles negro del 13 de enero de 1999, compañías multinacionales, entre ellas Ford, General Motors y Volkswagen, confirmaron interrupciones de la producción y la puesta en marcha de despidos generalizados de trabajadores.[5]

ANTECEDENTES DEL ACUERDO DEL FMI

A primera vista, la crisis de Brasil aparece como una "repetición" estándar de la crisis monetaria asiática de 1997. La funesta "medicina económica" del FMI es similar, a grandes rasgos, a la que se impuso en 1997-1998 a Corea, Tailandia e Indonesia. Pero existe una notable diferencia en la "coordinación" (es decir, la cronología) de las confabulaciones del FMI: en Asia, los "rescates" del FMI habían sido negociados sobre una base *ad hoc,* "después" en lugar de "antes" de la crisis (véase capítulo 21). En otras palabras, el FMI solamente "vendría al rescate" de los "tigres asiáticos" al comienzo de la embestida especulativa, una vez que las monedas nacionales hubieran caído y los países quedaran con deudas insuperables.

En contraste, en el caso de Brasil la operación financiera del FMI fue lanzada en noviembre de 1998, exactamente dos meses antes del caos financiero, como parte de un nuevo acuerdo vigente entre el FMI y el G-7. Se pretendía que la "medicina económica" fuese "preventiva" más que "curativa". Oficialmente tenía el propósito de prevenir que se produjera un desastre financiero. En palabras de sus arquitectos políticos, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, y el ministro de Hacienda del Reino Unido, Gordon Brown: "debemos hacer más para... limitar los altibajos de prosperidad y depresión que destruyen la esperanza y disminuyen la riqueza".[6]

En la práctica, el plan del FMI-G-7 consiguió exactamente los resultados opuestos. En lugar de evitar la embestida especulativa, contribuyó a acelerar la salida de riqueza monetaria. Veinte mil millones de dólares fueron sacados de Brasil en los dos meses siguientes a la aprobación del paquete preventivo del FMI, en noviembre, una can-

[5] Véase Larry Rohter, "Crisis whipsaws Brazilian workers", *New York Times,* 16 de enero de 1998.

[6] Citado en *Financial Times,* Londres, 31 de octubre-1 de noviembre de 1998.

tidad de dinero de la misma magnitud que los recortes presupuestarios exigidos con antelación por el FMI.

Las reservas del banco central de Brasil, dañadas por la fuga de capitales, estaban siendo saqueadas a razón de 400 millones de dólares por día... De 75 mil millones de dólares en julio de 1998, las reservas del banco central disminuyeron a 27 mil millones en enero de 1999. La primera tajada del préstamo del FMI, de más de 9 mil millones de dólares (otorgado en noviembre de 1998) ya había sido despilfarrada para apuntalar la enferma moneda de Brasil; el dinero era apenas suficiente para "financiar la fuga de capitales" en el curso de un solo mes.

SEDUCIENDO A LOS ESPECULADORES

La operación patrocinada por el FMI proveyó los instrumentos necesarios para persuadir a los especuladores de que persistieran en sus incursiones destructivas; "el dinero estaba allí" para ser arrebatado y los especuladores lo sabían. Si el banco central de Brasil iba a incumplir sus contratos en divisas extranjeras, la disponibilidad del dinero del FMI-G-7 permitiría a los bancos, fondos laterales e inversionistas institucionales recoger velozmente su botín de dólares multimillonario. De este modo, el programa del FMI, firmado en noviembre de 1998, contribuyó a reducir los riesgos y "tranquilizar a los especuladores".

La "coordinación" aproximada de la devaluación era parte de las confabulaciones del FMI; asegurando una tasa de cambio estable en el periodo de dos meses siguiente al convenio del FMI (13 de noviembre de 1998), había permitido a los especuladores embolsarse rápidamente otros 20 mil millones de dólares más... Tanto Wall Street como las instituciones de Washington sabían que era inminente una devaluación y que el paquete preventivo patrocinado por el FMI y el G-7 no era nada más una "medida para tapar el hoyo". En otras palabras, el programa del FMI permitía a los especuladores de divisas "comprar tiempo". El banco central recibió instrucciones de "resistir" el mayor tiempo posible. Se decía que el equipo económico en el Ministerio de Finanzas había sido "tomado por sorpresa" pero todo el tiempo supieron que la devaluación estaba próxima... En enero, el FMI aceptó dejar que la moneda se deslizara. Para en-

tonces ya era demasiado tarde, las reservas del banco central ya habían sido saqueadas...

"UN PLAN MARSHALL PARA ACREEDORES Y ESPECULADORES"

Desde la Cumbre Económica de Davos, Stanley Fischer, el subdirector gerente principal del FMI y arquitecto mayor del paquete crediticio de noviembre, se dirigió a Brasilia para negociar los términos de un nuevo acuerdo.

Las deudas a corto plazo habían subido vertiginosamente y exigían "nuevas iniciativas políticas"; las duras medidas de austeridad acordadas con el FMI pocos meses antes se consideraban insuficientes para "restablecer una recuperación duradera de la confianza". Se establecieron nuevas metas fiscales; siguiendo el patrón fijado en los salvamentos del Este de Asia en 1997, Brasilia debía "intensificar y ampliar el esfuerzo de privatización y desposeimiento" –sentando las bases para la liquidación de los bancos federales y estatales, y acelerando la apropiación de los sectores energético y estratégico, los servicios públicos y la infraestructura de Brasil por parte del capital privado.[7]

Por su parte, el banco central debía ser concienzudamente renovado. Las autoridades monetarias habían recibido instrucciones para sostener el real bajo un régimen de cambio flexible –esto es, vendiendo masivamente sus reservas de divisas... Una segunda tajada de 9 mil millones de dólares (dentro del préstamo de 41.5 mil millones de dólares) contribuiría a reabastecer los cofres del banco central (con dinero prestado) y seducir a los especuladores para continuar con sus incursiones destructivas. Bajo la nueva estratagema firmada porel FMI en febrero, la fuga de capitales proseguiría sin disminución en los meses venideros a pesar de la devaluación del real... Muy lucrativo: luego del caos financiero del 13 de enero, las salidas de capital eran del orden de entre 200 y 300 millones de dólares al día.[8]

[7] Véase "Joint statement of the Ministry of Finance of Brazil and the IMF team", *News Brief* 99/5, IMF, Washington, 4 de febrero de 1999.

[8] Estado de São Paulo, 21 de enero de 1999.

WALL STREET A CARGO DEL BANCO CENTRAL DE BRASIL

Para asegurar la continuidad del éxito del ataque especulativo, dos semanas después del 13 de enero, metieron al saco al profesor Francisco Lopes –cuya cabeza había sido señalada en el banco central durante el miércoles negro– y lo remplazaron por el señor Arminio Fraga Neto, anterior asesor del fondo Soros, en Nueva York. Este nombramiento se hizo luego del encuentro del ministro de Finanzas Malan con George Soros, durante un desayuno en el banco de reservas federales de Nueva York. El ex presidente Itamar Franco había observado con un toque de humor: "Me alegra saber que el nuevo gobernador del banco central es el megaespeculador George Soros."[9]

Personal de Wall Street estaba al mando de la política monetaria. Los acreedores externos de Brasil tenían la capacidad de congelar el presupuesto del estado, paralizar el procedimiento de pagos, incluyendo las transferencias a los gobiernos de los estados, y de obstaculizar (como en la antigua Unión Soviética) el desembolso regular de salarios de los empleados del sector público, comprendidos varios millones de maestros y trabajadores de la salud.

Esta "quiebra programada" de los productores nacionales ha sido elaborada, de principio a fin, con la compresión del crédito, por no mencionar la amenaza del ministro de Finanzas, Pedro Malan, de permitir el dumping para aumentar la liberalización del comercio y (la importación de) las mercancías, con vistas a obligar a las empresas nacionales a "ser más competitivas". Para muchos productores locales, la consecuencia de esta política, en combinación con tasas de interés arriba del 50%, equivale a quebrar –es decir, al empujar los precios nacionales por debajo de los costos...

Por su parte, la reducción dramática de la demanda interna (resultado del desempleo creciente y de la disminución de los salarios reales) había llevado a la situación de sobreoferta y al aumento de las cantidades de mercancía sin vender... Este deceso cruel de la industria nacional –pergeñado por la reforma macroeconómica– había creado un "medio ambiente permisivo" que habilitaba al capital extranjero para apoderarse del mercado interno, reforzar su "llave estranguladora" sobre la banca nacional y recolectar los bienes productivos más rentables a precios de remate...

[9] "Itamar: Soros presidara o BC", Agencia Estado, *Últimas Noticias*, 2 de febrero de 1999.

ABN AMRO, Lloyds Bank, HSBC y Dresdner están ocupados adquiriendo bienes bancarios en Brasil. HSBC adquirió cerca de mil sucursales del banco Amerindus convirtiéndose, de la noche a la mañana, en el segundo más grande banco minorista privado de Brasil.

Los bancos de inversiones de Wall Street, generalmente, son los encargados de la tarea de vender los bienes del estado mediante convenios secretos con oscuros poseedores de información de primera mano de los programas de privatización y quiebra del FMI.

En Brasil, por ejemplo, Merrill Lynch se hizo cargo de la privatización de la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), uno de los equipos de minería más grandes del mundo, a nombre del gobierno brasileño. Pero Merrill Lynch estaba representando también a uno de los futuros compradores de la CVRD): el consorcio angloamericano de minería. En una operación típica entre los poseedores de información, el consorcio angloamericano estrechó manos con NationsBank (ahora fusionado con BankAmerica) a costa de un fondo de inversión no registrado, en un oscuro paraíso fiscal, el "fondo para el manejo de bienes de oportunidad" que tiene como inversionistas a Citibank y al megaespeculador George Soros (*Financial Times*, 5 de mayo de 1997). Con la adquisición de la CVRD el consorcio controlará más del 80% de la industria del acero de Brasil (Geoff Dyer, "Soros consortium set to bid in Brazil iron or sell-off", *Financial Times*, 5 de mayo de 1997). Por su parte, el producto de la venta de la CVRD será convenientemente reciclado de regreso, desde el Tesoro hacia el servicio de la deuda externa de Brasil, del cual uno de los nuevos propietarios de la CVRD –a saber, el Citigroup–, resulta ser el principal acreedor de Brasil y cabeza de comité bancario responsable de la reestructuración de la multimillonaria deuda externa de Brasil.

En otras palabras, la crisis financiera ha creado condiciones que favorecen la recolonización rápida de la economía brasileña. La depreciación del real ha deprimido el valor contable (en dólares) de los bienes del estado y ha contribuido a acelerar el programa de privatización. La perniciosa medicina económica del FMI –combinada con el aumento de la deuda y la fuga continua de capital– se traduce en desastre económico, fragmentación de la estructura fiscal federal y desarticulación social.

LA “DOLARIZACIÓN” DE AMÉRICA LATINA

El sobrecalentamiento financiero de Brasil había creado también un ambiente que reforzaba, en toda América Latina, la “llave estranguladora” de los acreedores de Wall Street sobre la política monetaria. En Argentina, la cesión del banco central estaba ya firmemente establecida con el arreglo de un “consejo monetario” al estilo colonial. En Buenos Aires se estaban llevando a cabo discusiones concernientes a la sustitución del peso argentino por el dólar estadunidense, lo que implicaría no sólo el control completo de la creación de moneda por acreedores externos sino también la emisión de papel moneda por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Otros países latinoamericanos pueden seguir por este camino, al pensar con estrechez que la “dolarización” de su moneda es la forma de evitar un desastre financiero. No se vislumbra ninguna clase de “aterrizaje suave”: aunque oficialmente la dolarización no forma parte de la iniciativa para el área de libre comercio de las Américas (ALCA), la agenda secreta, eventualmente, remplazará las monedas latinoamericanas por el dólar estadunidense, empezando con el arreglo de un consejo monetario.

BIBLIOGRAFÍA SELECTA

Addison, Tony y Demery Lionel, 1987, “Alleviating poverty under structural adjustment”, *Finance and Development*, 24: 4.

African Rights, 1993, *Somalia, Operation Restore Hope: A preliminary assessment*, Londres.

Albanez, T. *et al.*, 1989, *Economic decline and child survival*, UNICEF, Florencia.

Altmann, Jorn, 1990, “IMF conditionality: The wrong party pays the bill”, *Intereconomics*, mayo-junio.

Álvarez, Elena, 1991, *The illegal coca production in Peru: A preliminary assessment of its economic impact*, Institute of the Americas/University of California en San Diego, febrero de 1991.

Amin, Samir, 1990, *Maldevelopment: Anatomy of a global failure*, Londres, Zed Books.

Anyiam, Charles y Robert Stock, 1991, *Structural adjustment programs and “reality” of living conditions*, reuniones anuales del CASID, Kingston.

Aristide, Jean-Bertrand y Laura Flynn (eds.), 2000, *Eyes of the heart: Seeking a path for the poor in the age of globalization*, Common Courage.

Atta Mills, Cadman, 1989, *Structural adjustment in Sub-Saharan Africa*, Washington, D.C., Economic Development Institute, Banco Mundial.

Balassa, B., 1981, *Structural adjustment policies in developing countries*, Washington, D.C., Banco Mundial.

Bamako Initiative Management Unit, 1990, *The Bamako Initiative strategy in Mauritania*, Nueva York.

Banco Interamericano de Desarrollo, 1989, *Perú: Informe económico*, Washington.

____, 1991, *Economic and social progress in Latin America, 1991 Report*, Washington, D.C.

Banco Mundial, 1983, *Yugoslavia: Adjustment policies and development perspectives*, Washington, D.C.

____, 1989*a*, *Peru, policies to stop hyperinflation and initiate economic recovery*, Washington, D.C.

____, 1989*b*, *Adjustment lending. An evaluation of ten years of experience*, Washington, D.C.

____, 1989*c*, *Sub-Saharan Africa, from crisis to sustainable growth*, Washington, D.C.

____, UNDP, 1989, *Africa’s adjustment and growth in the 1980s*, Washington, D.C.

____, 1990*a*, *Social dimensions of adjustment priority survey*, SDA Working paper 12, Washington, D.C.

____, 1990*b*, *Assistance strategies to reduce poverty*, Washington, D.C.
____, 1990*c*, *Making adjustment work for the poor*, Washington, D.C.
____, 1990*d*, *World development report, 1989*, Washington, D.C., Oxford University Press.
____, 1990*e*, *Analysis plans for understanding the social dimensions of adjustment*, Washington, D.C.
____, 1991*a*, *World development Report, 1991*, Washington, D.C., Oxford University Press.
____, 1991*b*, *The poverty handbook*, proyecto para discusión, Washington, D.C.
____, 1991*c*, *Human development. A Bank strategy for the 1990s*, Washington, D.C.
____, 1993*a*, *World development report, 1993: Investing in health*, Washington, D.C.
____, 1993*b*, *Viet Nam, transition to market economy*, Washington, D.C.
____, 1993*c*, *Vietnam, population, health and nutrition review*, Washington, D.C.
____, 1994, *Adjustment in Africa*, Washington, D.C., Oxford University Press.
____, 1995*a*, *Towards gender equality: the role of public policy*, Naciones Unidas, Cuarta Conferencia sobre la Mujer, Beijing.
____, 1995*b*, *Advancer gender equality: from concept to action*, Naciones Unidas, Cuarta Conferencia sobre la Mujer, Beijing.
____, 1995*c*, *The gender issue as key to development*, Washington, documento HCO, 95/01.
____, 1995*e*, Letting girls learn, World Bank Discussion Paper series, Washington.
____, 2000*d*, Heavily indebted poor countries initiative <www1.worldbank.org/prsp/PRSP_policy_Papers/prsp_policy_papers.html>, Washington.
____, 2000*b*, Poverty reduction strategy papers <www1.worldbank.org/prsp/PRSP_policy_Papers/prsp_policy_papers.html>, Washington.
Barratt Brown, M., 1992, *Short-changed, Africa in world trade*, Londres, Pluto Press.
Beardsley, Tim, 1993, "Selling to survive", *Scientific American*, febrero.
Behrman, Jere y Anil B. Deolalikar, 1991, "The poor and the social sectors during a period of macroeconomic adjustment: Empirical evidence from Jamaica", *World Bank Economic Review*, 5: 2.
Bell, Michael y R. Sheehy, 1987, "Helping structural adjustment in low income countries", *Finance and Development*, 24:4, diciembre.
Bello, Walden y Shea Cunningham, 1994, *Dark victory: The US, structural adjustement, and global poverty*, Londres, Food First.
____, 2000*a*, "Bringing financial crisis to Asia", *The Ecologist*, 30:6.
____, 2000*b*, "Time to decide: radical reform or abolition, *The Ecologist*, 30:6.
____, 2000*c*, "WTO: Serving the wealthy, not the poor", *The Ecologist*, 30:6.
Beneria, Lourdes y Shelley Feldman, 1992, *Unequal burden and persistent poverty*, Boulder, Westview Press.

Bennet, K., 1991, *Economic decline and the growth of the informal sector*, Conferencia Anual de CASID, Kingston, Ont.

Bennett, Sara y Manengu Musambo, 1990, *Report on community financing and district management strengthening in Zambia*, Bamako Initiative Technical Report, Nueva York, UNICEF.

Betz, J., 1990, "The social effects of adjustment policy in LDCS", *Intereconomics*, mayo-junio.

Berg, Andrew y Catherine Patillo, 2000, "The challenge of predicting economic crises", *Economic Issues*, núm. 22, Wahington, FMI.

Bianchi A. (ed.), 1985, *La deuda externa latinoamericana*, Santiago, Grupo Editor Latino Americano.

Boateng, E. Oti *et al.*, s/f, *A poverty profile for Ghana, 1987-1988*, Washington, D.C., Banco Mundial.

Bond, Patrick, 1998, *Uneven Zimbabwe, a study of finance development and underdevelopment*, Trenton, New Jersey, Africa World Press.

Bourgoignie, Georges y Marcelle Genné (eds.), 1990, *Structural adjustment and social realities in Africa*, Ottawa, University of Ottawa.

Brandt, H. *et al.*, 1985, *Structural distortions and adjustment programmes in the poor countries of Africa*, Berlín, Deutsches Institut fur Entwicklungs Politik.

Brandt Commission, 1983, *Common crisis, North-South cooperation for world recovery*, Nueva York, Pan Books.

Bruno, Michael (ed.), 1991, *Lessons of economic stabilisation and its aftermath*, Cambridge, Mass., MIT Press.

Bullard, Nicola, Walden Bello y Kamal Malhotra, 1998, "Taming the tigers: the IMF and the Asian crisis", número especial sobre el FMI, *Focus on Trade*, núm. 23, Bangkok, Focus on the Global South, marzo.

Burkholder, Jim, s.f., "Humanitarian intervention?", Veterans for Peace, <www.veteransforpeace.org>.

Calavita, Kitty *et al.*, 1997, *Big money crime: Fraud and politics in the savings and loan crisis*, University of California Press.

Canadian International Development Agency, 1987, *Sharing our future*, Hull.

____, 1990, *Working paper on poverty alleviation for the 4As*, Hull.

Cammen, Ulrich, 1991, *Country paper. Nepal: Macroeconomic evolution and the health sector*, Ginebra, OMS.

____ y Guy Carrin, 1991, *Macroeconomic analysis: Guinea, macroeconomic evolution and the health sector*, Ginebra, OMS.

Campbell, Bonnie K., 1989, *Political dimensions of the international debt crisis*, Londres, Macmillan.

____ y John Loxley (eds.) 1990, *Structural adjustment in Africa*, Londres, Macmillan.

Campodónico, Humberto, 1989, "La política del avestruz", en Diego García Sayán (ed.), Lima, 1989.

Carrin, Guy y Kodjo, 1991, *The basic macro-economics of government health sector expenditures in low income developing countries*, Ginebra, OMS, Office of International Cooperation.

Chauvier, Jean Marie, 1993, "Tourbillon de crises en Russie", *Le Monde Diplomatique*, octubre.

Chossudovsky, Michel, 1975, "Hacia el nuevo modelo económico chileno, inflación y redistribución del ingreso, 1973-74", *El Trimestre Económico*, 122.

____, 1991, "The globalisation of poverty and the New World Economic Order", *Economic and Political Weekly*, 26: 44.

____ y Pierre Galand, 1997, "L'usage de la dette exterieure du Rwanda, la responsabilité des creanciers", Ottawa y Bruselas, United Nations Development Programme (UNDP).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1990, *Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta*, Santiago de Chile.

Commonwealth Secretariat, 1989, *Engendering adjustment for the 1990s*, Informe de un Grupo de Expertos de la Commonwealth sobre las Mujeres y el Ajuste Estructural, Londres.

Cornia, Giovanni A., 1989, "Investing in human resources: Health, nutrition and development for the 1990s", *Journal of Development Planning*, 19.

____ y Frances Stewart, 1990, *The fiscal system, adjustment and the poor*, Florencia, UNICEF, Innocenti Occasional Papers 11.

____ y Richard Jolly, 1987, *Adjustment with a human face*, 1, Nueva York, UNICEF/Oxford University Press.

Cornia, Giovanni A. y Richard Strickland, *Rural differentiation, poverty and agricultural crisis in Sub-Saharan Africa. Toward an appropriate policy response*, Florencia, UNICEF.

Corrêa Linhares, Célia Maria y Maristela de Paula Andrade, 1992, "A ação oficial e os conflitos agrários no Maranhão", *Desenvolvimento e Cidadania*, 4, São Luis de Maranhão.

Cottarelli, Carlos, 1993, *Limiting central bank credit to the government*, FMI, Washington, D.C.

Cruz Rivero, C. *et al.*, 1991, *The impact of economic crisis and adjustment on health care in Mexico*, OMS, Florencia.

Culpeper, Roy, 1987, *Forced adjustment: The export collapse in Sub-Saharan Africa*, Ottawa, The North-South Institute.

____, 1991, *Growth and sdjustment in smaller highly indebted countries*, Ottawa, The North-South Institute.

Danaher, Kevin y Roger Burbach, 2000, *Globalize this!: The battle against the world trade organization*, Community Archives Publications.

Dancourt, Oscar, 1987, "Cuando se abandonan las políticas fondomonetaristas", en C. Herrera, O. Dancourt y G. Alarco, *Reactivación y política económica heterodoxa*, Lima, Fundación Friedrich Ebert.

Dancourt, Oscar *et al.*, 1990, “Una propuesta de reforma monetaria para acabar con la inflación”, *Documentos de trabajo*, 90, Lima, CISEPA/Pontificia Universidad Católica del Perú, julio.

Dancourt, Oscar e Ivory Yong, 1989, “Sobre hiperinflación peruana”, *Economía*, XII: 23, junio de 1989.

Denters, Erik M.G., 1996, *Law and policy of IMF conditionality*, La Haya, Kluwer Law International.

Devlin, Robert, 1990, “The menu approach”, *IDS Bulletin*, 23: 2.

Didszun, Klaus, 1990, “On the problem of negative net transfers to developing countries”, *Intereconomics*, mayo-junio.

Drewnowski, Jan, 1965, *The level of living index*, Ginebra, UNRISD.

Ebel, Beth, 1991, *Patterns of government expenditure in developing countries during the 1980s*, Florencia, UNICEF.

Edwards, S., 1988, *La crisis de la deuda externa y las políticas de ajuste estructural en América Latina*, Santiago, Estudios CIEPLAN.

Elson, Diane, 1989, “How is adjustment affecting women”, *Development*, 1.

Faber, Mike y Griffith Jones, S., 1990, “Editorial on approaches to Third World debt reduction”, *IDS Bulletin*, 23: 2.

Fabricant, Stephen y Clifford Kamara, 1990, *The financing of community health service in Sierra Leone*, Nueva York, UNICEF.

Ferroni, Marco y Ravi Kanbur, 1991, *Poverty conscious restructuring of public expenditure*, SDA Working Paper 9, Washington, D.C., Banco Mundial.

Figueroa, Adolfo, 1989, “Integración de las políticas de corto y largo plazo”, *Economía*, XII: 23, junio.

Fondo Monetario Internacional, 1988, *The implications of Fund supported adjustment programs for poverty*, Washington, D.C.

____, 1991, *Bangladesh: Economic reform measures and the poor*, Washington, D.C.

____ Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, 1991, *A study of the Soviet economy*, París.

Food and Agriculture Organization (FAO), 2000, special report: FAO/WFP crop assessment mission to Ethiopia, Roma.

Forbes Magazine, “International billionaires, the world’s richest people”, anual, Nueva York, lista en <www.forbes,com/tool/toolbox/billnew/>

Foxley, A., 1987, “Latin American development after the debt crisis”, *Journal of Development Economies*, 27: 1-2.

French Hillary, 2000, *Vanishing borders: protecting the planet in the age of globalization*, Nueva York, Norton.

García Sayán, Diego (ed.), 1989, *Coca, cocaína y narcotráfico*, Lima, Comisión Andina de Juristas.

Gates, Jeff, 2000, *Democracy at risk: rescuing main street from Wall Street*, Perseus Press.

Gervais, Myriam, 1993, "Étude de la pratique des ajustements au Niger et au Rwanda", *Labour Capital and Society*, 26: 1.

Gervasi, Sean, 1993, "Germany, US and the Yugoslav crisis", *Covert Action*, 43, invierno de 1992-1993.

Ghai, Dharam, 1992, *Structural adjustment, global integration and social democracy*, Ginebra, UNRISD.

Glasberg, Davita Silfen y Dan Skidmore, 1997, *Corporate welfare policy and the welfare state: bank deregulation and the savings and loan bailout (social institutions and social change)*, Aldine De Gruyter.

Glover, David, 1991, "A layman's guide to structural adjustment", *Canadian Journal of Development Studies*, 12: 1.

Gonçalves, R., 1986, *Structural adjustment and structural change: In search of a solution*, Ginebra, UNCTAD.

Griffith-Jones, S. y O. Sunkel, 1986, *Debt and development crisis*, Oxford, Clarendon Press.

Griffith-Jones, S., 1989, "Debt reduction with a human face", *Development*, 1.

Griffith-Jones, S. (ed.), 1989, *Debt management and the developing countries*, Nueva York, UNDP.

Grootaert, C. y T. Marchant, *The social dimensions of adjustment survey*, Washington, D.C., Banco Mundial.

Guichaoua, André, 1987, *Les paysans et l'investissement-travail au Burundi et au Rwanda*, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.

____, 1989, *Destins paysans et politiques agraires en Afrique centrale*, París, L'Harmattan.

George, Susan, 1999, *The Lugano report*, Londres, Pluto Press.

____ y Fabrizio Sabelli, 1994, *Faith and credit, the World Bank's secular empire*, Londres, Penguin Books.

Haggard, Stephen *et al.*, 1992, *The politics of economic adjustment*, Princeton, Princeton University Press.

Helleiner, G.K., 1987, "Stabilization, adjustment and the poor", *World Development*, 15:2, diciembre.

Heller, Peter *et al.*, 1988, *The implications of fund-supported adjustment for poverty*, Washington, D.C., FMI.

Hicks, R. y O. Per Brekk, 1991, *Assessing the impact of structural adjustment on the poor. The case of Malawi*, Washington, D.C., FMI.

Hoogfeld, Ankie, 1997, *Globalization and the postcolonial world, the new political economy of development*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Hossein, Farzin, 1991, "Food aid: Positive and negative effects in Somalia?", *The Journal of Developing Areas*, enero.

Hussein, Mosharaf, A.T.M. Aminul Islam y Sanat Kumar Saha, 1987, *Floods in Bangladesh, recurrent disaster and people's survival*, Dhaka, Universities' Research Centre.

Hudson, Michael, 1998, "Big bang is culprit behind yen's fall", *Our World*, núm. 187, Kawasaki, 28 de julio.

____ y Bill Totten, 1998, "Vulture speculators", *Our World*, núm. 197, Kawasaki, 12 de agosto.

Institute of International Finance, 1997, Report of the multilateral agencies group, IIF Annual Report, Washington.

Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), *O Mapa da Fome II: Informaçoes sobre a indigencia por municipios da Federação*, Brasilia, 1993.

Jackson, Karl D. (ed.), 1999, *The Asian contagion: the causes and consequences of a financial crisis*, Westview Press.

Jamal, V., 1988, "African crisis, food security and structural adjustment", *International Labour Review*, 127: 6.

Jesperson, Eva, 1991, *External shocks, adjustment policies and economic and social performance*, Nueva York, UNICEF.

Johnson, John H., 1993, *Borrower ownership of adjustment programs and the political economy of reform*, Washington, D.C., Banco Mundial.

Jolly, Richard, 1988, "Poverty and adjustment in the 1990s", en Kallab y Feinberg (eds.), 1988, *Strengthening the poor: What have we learnt*, New Brunswick, N.J., Overseas Development Council/Transactions Books.

Kanbur, Ravi, 1989, *Poverty and the social dimensions of adjustment in Côte d'Ivoire*, Washington, D.C., Banco Mundial.

Kapeliouk, Amnon, 1993, "La détresse de la société russe", *Le Monde Diplomatique*, septiembre.

Kaufman, Bruce E., 1989, *The economics of labor and labor markets*, 2a. ed., Orlando.

Khan, Mohsin, 1990, "The macroeconomic effects of Fund supported-adjustment programs", *IMF Staff Papers*, 37: 2, Washington, D.C.

Khor, Martin, 1995, "Baring and the search for a rogue culprit", *Third World Economics*, núm. 108, marzo.

____, 1997," SEA currency turmoil renews concern on financial speculation", *Third World Resurgence*, núm. 86, octubre.

____, 2000, "The new frontier", *The Ecologist*, 30:6.

Killick, T. (ed.), *Adjustment and financing in the developing world: The role of the IMF*, Washington, D.C., FMI.

Killick, T., 1993, *The adaptive economy, adjustment policies in low income countries*, Washington, D.C., Banco Mundial.

Kisic, Drago y Verónica Ruiz de Castilla, 1989, "La economía peruana en el contexto internacional", CEPEI, 2: 1, enero.

Korten, David, 1999, *The post corporate world*, West Hartford, Connecticut, Kumarian Press.

____, *When corporations rule the world,* 2a. ed., Berrett-Koehler Publishers, 2001.

Krasner, Stephen D., 1985, *Structural conflict: The Third World against global*

liberalism, Berkeley, University of California Press.

Krueger, Ann, 1987, "Debt, capital flows and LDC growth", *American Economic Review*, 77: 2.

Krueger, Ann *et al.*, 1990, "Developing countries' debt problems and efforts at policy reform", *Contemporary Policy Issues*, enero.

Labor Focus on Eastern Europe, publicación trimestral, Oxford.

Langoni, Carlos, 1987, *The development crisis*, San Francisco, International Center for Economic Growth.

Lee, Catherine, 1998, "The wrong medicine; nationalization of commercial banks in South Korea", *The Banker*, diciembre.

Lifschutz, Lawrence, 1979, *Bangladesh, the unfinished revolution*, Londres, Zed Press.

López Acuña, Daniel *et al.*, 1991, *Reforma del estado y desarrollo social en América Latina*, Washington, D.C., PAHO/OPS.

Lora, G., 1988, *Política y burguesía narcotraficante*, La Paz, Mi Kiosko.

Loxley, John, 1986, *Debt and disorder, external financing for development*, Westview Press.

____, 1991, *Ghana's recovery: An assessment of progress, 1987-1990*, Ottawa, The North-South Institute.

Madrid Declaration of Alternative Forum, 1994, *The other voices of the planet*, Madrid.

Magdoff, Freed, John Bellamy Foster y Frederick H. Buttel (eds.), 2000, *Hungry for profit, 2000. The agribusiness threat to farmers, food, and the environment*, Nueva York, Monthly Review Press.

Malpica, Carlos, 1989, *El poder económico en el Perú*, I, Lima, Mosca Azul Editores.

Manley, M. y W. Brandt, 1985, *Global challenge, from crisis to cooperation*, Londres, Pan Books.

Martin, Hans-Peter y Harald Schuman, 1997, *The global trap: globalization and the assault on prosperity and democracy*, Zed Books.

Martirena Mantel, A.M. (ed.), 1987, *External debt, savings and growth in Latin America*, Buenos Aires, Fondo Monetario Internacional/Instituto Torcuato di Tella.

Maya, R.S., 1988, *Structural adjustment in Zimbabwe: Its impact on women*, Harare, Zimbabwe Institute of Development Studies.

McAfee, Kathy, 1991, *Storm signals, structural adjustment and development alternatives in the Caribbean*, Boston, Mass., South End Press.

McGowan, David, *Derailing democracy: the America the media don't want you to see*, Common Courage.

McLaughlin, Martin, 1999, Clinton republicans agree to deregulation of US banking system, World Socialist website <www.wsws.org/index.shtml>, 1 de noviembre.

Mendosa, Teresa, Guillermo Rebosio y Carmen Alvarado, 1990, *Canasta óp-*

tima alimentaria, Lima, Centro de Estudios Nueva Economía y Sociedad.

Miller, M., 1989, *Resolving the global debt crisis*, Nueva York, United Nations Development Programme.

Morales, Juan Antonio, 1987, "Estabilización y nueva política económica en Bolivia", *El Trimestre Económico*, 54.

____, 1989, *The costs of the Bolivian stabilisation programme*, documento de trabajo 01/89, La Paz, Universidad Católica Boliviana.

____, 1990, *The transition from stabilisation to sustained growth in Bolivia*, documento presentado en "Lessons of Economic Stabilisation and its Aftermath", Banco de Israel/ Banco Interamericano de Desarrollo, Jerusalén, enero-febrero.

Moser, Caroline O.N., 1989, "The impact of recession and structural adjustment on women: Ecuador", *Development*, 1.

Mosley, 1990, *Increased aid flows and human resource development in Africa*, Florencia, UNICEF.

Murray, C., 1987, "A critical review of international mortality data", *Soc. Scie. Med.*, 25: 7.

Naciones Unidas, Comisión Económica para África, 1989, *African alternative framework to structural adjustment programmes for socio-economic recovery and transformation*, Addis Abeba, ECA.

Naciones Unidas, Conferencia sobre los Países Menos Desarrollados, 1990, *Country presentation by the Government of Rwanda*, Ginebra.

Naciones Unidas, Programa de Desarrollo, 1992, *Human development report, 1992*, Nueva York.

Nagaraj, K. *et al.*, 1991, "Starvation deaths in Andhra Pradesh", *Frontline*, 6 de diciembre.

Nahimana, Ferdinand, 1993, *Le Rwanda, émergence d'un état*, París, L'Harmattan.

Nelson, Joan M. (ed.), 1990, *Economic crisis and policy choice: The politics of adjustment in the Third World*, Princeton University Press.

Newbery, David, 1989, "The debt crisis", *Development*, 1.

North-South Institute, 1988, *Structural adjustment in Africa: External financing in development*, Ottawa, The North-South Institute.

Nuqui, Wilfredo, 1991, *The health sector and social policy in the Philippines since 1985*, Florencia, UNICEF.

Oficina Internacional del Trabajo, 1992, *Adjustment and human resource development*, Ginebra.

Organización Internacional del Trabajo, 1989, *Generating employment and incomes in Somalia*, Addis Abeba, Jobs and Skills Programme for Africa.

Organización Panamericana de la Salud, 1990, *Development and strengthening of local health systems*, Washington, D.C.

____, 1991, *Health conditions in the Americas*, 1, Washington, D.C.

Oyejide, T.A., 1985, *Nigeria and the IMF*, Ibadan, Heinemann.

Pandhe, M.K., 1991, *Surrender of India's sovereignty and self-reliance*, Nueva Delhi, Progressive Printers.

Pastor, Manuel, 1987, "The effects of IMF programs in the Third World", *World Development*, 15: 2.

Peet, Richard (ed.), 1987, *International capitalism and industrial restructuring*, Boston, Allen & Unwin, 1987.

Pilger, John, 1998, *Hidden agendas*, Londres, Vintage.

Pirages, Dennis C., 1990, *Transformations in the global economy*, Londres, Macmillan.

Polanyi-Levitt, Kari, 1989, *Some reflections on the LDC debt crisis*, Montreal, Department of Economics, McGill University, Working paper 2/89.

Portes, Richard, 1990, "Development versus debt: Past and future", *IDS Bulletin*, 23: 2.

Pronk, Jan, 1989, "Adjustment and development: Bridging the gap", *Development*, 1.

República de Ruanda, Ministerio de Finanzas y de Economía, 1987, *L'économie rwandaise, 25 ans d'efforts (1962-1987)*, Kigali.

República Socialista de Vietnam, 1993, *Vietnam: A development perspective*, documento principal preparado para la Conferencia de Donantes de París, Hanoi.

Rhodes, W., 1990, "The debt problem at the crossroads", *IDS Bulletin*, 23: 2.

Ribe, Helen *et al.*, 1989, *How adjustment programs can help the poor*, Washington, D.C., Banco Mundial.

Ritter, A. y Pollock, D., 1985, *The Latin American debt crisis: Causes, consequences and prospects*, Ottawa, The North-South Institute.

Rumiya, Jean, 1992, *Le Rwanda sous le régime du mandat belge (1916-1931)*, París, L'Harmattan.

Russell, Robert, 1990, "The new roles and facilities of the IMF", *IDS Bulletin*, 23: 2.

Sachs, Jeffrey (ed.), 1989, *Developing country debt and the world economy*, University of Chicago Press.

Sandifor, Peter *et al.*, 1991, "Why do child mortality rates fall. An analysis of the Nicaraguan experience", *American Journal of Public Health*, 81: 1.

Schadler, Susan *et al.*, 1993, *Economic adjustment in low income countries*, Washington, FMI.

Seshamani, V., 1990, *Towards structural transformation with a human focus. The economic programmes and policies of Zambia in the 1980s*, Florencia, UNICEF.

Singh, Kavaljit, 1998, *Citizens guide to the globalization of finances*, Londres, Madhyam Books, Delhi y Zed Books.

Smith, J.W., 2000, *Economic democracy, the struggle of the twenty-first century*, Nueva York, M.E. Sharpe.

Sobhan, Rehman, 1991, *The development of the private sector in Bangladesh: A*

review of the evolution and outcome of state policy, Research report 124, Bangladesh Institute of Development Studies.

Shiva, Vandana, 2000, "The threat to third world farmers", *The Ecologist*, vol. 30, núm. 6.

____, 2000, "Stolen harvest, the hijacking of the global food supply".

____, 1999, "Biopiracy, the plunder of nature and knowledge", Bidefod, Devon, Green Books.

Squire, Lyn, 1991, "Introduction: Poverty and adjustment in the 1980s", *The World Bank Economic Review*, 5: 2.

Standing Committee on External Affairs, 1990, *Securing our global future: Canada's unfinished business of Third World debt*, Ottawa, Cámara de los Comunes.

Streeten, P., 1987, "Structural adjustment: A survey of the issues and options", *World Development*, 15: 22, diciembre.

Suárez, Rubén, 1991, *Crisis, ajuste y programas de compensación social: Experiencias de los fondos sociales en países de América Latina y el Caribe*, Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud.

Tarp, Finn, 1993, *Stabilisation and structural adjustment*, Londres, Routledge.

Third World Economics, publicación mensual, Penang.

Third World Resurgence, publicación mensual, Penang.

Thomas, Caroline y Peter Wilkin, 1999, *Globalization, human security and the African experience*, Londres, Rienner.

Tomann, H., 1988, "The debt crisis and structural adjustment in developing countries", *Intereconomic*, 23: 5.

UNICEF, 1989, "Revitalising primary health care/maternal and child health, the Bamako Initiative", informe del Director Ejecutivo, Nueva York.

____, 1991*a*, *The state of the world's children, 1991*, Nueva York.

____, 1991*b*, *The Bamako Initiative, Progress report and recommendation submitted to Executive Board, 1991 session*, Nueva York.

United States Agency for International Development (USAID), 1993, "Mission to Ethiopia, concept paper: back to the future", Washington.

Vietnam, Ministerio de Educación, UNDP, UNESCO (National Project Education Sector Review and Human Resources Sector Analysis), 1992, *Vietnam education and human resources analysis*, 1, Hanoi.

Wagao, Jumanne H., 1990, *Adjustment policies in Tanzania, 1981-1989. The impact on growth, structure and human welfare*, Florencia, UNICEF.

Wallach, Lori *et al.*, 1999, *Whose trade organization?: Corporate globalization and the erosion of democracy*, Public Citizen.

____, 2000, *The WTO: Five years of reasons to resist corporate globalization*, Open Media Pamphlet Series, Seven Stories Press

Watkins, Kevin, 1997, Globalization and liberalization: implications for poverty, distribution and inequality, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Occasional Paper 32.

Weisner, W., 1985, "Domestic and external causes of the Latin American debt crisis", *Finance and Development*, 22: 1, marzo.

Williams, Maurice, 1989, "Note on the structural adjustment debate in Africa", y "Options for relieving debt of low income countries", *Development*, 1.

Williamson, John (ed.), 1984, *IMF conditionality*, Institute for International Economics.

Williamson, John, 1990, "The debt crisis at the turn of the century", *IDS Bulletin*, 23: 2.

Yoder, R.A., "Are people willing and able to pay for health services", *Social Science and Medicine*, 29.

Zuckerman, Elaine, 1989, *Adjustment programs and social welfare*, World Bank discussion paper 44, Washington, D.C.

ÍNDICE ANALÍTICO

impreso en servicio fototipográfico, s.a.
francisco landino 44
col. miguel hidalgo
13200 méxico, d.f.
dos mil ejemplares y sobrantes
16 de julio de 2002